



1908

## Jurisprudencia del Tribunal Supremo, v.1

Cuba. Tribunal Supremo

Follow this and additional works at: [https://ecollections.law.fiu.edu/cuban\\_law](https://ecollections.law.fiu.edu/cuban_law)



Part of the [Comparative and Foreign Law Commons](#), and the [Jurisprudence Commons](#)

---

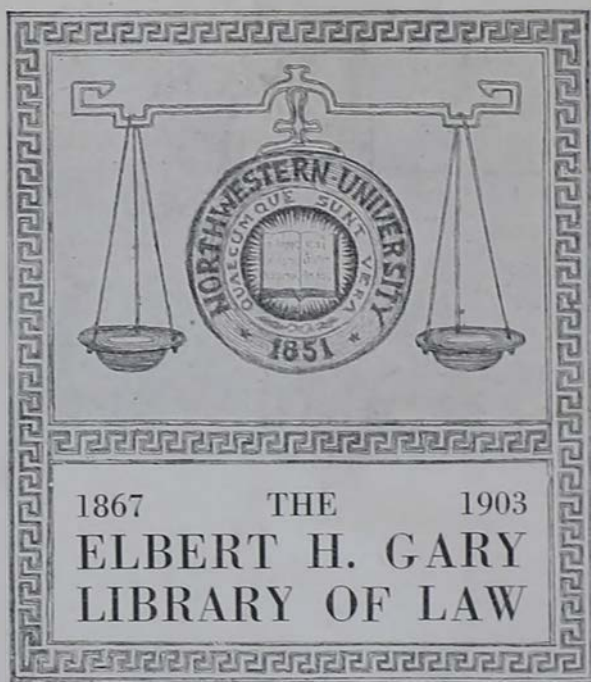
### Repository Citation

Cuba. Tribunal Supremo, "Jurisprudencia del Tribunal Supremo, v.1" (1908). *Cuban Law*. 24.  
[https://ecollections.law.fiu.edu/cuban\\_law/24](https://ecollections.law.fiu.edu/cuban_law/24)

This Book is brought to you for free and open access by the Special Collections at eCollections. It has been accepted for inclusion in Cuban Law by an authorized administrator of eCollections. For more information, please contact [lisdavis@fiu.edu](mailto:lisdavis@fiu.edu).















REPÚBLICA DE CUBA

---

# JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

---

DESDE SU ORGANIZACION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 1899

---

VOLUMEN PRIMERO

---



NORTHWESTERN UNIVERSITY  
RECEIVED  
JAN 17 1910  
LAW SCHOOL LIBRARY,  
CHICAGO

HABANA

---

IMPRENTA Y PAPELERIA DE RAMBLA Y BOUZA

OBISPO NUMEROS 33 Y 35

1908

6





# MIEMBROS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA REPUBLICA DE CUBA

EN EL AÑO DE 1899

---

PRESIDENTE,

Señor Antonio González de Mendoza

MAGISTRADOS:

Señor Pedro González Llorente

„ Rafael Cruz Pérez

„ Eudaldo Tamayo

„ Angel C. Betancourt

„ José M<sup>a</sup> García Montes

„ Octavio Giberga

SECRETARIO DE GOBIERNO,

Señor Federico García Ramis

FISCAL,

Señor Federico Mora y Valdés

TENIENTES FISCALES:

Señor Carlos Revilla y Ferrari

„ Manuel Vías Ochoteco.



# ÍNDICE CRONOLÓGICO

DE LOS

AUTOS, SENTENCIAS, RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES  
LEGALES DICTADOS EN MATERIA CRIMINAL Y CIVIL  
COMPRENDIDOS EN ESTE VOLUMEN.

## MATERIA PENAL

Año 1899.		Páginas.
Septiembre	28. Sentencia No 1, por infracción de Ley. . . . .	1
"	30. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	11
Octubre	5. Sentencia No 2, por infracción de Ley. . . . .	15
"	19. " No 3, por id. de id. . . . .	21
"	23. " No 1, por quebrantamiento de forma. . . . .	25
"	25. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	31
"	31. Sentencia No 4, por infracción de Ley. . . . .	33
Noviembre	3. " No 5, por id. de id. . . . .	36
"	4. " No 6, por id. de id. . . . .	50
"	7. " No 7, por id. de id. . . . .	54
"	13. Auto declarando sin lugar el recurso de queja. . . . .	58
"	13. Sentencia No 8, por infracción de Ley. . . . .	60
"	15. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	62
"	27. Sentencia No 2, por quebrantamiento de forma. . . . .	64
"	29. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	67
Diciembre	4. " " sin lugar la impugnación al recurso . . . . .	70
"	4. " " con lugar la queja. . . . .	71
"	4. " " mal admitido el recurso. . . . .	73
"	7. " " id. id. el id. . . . .	74
"	7. " " sin lugar la queja. . . . .	79
"	7. Sentencia No 9, por infracción de Ley. . . . .	81
"	14. " No 10, por id. de id. . . . .	89
"	15. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	94
"	16. Sentencia No 11, por infracción de Ley. . . . .	96
"	20. " No 3, por quebrantamiento de forma. . . . .	99
"	23. " No 4, por id. de id. . . . .	104



Artículos.	Páginas.
258.	88
631.	88
637 caso 1º.	88
637 caso 2º.	24
733.	10, 29, 103, 104
847.	63
848.	59, 63, 77, 78
848 caso 4º.	77, 78
849.	63, 80, 95
849 caso 1º.	14, 30, 32, 57
849 caso 2º.	88
849 caso 4º.	32
849 caso 5º.	14
850.	80
851.	80
852.	88
853.	80
910.	63, 78
911.	63, 80
912.	80
912 caso 1º.	66
912 caso 2º.	69, 77
912 caso 3º.	29, 71, 107
914.	102

## ARTICULOS DE LA ORDEN NUMERO 92 SOBRE CASACION.

Artículos.	Páginas.
5.	14, 63, 80
5 caso 3º.	77, 95
5 caso 4º.	74
5 caso 5º.	78
7.	32, 69, 77, 78, 80
7 caso 3º.	63, 69, 78, 81, 95
7 caso 4º.	74
8.	73
11.	14, 69, 78, 80
34.	14, 71, 78
38.	8, 21, 50, 94, 104

## ARTICULOS DEL CODIGO PENAL.

Artículos.	Páginas.
1.	8, 50, 104
8.	19, 21, 57, 91
8 caso 4º.	20, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 91
8 casos 12 y 13.	91, 93
9.	21, 66
9 circunstancia 1ª.	18, 21, 91
9 " 3ª.	67
9 " 8ª.	92, 93
11.	8, 50, 104

Artículos.	Páginas.
12. . . . .	50, 104
16. . . . .	104
26. . . . .	8, 104
49. . . . .	104
60. . . . .	8, 50
62. . . . .	50, 80
80. . . . .	8, 50, 91, 93, 104
81. . . . .	91
82. . . . .	50
85. . . . .	19, 21, 50, 91
88. . . . .	93, 107
89. . . . .	50
90. . . . .	20, 21
91. . . . .	50
119. . . . .	8
310. . . . .	8
310 caso 2o. . . . .	5, 7
311. . . . .	5
416. . . . .	21
421. . . . .	93, 107
432. . . . .	93, 107
475. . . . .	46, 50
476 caso 4o. . . . .	48
478. . . . .	50
520. . . . .	102
526 caso 3o. . . . .	102
534. . . . .	102
535. . . . .	102
536. . . . .	104
558 inciso 1o. . . . .	98
562. . . . .	74
565. . . . .	74
592. . . . .	5, 6, 8, 9
592 caso 3o. . . . .	8

## ARTICULOS DE LA LEY DEL NOTARIADO.

Artículos.	Páginas.
57 caso 2o. . . . .	6, 8

ARTICULOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL APLICADOS  
POR ANALOGIA  
AL PROCEDIMIENTO CRIMINAL.

Artículos.	Páginas.
406. . . . .	72
1690. . . . .	80
1691. . . . .	80

## ARTICULOS DE LA ORDEN MILITAR NUMERO 109.

Artículos.	Páginas.
14. . . . .	103

## MATERIA CIVIL

Año 1899.	Páginas.
Abril 20. Resolución de la Sección de los Registros y del Notariado. . . . .	109
Junio 9. Auto declarando no haber lugar á proveer. . . . .	113
Agosto 2. Auto declarando no haber lugar á proveer. . . . .	116
" 2. Id. declarando no haber lugar á tener por parte. . . . .	119
" 12. Id. declarando no haber lugar á proveer. . . . .	120
" 29. Id. declarando sin lugar un recurso. . . . .	123
Septiembre 14. Sentencia N° 1, sobre competencia. . . . .	125
" 15. Auto declarando sin lugar un recurso. . . . .	129
" 19. Id. declarando sin lugar un recurso. . . . .	131
" 21. Id. declarando sin lugar queja. . . . .	133
" 22. Id. declarando sin lugar queja. . . . .	135
Octubre 3. Id. declarando mal admitido un recurso. . . . .	137
" 6. Sentencia N° 1, por infracción de Ley. . . . .	139
" 6. Sentencia N° 1, por quebrantamiento de forma. . . . .	152
" 14. Auto declarando sin lugar queja. . . . .	157
" 16. Id. declarando mal admitido el recurso. . . . .	159
" 19. Sentencia N° 2, por infracción de Ley. . . . .	161
" 20. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	176
" 23. Id. declarando sin lugar la queja. . . . .	177
" 26. Id. declarando sin lugar impugnación. . . . .	179
" 27. Id. sin lugar queja. . . . .	181
" 30. Resolución hipotecaria. . . . .	183
Noviembre 1.º Sentencia N° 2, por quebrantamiento de forma. . . . .	185
" 4. Auto declarando sin lugar queja. . . . .	191
" 4. Sentencia N° 3, por quebrantamiento de forma. . . . .	193
" 4. Sentencia N° 4, por quebrantamiento de forma. . . . .	196
" 9. Sentencia N° 3, por infracción de Ley. . . . .	203
" 9. Sentencia N° 4, por infracción de Ley. . . . .	214
" 10. Sentencia N° 5, por quebrantamiento de forma. . . . .	219
" 15. Sentencia N° 5, por infracción de Ley. . . . .	227
" 18. Auto declarando mal admitido un recurso. . . . .	241
" 20. Sentencia N° 6, por quebrantamiento de forma. . . . .	244
" 22. Sentencia N° 2, en materia de competencia. . . . .	248
" 24. Auto declarando sin lugar la queja. . . . .	253
Diciembre 1.º Id. declarando mal admitido el recurso. . . . .	256
" 1.º Sentencia N° 6, por infracción de Ley. . . . .	258
" 2. Auto declarando mal admitido el recurso. . . . .	272
" 7. Sentencia N° 7, por quebrantamiento de forma. . . . .	275
" 9. Auto declarando mal admitido el recurso. . . . .	284



Año 1899.	Páginas.
Diciembre 11. Auto declarando sin lugar la queja. . . . .	285
„ 11. Sentencia N° 7, por infracción de Ley. . . . .	287
„ 13. Sentencia N° 1, en asunto contencioso-administrativo. . . . .	307
„ 16. Auto declarando con lugar la queja. . . . .	311
„ 21. Resolución hipotecaria N° 2. . . . .	313

### NOMBRES POR ORDEN ALFABETICO DE LOS LITIGANTES.

Nombres.	Páginas.
Almagro, Esperanza; contra José Diego Núñez. . . . .	272
Amador, Mercedes; contra Francisco Mestre. . . . .	177
Asilo General de Dementes, contra Ignacio Valor, curador de Antonio Acosta. . . . .	191
Balardi y Arizubiela, Carlos; contra el Registrador de la Propiedad del Centro. . . . .	183
Barrera, Marcelo; herederos de, contra Manuel Latasa. . . . .	116
Blanco, Jerónimo; contra Andrés Angulo. . . . .	133
Blanco, Jerónimo; sobre recusación de Juez. . . . .	135
Blanco Herrera, Cosme; contra Octavio Peiret. . . . .	244
Cabrera, Antonio; contra resolución del Registrador de la Propiedad de la Habana. . . . .	313
Cadaval y Martí, Alberto; contra Matilde Japón. . . . .	152
Cantera y Clark, Concepción de la; sobre autorización para venta de capitales de censos. . . . .	137
Cárdenas y Viera, Francisco; contra José Gandós Gálvez. . . . .	227
Castro y Chirino, Beatriz; contra José Angulo y León. . . . .	256
Camacho y González, Eduardo y Juana; sobre cobro de réditos de censos. . . . .	157
Escalante y Diego, Casimiro; contra la Nueva Fábrica de Hielo. . . . .	161
Feijóo y Núñez, Ramón; contra Francisco Juara. . . . .	287
Fernández, Casto S.; contra L. Sáenz y C.ª. . . . .	219
Folch, Magdalena; contra Carmen é Irene Pantiga. . . . .	196
García Barbin, José María; contra Francisca García Barbin. . . . .	284
González Gari, Rafael; contra José de Ostolaza. . . . .	176
González Milián, Nicolás, Juana y Elvira; contra Mario Fernández Carvalls. . . . .	214
González Nubiola, María de los Dolores; sobre cobro de réditos de censo. . . . .	157
González Benard, Alfredo; contra Enrique Alexander. . . . .	248
Inhibitoria: Juez Municipal del Pilar á favor del de Cárdenas. . . . .	248
Iris, El; Compañía de Seguros, contra Juan Llaveria. . . . .	203
Lara Nadal, José; contra Eugenio Crespo. . . . .	193
López Argandona, Juana; sobre pobreza. . . . .	311
López Guás, Francisca; contra Hipólito Andrés. . . . .	123
López, Rita; contra el Registrador de la Propiedad de la Habana. . . . .	109
Montalvo y Rodríguez, Evaristo; contra José Ramón Montalvo. . . . .	129
Morales, José S.; contra Manuel Antón Recio de Morales. . . . .	241
Ministerio Fiscal, contra la sucesión de Felipa Valdés. . . . .	179
Pedroso y Cárdenas, Gabriel; sobre mejor derecho á Patronato de Obrapía. . . . .	119
Pérez y otros, Josefa; contra Manuel Latasa y Goicoechea. . . . .	116

Año 1899.	Páginas.
Pérez González y otros, Josefa; contra Manuel Latasa. . . . .	131
Piany de Gutiérrez, contra los menores Lezama y Rodda. . . . .	285
Planas, Rosa; contra José Roff. . . . .	120
Pol y Leal, Juan; contra Bonifacio Valdés Alvarino. . . . .	275
Ruiz Abascal, Evaristo; contra Concepción de la Cantera. . . . .	181
Roldán y Fernández, Josefa; contra Gonzalo Fernández de Córdova. . . . .	125
Schwiep, Juan B.; contra resolución del Gobernador General de la Isla. . . . .	307
Somarriba y Humara, José; contra Gerardo Ruiz de la Pedraja y otro. . . . .	159
Tobías y Manzanares, Felipe; contra Manuel María y María Josefa Ramos Izquierdo. . . . .	113
Valdés, Felipa; sucesión de, contra la sucesión de Francisca Valdés Lazo de la Vega y otra. . . . .	258
Valdés Montiel, Isabel, Pedro é Ignacio; contra Isabel Mendiola y Juan F. Saavedra. . . . .	139
Valor, Ignacio; contra Melchor Armenteros. . . . .	253
Villanueva, Carolina; contra Francisco Mesa y Bello y su esposa Sixta Rubio. . . . .	185

## ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL.

Artículos.	Páginas.
432. . . . .	151
1030. . . . .	185
1100. . . . .	240
1124. . . . .	240
1133. . . . .	240
1215. . . . .	305
1244. . . . .	305
1248. . . . .	306
1249. . . . .	306
1254. . . . .	306
1258. . . . .	306
1278. . . . .	306
1279. . . . .	306
1401 caso 1°. . . . .	112
1407. . . . .	112
1408. . . . .	112
1412. . . . .	112
1413. . . . .	112
1500. . . . .	128
1559. . . . .	240
1732. . . . .	169
1875. . . . .	213
1875 párrafo 2°. . . . .	212
1923. . . . .	213
1927. . . . .	213
1954. . . . .	151

**ARTICULOS DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  
DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1888.**

Artículos.	Páginas.
4. . . . .	310
36. . . . .	309
42. . . . .	310
46. . . . .	310
50. . . . .	310

**ARTICULOS DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.**

Artículos.	Páginas.
6. . . . .	255
33. . . . .	312
34. . . . .	312
57. . . . .	201
62 número 1. . . . .	127, 128
62 número 4. . . . .	202
73. . . . .	253
78. . . . .	128
99 número 5. . . . .	252
108. . . . .	128
303. . . . .	255
310. . . . .	255
312. . . . .	255
362. . . . .	202
401. . . . .	243
403. . . . .	243
548. . . . .	283
591. . . . .	253
603. . . . .	218
658. . . . .	306
686. . . . .	156
706. . . . .	275
1019. . . . .	218
1030. . . . .	185, 218
1561. . . . .	195
1687. . . . .	130, 133, 139
1687 número 1. . . . .	312
1688. . . . .	124, 133, 139, 243
1688 número 1. . . . .	178, 286, 313
1689. . . . .	139
1690. . . . .	138, 139, 243, 285
1690 número 1. . . . .	180, 271
1690 número 4. . . . .	180
1690 número 7. . . . .	180
1691. . . . .	138, 139, 257
1691 número 5. . . . .	275
1692. . . . .	125, 139
1692 número 3. . . . .	133, 313
1693. . . . .	139, 287

Artículos.	Páginas.
1694. . . . .	139, 182
1695. . . . .	139, 182
1698. . . . .	255
1747. . . . .	255

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS

Resoluciones.	Páginas.
8 de Noviembre de 1882. . . . .	112
30 de Junio de 1898. . . . .	112
29 de Abril de 1880. . . . .	184
19 de Marzo de 1879. . . . .	316

ORDENES DEL GOBERNADOR MILITAR DE CUBA

Ordenes.	Páginas.
Orden número 144. . . . .	117, 121
Orden número 92 de 26 de Junio de 1899. . . . .	117, 121, 138

DECRETOS DEL GOBERNADOR GENERAL DE LA ISLA

Decretos.	Páginas.
Decreto de 19 de Abril de 1897. . . . .	202

ARTICULOS DE LA LEY HIPOTECARIA.

Artículos.	Páginas.
9 circunstancia 5. <sup>a</sup> . . . . .	184
9 circunstancia 6. <sup>a</sup> . . . . .	184
158 . . . . .	212
168 número 6. . . . .	212, 213
219 . . . . .	212
220 . . . . .	212, 213
221 . . . . .	212, 213

ARTICULOS DEL REGLAMENTO PARA EJECUCION  
DE LA LEY HIPOTECARIA.

Artículos.	Páginas.
25 caso 9. <sup>o</sup> . . . . .	184
92 regla 1. <sup>a</sup> . . . . .	113

**ARTICULOS DE LA COMPILACION DE DISPOSICIONES  
ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA  
EN ESTA ISLA.**

Artículos.	Páginas.
491 . . . . .	255

**ORDEN NUM. 41 DE 1899.**

Artículos.	Páginas.
7 número 8. . . . .	252

**ARTICULOS DEL TRATADO DE PARIS DE 10 DE DICIEMBRE, 1898,**

Artículos.	Páginas.
12 . . . . .	115

**ARTICULOS DE LA ORDEN NUM. 92 DE 26 DE JUNIO DE 1899,**

Artículos.	Páginas.
1 . . . . .	137
5 . . . . .	159, 193, 275, 285
5 número 1. . . . .	157
5 número 3. . . . .	139, 257
5 número 4. . . . .	190
5 número 5. . . . .	160, 257
7 . . . . .	138, 159, 176, 177, 191
7 número 2. . . . .	251
7 número 3. . . . .	243
7 número 7. . . . .	157
11 . . . . .	243, 256
19 . . . . .	119
23 . . . . .	159
25 . . . . .	281
28 . . . . .	177
34 . . . . .	177, 258
40 . . . . .	159, 227
108 . . . . .	118, 122, 192

**SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA,**

Sentencias.	Páginas.
Marzo 15 de 1881. . . . .	185
Junio 5 de 1861. . . . .	185
Junio 9 de 1885. . . . .	185



# TRIBUNAL SUPREMO

## JURISPRUDENCIA PENAL.

1899

EL M. F. CONTRA BENIGNA LARRINAGA, MANUEL FUENTES UR-  
DANETA Y FRANCISCO DE PAULA RODRÍGUEZ.

**Sentencia núm. 1 (28 de Septiembre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por el M. F. contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 16 de Julio de 1899.*

### **FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO.**

La supuesta intervención de una persona en una escritura de reconocimiento de hijo natural, constituye el delito de falsedad en documento público, previsto y penado en el número 2 del artículo 310 del Código Penal, y en el 311 del mismo, según fuere cometido por funcionario público ó por particulares; y es responsable de dicho delito por imprudencia, el Notario que no conociendo á dos de los testigos que intervinieron en el acto, los acepta como tales, por la simple presentación que le hace de ellos un amigo suyo.

En la ciudad de la Habana, á veinte y ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Supremo Tribunal, interpuesto por el Fiscal de la Audiencia de esta capital contra la sentencia dictada por la Sala de lo Criminal de dicha Audiencia el dieciseis de Julio de este año, en la causa criminal seguida contra Benigna Larrinaga y otros por falsedad en documento público, en cuanto al extremo en que se absuelve á Manuel Fuentes Urdaneta, profesor de piano, sin que conste su

domicilio y á Francisco de Paula Rodríguez, notario público, vecino de esta ciudad;

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la referida causa, la Sala de lo Criminal, en la sentencia consignó como probados los hechos siguientes:

*Primero Resultando* probado: que la procesada parda Benigna Larrinaga tenía una hija natural nombrada Rita América, de dieciocho años de edad, habida en sus relaciones con Domingo Villar, la cual ni estaba bautizada ni había sido reconocida por su mencionado padre natural;

*Segundo Resultando* probado: que la referida procesada deseando que su hija que se preparaba para contraer matrimonio, apareciese reconocida para bautizarla como tal, y bien por suponer muerto á Villar ó porque ignorase su paradero ó por otro motivo, concibió el proyecto de que otorgase el reconocimiento un tercero que se hiciera pasar por Domingo Villar;

*Tercero Resultando* probado: que puesta de acuerdo la Benigna Larrinaga con Juan Martínez, concubino de una de sus hijas y D. Isidro Menéndez, amigo de aquél, así como con Manuel Casal Freire, concurrieron todos, en diecisiete de Abril del corriente año á las cuatro de la tarde ante el Notario de este Colegio Francisco de Paula Rodríguez Acosta y otorgaron una escritura pública por la cual Benigna y Manuel Casal Freire, éste con el nombre de Domingo Villar y Sánchez reconocieron como hija natural á la ya citada Rita América, firmando la escritura por Benigna Larrinaga, que no sabía hacerlo, Manuel Fuentes y por sí Juan Martínez con el nombre de José García y Jiménez y D. Isidro Menéndez con el de Pedro Picazo Pujó, ambos como testigos instrumentales y de conocimiento;

*Cuarto Resultando* probado: que Benigna Larrinaga había consultado con Manuel Fuentes Urdaneta, profesor de música de sus hijas acerca de las diligencias que debía practicar para conseguir el reconocimiento de su hija; y que, indicado por Fuentes el otorgamiento de una escritura pública como medio para alcanzar dicho fin, fué comisionado por la Benigna para que se pusiera de acuerdo con un notario y ajustase el valor de la escritura;

*Quinto Resultando* probado: que Manuel Fuentes se avisó con el Notario Francisco Rodríguez Acosta, conviniendo con él los términos de la escritura y su costo que se fijó en doce pesos setenta y cinco centavos; habiéndole manifestado el Notario que por no conocer á los otorgantes debían éstos traer testigos de conocimiento;

*Sexto Resultando* probado: que Fuentes redactó en casa de



Benigna Larrinaga una nota para el Notario en que constaban los nombres y las generales de los otorgantes y los testigos, ajustándose á lo que cada uno de ellos le manifestó, sin que conste que supiera que no era Villar el que se hacía pasar como tal ni que los testigos á quienes conocía hacía tiempo por verlos en casa de Benigna aunque sin saber sus nombres le hubieran dado otros distintos á los suyos verdaderos;

*Séptimo Resultando* probado: que Manuel Fuentes, acompañado de Martínez y Menéndez se presentó nuevamente en la Notaría de Francisco Rodríguez á las doce del mismo día en que se otorgó la escritura, entregando á dicho Notario la nota referida en el resultando anterior y presentándole como personas conocidas suyas á Martínez con el nombre de José García Jiménez, y á Menéndez con el de Pedro Picazo Pujó;

*Octavo Resultando* probado: que Manuel Fuentes que goza concepto de hombre formal, tenía amistad íntima y frecuente trato con el Notario Rodríguez hacía más de veinte años, mediando además iguales relaciones entre los familiares de ambos;

*Noveno Resultando* probado: que el Notario Francisco Rodríguez Acosta, al autorizar la escritura de reconocimiento de diecisiete de Abril dió fe de conocer á los testigos de conocimiento José García Jiménez y Pedro Picazo Pujó, y al siguiente día participó á la policía que acababa de tener noticias de que no eran éstos los verdaderos nombres de dichos testigos;

*Décimo Resultando*: que por escritura de dieciseis de Mayo último ante el Notario Francisco Diego y Alberto, reconoció Domingo Villar y Basanta como su hija natural á la Rita América, declarando además, en el acto del juicio oral, que no había recibido perjuicio por la escritura de diecisiete de Abril último;

*Décimoprimer Resultando*: que el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito de falsedad en documento público, cometido suponiendo en el acto la intervención de personas que no la han tenido, comprendido en el caso segundo del artículo trescientos diez del Código Penal; como autores á los procesados Benigna Larrinaga, Casal, Menéndez y Martínez sin circunstancias modificativas y solicitó se le impusiese, á la primera, ocho años y un día de prisión mayor y multa de mil doscientas cincuenta pesetas; á los otros tres: ocho años y un día de presidio mayor, accesorias del artículo cincuentiseis y multa de ciento veinticinco pesetas á cada uno; y estimando los hechos realizados por Fuentes y por Rodríguez como imprudencia, solicitó para Fuentes la pena de seis meses de arresto mayor y para Rodríguez la de dos meses y un día de arresto mayor, por estimar que era autor por

imprudencia con infracción de Reglamento, entendiendo que infringió el artículo cincuentisiete de la Ley del Notariado;

*Décimosegundo Resultando:* que la defensa de Benigna Larrinaga en sus conclusiones definitivas calificó el hecho procesal como constitutivo de la falta comprendida en el artículo quinientos noventa y ocho y en caso de estimarse delito concurría la circunstancia eximente número diez del artículo octavo del Código Penal y solicitó su absolución; la de Isidro Menéndez y Juan Martínez solicitó su absolución por estimar no haber tenido ánimo de causar perjuicio y no haberse originado; la de Manuel Casal, solicitó se le impusiese la pena señalada á la imprudencia temeraria; la de Manuel Fuentes solicitó su absolución por falta de pruebas y la del Notario Francisco de P. Rodríguez solicitó su absolución por estimar no ser constitutivos de delito los actos que se realizaron por él;

*Resultando:* que la Audiencia declaró que los hechos expresados en los tres primeros de los transcritos resultandos, constituyen el delito de falsedad en documento público cometido por particulares, siendo responsables del mismo, en concepto de autores, los procesados Benigna Larrinaga, Manuel Casal Freire, Juan Martínez é Isidro Menéndez; condenando en consecuencia á la primera, á la pena de ocho años y un día de prisión mayor con las accesorias correspondientes; y á los tres restantes á ocho años y un día de presidio mayor, á cada uno también con sus accesorias correspondientes; absolviendo á Manuel Fuentes Urdaneta y á Francisco de Paula Rodríguez Acosta, por no ser constitutivo de delito los actos que realizaron; con las costas de oficio, en cuanto á estos últimos;

*Resultando:* que contra esa sentencia impuso el Fiscal recurso de casación por infracción de ley, fundado en el número dos del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y designando como infringido el artículo quinientos noventa y dos del Código Penal, porque no se calificaron ni penaron como delito los hechos que se declaran probados en los resultandos sexto, séptimo, octavo y noveno, constitutivos de imprudencia; cuyo recurso fué admitido en auto de veinte y siete de Julio de este año;

*Resultando:* que remitidos los oportunos testimonios á este Supremo Tribunal, previos los emplazamientos legales, y personados el Fiscal, Antonio González Soler, á nombre de Francisco de P. Rodríguez Acosta y Manuel Fuentes Urdaneta por sí mismo; transcurrido el período de instrucción, se designó para la vista el día dieciseis del mes actual, celebrándose en dicho

día, con intervención del Fiscal y de los defensores de los recurridos Fuentes Urdaneta y Rodríguez Acosta;

*Siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes, por disentimiento del nombrado, Magistrado Rafael Cruz Pérez;*

*Considerando:* que los hechos que han originado la presente causa criminal constituyen el delito de falsedad en documento público, por haberse supuesto en la escritura de reconocimiento de hijo natural, otorgada en diez y siete de Abril de este año ante el Notario Francisco de P. Rodríguez Acosta, la intervención de una persona que realmente no intervino en ella; delito definido y penado en el número dos del artículo trescientos diez y en el trescientos once del Código Penal, según fuere cometido por funcionario público ó por particulares;

*Considerando:* que Fuentes Urdaneta no tuvo en el acto del otorgamiento de la escritura en que se cometió la falsedad otra participación que la de firmar á nombre de la otorgante Benigna Larrinaga, por no saber ésta hacerlo; y que eliminada aquella participación siempre existiría el delito resultante de haberse supuesto en un documento público la intervención de una persona que no la tuvo en realidad;

*Considerando:* que aun cuando, antes del otorgamiento Fuentes Urdaneta presentó al Notario Rodríguez Acosta, como personas conocidas suyas los testigos Isidoro Menéndez y Juan Martínez, bajo nombres que estos supusieron, sin conocimiento del primero; el hecho de la presentación no puede apreciarse como elemento generador de responsabilidad criminal; porque ni Fuentes Urdaneta afirmó por él la identidad del otorgante, que pudo ser el verdadero Villar, aun siendo supuestos los nombres de los dos testigos, ni con dicho acto comprometió al Notario á otorgar forzosamente la escritura en condiciones de seguridad distintas de las impuestas por su cargo al último; por razón de lo cual, y atendidos la posición social y el grado de cultura respectivos de uno y otro, no es de estimarse que aquella simple presentación fuera causa suficiente para inducir á Rodríguez Acosta á que aceptara como personas de su conocimiento á quienes realmente no lo eran y menos aún, que de la acción de Fuentes Urdaneta se siguiese directa y necesariamente la falsedad más tarde cometida al afirmarse por los testigos, que el compareciente Casals, era el Domingo Villar á quien se ha suplantado;

*Considerando:* que la falta de malicia en el autor de un hecho constitutivo de delito, cuando éste se ejecuta mediante alguna de las clases de imprudencia comprendidas en el artículo quinientos noventa y dos del Código Penal, lo sujeta á la res-



ponsabilidad criminal correspondiente; y que ignorante el Notario Rodríguez Acosta del propósito culpable realizado por el otorgamiento de la escritura falsa, ha procedido voluntariamente, aunque sin malicia;

*Considerando:* que el Notario debe conocer personalmente á todo testigo de conocimiento conforme á lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo cincuentisiete del Reglamento de la Ley del Notariado, cuya clase de conocimiento supone el antecedente de relaciones previas, que no existieron en el caso que ha originado el actual proceso; no pudiendo admitirse que un Notario conoce personalmente á dos testigos que le fueron presentados pocas horas antes del otorgamiento de la escritura en que intervinieron y para el solo efecto del mismo otorgamiento;

*Considerando:* que las clases de imprudencia mencionadas en el artículo quinientos noventa y dos del Código Penal se caracterizan por la mayor ó menor gravedad de la imprevisión ó ligereza en que se incurra; y que si bien es cierto que á un Notario público es de exigirse una diligencia extraordinaria, por la importancia de sus funciones y la trascendencia de los actos en que interviene, no puede estimarse que Rodríguez Acosta obró con temeridad, pero sí con simple imprudencia, al conceder al dicho de un amigo tan antiguo, íntimo y honrado como lo era Fuentes Urdaneta, un crédito absoluto que su deber como Notario no le permitía concederle;

*Considerando:* que la intervención del mencionado Notario ha sido condición indispensable para la ejecución del delito perseguido, ya que sin ella no existiría el de falsedad en documento público; y por tanto no ha podido declarársele exento de responsabilidad criminal, sino que ha debido imponérsele la pena correspondiente al autor por participación directa del delito de falsedad cometido por simple imprudencia y con infracción del Reglamento de la Ley del Notariado;

*Considerando:* que según los precedentes fundamentos el Tribunal sentenciador no ha incurrido en la infracción de ley alegada por el recurrente, en cuanto al procesado Manuel Fuentes Urdaneta, puesto que á éste no era aplicable el precepto legal que se supone infringido; pero sí cometió el Tribunal dicha infracción respecto del otro procesado Francisco de P. Rodríguez Acosta, por no aplicarle como debió hacerlo el referido precepto legal, consignado en el artículo quinientos noventidos del Código Penal vigente;

FALLAMOS que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad de dieciseis de

Julio del corriente año, en cuanto absuelve á Manuel Fuentes Urdaneta; declarando al mismo tiempo con lugar el recurso respecto al Notario Francisco de Paula Rodríguez Acosta, casando y anulando la sentencia en este extremo; sin especial condenación de costas.

Así, por esta sentencia, que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos; y con la sentencia que á continuación se dicta, comuníquese á la Audiencia de esta ciudad, á los efectos procedentes.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á veintiocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve en la causa criminal seguida en la Audiencia de esta capital por delito de falsedad en documento público contra Francisco de Paula Rodríguez Acosta y otros, dicho Rodríguez natural y vecino de esta ciudad, de cuarenta y un años de edad, casado, notario público y sin antecedentes penales;

*Resultando:* que casada y anulada por sentencia de esta misma fecha la dictada el dieciseis de Julio del corriente año por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta capital en lo referente al procesado Francisco de Paula Rodríguez Acosta, procede dictar de seguida la sentencia que debe sustituir á la pronunciada por el Tribunal recurrido conforme á lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal;

*Vistos:* siendo ponente el Magistrado José M. García Montes por disentimiento del nombrado, Magistrado Rafael Cruz Pérez. Aceptando los fundamentos de hechos contenidos en los doce Resultandos de la referida sentencia de dieciseis de Julio de este año;

*Considerando:* que los hechos que se declaran probados en la sentencia casada, constituyen el delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, comprendido en el número dos del artículo trescientos diez del Código Penal, siendo autor del mismo por participación directa, el procesado Francisco de Paula Rodríguez Acosta, y sin que en la ejecución haya concurrido circunstancia modificativa de ninguna clase;

*Considerando:* que el procesado Francisco de Paula Rodríguez Acosta al dar fe de conocer á los testigos de conocimiento, que en realidad no conocía, aceptando la manifestación de una persona honrada y de su mayor é íntima amistad que se los había presentado pocas horas antes del otorgamiento de la escritura y para el sólo efecto del mismo otorgamiento, obró sin malicia, pero con imprudencia simple á pesar de su reconocida integridad, infringió el párrafo segundo del artículo cincuenta y siete del Reglamento de la Ley del Notariado que exige el conocimiento personal por el Notario de los testigos de conocimiento,—incurriendo por ello en la pena de arresto mayor en sus grados medio y máximo, conforme á lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo quinientos noventa y dos del Código Penal;

*Considerando:* que conforme al párrafo tercero de dicho artículo quinientos noventa y dos del Código Penal, los Tribunales procederán en la aplicación de la pena impuesta á los delitos cometidos por imprudencia según su prudente arbitrio sin sujetarse á las reglas prescritas en el artículo ochenta;

*Considerando:* que no habiéndose producido para tercero daño ni perjuicio alguno, no existe responsabilidad civil; y que las costas se imponen por la ley á toda persona responsable criminalmente de un delito;

*Vistos* los artículos primero, once, veinte y seis, sesenta, ochenta, ciento diez y nueve, trescientos diez y quinientos noventa y dos del Código Penal y el artículo treinta y ocho de la orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal;

*Fallamos* que debemos condenar y condenamos á Francisco de Paula Acosta á la pena de dos meses y un día de arresto mayor, suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de la sexta parte de las costas causadas hasta la interposición del recurso de casación.

Así, por nuestra sentencia, irrevocablemente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### VOTO PARTICULAR.

En la ciudad de la Habana, á veinte y ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley que pende ante este Tribunal, interpuesto



por el Ministerio Fiscal contra la parte de la sentencia que se refiere al Notario Francisco Rodríguez Acosta y Manuel Fuentes Urdaneta, pronunciada por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en causa seguida de oficio por falsedad en documento público. Aceptando los resultandos de la Audiencia y los añadidos por el Tribunal de casación, el Magistrado que suscribe, disintiendo de la opinión de la mayoría y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del caso cuarto del artículo ciento cuarenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formula el siguiente voto particular:

*Considerando:* que el hecho de admitirse un recurso de casación equivale ni más ni menos, á dar por sentado que hay términos hábiles en el escrito de interposición para discutir y resolver, sin necesidad de suplir omisiones, ni corregir deficiencias, ni acudir á Tribunal distinto en busca de datos, el problema jurídico planteado concretamente por el recurrente, cuyo escrito, además de determinar y precisar la cuestión propuesta es la base en que se apoya el Supremo para decidir si ha habido ó no infracciones de ley ó quebrantamientos de forma;

*Considerando:* que en el recurso de casación por infracción de ley no pueden resolverse más cuestiones que aquellas que en términos concretos, claros y precisos propone y fundamenta el recurrente; y de aquí el precepto imperativo del inciso cuarto del artículo quinto de la orden de casación número noventa y dos de citarse con precisión y claridad la ley infringida y concepto en que lo haya sido, precepto que excluye desde luego cualquier indeterminación ó vaguedad en la cita que se haga; y conteniendo, como contiene, el artículo quinientos noventa y dos del Código Penal en su conjunto tres hechos ó problemas distintos que exigen tres distintas penalidades, el recurrente en ninguna parte de su escrito de interposición manifiesta á cuál de estos tres hechos se contrae, ó no determinó, como debió hacerlo, el concepto de la infracción, no siendo en modo alguno atribución del Supremo suplir omisiones, ni corregir deficiencias, ni aclarar indeterminaciones ó vaguedades, ni acudir á Tribunal distinto para fijar con toda precisión los términos del debate;

*Considerando* por otra parte que no puede invocarse como único motivo la infracción del artículo que comprende la materia de imprudencia temeraria, porque dicho artículo, que no tiene vida propia, aislada é independiente, supone, para que en él se incurra, la infracción de otro que defina el delito cometido, si no mediarle malicia; y en el recurso de casación interpuesto no se relaciona el mencionado artículo de la imprudencia, con



ningún otro del Código Penal, no siendo de apreciarse por temporáneas las manifestaciones del Fiscal en el acto de la vista, al tratar éste de subsanar los defectos y omisiones del Fiscal del inferior;

*Considerando:* que aun cuando en el período de instrucción á las partes se concede á éstas el derecho de combatir la admisión del recurso no pareciendo que el Supremo pueda de oficio declararlo mal admitido y rechazarlo durante dicho período de oposición; es una verdad en la esfera de elevados principios legales que si ese derecho se renuncia ó pasa inadvertido por la Audiencia ó por las partes, no cabe concebir, dado el objeto de este Tribunal que es corregir los errores cometidos por los Tribunales, que la mente del legislador haya sido, al escribir el artículo veinte y ocho de la orden de casación, poner un muro á este propio Tribunal, para que, en el caso de palparse defectos sustanciales cometidos por una Audiencia, admitiendo un recurso sin vida dentro del derecho, no se pueda, al llegar el momento de resolverse en el fondo declarar sin lugar un asunto falto de materia por sus deficiencias, ú omisiones ó vaguedades, ó muerto ya en la esfera jurídica, pues de otro modo se tendrían que sancionar errores que, además de desnaturalizar la índole de los recursos de casación, darían vida alguna que otra vez á situaciones pasadas á la categoría de cosas juzgadas;

*Considerando:* á mayor abundamiento que no constando en parte alguna del escrito de interposición del recurso que al Notario Rodríguez Acosta se acuse de haber incurrido en imprudencia simple con infracción de Reglamento, no puede este Tribunal, cuya esfera es de estricto derecho, condenarle por semejante delito;

*Considerando:* que tampoco procede condenarle por imprudencia temeraria, como se le acusó en el acto de la vista, porque dentro del actual sistema acusatorio hay estrechísima relación entre la acusación y la defensa hasta el punto de no poderse penar por delito más grave que el que haya sido objeto de las conclusiones definitivas salvo el caso de hacer uso la Audiencia del artículo setecientos treinta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y el Tribunal Supremo cuando casa una sentencia, al redactar la segunda, baja á la categoría del Tribunal del juicio no teniendo en tal caso ni mayor ni menor competencia que éste, y no siéndole dado, por consiguiente, traspasar en sus sentencias el límite máximo trazado por la acusación, pues de otro modo entraría en pleno sistema inquisitivo;

*Considerando:* que por todos estos motivos de forma no cabe tomar en cuenta lo alegado ambigua y aisladamente en el

escrito de interposición del recurso aun cuando pueda ser cierto que en el fallo de la Audiencia se haya cometido alguna infracción de ley ó algún error de derecho. Se declara no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal contra parte de la sentencia dictada por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.—Rafael Cruz Pérez.

EL M. F. CONTRA BERNABÉ RODRÍGUEZ.

**Auto de 30 de Septiembre de 1899.**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por Bernabé Rodríguez contra la sentencia de 18 de Mayo de 1899, dictada por la Audiencia de Matanzas.*

#### MUERTE ACCIDENTAL.

Para sustanciar y resolver un recurso de casación, por infracción de Ley, hay que partir necesaria y exclusivamente de los hechos declarados probados, que deben ser aceptados por el recurrente.

No se cumple con lo dispuesto en el artículo 5. de la Orden 92, que exige la consignación en el escrito de interposición del texto legal que autoriza el recurso, cuando con notoria incongruencia se cita un número del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es el que autoriza dicho recurso.

La pretendida subsanación ante el Tribunal de casación, de los defectos de que adoleciera un recurso, no convalidan su admisión, pues estos le hacían ya inadmisibles por el Tribunal sentenciador.

*Resultando:* que la Audiencia de Matanzas, conociendo en juicio oral y público de la presente causa, instruida por el Juzgado del Mercado de dicha ciudad, contra Bernabé Rodríguez Báez por muerte de José Brosco y Alvarez, dictó sentencia en diez y ocho de Mayo del corriente año, por la cual se consignan los hechos en los términos de los siguientes:

*Primero Resultando probado:* que en la mañana del diez y siete de Diciembre del año mil ochocientos noventa y seis José Brosco y Alvarez, guardabarrera de la empresa del ferrocarril de Matanzas en el cruce del camino que va á las cuevas de Bellamar por donde pasa también la línea de los ferrocarriles Unidos, fué arrollado por la máquina exploradora número vein-

te y dos que conducía el maquinista Bernabé Rodríguez Báez;

*Segundo Resultando* probado: que cuando apareció la locomotora se encontraba Brosco, que era algo sordo, parado limpiando la carrilera en la faja de terreno neutral que separa las paralelas de ambas empresas y que al apercibirse de la proximidad inmediata de la máquina intentó pasar la vía por donde venía dicha máquina;

*Tercero Resultando* probado: que al salir la máquina de la curva situada á más de un kilómetro del lugar en que ocurrió el suceso el maquinista Bernabé Rodríguez no dió la señal de aviso, tocando el silbato de la máquina;

*Resultando*: que calificados los hechos expuestos como constitutivos de un delito de homicidio por simple imprudencia, con infracción del Reglamento de policía de ferrocarriles, del que es responsable en concepto de autor por participación directa el procesado Bernabé Rodríguez Báez, sin circunstancias modificativas, la expresada sentencia le condenó á la pena de dos meses y un día de arresto mayor, accesorias, indemnización y costas, condenando al mismo tiempo subsidiariamente á la compañía de los Ferrocarriles Unidos de la Habana al pago de la indemnización fijada, por considerarla responsable civilmente para el caso de que el procesado, por razón de insolvencia, no la satisficiera;

*Resultando*: que contra la referida sentencia se interpuso, á nombre del procesado, recurso de casación por infracción de ley, cuyo recurso dice el recurrente autorizado por el número primero del artículo ochocientos cuarenta y ocho y el número quinto del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringidos el Reglamento de ferrocarriles, sin mencionar en cuál de sus disposiciones, y el artículo primero del Código Penal, porque, al decir del recurrente, resulta probado de la sentencia que el maquinista Bernabé Rodríguez dió los silbatos ó avisos que dispone el Reglamento citado antes de llegar á la curva donde ocurrió el hecho, no habiendo visto á Brosco en la línea férrea y por consecuencia resulta probado que no hubo omisión en ningún acto por el maquinista Rodríguez que derive la responsabilidad que define el delito el artículo primero del Código Penal, citando también como infringidos los números nueve y doce del artículo octavo del propio Código Penal, porque según expone el recurrente, de la misma sentencia resulta probado que Brosco era algo sordo, y encontrándose de espaldas á la dirección en que venía la máquina, no oyó el silbato, siéndole imposible huir del peligro por estar ya la máquina á su alcance, no obstante haber



tratado el maquinista de parar á tiempo, lo que no pudo verificar dado el poco tramo que mediaba entre la máquina y el interfecto: y aludiendo además, aunque sin citarlo expresamente como infringido en la sentencia al número catorce del referido artículo octavo del Código Penal;

*Resultando:* que, admitido por la Audiencia el recurso interpuesto á nombre del procesado y designado en forma representante y defensor del último ante este Supremo Tribunal, se fijó el término para instrucción, durante el cual el Ministerio Fiscal ha impugnado, en escrito de seis del mes en curso, el auto de admisión dictado por la Audiencia, alegando que en la interposición del recurso, no se llenaron los requisitos tercero y cuarto del artículo quinto de la orden número noventa y dos del Gobernador Militar de la Isla, ni concurren las circunstancias tercera y cuarta de las que para que sea admisible enumera el artículo séptimo y solicitando que se declare mal admitido el recurso en conformidad con el artículo treinta y cuatro; y, por su parte, la representación del recurrente, también durante el término de la instrucción, por su escrito de doce de este mes, usando, según dice, del derecho que le otorga el número primero del artículo veinte y ocho para ampliar los motivos de casación expresados al tiempo de la interposición, expone que el presente recurso está autorizado por el artículo ochocientos cuarenta y ocho y primero del ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: reproduce literalmente los tres primeros Resultandos de la sentencia interpelada, sin más diferencia que la omisión del adjetivo "inmediata" contenido en el segundo de dichos Resultandos: cita como infringidos el artículo primero en relación con el quinientos noventa y dos del Código Penal y el artículo ochenta del Reglamento de Policía de ferrocarriles, por haberse aplicado indebidamente al hecho de la causa, puesto que éste no fué más que un accidente, acompañado de circunstancias que tampoco son las prevenidas en aquella disposición del Reglamento: y pide se tenga por ampliado el recurso y, previa la sustanciación legal, se declare oportunamente haber lugar á la casación de la sentencia;

*Resultando:* que, señalado el veinte y siete del actual para la vista de la cuestión previa sobre impugnación, se ha celebrado aquella en dicho día, con asistencia del Ministerio Fiscal y del defensor del recurrente;

*Considerando:* que debiéndose, para sustanciar y resolver el recurso de casación por infracción de Ley, partir necesaria y exclusivamente de los hechos que como probados haya admitido el Tribunal sentenciador, á ellos ha de atemperarse el recurren-

te, sin desconocerlos, ni impugnarlos, ni aducir otros que la sentencia no comprenda; y al alegar aquel en este caso determinados hechos sin apoyo en la sentencia y aun en cierto grado contradictoriamente con la misma, así como también al consignar como motivo de la casación que pide el del número quinto del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ó sea el error de derecho cometido en la calificación de los hechos apreciados en concepto de circunstancias agravantes, atenuantes ó eximentes de responsabilidad, siendo así que la sentencia no ha apreciado hecho alguno como generador de circunstancias modificativas ni eximentes, plantea el recurso, con tales alegaciones y tal cita, en términos que no permiten tratarlo y lo hacen del todo inadmisibile;

*Considerando:* que el precepto terminante del artículo quinto de la Orden número noventa y dos, según el cual en el escrito de interposición del recurso deberá expresarse el texto legal que lo autorice, queda incumplido, cuando con notoria incongruencia, tendiendo las alegaciones del recurrente á demostrar que la sentencia estima como constitutivo de delito un hecho que no lo es y deja, en cambio, de estimar circunstancias eximentes que concurrieron á su ejecución, se invoca un número del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no sea precisamente el número primero, por ser éste el único que puede autorizar la casación fundada en semejantes infracciones;

*Considerando:* que tampoco se llena el requisito exigido por el propio artículo quinto de la expresada orden número noventa y dos con referencia á la mención que en el escrito interponiendo el recurso por infracción de ley debe hacerse de la que esté infringida y del concepto en que lo hayan sido, cuando se emplean formas deficientes y vagas, inútiles por tanto para fijar y circunscribir desde el primer momento el problema jurídico, que ha de quedar propuesto con la interposición misma del recurso ante el Tribunal sentenciador, sin que la ulterior subsanación de tal defecto, pretendida ó realizada ante el Tribunal de casación, ya sea espontánea de la parte recurrente ó bien subsiga á la impugnación de los demás interesados, baste á dar eficacia, para el efecto de su admisión, á un recurso que, por ser mal interpuesto, no ha debido admitir el Tribunal ante quien se interpusiera y después de su admisión debe declarar mal admitido el Tribunal Supremo, de conformidad con las prescripciones respectivamente contenidas en los artículos once y treinta y cuatro de la ya citada orden número noventa y dos del Gobernador Militar de la Isla;

SE DECLARA mal admitido el recurso de casación interpuesto á nombre de Bernabé Rodríguez Báez contra la sentencia pronunciada en esta causa por la Audiencia de Matanzas, sin especial condenación de costas; y comuníquese esta resolución al Tribunal sentenciador á los efectos procedentes.

Lo proveyeron y firman los magistrados del margen, lo certifico.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Octavio Giberga.— Ante mí, P. D., Silverio Castro.

---

EL M. F. CONTRA ANASTASIO HERNÁNDEZ AMADOR.

**Sentencia núm. 2 (5 de Octubre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por Anastasio Hernández Amador contra la sentencia dictada por la Audiencia de Matanzas en 15 de Junio de 1899.*

### HOMICIDIO.

La defensa propia, como circunstancia eximente de responsabilidad criminal, está condicionada por la concurrencia de los tres requisitos de agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla ó repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende; y no concurriendo todos esos requisitos, solo puede estimarse como circunstancia atenuante conforme con el número 1 del artículo 9.º del Código Penal.

Apreciada en un delito de homicidio la atenuante 4.ª del artículo 8.º, en relación con el número 1.º del artículo 9.º, la pena que corresponde imponer es la de prisión correccional (6 meses y un día) que es el mínimo de la inferior en dos grados á la de reclusión temporal señalada al delito.

En la Ciudad de la Habana, á cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Supremo Tribunal á consecuencia del interpuesto por Anastasio Hernández Amador guardia de policía y vecino de la ciudad de Matanzas contra la sentencia dictada por la Audiencia de esta ciudad en la causa por homicidio de Jorge Nixon;

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la referida causa, la mencionada Audiencia de Matanzas, en sentencia de quince de Junio de este año, consignó como probados los hechos siguientes:

*Primero Resultando probado:* que el día diez de Abril del



corriente año, siendo próximamente las once de la noche los guardias de policía Anastasio Hernández Amador y Alberto Betancourt y Dávalos en cumplimiento de sus funciones se hallaban guardando el orden en la calle de Daoiz en una casa donde se daba un baile, en cuyo lugar se presentaron varios negros americanos entre los cuales se encontraba el llamado Jorge Nixon, quien pretendió entrar gratuitamente en dicho baile á lo que se opusieron los referidos policías, ordenando á Nixon por medio del intérprete Joaquín Castañer y Rivas, que dejara expedita la vía pública ó entrase en el espectáculo toda vez que con su actitud estorbaba el tránsito público, oído lo cual sacó el interrogado un billete de á peso demostrando intento de pagar la entrada, pero después echándose hacia atrás dijo: "que allí estaba bien", á lo cual fué replicado por los guardias insistiendo en que dejara franca la acera, lo que lejos de hacer el requerido se arrojó sobre Hernández Amador arrebatándole el bastón que portaba é infiriéndole varios golpes con el mismo á éste y su compañero, consistentes el primero en una contusión de segundo grado en el tercio medio parte externa del brazo izquierdo y cinco contusiones también de segundo grado en la región dorsal causando intensos dolores en esta, con expectoración sanguinolenta y habiendo recibido el segundo ó sea Betancourt y Dávalos otra contusión en el cuero cabelludo que no necesitó de asistencia facultativa. Una vez esto realizado emprendió la fuga el agresor, persiguiéndolo más de cerca Hernández y á mayor distancia su compañero Betancourt, no atendiendo el prófugo á las voces que daban sus perseguidores para que se detuviera, sin arredrarle tampoco dos disparos que al aire hizo Hernández con aquel propósito, hasta que al llegar á la esquina de las calles de Jovellanos y Velarde se volvió Nixon dispuesto á agredir con el bastón á Hernández, quien le disparó dos tiros con el revólver que llevaba, causándole dos heridas, una circular al nivel del occipital como de dos centímetros de extensión que fué la que le produjo la muerte instantánea y otra con fractura irradiada á la bóveda y base, que tiene por punto de partida la herida del hueso y existía además fractura del parietal derecho; siendo una recibida por detrás y otra por delante ó de frente;

*Resultando:* que la Audiencia de Matanzas declaró que los expresados hechos constituían el delito de homicidio definido y penado en el artículo cuatrocientos dieciseis del Código Penal que era responsable del mismo en concepto de autor Anastasio Hernández Amador; que eran de apreciarse como circunstancias atenuantes, la primera del artículo noveno en relación con

las primera y tercera del número cuarto del artículo octavo y las cuarta y quinta de dicho artículo noveno; toda vez que Hernández Amador obró en defensa de su persona precedida de agresión ilegítima del finado y sin provocación suficiente por parte de aquél; quien además se vió compelido á la vindicación próxima de la ofensa grave que acababa de recibir, provocado y amenazado inmediatamente para ello, no concurriendo el requisito segundo del número cuarto del artículo octavo por no estimarse la necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión; por todo lo que, invocando el criterio consignado en el artículo ochenticinco y considerando como pena aplicable la inferior en dos grados á la del homicidio en el mínimo, condenó á Hernández Amador á la de seis años y un día de prisión mayor, con las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, indemnización á los herederos del interfecto de la cantidad de cinco mil pesetas y al pago de las costas causadas sin derecho al abono de la mitad de la prisión preventiva;

*Resultando:* que el Magistrado Adolfo Baró formuló voto particular, en el cual aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia y agregando como hecho también probado que la herida en la región parietal dada su forma irregular de dirección oblicuamente ascendente y antero posterior fué producida de frente, aceptando que el hecho perseguido es constitutivo del delito de homicidio y que es autor el procesado, estimó que era de apreciarse la circunstancia eximente del número cuarto del artículo octavo por concurrir en el hecho los tres requisitos que allí se consignan y además la doce del mismo artículo octavo, porque el procesado obró en el cumplimiento de su deber y en el ejercicio legítimo del cargo de policía; y que, por todo ello, debía absolvérsele, con las costas de oficio, por estar exento de responsabilidad criminal, en virtud de haber obrado en defensa propia con los requisitos legales;

*Resultando* que el procesado, por medio del procurador Luis Dulzaides interpuso recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números primero, segundo, quinto y sexto del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, designando como infringidos:

*Primero.* El número cuarto del artículo octavo del Código Penal, por que concurriendo en el hecho las tres condiciones de ese número, debió declarársele exento de responsabilidad criminal;

*Segundo.* El número doce del mismo artículo octavo, porque obró en el cumplimiento de su deber como policía;

*Tercero.* El número segundo del artículo setenta y cuatro y los párrafos primero y segundo y escala gradual número dos del artículo noventa del Código Penal aplicados conforme al criterio del artículo ochenta y cinco; porque habiéndose apreciado como atenuante la cuarta del artículo octavo en relación con la primera del artículo noveno, la pena correspondiente era la de seis meses y un día de prisión correccional como mínimo de la inferior en dos grados á la de reclusión temporal correspondiente al homicidio;

*Resultando:* que el Fiscal se adhirió al recurso de casación, en beneficio del reo, expresando como motivos infringidos el caso doce del artículo octavo y el artículo ochenta y cinco del Código Penal en relación con el párrafo segundo del artículo noventa del mismo Código.

*Vistos:* Siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* que el derecho de la defensa propia como circunstancia eximente de responsabilidad criminal se encuentra condicionado por la concurrencia de los tres requisitos de "agresión ilegítima" "necesidad racional del medio empleado para impedirla ó repelerla" y "falta de provocación suficiente por parte del que se defiende", y que no concurriendo todos esos requisitos sólo puede estimarse como circunstancia atenuante conforme á lo dispuesto en el número primero del artículo noveno del Código Penal;

*Considerando:* que según los hechos que en la sentencia recurrida se declaran probados, cuando el procesado Hernández Amador disparó los dos tiros de revólver contra Jorge Nixon, se había interrumpido la primitiva agresión del segundo contra el primero por haber Jorge Nixon emprendido la fuga, y que si bien es cierto que al llegar éste á determinado sitio se volvió dispuesto á agredir con el bastón á su perseguidor, como esa disposición agresiva quedó en la esfera de mera amenaza, sin que llegara á manifestarse de un modo efectivo por acto alguno de positiva violencia faltando por otra parte como faltan, elementos para apreciar el peligro que envolvese para el procesado la actitud expuesta, pues no consta la distancia que hubiese entre uno y otro, é ignorándose además, el espacio de tiempo que mediara entre uno y otro disparo realizados; no puede admitirse que el procesado, en aquella situación armado de un revólver y auxiliado por su compañero Betancourt y Dávalos mientras el interfecto no tenía más arma que un palo, tuvo necesidad racional de emplear un medio tan



extremo como el de los dos tiros de revólver para impedir que se reanudara la agresión;

*Considerando:* que la obligación de un agente de policía cuando persigue á un delincuente es procurar su captura sin riesgo de tercero ni más daño al perseguido que el indispensable para capturarlo; no pudiendo sostenerse por consiguiente que Hernández Amador obró en cumplimiento de los deberes de su cargo al disparar dos tiros de revólver contra Jorge Nixon; porque entre las obligaciones y deberes de un guardia de policía no figura la de perseguir á tiros á los delincuentes, y mucho menos en poblado, como medio adecuado para capturarlos; siendo de admitirse tan sólo en el caso excepcional de la legítima defensa;

*Considerando:* que por las razones contenidas en los anteriores considerandos no son de estimarse en favor del procesado las circunstancias eximentes de la defensa propia y haber obrado en el cumplimiento de un deber; siendo improcedente por tanto el recurso en cuanto á esos dos extremos; porque no resultan infringidos los números cuarto y doce del artículo octavo;

*Considerando:* que concurriendo á un mismo fin los dos motivos de casación, por considerarse infringidos dos números del artículo octavo del Código Penal, han podido y debido apreciarse conjuntamente, sin que la alegación del uno impida la del otro, puesto que en un mismo sujeto pueden darse las dos circunstancias al propio tiempo, aunque al estimarse una no sea ya necesario estimar la otra;

*Considerando:* que cuando el hecho perseguido no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que se trata en el artículo octavo, siempre que concurriere el mayor número de ellos se ha de aplicar la pena inferior en uno ó dos grados á la señalada al delito, imponiéndola en el grado que los Tribunales estimaren correspondiente, atendido al número y entidad de los requisitos que faltaren ó concurrieren; siendo por consiguiente de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador fijar, dentro de los límites indicados, la pena que ha de imponer, aplicando el criterio contenido en el artículo ochenta y cinco del Código Penal;

*Considerando:* que habiendo determinado la Audiencia de Matanzas en el fallo recurrido, la extensión en que juzgó prudente hacer uso de la facultad concedida en el artículo ochenta y cinco del Código Penal; al consignar como lo ha hecho, que la pena inferior en dos grados á la de reclusión temporal, que es

la correspondiente al delito de homicidio, es la de prisión mayor, y al imponerla al procesado en ese erróneo concepto y no en el de la apreciación de las circunstancias del hecho, ha infringido el párrafo segundo y la escala gradual número dos del artículo noventa del Código Penal; por cuanto la pena inferior en dos grados á la de reclusión temporal no es la de prisión mayor indebidamente impuesta sino la de prisión correccional;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación de Anastasio Hernández Amador, á que se adhirió el Fiscal, contra la sentencia dictada por la Audiencia de Matanzas de quince de Junio del corriente año, la cual casamos y anulamos, sin especial condenación de costas. Así, por esta sentencia que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos; y con la sentencia que á continuación se dicta, comuníquese á la Audiencia de Matanzas á los efectos procedentes.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, en la causa criminal por homicidio iniciada en el Juzgado del Distrito del Palacio de Matanzas y continuada en la Audiencia de la misma ciudad, pendiente ante este Supremo Tribunal á consecuencia del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el representante del procesado Anastasio Hernández Amador, guardia de policía y vecino de la ciudad de Matanzas;

*Resultando:* que casada y anulada por sentencia de esta misma fecha la dictada el quince de Junio del corriente año por la referida Audiencia de Matanzas, procede dictar de seguida la que ha de sustituir á la pronunciada por el Tribunal recurrido, conforme á lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal. Aceptando los hechos probados consignados en el primer Resultando y los considerando primero, segundo, cuarto, quinto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia casada;

Siendo ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* que es de apreciarse como circunstancia atenuante la cuarta del artículo octavo en relación con el número

primero del artículo noveno en atención á que Hernández obró en defensa de su persona, previa agresión ilegítima del interfecto y sin provocación suficiente por su parte, al disparar los dos tiros de revólver contra Jorge Nixon, aunque empleando un medio no adecuado, y que dadas las circunstancias del caso no fué racionalmente necesario;

*Considerando:* que dado el criterio sentado en el quinto considerando de la sentencia casada, aceptado en la presente, la pena aplicable al procesado es la de seis meses y un día de prisión correccional, que es el mínimo de la inferior en dos grados á la de reclusión temporal señalada al delito de homicidio.

*Vistos* los artículos octavo, noveno, ochenta y cinco, noventa y cuatrocientos dieciseis del Código Penal y el artículo treinta y ocho de la orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal;

*Fallamos:* que debemos condenar, y condenamos, á Anastasio Hernández Amador á la pena de seis meses y un día de prisión correccional, suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, á indemnizar á los herederos del interfecto la cantidad de cinco mil pesetas ó en su defecto á la responsabilidad personal subsidiaria del artículo cuarenta y nueve del Código Penal y al pago de las costas causadas; con derecho al abono de la mitad de la prisión preventiva.

Así, por esta sentencia, irrevocablemente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Ángel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL M. F. Y JUAN N. MARTÍNEZ CONTRA JOSÉ DOMÍNGUEZ Y RAMÓN PLANIOL.

Sentencia núm. 3 (19 de Octubre de 1899).

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por Juan N. Martínez contra el auto de sobreseimiento de 29 de Abril de 1899, dictado por la Audiencia de la Habana.*

### LESIONES Y DAÑO EN LA PROPIEDAD.

No apareciendo esclarecida la inexistencia de relación alguna, entre el daño causado y la infracción cometida, no procede el sobreseimiento á que se refiere el número 2 del



artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y si la apertura del juicio.

En la ciudad de la Habana, á diecinueve de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Tribunal Supremo, interpuesto por el procurador Esteban de la Tejera, á nombre de Juan N. Martínez como padre legítimo del menor Juan Manuel Teotisto Martínez y Fernández contra el auto de sobreseimiento dictado por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana en la causa seguida á Ramón Planiol y José Domínguez López, por lesiones y daño en la propiedad;

*Resultando:* que el expresado auto dictado en veintinueve de Abril último contiene los siguientes Resultandos:

*Resultando:* que en la tarde del día tres de Julio de mil ochocientos noventa y cuatro, se derrumbó parte de una pared medianera que se hallaba en construcción entre el solar número ciento cincuentisiete y la casa número ciento cincuentinueve de la calzada de Vives y cuya pared se levantaba por orden y cuenta de D. Ramón Planiol dueño del citado solar, siendo director de la obra D. José Domínguez López, que no tenía título profesional;

*Resultando:* que á consecuencia del expresado derrumbe sufrieron lesiones dos individuos que se hallaban en el patio de la casa número ciento cincuentinueve, de cuyas lesiones sanaron á los seis días, con asistencia médica los tres primeros días, causándose también por el mismo hecho desperfectos en la referida casa, que fueron valuados en doscientos pesos próximamente;

*Resultando:* que por los hechos relatados se formó la presente causa, en que la representación del propietario de la casa número ciento cincuentinueve de la calzada de Vives imputa la responsabilidad criminal de los mismos hechos al director de la obra D. José Domínguez y á D. Ramón Planiol, en cuanto á éste, por haber encargado la dirección de los trabajos á quien no tenía título profesional y por haberse hecho aquellos sin previa licencia administrativa;

*Resultando:* que declarados procesados D. José Domínguez López y D. Ramón Planiol, se halla en rebeldía el primero, y por lo mismo sólo hay que acordar ahora en cuanto la causa se refiere al otro procesado;

*Resultando:* que la Sala Sentenciadora estimando que los hechos expresados no son constitutivos de delito, sobreseyó libremente en la causa por el referido auto de veintinueve de los treintisiete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto Abril último, con arreglo al caso segundo del artículo seiscien-

á Ramón Planiol disponiendo que se archiven los autos hasta que se presente ó sea capturado el otro procesado y funda esa resolución en que no siendo los daños y las lesiones ocasionadas por el derrumbe de la pared de que se trata producidos directamente por un acto malicioso de D. Ramón Planiol sólo podría ser éste responsable de tales hechos si hubiere obrado con imprudencia punible lo que no ha concurrido en el procesado porque para que exista imprudencia penable es necesario que además de haber un hecho voluntario y no malicioso y un daño real y concreto haya una indiscutible relación directa de causa á efecto entre el hecho y el daño, lo que no se realiza en el caso de autos, porque la causa determinante de los daños y lesiones que resultaron del derrumbe fué, ó la mala construcción de la pared ó la fuerza del viento reinante en aquellos momentos y si en este segundo caso resultaría ser un caso fortuito en el primero sería efecto de la impericia ó malicia del constructor nunca de no estar éste investido del carácter profesional que da un título académico ni de no haberse obtenido previamente licencia para la construcción, cuyas dos circunstancias no son por lo mismo suficientes para engendrar la responsabilidad criminal por imprudencia que se atribuye á D. Ramón Planiol;

*Resultando:* que contra este auto se ha interpuesto por el procurador Esteban Tejera á nombre de D. Juan N. Martínez como representante legal de su hijo el menor Juan Manuel Martínez y Fernández recurso de casación por infracción de ley autorizado por los artículos seiscientos treintiseis, ochocientos cuarentiocho, caso cuarto y ochocientos cincuentidos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal citando como infringidos los artículos primero y quinientos noventidos del Código Penal vigente porque Ramón Planiol encargó la construcción de la obra á José Domínguez que no tenía título ninguno que le habilitara para esas obras ni pericia para realizarlas y las llevó á efecto infringiendo las Ordenanzas Municipales y demás disposiciones dictadas sobre construcciones por la Alcaldía Municipal y sin obtener previamente del Ayuntamiento la licencia necesaria para esas obras y que de esos hechos aunque los realizara Planiol sin malicia, se deriva su responsabilidad por imprudencia dada la definición que de esta hace el artículo mil quinientos noventidos citado como infringido por el recurrente;

*Visto:* Siendo Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo,

*Considerando:* que de los hechos consignados en el auto recurrido consta la realización de un daño y se desprende la infracción de Reglamentos sin que hasta ahora se haya esclarecido la inexistencia de relación alguna entre el daño causado y la

infracción cometida por razón de lo cual no es evidente que los hechos no revistan caracteres de delito;

*Considerando:* que tratándose de hechos que revistan ó puedan revestir carácter de delito no procede el sobreseimiento libre fundado en el número dos del artículo seiscientos treintisiete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y si la apertura del juicio, trámite que no prejuzga el hecho que ha de ser materia de discusión entre las partes y de la resolución del Tribunal;

*Considerando:* que la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana al sobreseer en esta causa á pesar de que los hechos que admite pueden presentar caracteres de delito, ha incurrido en error de derecho é infringido los preceptos legales citados por el recurrente;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso interpuesto por el procurador Esteban de la Tejera á nombre de Juan N. Martínez como padre legítimo del menor Juan Manuel Teotisto Martínez y Fernández contra el auto de sobreseimiento libre dictado por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana en veintinueve de Abril último, el cual casamos y anulamos con las costas de oficio.

Así, por esta sentencia, que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos; y con la resolución que á continuación se dicta, comuníquese á la Audiencia de la Habana á los efectos procedentes.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Eudaldo Tamayo celebrando audiencia pública este día el Tribunal Supremo constituido en Sala de Justicia, de que certifico como Secretario por delegación. Habana, veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.—Silverio de Castro.

#### AUTO.

Habana, veinte de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.

*Resultando:* que el Procurador Esteban de la Tejera, á nombre de Juan N. Martínez como padre legítimo del menor Juan Manuel Teotisto Martínez y Fernández, interpuso ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana recurso de casación por infracción de Ley contra el auto de sobreseimiento libre dictado por dicho Tribunal en veinte y nueve de Abril último en



la causa seguida á Ramón Planiol y José Domínguez López por lesiones y daño en la propiedad.

*Resultando:* que admitido el recurso de casación por dicha Audiencia se sustanció en este Tribunal y cumplidos los trámites correspondientes se dictó sentencia declarando haber lugar á dicho recurso casando y anulando el referido auto de sobreseimiento dictado por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana en veinte y nueve de Abril último.

*Considerando:* que casado dicho auto de sobreseimiento, procede que se continúe la causa por todos sus trámites ante la referida Audiencia, hasta su terminación y fallo.

Se abre el juicio oral en esta causa y comuníquese á la Audiencia de la Habana para que la continúe con arreglo á derecho. Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio Castro.

EL M. F. CONTRA . . . . .

Sentencia núm. 1 (23 de Octubre de 1899).

*Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por el procesado y por infracción de Ley por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Audiencia de.....*

### VIOLACION.

Para que prospere el recurso de casación por quebrantamiento de forma, es preciso expresar las causas que hayan impedido reclamar la subsanación de la falta cometida y que exista congruencia entre los fundamentos del recurso y las infracciones alegadas.

No puede estimarse el recurso por infracción de Ley cuando éste se funda en la infracción de un precepto relativo á la necesidad de la concurrencia de determinado requisito para que se pueda proceder.

En la ciudad de la Habana, á veintitres de Octubre de mil ochocientos noventinueve, en el recurso de casación pendiente ante este Supremo Tribunal, que interpusieron por quebrantamiento de forma el procesado y por infracción de ley el Ministerio Fiscal en la causa criminal por violación seguida contra... estudiante y vecino de..... ante la Audiencia de.....;

*Resultando* que el Sr..... denunció al Juzgado el delito de violación de su hija..... cometido por el joven.....,

y mostrándose parte en la causa, ha sostenido su acusación fundada exclusivamente en que dicho..... manifestó por escrito al querellante y confesó también en su primera declaración instructiva prestada en el sumario que, valiéndose de un narcótico había privado de sentido á la señorita....., y en ese estado había yacido con ella, gozando de su virginidad, de cuya confesión se retractó después el procesado en el sumario, lo mismo que en el juicio oral, afirmando que aquellas manifestaciones en que á sí mismo se inculpaba, sólo obedecieron á su deseo de vencer la resistencia que oponía su padre á consentir en el matrimonio con la....., que deseaba contraer;

*Resultando:* que residiendo temporalmente la señorita..... de diecisiete años de edad en la casa del procesado que contaba quince, por haberla confiado su padre á la familia de aquél, á la cual le unían estrechos lazos, concibieron mutuamente una violenta pasión amorosa; y para eludir la vigilancia de los familiares de ..... que se oponían á esos amores y dificultaban los medios de comunicarse, convinieron ambos en tener una entrevista por la noche en la habitación de la..... y después que estuvieron recogidos los demás de la familia: para mayor seguridad de no ser sorprendidos concibió..... la idea de adormecer profundamente á su abuela que dormía en la habitación inmediata, y al efecto en las primeras horas de la noche, le dió á tomar disimulado en una copa de helado una dosis proporcionada de hidrato de cloral: tomadas esas precauciones y llegada la hora que consideró oportuna penetró..... en la alcoba de la..... por una ventana que daba fácil acceso á la misma, y una vez reunidos ambos amantes en aquella ocasión y circunstancias tuvieron contacto carnal que dió por resultado la pérdida de la virginidad de la señorita.....: Estos hechos se declaran probados.

*Resultando:* que el Ministerio Fiscal y el acusador particular establecieron en sus conclusiones definitivas sostenidas en el juicio que los hechos punibles consisten en que: encontrándose la señorita..... en la casa de....., en las circunstancias ya dichas y habiendo rechazado los sentimientos amorosos que el procesado le demostrara éste se propuso gozarla sin su voluntad y al efecto obtuvo sustancias narcóticas que hizo tomar en un helado que él mismo les ofreció á ella y á su abuela momentos antes de irse á acostar, y preparando con anticipación la manera de entrar en el dormitorio de....., por una ventana del mismo que pudo abrir desde el exterior, penetró por ella cuando toda la familia dormía y realizó el acto carnal que se propuso con dicha joven, que se hallaba en aquellos mo-



mentos privada de sentido por efecto del narcótico; que estos hechos constituyen un delito de violación comprendido en el artículo cuatrocientos cincuentitres, caso segundo, del Código Penal: que es su autor el procesado..... concurriendo la circunstancia atenuante especial de ser menor de dieciocho años y mayor de quince; y las agravantes octava, dieciseis y veintitres del artículo diez del Código: pidiendo ambas acusaciones se le imponga la pena de diez años y un día de prisión mayor, accesorias correspondientes y pago de las costas y como responsabilidad civil que se le condene á dotar á la ofendida en mil quinientos pesos según el Fiscal y en tres mil pesos, según el acusador particular, y además á reconocer y mantener la prole si la hubiere;

*Resultando:* Que la defensa del procesado relata los hechos ocurridos como sustancialmente se exponen en el segundo resultando, pero sin consignar que el procesado narcotizara á su abuela y agregando que empeñados los dos amantes en contraer matrimonio después de la unión habida entre ellos, fraguaron el plan de agravar el delito cometido convirtiendo el estupro voluntario en violación como así lo narraron, con el fin de reducir al padre del procesado á consentir en el matrimonio: y sostiene que los hechos no constituyen el delito de violación que se le imputa y por tanto no cabe imposición de pena alguna ni responsabilidad civil;

*Resultando:* que la Sala de Justicia de la referida Audiencia, por sentencia dictada en veintiseis de Junio del corriente año, no estimando probados los hechos constitutivos del delito de violación imputado al procesado y apreciando los hechos probados como constitutivos de un delito de estupro comprendido en el párrafo primero del artículo cuatrocientos cincuentinueve del Código Penal, ejecutado en concepto de autor por el procesado con la circunstancia agravante de nocturnidad y la atenuante especial de ser mayor de quince años y menor de dieciocho, sin que ejercitada como lo había sido la acción penal por los hechos de la causa, por lo cual aparecía en sentir de la Sala cumplido el requisito esencial exigido por la ley para que pueda penarse el delito privado de estupro debiesen la falta de alguna otra formalidad, notoriamente inútil á su juicio en este caso, ni la circunstancia de haber los acusadores público y particular calificado los hechos como violación, impedir que se castiguen como constitutivos de otro delito menos grave, cuya existencia había sido además reconocida por la defensa del procesado en sus conclusiones y debía por tanto ser objeto de la sentencia, absolvió dicho Tribunal al procesado por el delito de

violación y le condenó por el de estupro á la pena de seis meses de arresto mayor, accesorias legales, costas é indemnización civil; formulando voto particular uno de los tres Magistrados que componían dicha Sala, por apreciar de distinto modo que los otros dos la prueba practicada, en el sentido de que ella había demostrado la adquisición de láudano por....., su empleo en un helado que dió á tomar á..... y el desfloramiento sexual de ésta por aquél á favor del estado de narcotismo é insensibilidad resultante del expresado medio, por cuyo fundamento y en consideración de las circunstancias modificativas apreciadas en la sentencia, procedía, en opinión del Magistrado discrepante, imponer al procesado, como autor del delito de violación, la pena de diez años y un día de prisión mayor, accesorias legales, costas y responsabilidad civil declarada en la sentencia;

*Resultando:* que el procesado interpuso contra dicha sentencia recurso de casación por quebrantamiento de forma que fundó en el párrafo tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal alegando, como faltas de forma cometidas, que la sentencia pena un delito de estupro que no ha sido objeto de acusación y á cuya persecución no han precedido acto conciliatorio, ni querella ajustada á los artículos doscientos setentisiete y doscientos setentiocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que constituyan la instancia requerida por el artículo cuatrocientos sesentisiete del Código Penal para que pueda procederse por delito de estupro exponiendo, además, que no había sido posible con anterioridad á la interposición del recurso hacer reclamación alguna para obtener la subsanación de las faltas cometidas, pero sin consignar expresamente los motivos de la imposibilidad;

*Resultando:* que á su vez el Ministerio Fiscal interpuso contra dicha sentencia recurso de casación por infracción de ley autorizado según expresa por el número primero del artículo ochocientos cuarentinueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando en concepto de infringido el artículo cuatrocientos sesentisiete del Código Penal vigente, por haber la Sala penado como estupro un hecho que fué denunciado y perseguido como violación y que sólo fué objeto de acusación en ese mismo sentido;

*Resultando:* que personadas ante este Supremo Tribunal ambas partes recurrentes, el procesado, durante el trámite de instrucción, se adhirió al recurso por infracción de ley que el Ministerio Fiscal interpusiera, señalando, como nuevo motivo para la casación y sin hacer expresa referencia á caso alguno

de los en que la ley autoriza tal recurso, la infracción á su juicio cometida del artículo cuatrocientos sesentisiete del Código Penal, en relación con los artículos ciento cuatro, primer párrafo, ciento cinco, doscientos setentecinco, doscientos setentisiete y doscientos setentiocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aclaran y completan el precepto del Código citado, cuya infracción estima cometida porque la Audiencia carece por completo de jurisdicción para condenar por estupro al procesado, por no haberse seguido la causa á instancia de parte legítima y con los requisitos ordenados en la ley, pues la intervención que en el proceso ha tenido la acusación privada no puede sustituir nunca á la instancia que exige el Código Penal y que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ser en forma de querrela;

*Resultando* que, señalado para la vista pública de ambos recursos por quebrantamiento de forma y por infracción de ley el día catorce del corriente mes, se celebró dicho acto con asistencia de los recurrentes;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,

*Considerando:* en cuanto al recurso por quebrantamiento de forma, que, aun cuando se hubiere cumplido en el escrito de interposición el precepto legal que exige expresar, en su caso, las causas que hayan impedido reclamar la subsanación de la falta cometida, cuyo requisito en manera alguna ha llenado el recurrente, pues nada expone con relación á la materia, nunca sin embargo podría reconocérsele eficacia, porque al fundarse su interposición en el caso tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ó sea el de penarse en la sentencia un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, sin haber previamente el Tribunal procedido conforme al artículo setecientos treintitres se establece como base del recurso un fundamento del todo incongruente con las infracciones procesales que se alegan y por añadidura manifiestamente erróneo toda vez que siendo la pena correspondiente al delito imputado la de reclusión temporal y la correspondiente al castigado la de prisión correccional en sus grados mínimo y medio, su respectiva condición de pena aflictiva la primera y correccional la otra impone claramente el carácter de delito grave al de "violación" y de delito menos grave al de "estupro": por razón de lo cual es evidente la inadmisibilidad de tal recurso y, después de admitido, y por falta de impugnación debidamente sustanciada, procede declararlo sin lugar;

*Considerando:* que cuando se hayan interpuesto contra una sentencia los recursos de casación por quebrantamiento de for-



ma y por infracción de ley, sustanciados que sean conjuntamente ambos recursos, deben resolverse por un solo fallo, á ser posible, como lo es en el presente caso, en el cual, por la improcedencia del recurso relativo al quebrantamiento de forma se ha de fallar seguidamente acerca del otro por infracción de ley;

*Considerando:* en cuanto al recurso por infracción de ley, que el número primero del artículo ochocientos cuarentinueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de autorizar en su primer párrafo los recursos de esta clase cuando se califiquen y penen como delitos ó faltas hechos que no lo sean, al comprender en su párrafo segundo, como caso en que también los autoriza, juntamente con el de penarse á pesar de existir una circunstancia eximente de responsabilidad criminal, el de que se penen á pesar de que circunstancias posteriores á su ejecución impidan penarlos, se refiere únicamente á hechos que por su naturaleza y con arreglo á la ley excluyan toda posibilidad de imponer pena al hecho anterior, de igual modo que lo impiden los hechos constitutivos de causas de exención de responsabilidad, pero no á omisiones cuyo efecto, dados su índole y su valor legal, no deba ser el indicado, sino otro muy distinto, cual es el de impedir mientras subsistan la sustanciación de procedimientos; por virtud de lo cual y presuponiendo, el mencionado número primero del artículo ochocientos cuarentinueve la existencia legal de un procedimiento en forma dentro del cual pueda la ley haber sido infringida mediante la indebida imposición de pena, no cabe fundar en aquel texto un recurso que, sin impugnar concretamente por cualquiera de los motivos expresados la imposición de pena realizada en actuaciones procedentes y válidas ó por tales aceptadas, sostiene como única infracción la de un precepto relativo á la necesidad de determinado requisito para que se pueda proceder;

*Considerando:* que la adhesión del procesado al recurso por infracción de ley que interpuso el Ministerio Fiscal no alcanza á producir mayor efecto que el recurso mismo, tanto por quedar sin cumplimiento, en el escrito en que se ha realizado el precepto que exige enumerar con la debida claridad los nuevos motivos de casación que se invocaren, puesto que, no obstante los términos empleados por la parte al adherirse, ningún motivo ha fijado en realidad limitándose sólo á consignar las infracciones que entiende cometidas, pero sin referirlas á ninguna de las causas de casación taxativamente señaladas por la ley, como porque la adhesión, á fuer de subordinada y accesorio, sigue la suerte del recurso improcedente, al cual vive enlazada;

*Considerando:* que al declararse sin lugar un recurso de

casación deben imponerse las costas del mismo al recurrente, salvo cuando este fuere el Ministerio Fiscal ó se estuviere en el caso del artículo cuarentisiete de la Orden número noventidós;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el procesado....., ni al recurso por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Sala de Justicia de la Audiencia de..... el veintiseis de Junio del corriente año, é imponemos al referido procesado las costas del primero de ambos recursos declarados sin lugar, siendo de oficio las restantes: líbrese á la citada Audiencia la correspondiente certificación de esta sentencia con devolución de los autos remitidos: y con omisión de los nombres de las partes, lugar y Tribunal de procedencia, publíquese en la "Gaceta de la Habana" y en la Colección á cargo del Secretario de Justicia, pasándose al efecto las necesarias copias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

EL M. F. CONTRA NARCISO HERNÁNDEZ Y GELASIO BULGAR.

Auto de 25 de Octubre de 1899.

*Recurso por infracción de Ley, interpuesto por los procesados Narciso Hernández y Gelasio Bulgar contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en 15 de Abril de 1899.*

### ROBO FRUSTRADO, CON OCASION DEL CUAL RESULTÓ HOMICIDIO.

Para que se entienda que una Ley ha sido infringida, es preciso que la infracción se cometa al aplicarla á los hechos que se hubiesen declarado probados; pues la aceptación de los hechos probados es el elemento cardinal para la interposición de esta clase de recursos; y se infringe el artículo 7.º de la Orden 92 al admitir un recurso sin ese requisito.

*Resultando:* que la Audiencia de Santiago de Cuba, en sentencia de quince de Abril del corriente año, declarando probado que los procesados Narciso Hernández y Gelasio Bulgar encontrándose reunidos con otros individuos, entre los cuales se hallaba José Rodríguez Piedra, en una fiesta que se celebraba



en casa de Caridad Menéndez, en la Villa de Guantánamo, salieron de ésta con objeto de robar la cantina de Rodríguez Piedra, al cual con ocasión de robo dieron muerte en lugar próximo á la expresada cantina, en la cual entraron fracturando la puerta y sacaron un baúl que deserrajaron y salieron huyendo porque en ese momento pasó por la cantina Juan Collado, sin que conste llegaran á sustraer objeto alguno; condenó á dichos procesados en concepto de autores del delito de robo frustrado con ocasión del cual resultó homicidio;

*Resultando:* que la representación de los condenados, interpuso contra esa sentencia recurso de casación por infracción de ley, fundándose en los incisos primero y cuarto del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y citando como infringido el artículo doce del Código Penal, por cuanto al calificarse en la sentencia á los procesados como autores de un delito de robo frustrado con homicidio se comete error de derecho al determinar la participación de los dichos procesados, que consta no intervinieron en los hechos punibles;

*Resultando:* que admitido el recurso por la Audiencia sentenciadora y tramitándose en este Tribunal Supremo, el Ministerio fiscal en el período oportuno, impugnó la admisión, fundándose en que los recurrentes al plantear la tesis de que no intervinieron en la realización del delito niegan y contradicen lo que la Sala declara probado en la sentencia, pretendiendo abrir una discusión que prohíben todos los números del artículo ochocientos cuarenta y nueve citado; y sustanciada previamente esta cuestión, se celebró la vista el día de ayer con asistencia sólo del Ministerio fiscal;

*Considerando:* que tanto en el caso primero como en el cuarto del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que se entienda, al efecto de poder interponer la casación, que una ley se ha infringido en sentencia definitiva, es necesario que la infracción se cometa al aplicar aquella á los hechos que la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades exclusivas hubiese declarado probados, pues tales hechos probados son premisas indiscutibles que forzosa y necesariamente han de aceptarse para la interposición, discusión y resolución de los recursos de la naturaleza del presente, según el texto claro y preciso de los preceptos legales citados;

*Considerando:* que al admitir la Audiencia de Santiago de Cuba este recurso, á pesar de la forma en que fué interpuesto, no cumplió el artículo séptimo de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de la Isla que no autoriza la admisión de

los recursos que no llenen los requisitos, que el mismo artículo exige, entre los cuales, marcado con el número tres, se encuentra el que el recurso se funde en alguna de las causas taxativamente señaladas en el artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y los literalmente citados en el escrito de interposición, como comprendidos en dicho artículo, no lo están realmente en él, según se ha demostrado en el considerando anterior; y por consiguiente procede declarar mal admitido el recurso;

*Se declara* con lugar la impugnación del Ministerio Fiscal y en su consecuencia mal admitido el recurso de casación por infracción de ley establecido por Narciso Hernández y Gelasio Bulgar contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en quince de Abril del corriente año en causa por robo frustrado con homicidio seguida contra los recurrentes y otros.

Comuníquese á dicha Audiencia por medio de certificación de este auto, á los efectos procedentes. Y como consecuencia de esta resolución no ha lugar á proveer á los escritos de ampliación presentados por la representación de los recurrentes con fecha diez y seis de este mes. Lo acordaron y firman los Magistrados de la Sala que al margen se expresan.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio Castro.

---

EL M. F. CONTRA ESTEBAN MARTÍNEZ.

**Sentencia núm. 4 (31 de Octubre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por el procesado Esteban Martínez contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba el 26 de Enero de 1899.*

### HOMICIDIO.

El informe pericial es uno de los medios de prueba que establece la Ley; y la sala sentenciadora puede apreciarlo, juntamente con los demás elementos probatorios que resulten del proceso, con arreglo á su conciencia, según el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: sin que contra esa apreciación de la prueba quepa recurso alguno.

Para que pueda estimarse la concurrencia de circunstan-

cias atenuantes, es preciso que resulten probadas ó se deriven de hechos declarados probados.

En la Ciudad de la Habana, á treintiuno de Octubre de mil ochocientos noventinueve, visto el recurso de casación por infracción de Ley procedente de la Audiencia de Santiago de Cuba en causa criminal seguida de oficio por homicidio de Celio Conrado Rodríguez y Pérez contra Esteban Martínez, de oficio carpintero y con domicilio en Santiago de Cuba, interpuesto por dicho procesado contra la sentencia dictada por la referida Audiencia en veintiseis de Enero del año actual.

*Resultando* que en la sentencia recurrida se consignan los siguientes Resultandos:

*Primero:* que en la mañana del día dieciseis de Diciembre del año próximo pasado, habiendo desembarcado en este puerto procedente de Baracoa el señor Celio Conrado Rodríguez Pérez, tomándolo el pueblo que se encontraba cerca de los muelles por un antiguo guerrillero español, lo persiguió por las calles y al llegar dicho Rodríguez á la esquina de las de Sagarra y Santo Tomás donde se hallaba Esteban Martínez que había servido en las filas del Ejército cubano durante la Revolución sacó éste el revólver que portaba y disparó sobre Rodríguez un tiro que le produjo una herida en la cabeza de lo que falleció. Hechos que se declaran probados.

*Segundo Resultando* que para suplir la falta de partida de bautismo del procesado Martínez el Ministerio Fiscal propuso la prueba pericial á fin de fijar la edad de aquél, informando los dos médicos forenses que dicho enjuiciado es menor de dieciocho años y mayor de diez y seis.

*Resultando* que en el tercer considerando de la referida sentencia se consigna: que no obstante el informe pericial de que queda hecho mérito sobre la edad del procesado, el Tribunal apreciándolo según su conciencia con arreglo al artículo setecientos cuarentiuno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entiende que evidentemente es mayor de diez y ocho años desde cuya edad es completa la responsabilidad criminal según el Código Penal.

*Resultando:* que condenado el procesado como autor del delito de homicidio sin circunstancias modificativas apreciables, á la pena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión y accesorias, interpuso recurso de casación por infracción de Ley autorizados por los artículos ochocientos cuarentisiete, número primero del ochocientos cuarentiocho, número quinto del ochocientos cuarentinueve y el ochocientos cincuenticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringidos:

*Primero:* la circunstancia segunda del artículo noveno en



relación con el ochenta y cuatro del Código Penal por cuanto la Sala no los ha aplicado, en sentido de que dispuesto el artículo trescientos setenticinco de la Ley procesal que la edad del procesado se pruebe por la certificación de la inscripción de nacimiento ó partida de bautismo y en su defecto por informe pericial previo examen del procesado, la Sala debe atenerse á éste, sin que respecto á la edad, tenga la libre apreciación de la prueba:

*Segundo:* El artículo cuatrocientos dieciseis del Código Penal en su último párrafo, por indebida aplicación, toda vez que debiendo ser apreciada por la Sala la circunstancia segunda del artículo noveno, la pena que debió imponer no es la de reclusión sino la de prisión mayor en el grado que corresponda según los artículos ochenticuatro y noventa de dicho Código que también resultan infringidos por inaplicación.

*Tercero:* La circunstancia octava del artículo noveno por su no aplicación puesto que según los hechos que se declaran en la sentencia, el procesado obró con arrebato y obcecación movido por una pasión política que despertaba la presencia de un guerrillero, personaje odioso en este país durante la dominación española;

*Resultando:* que admitido el recurso se ha sustanciado en este Supremo Tribunal, celebrándose la vista pública del mismo, el día veintiuno del mes actual, en la que informaron el letrado de la parte recurrente sosteniendo los motivos alegados y el Ministerio Fiscal impugnándolos;

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt por enfermedad del nombrado en turno Pedro González Llorente,

*Considerando:* que siendo el informe pericial uno de los medios de prueba que la ley establece, el Tribunal sentenciador tiene absoluta libertad para apreciar el valor del mismo, según su conciencia, y en concurrencia con los otros elementos de convicción que según el artículo setecientos cuarentiuno de la Ley procesal debe tener en cuenta al dictar su fallo, y lo que en virtud de tal convicción establezca como hecho probado es indiscutible en casación; por consiguiente declarado por el Tribunal *a quo* que estima que el procesado era mayor de dieciocho años no ha incurrido en las infracciones legales que se le atribuyen en el primero y el segundo de los motivos alegados;

*Considerando:* que para que puedan estimarse en concepto de atenuantes ó agravantes, circunstancias concurrentes en un delito, es necesario que tales circunstancias resulten probadas ó se originen de un hecho probado que guarde natural relación con el agente, y en el caso de autos al establecer la Sala sentencian-



dora los hechos, limitándose á consignar que el interfecto desembarcó en Santiago de Cuba, que el pueblo tomándolo por un antiguo guerrillero español, lo persiguió por las calles y al llegar aquél á una esquina donde se encontraba el procesado que había servido en el Ejército cubano, éste le disparó un tiro de revólver causándole la muerte sin que nada se diga respecto al estado pasional de dicho procesado ni á otra circunstancia del suceso para poder conocer los estímulos que le impulsaron á obrar y graduar la extensión de los mismos, lo cual no es lícito deducir de nuevas conjeturas y por consiguiente al no estimar la Audiencia, dada la forma en que declara probados los hechos, la concurrencia de la circunstancia atenuante que se invoca en el tercer motivo del recurso, tampoco ha incurrido en la infracción de ley que en dicho motivo se le atribuye;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el procesado Esteban Martínez contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en veintiseis de Enero del corriente año en causa por homicidio, con las costas á cargo del recurrente. Comuníquese á la referida Audiencia por medio de certificación de la presente sentencia, la cual se publicará en la "Gaceta de la Habana" é insertará en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto, líbrense las oportunas copias autorizadas.

Así por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

CASIMIRO RIGOL Y DE LA FE CONTRA JUAN MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ.

**Sentencia núm. 5 (3 de Noviembre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por el querellante contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 31 de Julio de 1899.*

### INJURIAS.

Para calificar con acierto delitos de esta clase, no basta atender al sentido gramatical de palabras ó frases aisladas, sino que es preciso tener en cuenta el sentido de las mismas dentro del período en que se consignan, objeto que se propone el autor y estímulo ú ocasión en que se producen.

Son injuriosas las palabras que por su significación y tono general del escrito en que se consignan, ceden en descrédito, deshonra y menosprecio de la persona á quien van dirigidas.

En la ciudad de la Habana, á tres de Noviembre de mil ochocientos noventinueve, visto el recurso de casación por infracción de ley procedente de la Audiencia de la Habana en querrela criminal por injurias seguida por Casimiro Rigol y de la Fe comerciante y domiciliado en esta capital Calzada de Galiano número noventicinco, contra Juan Manuel Fernández Gómez, abogado con domicilio en la casa número noventiuno de la misma Calzada, interpuesto por el querellante contra la sentencia dictada por la Sección segunda de la Sala de lo Criminal de la referida Audiencia en treintiuno de Julio del año actual;

*Resultando:* que en la sentencia recurrida se consignan los siguientes Resultandos:

*Primero. Resultando* probado que con ocasión de disgustos y rivalidades entre la sociedad de García Ostolaza y Compañía y Juan y Casimiro Rigol porque siendo la primera dueña del Almacén de muebles "La Barcelonesa" en la Calzada de Galiano, que había pertenecido al mencionado Juan Rigol, quien lo enajenó con condición de no poner otro de igual clase en dicha calle hasta que pasasen cuatro años, habiéndose puesto de acuerdo con su hijo el citado Casimiro contribuyó á que el último instalase antes de la terminación del plazo fijado otro establecimiento igual en una casa contigua á la en que se encontraba el primitivo Almacén de que se ha hecho mención; se publicaron en el periódico "Diario de la Marina" y en los números correspondientes á los días veintiseis de Enero y siete de Febrero de mil ochocientos noventa y dos comunicados suscritos por García Ostolaza y Compañía, de los cuales se ha confesado único autor el procesado que es marido de Rosario Ostolaza gerente de la mencionada sociedad, haciendo relación á los antecedentes que se dejan expresados refiriendo los procedimientos empleados por los Rigol padre é hijo, para hacer ilusorio el compromiso contraído por el primero de no hacer competencia á la referida sociedad poseedora de la mueblería, y lamentándose de que tales procedimientos tendían á lograr y lograban el descrédito de "La Barcelonesa" en beneficio de su competidor Rigol;

*Segundo Resultando* también probado: que en los comunicados referidos, se han escrito las palabras y frases que subrayadas se mencionan en las conclusiones provisionales del querellante y que por insertarse conservando aquella forma al

transcribirlas á continuación es innecesario repetir conceptos y frases que ha estimado Casimiro Rigol como constitutivos de los delitos de injurias graves de que acusa al procesado; habiendo manifestado este en el acto del juicio oral que al valerse de aquella no fué su ánimo injuriar sino afirmar el crédito de la compañía de José Ostolaza y Compañía que se perjudicaba con los procedimientos utilizados por Rigol;

*Tercero. Resultando* que la representación del querellante en el acto del juicio oral celebrado en veintisiete del corriente mantuvo como definitivas sus conclusiones provisionales expresivas de lo siguiente:

*Primera:* en la edición de la mañana del día veintiseis de Enero de mil ochocientos noventa y ocho del periódico "El Diario de la Marina" apareció publicado un escrito que literalmente dice así: "Almacén de muebles "La Barcelonesa", de los señores García Ostolaza y Compañía, Galiano ochentinueve, noventa y noventa y tres. Teléfono mil doscientos setenta y cinco. Esta casa no la han establecido sus actuales dueños como inexactamente se afirma en la gaceta de ayer domingo, de ese apreciable diario por indicación del Sr. Castellanos. Esta casa se abrió el año setenta, hace veinte años, en el propio lugar que hoy ocupa, por Juan Rigol y Roca, quien la explotó hasta el dos de Agosto de mil ochocientos noventa y tres que la vendió á los Sres. Molina y Durán que fueron sus dueños hasta fin de mil ochocientos noventa y siete y desde primero de Julio último pasó á ser propiedad de los actuales poseedores, los arriba mencionados García, Ostolaza y Compañía. De modo que la casa antigua, popular y de reconocido crédito en el giro, así en esta ciudad como en la Isla toda es "La Barcelonesa" y no resulta muy correcto, cuando menos, dirá algún malicioso poner otra precisamente al lado, abierta hace poco por el joven Casimiro Rigol, conocido en su casa, y quizás de muy contados amigos, pero en absoluto desconocido del público consumidor sólo á título de ser hijo de su padre, el Juan, fundador de "La Barcelonesa", por la que este señor cobró cuarentidos mil pesos en oro á los citados Sres. Molina y Durán, mediante cláusulas escriturarias, para aquel prohibitivas de hacer y que se vienen haciendo trabajos para esas cláusulas, viva expresión de solemnes compromisos soberbiamente pagados, sean ineficaces é ilusorios, empleando medios cuya calificación hará el público de la Habana, y cuyas conclusiones serán tan certeras y expresivas como las hechas por el elemento que por razón de dedicarse á análogo giro, sabrán en qué condiciones la había enajenado Juan Rigol. Pero es que el hijo de su padre va más allá que el autor de sus días.



Este embarcó para Barcelona el veintitres de Junio último sin dejarle representación ninguna á su sucesor de pila, lo que no dejó de ser expresivo, sino que se la dejó á un extraño, al Sr. Vila, y este apoderado, en un anuncio que viene saliendo en el "Diario" dice que todas las órdenes y pedidos de muebles en blanco que se deseen hacer se dirijan allí al Vedado, que es donde está el taller y que nadie más ni en ninguna otra parte tiene representación de Juan Rigol: que allí está el escritorio, etc., de lo que se deduce que todo lo contrario es.....lo que el público dirá al leer la muestra que el joven Casimiro pone al frente de su mueblería, remedando la muestra del tallerito que, para la fabricación de muebles en blanco tiene el padre en el Vedado y en cuya muestra se habla de la mar y la espada de Bernardo, escritorio, oficinas y la caricatura, todo en una pieza. Por lo que se ve existen marcadas contradicciones entre lo que le cuenta al público Casimiro y lo que dice el apoderado de su padre, Sr. Vila. La causa y el por qué lo deben saber el joven Casimiro y el citado Vila. Aquí no se usa el nombre de Juan Rigol y Roca á guisa de bandera. Valiente bandera y más valiente crédito aún. Puede estar tranquilo el joven Casimiro y tener la seguridad de que nadie ha de disputarle la gloria de que sólo él es hijo de su padre. Librenos Dios de semejante herejía. Al digno y notable letrado Sr. Castellanos, lo han informado mal y desconoce el terreno que pisa pues sólo así se explican ciertas afirmaciones: el título de esta casa es "La Barcelonesa" y en su gran crédito descansa: en la antigüedad de su existencia: en la modicidad de sus precios: en la variedad de objetos y en la seriedad y corrección con que proceden sus dueños. De modo que hacemos uso de medios y cosas á que tenemos un perfecto derecho; no tratamos de hacer negocio usurpando ajeno crédito para por sorpresa engañar al público porque tal proceder lo rechaza nuestro modo de ser y el respeto que á la moral se debe. Razón social es nombre mercantil, cosa bien distinta á nombre de pila y como ya hemos dicho, el nombre de que se trata, su reputación y gloria pueden guardárselos y casi estamos tentados á no citarlo mucho entre otras mil razones para no hacer el juego á tontos. La razón social varió: la que no ha variado ni sufrido modificación; la que sigue en el mismo lugar donde se abrió hace veintiocho años, es la mueblería "La Barcelonesa" en Galiano ochentinueve, noventiuno y noventitres, teléfono mil doscientos setenticinco, casi esquina á San Rafael en uno de sus extremos y lindando por el otro con la que hace poco puso allí el joven Casimiro Rigol y de la Fe y que algún malicioso dirá que se puso allí para vivir del crédito del



vecino. Réstanos decir, que nos ha llamado la atención que un tan distinguido abogado diga: que el Rigol vendió, que se fué, que nada tiene que ver con esta casa, etc., pues tan peregrina salida también se le hubiera ocurrido á Perogrullo que á la mano cerrada llamaba puño. "La Barcelonesa", que no trata con indignos equívocos de merodear campo ajeno para lucrar dolosamente con daño de tercero, del público á quien se engaña y desprecio de la vergüenza como pudiera resultar hiciesen otros, continúa sin novedad en donde se abrió el año setenta, Galiano ochentinueve, noventiuno y noventitres, Teléfono mil doscientos setenticinco. Quedan aclarados ciertos puntos de la gacetilla del "Diario" del domingo y suplicamos al público tome nota para que no confunda esta casa con la que hace poco puso al lado el muy repetido y aprovechado joven. Habana, veinticuatro de Enero de mil ochocientos noventiocho. García Ostolaza y Compañía.

*Segunda.* En la edición de la tarde del día siete de Febrero también de mil ochocientos noventiocho del periódico "El Diario de la Marina" fué publicado un escrito que copiado literalmente dice así: Mueblería "La Barcelonesa", Galiano ochentinueve, noventiuno y noventitres. Teléfono mil doscientos setenticinco, de García Ostolaza y Compañía. Comunicado. A las personas honradas. Para que hagan las consideraciones que se desprenden de los siguientes hechos: En dos de Agosto de mil ochocientos noventitres se otorgó una escritura ante el Notario D. Francisco de Castro por la que D. Juan Rigol y Roca vendió la mueblería "La Barcelonesa", fundada el año setenta en el propio lugar que hoy ocupa á los Sres. Molina y Durán en la cantidad de diecinueve mil novecientos treintisiete pesos oro de los que recibió al contado deicisiete mil y el resto á cobrar, como cobró, el quince de Marzo siguiente inmediato. En esa escritura existe la cláusula séptima por la cual el verdadero Rigol y Roca cede á los compradores el derecho á usar el nombre "La Barcelonesa" con cuyo título es conocido, obligándose á no poner dicho nombre á ninguna otra casa de igual giro y se obligaba también á no establecerse con ningún otro nombre en esta ciudad limitándose á continuar el negocio de importación de muebles, mármoles, y demás artículos concernientes al ramo, y á la venta únicamente de esos artículos de importación y de los muebles en blanco que fabrique en su taller de San Rafael número ciento cincuenta y cinco, pero para venderlos al por mayor y en blanco. Por la próspera marcha de su mueblería "La Barcelonesa" en el transecurso de los veintitres años que la tuvo el Sr. D. Juan Rigol y Roca éste juzgó conveniente exten-

der el círculo de acción de sus negocios y al efecto alquiló la casa de la propia calle marcada con el número noventa y tres que dedicó á almacén del citado giro de muebles, almacén que como se ve por la escritura que dejamos hecho mérito, no entró en la venta, razón por la cual digo que el vendedor Rigol y Roca siguió con dicho almacén, quien por así convenirle se había solamente comprometido en documento público á no poder barnizar, preparar ni vender muebles al detall y sí únicamente al por mayor, en blanco; pero hombre rebelde á los dictados de la sana moral, como sucede á toda conciencia vacilante, al elegir entre el deber y el lucro, optó por lo último y se preparó á hacer gala de sus habilidades como se verá en seguida. Al consumar la venta de la mueblería y quedarse sólo con el Almacén situado en el número noventitres alquiló la casa número noventicinco y á ella extendió su tan repetido Almacén y ya en estas dos casas, furtivamente según decían los que estaban en el secreto, el primer Rigol, D. Juan Rigol y Roca, el honrado Rigol primero, después de haberse embolsillado los citados veinte mil pesos oro, faltaba á la fe jurada y firmada ante el Depositario de la fe pública y vendía muebles en abierta pugna con aquello que siempre obligaría á toda persona que no fuese tan intrépida como lo es el valiente Rigol primero. Estas despreocupadas habilidades de D. Juan Rigol y Roca dieron al traste con la paciencia de las víctimas, Sres. Molina y Durán que vieron en lontananza la ruina de su crédito y de sus intereses de continuar pared por medio con vecino tan intrépido y en virtud de las tristes consideraciones que de tales hechos se desprenden, se prestaron á largarle como veinte y dos mil pesos más en oro para expulsarlo de la Calzada de Galiano y claro, ante un argumento tan simpático para el honorable D. Juan Rigol y Roca como lesivo á las víctimas aquél se prestó al sacrificio de su expulsión aparentemente como se verá muy pronto otorgando otra escritura ante el propio Notario, su fecha tres de Mayo de mil ochocientos noventicuatro por la cual después de ratificar Rigol y Roca ¡qué sarcasmo! las obligaciones contraídas en la escritura de dos de Agosto de mil ochocientos noventitres, se dice en la de tres de Mayo del noventicuatro no establecerse como mueblista en la ciudad de la Habana, no poder barnizar mueble alguno sino únicamente vender al por mayor en blanco los que fabrique en el taller que posee en esta ciudad ó los que adquiera en plaza en esas condiciones. Cláusula dieciocho de la escritura de tres de Mayo citada. Puede el Sr. Rigol y Roca continuar en la libre administración y fomento de su taller de fabricación y venta de éstos en blanco situado en la actualidad en San Rafael ciento



cincuenticinco que podrá trasladar si le conviene á otro lugar que no sea la Calzada de Galiano por radicar en esta calle el Almacén de esta venta. Viéndose el Rigol número uno encerrado en las cláusulas de la segunda escritura, convino con el Rigol número dos ó sea con su hijo D. Casimiro Rigol y de la Fe en darle á préstamo dieciocho mil pesos en oro para que se estableciera en el número noventicinco en el ramo de mueblería precisamente para vivir con el equívoco de un crédito mercantil que tan espléndidamente se había pagado. Conviene no olvidar que hay palurdos que tienen más astucia para burlar la Ley que el jurista más consumado. La jugada era de resultados infalibles; la nueva sociedad de Rigol número dos no podía moverse sin el consentimiento del Rigol número uno. Se explotaba el célebre é ilustre apellido: el padre surtía al hijo con los muebles de su taller y las víctimas que dieron cuarentidos mil pesos con las garantías que les brindaban las cláusulas escriturarias que dejamos copiadas agonizaban irremisiblemente entre las mallas de tan honrada y digna combinación. Pero como no todo sale á medida del deseo, las combinaciones del Rigol número uno salieron fallidas. Cierta que los Sres. Molina y Durán sufrieron las consecuencias de los golpes que por la espalda les asestó el Honorable D. Juan Rigol y Roca, más García Ostolaza y Compañía, que están dispuestos á defenderse por todos los medios legales y decorosos se prometen salir airosos en su empresa, y que el éxito corone sus esfuerzos. De esta manera no le valdrá al joven Casimiro el ridículo amuleto de sus desesperados cartelones proclamándose "el único Rigol", "el Rigol auténtico", "no hay más Rigol que Casimiro", "el genuino", "el no falsificado", "el indiscutible", "el axiomático Rigol". Con lo que dejamos expuesto pueden juzgar las personas honradas á quienes nos dirigimos, no sólo la conducta del padre, sino la infantil ligereza del hijo. También están en el caso de considerar si un apellido de semejante historia, y de otros hechos, que nos reservamos para otra oportunidad, merece los honores de la disputa para ser llevado y traído á manera de símbolo glorioso como si se tratase del único Alejandro, del único César, del único Colón, siendo así que de lo único de que se trata es de un simple Rigol, hijo de su padre, en cuyo apellido parece que se cumple la ley de la herencia con todos sus pelos y señales. Réstanos manifestar que ratificamos todo lo dicho en nuestro comunicado del veintiseis de Enero publicado en este "Diario" y llamar la atención del público para que no nos infiera el agravio de confundir esta casa con la del célebre vecino. "La Barcelonesa", Galiano ochentinueve, noventiuno y noventitres, Te-

léfono mil doscientos setenticinco. García Ostolaza y Compañía.

*Tercero.* De esos dos escritos son injuriosas las frases que están subrayadas en las dos conclusiones que anteceden, porque en todas ellas se trata de deshonorar, desacreditar y menospreciar al querellante D. Casimiro Rigol y de la Fe y á su legítimo padre D. Juan Rigol y Roca. Como los escritos son dos publicados en días distintos: los hechos relacionados en las dos conclusiones antecedentes constituyen dos delitos de injurias graves por escrito y con publicidad por medio de la imprenta ó de papeles impresos. Delitos definidos y penados en los artículos cuatrocientos setenticinco, cuatrocientos setentiseis y cuatrocientos setentisiete en relación con los cuatrocientos ochentiuño y cuatrocientos ochenticuatro, todos del Código Penal vigente.

*Cuarto.* Es autor por participación y ejecución directa según propia confesión el procesado D. Juan Manuel Fernández y Gómez.

*Quinto.* Concorre en el presente delito la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, agravante definida en la regla sexta del artículo diez del Código Penal.

*Sexto.* Las penas en que el reo D. Juan Fernández ha incurrido y esta parte solicita se le impongan son las siguientes: por las injurias inferidas en el primer escrito á que se refiere la primera conclusión, seis años de destierro á doscientos cincuenta kilómetros de esta ciudad y multa de seis mil doscientas cincuenta pesetas. Por las injurias inferidas en el segundo escrito á que se refiere la conclusión segunda, seis años de destierro á doscientos cincuenta kilómetros y seis mil doscientas cincuenta pesetas de multa. Penas accesorias y las costas de la querrela con arreglo á los artículos cuatrocientos setenta y siete, ochenta, párrafo tercero, ochenta y dos, ochenta y seis y ciento catorce.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.**—Dada la índole del delito, no es exigible responsabilidad civil alguna;

*Resultando:* que la Sala sentenciadora considerando que los hechos probados no constituyen el delito de injurias graves absolvió al procesado con las costas de oficio por no existir los delitos de que se le acusaba;

*Resultando:* que contra esta sentencia el querellante estableció el presente recurso por infracción de Ley, invocando como preceptos legales que lo autorizan los artículos ochocientos cuarenta y siete y párrafos primero y último del ochocientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal citando como motivos del mismo é infracciones cometidas las siguientes:

*Primera.* La comprendida en el número segundo del ar-



título ochocientos cuarentinueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los artículos cuatrocientos setenticinco y cuatrocientos setentiseis, números segundo, tercero y cuarto del Código Penal, por cuanto se dejó de calificar y de penar como delito de injurias graves, que son las frases y conceptos señalados expresamente en las conclusiones provisionales y definitivas de la acusación, de las cuales es autor el procesado, según declaración de hechos probados de la sentencia.

*Segunda.* La comprendida también en el número segundo del citado artículo ochocientos cuarentinueve en relación con el artículo cuatrocientos setentiocho del Código Penal, por cuanto se deja de calificar y penar las frases y conceptos que declara probadamente duras, descorteses, agresivas y ofensivas para el querellante en el cuarto considerando y las cuales estima insuficientes para calificarlas de graves omitiendo declarar si pueden ó no estar comprendidas en el concepto de leves, calificación que pudo hacer la Sala.

*Tercera.* La comprendida en el número quinto del artículo ochocientos cuarentinueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con los artículos octavo y cuatrocientos setentinueve del Código Penal por haber admitido como causas eximentes de responsabilidad criminal del acusado las pruebas que acerca de la veracidad de las imputaciones injuriosas produjo el reo, sus exculpaciones en el juicio y otras que la Sala estima según su conciencia;

*Resultando:* que admitido el recurso, se ha sustanciado en este Tribunal Supremo con la representación del querellante y querellado, celebrándose vista pública el día veinte del mes de Octubre próximo pasado, en la cual informaron el abogado del primero sosteniendo por los fundamentos alegados el recurso, y el del segundo impugnándolo;

*Resultando:* que al siguiente día veintiuno dispuso este Tribunal, para mejor proveer se reclamaran de la Audiencia los autos originales, los cuales se recibieron el día veinticinco;

*Resultando:* que del examen de los autos aparece que las palabras y frases que la Sala sentenciadora declara probadas como subrayadas en el escrito de conclusión y que en esa forma no se encuentra en el testimonio entregado al recurrente, son las que se consignan á continuación con referencia al comunicado publicado en el "Diario de la Marina", edición de la mañana del veintiseis de Enero de mil ochocientos noventiocho las siguientes: *no resulta muy correcto, cuando menos dirá algún malicioso, poner otra precisamente al lado, abierta hace poco por el joven D. Casimiro Rigol—conocido en su casa y quizás*

de muy contados amigos”—“empleando medios cuya calificación hará el público de la Habana, y cuyas conclusiones serán tan certeras y expresivas como las hechas por el elemento mueblero.”—“Pero es que el hijo de su padre vá más allá que el autor de sus días”—lo que no deja de ser expresivo”, “por lo que se vé existen marcadas contradicciones entre lo que le cuenta al público D. Casimiro y lo que dice el apoderado de su padre Sr. Vila. La causa y por qué lo deben saber el joven Casimiro y el citado Vila. Aquí no se usa el nombre de Juan Rigol y Roca á guisa de bandera. ¡Valiente bandera y más valiente crédito aun! Puede estar tranquilo el joven Casimiro y tener la seguridad de que nadie ha de disputarle la gloria de que sólo él es hijo de su padre. ¡Líbrenos Dios de semejante herejía”;—“no tratamos de hacer negocio usurpando ajeno crédito para por sorpresa engañar al público, porque tal proceder lo rechaza nuestro modo de ser y el respeto que á la moral se debe”,—el nombre de que se trata, su reputación y gloria pueden guardárselo y casi estamos tentados de no citarlo mucho”—“en uno de sus extremos y lindando por el otro con la que hace poco se puso allí el joven D. Casimiro Rigol y de la Fe, y que algún malicioso dirá que se puso allí para vivir del crédito del vecino”.—“La Barcelonesa” que no trata con indignos equívocos de merodear en campo ajeno para lucrar dolosamente con daño de tercero, del público, á quien se engaña, y desprecio de la vergüenza, como pudiera resultar hicieren otros, continúa sin novedad en donde se abrió el año setenta”—“hace poco puso al lado el muy repetido y aprovechado joven”;

Resultando: que las palabras y frases que asimismo se declaran probadas, como subrayadas en el citado escrito, con referencia al comunicado publicado el día siete de Febrero de mil ochocientos noventaiocho, en la edición de la tarde del “Diario de la Marina”, son las siguientes: “A las personas honradas para que hagan las consideraciones que se desprenden de los siguientes hechos”:—“pero hombre rebelde á los dictados de la sana moral, como sucede á toda conciencia vacilante al elegir entre el deber y el lucro, optó por lo último y se preparó á hacer gala de sus habilidades como se verá en seguida”.—“Y ya en estas dos casas, furtivamente,—según decían los que estaban en el secreto”—“el honrado Rigol primero después de haberse embolsillado los citados veinte mil pesos oro, faltaba á la fe jurada y firmada, ante el depositario de la fe pública, y vendía muebles en abierta pugna con aquello que siempre obligaría á toda persona que no fuese tan intrépida como lo es el valiente Rigol primero—estas despreocupadas habilidades de D. Juan



Rigol y Roca,”—“que vieron en lontananza la ruina de su crédito y de sus intereses de continuar pared por medio con vecino tan intrépido, y en virtud de las tristes consideraciones que de tales hechos se desprenden, se prestaron á largarle como veintidos mil pesos más en oro, para expulsarlo de la Calzada de Galiano, y claro, ante un argumento tan simpático para el honorable D. Juan Rigol y Roca como lesivo á las víctimas aquél se prestó al sacrificio de su expulsión—“aparente como se verá muy pronto”—“después de ratificar Rigol y Roca—¡qué sarcasmo!—“Viéndose el Rigol número uno”—“convino con el Rigol número dos ó sea con su hijo D. Casimiro Rigol y de la Fe”—“para vivir con el equívoco de un crédito mercantil que tan espléndidamente se había pagado.—Conviene no olvidar que hay palurdos que tienen más astucia para burlar la ley que el jurista más consumado.—“Se explotaba el célebre é ilustre apellido; el padre surtía al hijo con los muebles de su taller”, “entre las mallas de tan honrada y digna combinación”—“las consecuencias de los golpes que por la espalda les asestó el honorable D. Juan Rigol y Roca”, “el ridiculo amuleto de sus desesperados cartelones proclamándose “el único Rigol”, “el Rigol auténtico”, “no hay más Rigol que Casimiro”, “el genuino”, “el no falsificado”, “el indiscutible”, “el axiomático Rigol”—con lo que dejamos expuesto, pueden juzgar las personas honradas á quienes nos dirigimos no sólo la conducta del padre sino la infantil ligereza del hijo. También están en el caso de considerar si un apellido de semejante historia, y de otros hechos que nos reservamos para otra oportunidad, merece los honores de la disputa, para ser llevado y traído á manera de símbolo glorioso como si se tratase”, “un simple Rigol hijo de su padre, en cuyo apellido parece que se cumple la ley de herencia con todos sus pelos y señales”, “para que no nos infiera el agravio de confundir esta casa con la del célebre vecino”;

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt,

Considerando: que según el artículo cuatrocientos setentinueve del Código Penal es injuria toda expresión proferida en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona, y en tal concepto para calificar con acierto delitos de esta clase, es necesario tener en cuenta, no sólo la significación gramatical de palabras ó frases aisladas, sino el sentido de las mismas dentro del período, conversación ó escrito, que se supone injurioso; el fin ú objeto que con esto se proponga el autor y el estímulo ú ocasión que los produzca;

Considerando: que el comunicado publicado en la edición de la mañana del “Diario de la Marina” correspondiente al

día veintiseis de Enero de mil ochocientos noventaiocho, con la firma de García Ostolaza y Compañía, y del cual se ha declarado autor Juan Manuel Fernández, marido de Rosario Ostolaza, gerente de dicha sociedad mercantil, tuvo por objeto contestar una gacetilla que en el mismo periódico había aparecido, á instancia del letrado del querellante, explicando el derecho que á su juicio tenía aquella sociedad para llamarse mercantilmente, sucesora de Rigol, si bien en el aludido comunicado se contienen incidentalmente insinuaciones y reticencias que pudieran mortificar á Casimiro Rigol y hasta llegar á ser injuriosas, si en vía legal se aclarara el equívoco que las encubre, lo cierto es, que al querellante, ni se le hacen imputaciones directas, ni se califican sus actos ó conducta, ni el fin del escrito aparece otro que el expuesto; y por consiguiente al no calificarlo como constitutivo de injuria la Sala sentenciadora no ha cometido las infracciones de ley que se alegan en el primero y el segundo motivos del recurso;

*Considerando:* que el otro comunicado publicado con la misma firma en la edición de la tarde del referido "Diario" correspondiente al día siete de Febrero de mil ochocientos noventaiocho y del cual también es autor el procesado Fernández, sin que conste el motivo inmediato del mismo, que hay que atribuir á las disenciones y desavenencias mercantiles que la Sala declara probados entre García Ostolaza y Compañía y Casimiro Rigol, expresa claramente el fin que persigue al consignar en su epígrafe que va dirigido "á las personas honradas para que juzguen de los siguientes hechos" y al final, "con lo expuesto pueden juzgar las personas honradas á quienes nos dirigimos no sólo de la conducta del padre, sino la infantil ligereza del hijo" y "si un apellido de semejante historia y otros hechos que nos reservamos para otra oportunidad, merecen los honores de la disputa", consagrándose dicho escrito á relatar y comentar actos realizados por Juan Rigol y Roca con relación á la venta de la mueblería "La Barcelonesa", hoy de García Ostolaza y Compañía, calificando la conducta de aquél en el cumplimiento de dicho contrato y con ocasión de éste, refiriéndose clara y directamente al querellante, se afirma que convino con su padre en establecerse junto á la mueblería vendida para vivir con el equívoco de un crédito mercantil ya pagado, y que, en su apellido se cumplía la ley de herencia, tales conceptos, y el tono general del escrito ceden en deshonor, descrédito y menosprecio en particular de Casimiro Rigol, sin que pueda esto justificarlo las desavenencias mercantiles y la necesidad de hacer públicos, hechos ó procedimientos que perjudicaran al crédito del estable-



cimiento que se defendía, pues tal propósito conscientemente se ha extralimitado, con los comentarios y razonamientos que amplían los hechos, y que por tener el fin y objeto dichos, constituyen un delito de injuria;

*Considerando:* que en el escrito anteriormente referido, si bien se injuria al querellante, no se imputa la comisión de un delito, ni un vicio ó falta de moralidad ni se le dirigen palabras afrentosas, por tanto debe, para estimarse la mayor ó menor gravedad de aquélla, tenerse en cuenta las circunstancias respectivas de ofensor y ofendido, en este caso idénticas y los antecedentes del hecho, ya explicados y conforme á esto las injurias dichas, racionalmente no merecen como para que tal declaración se haga, exige el número cuarto del artículo cuatrocientos setenta y seis del Código Penal, la calificación de graves;

*Considerando:* que al no calificar como constitutivo del delito de injuria leve hecha por escrito y con publicidad, el comunicado á que se refieren los dos párrafos anteriores y al absolver al autor del mismo, la Audiencia ha incurrido en el error de derecho que se le atribuye en el segundo motivo del recurso y procede casar en ese extremo la sentencia;

*Considerando:* que habiendo declarado la Sala sentenciadora que los hechos probados no constituían delito y por este fundamento absuelto al procesado, no pudo infringir, y no infringió preceptos legales relativos á la concurrencia de circunstancias eximentes, cuya existencia supone necesariamente la de un delito; y no siendo por tanto pertinente no debe estimarse el tercer motivo del recurso;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por infracción de ley establecido por Casimiro Rigol y de la Fe contra la sentencia dictada en causa por injurias contra Juan Manuel Fernández y Gómez, por la Sección segunda de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana en treintinueve de Julio del corriente año de mil ochocientos noventa y nueve en cuanto dicha sentencia no califica de delito, el comunicado publicado por el procesado en el "Diario de la Marina" el día veintiseis de Enero de mil ochocientos noventa y ocho; y declaramos con lugar el recurso en cuanto la misma Sala dicta igual decisión respecto al publicado en siete de Febrero siguiente y en este extremo *Casamos y Anulamos* la sentencia antes expresada, sin especial condenación de costas. Y con devolución de las actuaciones originales, comuníquese la presente y la que á continuación se dictará, por medio de certificación á la Audiencia de la Habana. Líbrense las correspondientes copias autorizadas para su publicación en la "Gaceta

de la Habana" y en la Colección de sentencias á cargo de la Secretaría de Justicia.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á tres de Noviembre de mil ochocientos noventinueve en la querella seguida por injurias entre partes de la una como querellante Casimiro Rigol y de la Fe y de la otra como procesado Juan Manuel Fernández Gómez, hijo de Juan y Lucía, natural de Ramales, Provincia de Santander, casado, de cuarentitres años de edad, abogado, sin antecedentes penales y en libertad, procedente de la Audiencia de la Habana y pendiente ante este Supremo Tribunal por virtud del recurso de casación admitido por infracción de ley contra la sentencia de treintiuno de Julio de mil ochocientos noventinueve, dictada por la Sección segunda de la Sala de lo Criminal de dicha Audiencia, y que este Tribunal ha casado y anulado en parte por la de esta fecha que antecede;

*Resultando:* que la Sala sentenciadora declaró probado que Juan Manuel Fernández y Gómez es autor de un comunicado que se publicó en la edición de la tarde del "Diario de la Marina", correspondiente al día siete de Febrero de mil ochocientos noventiocho, con el epígrafe "A las personas honradas para que juzguen los siguientes hechos" y después de referir los realizados por Juan Rigol y Roca, padre del querellante, con motivo de la venta de la mueblería "La Barcelonesa" se hacen comentarios y apreciaciones sobre la conducta del Juan Rigol, y refiriéndose directamente al Casimiro, se afirma que convino con su padre en establecerse junto á la mueblería vendida para vivir con el equívoco de un crédito mercantil ya pagado, y con referencia á las apreciaciones desfavorables que le ha merecido el padre, dicese que en ese apellido se cumple la ley de herencia y se termina diciendo que con lo expuesto podrían juzgar las personas honradas no sólo la conducta del padre, sino la infantil ligereza del hijo y si un apellido de tales hechos y otros que se reserva para otra oportunidad merece los honores de la disputa;

*Resultando:* que por la sentencia que antecede se ha casado y anulado la de la Audiencia de la Habana, que estimo que tales hechos no constituían delito;

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt,

*Considerando:* que los hechos que se declaran probados constituyen un delito de injurias leves hechas por escrito y con publicidad, del cual es autor por participación directa el procesado, sin que hayan concurrido circunstancias modificativas apreciables y por consiguiente procede imponer á aquél en el grado medio, la pena que establece el artículo cuatrocientos setentiocho del Código;

*Considerando:* que no habiendo sido objeto de la acusación, por la naturaleza del delito, la indemnización civil y no procede ésta;

*Considerando:* que las costas se imponen por la Ley al responsable de todo delito; Vistos los artículos uno, once, doce, sesenta, sesentidos, ochenta, ochentidos, ochentinueve, noventiuno, cuatrocientos setenticinco y cuatrocientos setentiocho del Código Penal, el treintiocho de la Orden número noventidos del Gobierno Militar de la Isla;

*Fallamos:* que debemos condenar y condenamos á Juan Manuel Fernández y Gómez en concepto de autor de un delito de injurias leves por escrito y con publicidad á la pena de un mes, once días de arresto mayor, accesorias de suspensión de todo cargo y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, á la multa de trescientas veinticinco pesetas y en defecto de pago de ésta por insolvencia, á un día de detención por cada doce y media pesetas que deje de satisfacer, sin que el tiempo total de esta detención exceda de la tercera parte del impuesto en la pena principal y al pago de las costas de la causa. Insértese esta sentencia en "El Diario de la Marina" en el término de diez días por haberlo solicitado el ofendido en su escrito de conclusiones.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL M. F. CONTRA JOSÉ DELGADO Y MIRANDA.

**Sentencia núm. 6 (4 de Noviembre de 1899).**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por José Delgado y Miranda contra la sentencia dictada por la Audiencia de Pinar del Río el 15 de Abril de 1899.*

### **HOMICIDIO.**

**El que agredido ilegítimamente, sin provocación suficien-**



te por su parte, se vale de un cuchillo para repeler la agresión que se le hace con un machete, dándole muerte á su agresor, está exento de responsabilidad criminal, por haber obrado en defensa de su persona.

En la ciudad de la Habana, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Supremo Tribunal á consecuencia del interpuesto por el procurador Dionisio de P. Arias á nombre de José Delgado y Miranda, labrador, sin que conste su domicilio, contra la sentencia dictada por la Audiencia de Pinar del Río el quince de Abril de este año, en la causa criminal por homicidio de Máximo Martínez Rodríguez;

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la referida causa, la Audiencia de Pinar del Río consignó en la sentencia como probados los hechos siguientes:

*Primero. Resultando probado:* que entre seis y ocho de la mañana del día seis de Julio de mil ochocientos noventa y siete en el camino de esta ciudad al pueblo de San Juan y Martínez y en el lugar nombrado Puente de Río Seco el procesado en esta causa José Delgado Miranda fué agredido con un machete por Máximo Martínez Rodríguez, infiriéndole una herida leve, por cuya causa Delgado Miranda defendiéndose agarró el machete de aquél por la parte superior de la hoja, sujetándolo, y ya en esta situación con el cuchillo que portaba le causó varias heridas que á los pocos momentos produjeron la muerte del agresor Martínez Rodríguez, del cual, después de herido, se separó el procesado José Delgado Miranda;

*Resultando probado:* que las heridas producidas al interfecto por el procesado fueron: en la parte superior de la nariz un corte transversal como de dos centímetros, y superficial: una incisión en la parte externa é inferior del maxilar inferior, como de dos centímetros longitudinal de arriba á abajo interesando solamente la piel: una herida como de tres centímetros en el músculo mastoideo parte superior superficial, una herida en la parte superior é interna del brazo derecho que lo atravesaba de parte á parte, como de ocho centímetros, interesando todas las partes blandas del brazo; una herida como de ocho centímetros, profundísima, en la parte media del pecho al lado del esternón y sobre la tercera costilla con los bordes muy separados, siendo la causa de la muerte de Máximo Martínez, por necesidad, la hemorragia ocasionada por la rotura de la aorta. Y las inferidas al procesado consisten en una herida incisa situada en la parte media y externa del brazo izquierdo, transversal, como de



dos centímetros de largo por uno de ancho, interesando solamente la piel y el tejido celular;

*Resultando:* que la Audiencia de Pinar del Río declaró que los hechos expresados en los dos Resultandos transcritos constituyen el delito de homicidio, siendo responsable del mismo en concepto de autor, por participación directa, el procesado José Delgado Miranda; y estimando á su favor dos de los requisitos que constituyen la circunstancia eximente número cuatro del artículo ocho del Código Penal, lo condenó á la pena de seis años y un día de prisión mayor, á las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, pago de costas é indemnización á los herederos del interfecto con la suma de cinco mil pesetas;

*Resultando:* que contra esa sentencia interpuso el procurador D. Dionisio de P. Arias á nombre del procesado, recurso de casación por infracción de ley, fundado en los artículos ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho número uno y ochocientos cuarenta y nueve también número uno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y designando como infringido el número cuarto del artículo octavo del Código Penal por no haberse apreciado más que los requisitos primero y tercero y no el segundo, cuyo recurso le fué admitido; y sustanciado en este Tribunal se celebró la vista el día primero del corriente con intervención del Ministerio Fiscal y del defensor del procesado, informando el primero de acuerdo con lo pedido por el segundo;

Visto: Siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* que no delinque y por consiguiente está exento de responsabilidad criminal, conforme al precepto del número cuarto del artículo octavo del Código Penal, el que obra en defensa de su persona ó derechos, cuando agredido ilegítimamente y sin provocación suficiente por su parte emplea un medio racionalmente necesario para impedir ó repeler la agresión de que ha sido objeto;

*Considerando:* que fundado el recurso interpuesto contra la sentencia recurrida en no haberse apreciado el segundo de los tres requisitos que integran el derecho de la propia defensa según el artículo citado, la cuestión se reduce á si dados los hechos que la Audiencia de Pinar del Río declara probados, fué racionalmente necesario el medio empleado por José Delgado Miranda para repeler la agresión de que fué objeto por parte del interfecto Máximo Martínez Rodríguez;

*Considerando:* que el que se vale de un cuchillo para repeler

la agresión que se le hace con un machete, en un camino público, emplea un medio proporcionado y por consiguiente racionalmente necesario para defenderse, tanto por ser inferior el arma utilizada como por el lugar donde la agresión tuvo efecto, en el cual no era posible extraño auxilio; sin que la circunstancia de que el agredido, ó sea el procesado, tuviera sujeto el machete que esgrimía el agresor por la parte próxima á la empuñadura pueda estimarse como anulación del ataque sino más bien como parte integrante de la defensa, puesto que la falta de dicha circunstancia hubiera enervado ó hecho fracasar la defensa intentada, dada la superioridad del arma del interfecto respecto á la del procesado;

*Considerando:* que la Audiencia de Pinar del Río al imponer al procesado la pena de seis años y un día de prisión mayor con las accesorias correspondientes, estimando como atenuante la circunstancia de la defensa propia incompleta, ha infringido el número cuarto del artículo octavo del Código Penal, que resulta exactamente aplicable al caso de autos, por haber concurrido en el hecho que dió origen á esta causa los tres requisitos que según dicho artículo eximen de responsabilidad criminal, incurriendo en error de derecho al apreciar y aplicar parcialmente este precepto;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación de José Delgado y Miranda contra la sentencia dictada por la Audiencia de Pinar del Río el quince de Abril de este año, la cual casamos y anulamos sin especial condenación de costas.

Así, por esta sentencia, que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos; y con la sentencia que á continuación se dicta comuníquese á la Audiencia de Pinar del Río á los efectos procedentes.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve en la causa criminal por homicidio iniciada en el Juzgado de Instrucción de Pinar del Río y continuada en la Audiencia de la misma ciudad, pendiente ante este Supremo Tribunal á consecuencia del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el representante del pro-

cesado José Delgado Miranda, labrador, sin que conste su domicilio;

*Resultando:* que casada y anulada por sentencia de esta misma fecha la dictada el quince de Abril de este año por la Audiencia de Pinar del Río, procede dictar de seguida la que ha de sustituir á la pronunciada por el Tribunal recurrido, conforme á lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la Orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal. Aceptando los hechos probados consignados en los dos primeros Resultandos así como los Considerandos primero y segundo de la sentencia casada y

Siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* que habiendo concurrido en el hecho realizado por José Delgado Miranda y que produjo la muerte de Máximo Martínez Rodríguez, los tres requisitos del número cuarto del artículo octavo del Código Penal que integran el derecho de la defensa personal, no puede exigírsele responsabilidad criminal alguna, porque no delinque el que ejecuta un hecho bajo esas condiciones;

Visto el artículo ocho del Código Penal,

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos exento de responsabilidad criminal al procesado José Delgado Miranda, absolviéndolo por consiguiente con las costas de oficio.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL M. F. CONTRA FRANCISCO BLANCO REYES, DE APODO "PACO".

**Sentencia núm. 7 (7 de Noviembre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por el procesado Francisco Blanco Reyes contra la sentencia de la Audiencia de Santiago de Cuba de 17 de Abril de 1899.*

**HOMICIDIO.**

Debe estimarse la concurrencia de los tres requisitos que exige el artículo 8.º del Código Penal para la exención de responsabilidad, cuando un sujeto penetra en la casa de otro, alegando que una carne que había allí, procedía de un puerco caído en una trampa por él preparada, tratando de llevársela á la fuerza; y al oponerse el dueño de la casa, saca el



machete y le vá encima, á cuya actitud tomó éste una escopeta que tenía cargada y disparándole un tiro le causa la muerte.

En la ciudad de la Habana, á siete de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por infracción de ley que pende ante este Tribunal Supremo, interpuesto por el Procurador Augusto Betancourt Ochoa á nombre de Francisco Blanco Reyes de apodo "Paco", vecino de Guantánamo y de oficio azucarero, contra la sentencia pronunciada por la Audiencia de Santiago de Cuba en causa procedente del Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción de Guantánamo por homicidio del moreno Clemente Venecia en el Ingenio "Santa Cecilia";

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la referida causa, dicha Audiencia dictó la expresada sentencia en diecisiete de Abril último consignando los hechos en el siguiente Resultando:

*Resultando:* que el veinticuatro de Septiembre del año próximo pasado por la mañana en el ingenio "Santa Cecilia", situado en la jurisdicción de Guantánamo, habiéndosele extraviado un caballo á Luis Donis supuso Francisco Blanco Reyes pudiera ser el autor del presunto hurto el moreno Clemente Venecia, por lo que fué detenido éste, poniéndosele en libertad después de haber aparecido el caballo de referencia. Que poco después, como á las diez de la mañana, se dirigió el Venecia al domicilio que en el referido ingenio tiene el Blanco Reyes y le reclamó una carne de puerco que en tiras tenía colgada en su casa, alegando que pertenecía á un puerco que había caído en uno de los lazos ó trampas que en el monte tenía colocados para cazar estos animales y que por consiguiente era suya la carne que le reclamaba, á lo que se opuso Blanco, disputándole de que no era como él suponía, sino que pertenecía á un puerco jíbaro que había cazado, valiéndose de su escopeta y ayudado por sus perros de cacería que le mostraba y que hacía como cuatro días lo había cazado. No conforme Venecia trató de quitar al Blanco la carne de por fuerza y oponiéndose Blanco tiró Venecia del machete que portaba, y le acometió con él, por lo que Blanco tomando una escopeta que tenía cargada y colgada cerca de él, la disparó contra Venecia, produciéndole una herida al Venecia que le hizo caer muerto á poco de haber salido de la casa y á poca distancia de ésta. Hecho probado;

*Resultando:* que la Audiencia de Santiago de Cuba declaró que los hechos probados constituyen un delito de homicidio, previsto y penado en el artículo cuatrocientos dieciseis del Có-



digo Penal, del cual es autor por participación directa Francisco Blanco Reyes, estimando á favor del mismo las circunstancias primera y segunda del caso cuarto del artículo octavo del citado Código; y vistas las referidas y demás de la aplicación del mencionado cuerpo legal, le condenó á la pena de dos años de prisión correccional con sus accesorias, indemnización de mil pesos á los herederos del interfecto con el apremio personal en su caso, sin que exceda de la tercera parte de la condena y al pago de las costas;

*Resultando:* que contra esta sentencia se ha interpuesto por la representación del procesado recurso de casación por infracción de ley, fundado en el número primero del artículo ochocientos cuarentinueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringido el caso cuarto del artículo octavo del Código Penal, por no haberse apreciado por el Tribunal sentenciador todas las circunstancias que dicho caso enumera, las cuales, según el recurrente concurren en el delito cometido por el procesado;

*Resultando:* que previos los trámites del caso se señaló la una de la tarde del treinta de Octubre próximo pasado para la vista pública de este asunto, la cual se verificó, informando el abogado que sustituyó al designado en turno para llevar la representación del procesado;

Visto, Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez;

*Considerando:* que al apreciar la Audiencia de Santiago de Cuba en el caso de autos, solamente las circunstancias primera y segunda del caso cuarto del artículo octavo del Código Penal, se reduce el problema á si, dados los hechos que se declaran probados, hubo de parte de Blanco provocación suficiente que motivase la actitud del interfecto Venecia al penetrar en además hostil en casa del procesado;

*Considerando:* que á tenor de esos mismos hechos que se declaran probados, en lo que se contrae al drama desarrollado en el interior del domicilio del procesado Blanco Reyes, salta desde luego á la vista que toda la provocación estuvo de parte del interfecto con sus inconvenientes alegaciones acerca de una carne de puerco allí colgada en tiras, con apelar luego á la fuerza para llevarse esa misma carne, y, al encontrar oposición para realizar ese acto ilegal, con tirar del machete que portaba y acometer con él al procesado, quien, en trance tan comprometedor para su persona, tomó una escopeta que tenía cargada y colgada cerca de él y la disparó contra el agresor Venecia, produciendo á éste una herida que le hizo caer muerto á poco de haber salido de la casa y á poca distancia de ésta; no pudiendo

en modo alguno apreciarse como la provocación suficiente que exige el Código, el hecho de haber supuesto el procesado, en otro lugar y hora distinta á la de la escena de la casa que el interfecto Venecia pudiera ser el autor del presunto hurto de un caballo;

*Considerando:* que la Audiencia de Santiago de Cuba en la sentencia de cuya casación se trata al no estimar también la circunstancia tercera ha infringido el citado caso cuarto del artículo octavo del Código Penal incurriendo en el error de derecho, que señala el número primero del artículo ochocientos cuarentinueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que con acierto se invoca en el recurso;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el procurador Betancourt y Ochoa á nombre del procesado Francisco Blanco Reyes contra la expresada sentencia de la Audiencia de Santiago de Cuba, la cual casamos y anulamos, declarando las costas de oficio, lo que, con la sentencia que á continuación se dicta, comuníquese á la referida Audiencia para los efectos que procedan; librándose además, de las mismas, dos copias autorizadas, una para su publicación en el periódico oficial del Gobierno y otra para la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á siete de Noviembre de mil ochocientos noventinueve, en la causa criminal seguida en la Audiencia de Santiago de Cuba por homicidio del moreno Clemente Venecia en el Ingenio "Santa Cecilia", jurisdicción de Guantánamo, contra Francisco Blanco Reyes de apodo "Paco", vecino de Guantánamo, casado, de treintiseis años de edad y de oficio azucarero, con instrucción y sin antecedentes panales;

*Resultando:* que casada y anulada por sentencia de esta misma fecha la dictada en diecisiete de Abril próximo pasado por la Audiencia de Santiago de Cuba, procede dictar, conforme á lo dispuesto en el artículo treintiocho de la Orden número noventidos sobre la sustanciación de procedimiento ante este Supremo Tribunal, el fallo que debe sustituir al pronunciado por el Tribunal sentenciador;

Visto, Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,







Aceptando el primer Resultando de la referida sentencia de diecisiete de Abril próximo pasado,

*Considerando:* que no delinque, por estar exento de responsabilidad criminal, al tenor de lo dispuesto en el número cuarto del artículo octavo del Código Penal, quien obra en defensa de su persona y derechos, cuando, sin provocar suficientemente á su contrario, usa de un medio racional para impedir ó repeler una agresión ilegítima;

*Considerando:* que, dados los hechos que se estiman probados, en los actos ejecutados por el procesado Blanco Reyes y que dieron por resultado la muerte del moreno Clamente Venecia, concurrieron las tres circunstancias del número cuarto del artículo octavo del Código Penal que integran el derecho de la defensa personal, no constituyendo provocación suficiente el hecho de haber supuesto Blanco Reyes, en otro lugar y hora distinta á la de la escena ocurrida en el interior de la casa de éste, que dicho Venecia pudiera ser el autor del presunto hurto de un caballo, por todo lo cual es procedente la declaración de exención de responsabilidad criminal de dicho Francisco Blanco Reyes;

Visto el artículo octavo en su caso cuarto,

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos á Francisco Blanco Reyes, de apodo "Paco" exento de responsabilidad criminal, absolviéndolo con las costas de oficio.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

ESTEBAN LLOR Y PLA CONTRA SEBASTIÁN MARTÍ Y VILA.

**Auto de 13 de Noviembre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Esteban Llor y Pla contra el auto de 7 de Octubre de 1899, de la Audiencia de la Habana, que declaró sin lugar el recurso de casación que interpuso contra el auto de la misma Sala de fecha 29 de Septiembre del mismo año.*

### INJURIA.

El auto en que se niega la pretensión de que una senten-

cia sea notificada nuevamente, no es susceptible de casación, por no ser de los comprendidos en el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

*Resultando:* que, solicitado por Esteban Llor y Plá, querellante en causa por injurias seguida ante la Sección Primera de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, contra Sebastián Martí y Vila, que se notificara nuevamente la sentencia dictada en siete de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, fué declarada sin lugar tal pretensión por auto de la referida Sala de fecha veinte y nueve de Septiembre próximo pasado;

*Resultando:* que contra el mencionado auto estableció el querellante recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, fundando el primero en los artículos ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho é inciso primero del ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y citando como infringido el artículo ciento ocho de la Orden de veinte y seis de Junio último con omisión del concepto en que fué infringido, sin explicar tampoco el precepto legal que autorizase el recurso por quebrantamiento de forma, ni la reclamación hecha para obtener la subsanación de la falta cometida, ó la imposibilidad de reclamar y sus motivos, consignando como infracción del procedimiento el haberse admitido toda la gestión incidental desde el guárdese, cúmplase y ejecútase lo resuelto por el Tribunal Supremo de España en la época que tenía competencia y por ley no resultaba posible la interpretación de los actos de aquel Tribunal por el de la Audiencia, de calidad legal inferior, cuyo recurso de casación declaró la Sala inadmisibile, por su auto de siete de Octubre próximo pasado, en consideración á no existir disposición legal alguna que autorice tal recurso contra resoluciones de la naturaleza de la recurrida, pues no se trata de ninguna de las mencionadas en el artículo ochocientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;

*Resultando:* que entregada al querellante la correspondiente certificación y manifestado por aquél su propósito de recurrir en queja, cuya manifestación fué debidamente notificada, se ha personado Llor ante este Supremo Tribunal, interponiendo el recurso anunciado, al cual se ha dado la sustanciación legal, celebrándose la vista pública del mismo el día once del que cursa, con asistencia del Letrado defensor del recurrente;

*Considerando:* que el recurso de casación por infracción de ley ó por quebrantamiento de forma en materia criminal es sólo procedente contra cualquiera de las resoluciones judiciales enumeradas en el artículo ochocientos cuarenta y ocho de la ex-

presada Ley de Enjuiciamiento, á cuya clase no pertenece el mencionado auto de la Sala, de fecha veinte y nueve de Septiembre anterior, que es de índole diversa y por tanto no susceptible del recurso establecido, en razón de lo cual la Sala, ante quien se estableció ha debido, conforme á derecho denegarlo;

*Considerando:* que, al desestimarse el recurso de queja, se debe condenar en costas al recurrente;

SE DECLARA sin lugar el recurso de queja interpuesto por Esteban Llor y Plá, contra el auto denegatorio del de casación dictado por la Sala primera de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad en siete de Octubre próximo pasado, con las costas á cargo del recurrente.

Y comuníquese al referido Tribunal para lo que proceda. Lo proveyeron y firman los magistrados del margen.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

EL M. F. CONTRA MANUELA SUÁREZ Y ALVAREZ, MANUEL DE JESÚS SUÁREZ Y SUÁREZ Y FLORINDA GARCÍA.

**Sentencia núm. 8 (13 de Noviembre de 1899).**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Manuela Suárez y Alvarez, Manuel de Jesús Suárez y Suárez y Florinda García, contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia é Instrucción del Distrito de Jesús María de 17 de Febrero de 1899.*

#### **FALTA POR PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO.**

El hecho de escandalizar públicamente, en los momentos en que se celebraba una manifestación política, es constitutivo de la falta de escándalo público.

En la Ciudad de la Habana, á trece de Noviembre de mil ochocientos noventinueve, en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Supremo Tribunal interpuesto por Manuela Suárez y Alvarez, Manuel de Jesús Suárez y Suárez y Florinda ó Florentina García y Suárez contra la sentencia dictada en diecisiete de Febrero del corriente año por el Juez de Primera Instancia é Instrucción del Distrito de Jesús María en el juicio sobre faltas seguido contra aquellos por perturbación del orden público;



*Resultando:* que el Juez Municipal del Distrito de Jesús María, de esta capital, conociendo en Primera Instancia del juicio sobre faltas motivado por denuncia de Edelberto Hernández y Díaz que hizo suya el Ministerio Fiscal, contra Manuela Suárez y Alvarez, Manuel de Jesús Suárez y Suárez y Florentina García y Alvarez, por escándalo público, dictó, en cuatro de Febrero del corriente año, sentencia condenatoria respecto de los dos primeros y absolutoria respecto de la última, en cuya sentencia se declaran hechos probados los relacionados en el Resultando de la misma que se transcribe á continuación;

*Resultando* que D. Ramón Núñez, D. José Sariol, D. Juan Díaz de Castro y D. José Rodríguez y Nápoles, vecinos inmediatos y testigos presenciales de los hechos manifiestan que el día veintinueve de Enero último colocaron los acusados un atributo en la azotea de su casa en los momentos en que se celebraba la manifestación á Martí, gritando y escandalizando, dando con ello lugar á que se reuniesen infinidad de personas para presenciar el referido atributo;

*Resultando:* que, apelada dicha sentencia para ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito, dictó éste la de diecisiete del mismo mes y año, por la cual se acepta expresamente la relación de hechos de la sentencia apelada y estimándolos constitutivos de falta que define el inciso cuarto del artículo quinientos noventisiete del Código Penal vigente, con la circunstancia atenuante del número dos del artículo noveno del propio Código en favor de Florinda García y Suárez, se condena, en concepto de autores, á Manuela Suárez y Alvarez y Manuel de Jesús Suárez y Suárez, á la pena de ciento veinticinco pesetas de multa, cada uno, y reprensión, y á Florinda García y Suárez á la de setentacinco pesetas de multa y reprensión, como también al pago por terceras partes entre los acusados de las costas de ambas instancias del juicio;

*Resultando:* que contra dicha sentencia del Juzgado de Primera Instancia é Instrucción interpusieron los acusados recurso de casación por infracción de ley, fundado en el párrafo primero del artículo ochocientos cuarentinueve de la de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringido el artículo quinientos noventisiete del Código Penal en su párrafo cuarto, por cuanto los hechos que se estiman probados no son de los que racionalmente deban producir alarma ó perturbación;

*Resultando:* que personados en forma ante este Supremo Tribunal Manuela Suárez y Alvarez y Manuel de Jesús Suárez, se ha sustanciado debidamente el recurso establecido celebrán-

dose en diez del mes actual la vista pública con asistencia del Letrado defensor de dichos recurrentes;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,

*Considerando:* que el hecho de escandalizar públicamente los acusados en ocasión de celebrarse una manifestación popular de carácter político, no puede menos de apreciarse racionalmente como un medio adecuado para producir alarma ó perturbación del orden público y, por tanto en la sentencia recurrida no se ha cometido la infracción alegada por los recurrentes;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Manuela Suárez y Alvarez, Manuel de Jesús Suárez y Suárez y Florinda ó Florentina García y Suárez contra la sentencia dictada en diecisiete de Febrero del año en curso por el Juez de Primera Instancia é Instrucción del Distrito de Jesús María de esta Ciudad, é imponemos á los dos primeros las costas del presente recurso: comuníquese al referido Juez esta sentencia, á cuyo efecto se libre la certificación correspondiente; y expídanse además las necesarias para su publicación en la "Gaceta de la Habana" y en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

Leída y publicada fué la anterior sentencia por el señor Magistrado Ponente Octavio Giberga, celebrando audiencia pública este día el Tribunal Supremo constituido en Sala de Justicia, de que certifico como Secretario por delegación.—Habana, catorce de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve.—Silverio de Castro.

---

EL M. F. CONTRA PABLO HERNÁNDEZ MINARES.

**Auto de 15 de Noviembre de 1899.**

*Recurso por quebrantamiento de forma é infracción de Ley, interpuesto por Pablo Hernández Minares contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba el 8 de Septiembre de 1899.*

**DISPARO DE ARMA DE FUEGO.**

Para que sea admisible un recurso de casación, no basta citar los preceptos generales contenidos en los artículos 847,

848, 910 y 911 de la Ley procesal, sino que es indispensable citar los números de dichos artículos 6 del 912 en que está comprendido el caso de que se trata, con arreglo á lo que disponen los números terceros de los artículos 5 y 7 de la Orden 92 sobre casación.

*Resultando:* que en la causa criminal seguida en la Audiencia de Santiago de Cuba contra Pablo Hernández Minares, por disparo de arma de fuego, interpuso el procesado recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley contra la sentencia dictada por la referida Audiencia el ocho de Septiembre del corriente año; fundados: el de infracción de ley, en el artículo ochocientos cuarenta y siete y caso primero del ochocientos cuarenta y ocho de la ley de Enjuiciamiento Criminal, y el de quebrantamiento de forma, en los artículos novecientos diez y novecientos once de la misma ley procesal;

*Resultando:* que admitido el doble recurso y personado Hernández Minares en este Supremo Tribunal, el Ministerio Fiscal impugnó la admisión por haberse omitido en el escrito de interposición la cita de algunos de los números de los artículos novecientos once y novecientos doce y del ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; dejando así de cumplirse el tercero de los requisitos del artículo quinto de la Orden número noventa y dos sobre casación; careciendo, por ello, los recursos interpuestos de la tercera de las circunstancias que para que proceda la admisión establece el artículo séptimo de la referida Orden;

*Resultando:* que señalado para la vista de la impugnación el día catorce del presente mes, se celebró con la asistencia del Ministerio Fiscal;

*Considerando:* que para que proceda la admisión de un recurso de casación no basta citar los preceptos generales contenidos en los artículos ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho y novecientos diez de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni aun siquiera en conjunto el novecientos once de la misma ley, sino que es indispensable la designación del caso ó casos de este artículo ó del novecientos doce que lo autorice, cuando el recurso interpuesto lo fuere por quebrantamiento de forma, y la de alguno ó algunos de los contenidos en el artículo ochocientos cuarenta y nueve, cuando procediere por infracción de ley, según lo dispuesto en los números tercero de los artículos quinto y séptimo de la Orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal; y no habiendo concurrido esos requisitos en el interpuesto por



Hernández Minares procede la declaratoria pretendida por el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación;

SE DECLARA mal admitido el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma interpuesto por Pablo Hernández Minares contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba el ocho de Septiembre del corriente año, con las costas á su cargo; y con devolución de las actuaciones remitidas, comuníquese á la misma Audiencia para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

EL M. F. CONTRA ANDRÉS TAQUECHEL Y MAULER.

**Sentencia núm. 2 (27 de Noviembre de 1899).**

*Recurso por quebrantamiento de forma é infracción de Ley, interpuesto por el procesado Andrés Taquechel y Mauler contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en 29 de Agosto de 1899.*

**LESIONES GRAVES.**

Procede el recurso por quebrantamiento de forma en una sentencia criminal, cuando no se expresa en ella cuales son los hechos que se declaran probados ó resulta manifiesta contradicción entre los mismos; pero no cuando la contradicción es entre éstos y los considerandos de la sentencia.

No apareciendo de los hechos probados de la sentencia, aquél en que se funda el recurso por infracción de Ley, debe desestimarse.

En la ciudad de la Habana, á veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de ley que pende ante este Tribunal Supremo, interpuesto por el Procurador Augusto Betancourt á nombre del procesado Andrés Taquechel y Mauler, vecino de Santiago de Cuba, del comercio, con instrucción y sin antecedentes penales, contra la sentencia que dictó la Audiencia de la ciudad mencionada en juicio oral y causa instruída de oficio en el Juzgado de Instrucción del distrito Norte contra el referido Andrés Taquechel y Mauler por el delito de lesiones graves causadas á Gerardo Dehesa;

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la aludida causa dicha Audiencia dictó la expresada sentencia en veinte y nueve de Agosto del corriente año, consignando los hechos en el siguiente Resultando;

*Resultando:* que en la noche del veinte y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, con motivo de burlarse el joven D. Gerardo Dehesa, de Andrés Taquechel, según afirma éste solamente, le dió una bofetada al Dehesa, derribándolo al suelo y estando bocaarriba se echó sobre él y le causó una herida incisa en la rodilla, de cuatro centímetros, según el dictamen del facultativo, que necesitó para su curación sesenta días de asistencia médica, con incapacidad para el trabajo, sin quedarle lesión permanente: hechos probados;

*Resultando:* que la Sala sentenciadora, calificando el hecho de delito de lesiones graves, previsto y penado en el caso cuarto del artículo cuatrocientos veinte y nueve del Código Penal, y responsable, en concepto de autor de dichas lesiones, á Andrés Taquechel y Mauler, sin estimarse circunstancias atenuantes ni agravantes, en su consecuencia le condenó á la pena de un año y un día de prisión correccional, accesorias y costas, abonándosele la mitad de la prisión preventiva sufrida, y que indemnice al perjudicado con cuarenta pesos, ó un día de prisión por cada doce y media pesetas, caso de no verificar la indemnización;

*Resultando:* que contra la anterior sentencia interpuso la representación de Taquechel recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de ley, autorizado el primero por los artículos ochocientos cuarenta y ocho, número primero, y novecientos doce, número primero; y el segundo por los artículos ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho, número primero, y ochocientos cuarenta y nueve, número quinto, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto, respecto al primer recurso, en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, resultando además contradicción manifiesta entre algunos de esos mismos hechos; y, respecto al segundo recurso, en que la Sala sentenciadora, al calificar como no constitutivos de circunstancias atenuantes algunos de los hechos que ha declarado probados ha infringido el artículo noveno del Código Penal en sus circunstancias tercera y cuarta,

*Resultando:* que admitidos ambos recursos por la Audiencia sentenciadora, elevó la misma, á este Tribunal Supremo, la causa original con citación y emplazamiento de las partes; y que personado en tiempo y forma el abogado director del recurrente, se señaló para la vista del recurso, previos los demás trámites

del caso, la una de la tarde del día diez y siete del corriente, la cual se verificó, informando dicho abogado director;

Visto: Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,

*Considerando:* que, según lo dispuesto en el caso primero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá interponerse recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia no se expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados ó resulte manifiesta contradicción entre ellos;

*Considerando:* que al exponerse, como hechos probados en el Resultando primero de la sentencia recurrida, que Andrés Taquechel dió una bofetada á Dehesa, derribándolo al suelo, y estando éste bocaarriba, aquél se echó sobre él y le causó una herida incisa en la rodilla de cuatro centímetros que necesitó para su curación sesenta días de asistencia médica con incapacidad para el trabajo; se han expresado de un modo claro y terminante los hechos que á juicio del Tribunal *a quo*, constituyen la delincuencia del procesado, sin tener que tomarse en cuenta, por estar fuera de su lugar correspondiente, el hecho que figura en el tercer considerando de la propia sentencia; por lo cual no se ha cometido el quebrantamiento de forma á que se refiere el primer concepto del artículo novecientos doce, número primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;

*Considerando:* con relación al segundo concepto del caso primero del propio artículo novecientos doce, también invocado por el recurrente, que la contradicción á que se contrae el ya citado precepto de procedimiento Criminal ha de ser entre los hechos consignados en los *Resultandos* como probados, y no entre éstos y los *Considerandos* de la misma sentencia, como erróneamente supone el recurrente en su escrito de interposición del recurso; por lo cual no es de estimarse, con arreglo á derecho, la contradicción advertida entre los hechos del primer Resultando y lo consignado en el tercer Considerando, respecto á burla habida en el hecho de autos; no habiendo en atención á lo expuesto, incurrido el Tribunal sentenciador en la redacción de la sentencia en el defecto alegado por el recurrente;

*Considerando:* respecto á la infracción de ley, que por la sola afirmación de Taquechel, conforme aparece en el primer Resultando, no puede considerarse probado en derecho que Gerardo Dehesa se burlase del procesado, y no habiendo existido tal burla, claro es que no precedió al hecho inmediatamente provocación adecuada de parte del ofendido; por lo cual no se ha infringido, como supone el recurrente, el artículo noveno circunstancia cuarta del Código Penal;



*Considerando:* que de los hechos declarados probados en la sentencia no aparece motivo ni indicación alguna para creer que la intención ó deseo del procesado Taquechel no estuviera en perfecta conformidad con lo ejecutado por el mismo y que ocasionó las lesiones graves á Dehesa, las cuales necesitaron para su curación sesenta días de asistencia médica con incapacidad para el trabajo; y al usarse de medios que natural y ordinariamente producen ó pueden producir determinados efectos no cabe suponerse en el agente falta de intención cuando esos efectos se causan; por todo lo cual tampoco se ha infringido por el Tribunal *a quo* el artículo noveno, circunstancia tercera del Código Penal vigente;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que por quebrantamiento de forma é infracción de ley se interpuso por la representación de Andrés Taquechel y Mauler, al que condenamos en las costas. Comuníquese á la Audiencia de Santiago de Cuba á los efectos que correspondan con devolución de la causa remitida, librándose las oportunas certificaciones autorizadas para su publicación en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia y en la "Gaceta de la Habana".

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José María García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.

---

EL M. F. CONTRA MIGUEL MARTÍ FONT Y OTROS.

Auto de 29 de Noviembre de 1899.

*Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por Miguel Martí Font contra la sentencia de la Audiencia de Santiago de Cuba de 18 de Septiembre de 1899.*

### FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.

Según tiene repetido el Tribunal Supremo, la cita del precepto legal que autoriza el recurso ha de guardar congruencia con las infracciones ó quebrantamientos alegados; no bastando para cumplir con este precepto, con citar cualquiera de los casos señalados en la Ley, sino que precisamente ha de ser el número en que se comprenda la causa que autorice el recurso.

*Resultando:* que en causa criminal seguida de oficio en la

Audiencia de Santiago de Cuba contra Miguel Martí Font y otro, por el delito de falsificación de documentos, el Ministerio Fiscal solicitó en el trámite oportuno, como prueba documental, entre otras la lectura del contenido en los folios cuatro, noventa y cinco y ciento tres del sumario, la cual le fué admitida y en el acto del juicio oral el defensor de Martí Font dijo que protestaba como prueba documental de la anteriormente expresada por no tener ese carácter, conforme al artículo setecientos veintiseis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, protesta que hacía á los efectos del recurso de casación y así se consignó en el acta;

*Resultando:* que en diez y ocho de Septiembre último dictó sentencia la Audiencia condenando al citado procesado, como autor de dos delitos de falsificación de documentos equivalentes á los expresados en el artículo trescientos diez y siete del Código Penal, á la pena de un año, ocho meses un día de prisión correccional, multa de trescientas veinte y cinco pesetas y accesorias correspondientes, por cada uno de los dos delitos, y contra este fallo, interpuso el sentenciado recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en el caso primero del artículo ochocientos cuarenta y ocho y segundo del novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegando como quebrantamiento que el fallo ni discute ni resuelve el punto ó cuestión promovida por la defensa al oponerse en el acto del juicio oral á que se diera lectura á las diligencias sumariales de fojas cuatro, noventa y cinco y ciento tres y ciento diez y siete propuestas erróneamente por el Fiscal como prueba documental y por consiguiente que no se tuvieran en cuenta como tales pruebas, habiéndose consignado en el acta la protesta á los efectos del recurso de casación;

*Resultando:* que por auto de veintiocho de Septiembre último admitió la Audiencia el recurso de casación interpuesto, y previos los trámites legales se abrió la sustanciación del mismo en este Supremo Tribunal y en el término oportuno el Ministerio Fiscal, impugnó la admisión del recurso fundándose: primero, en que al invocar el recurrente, como fundamento del recurso el número segundo del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha dejado incumplido el tercero de los requisitos del artículo quinto de la orden número noventa y cinco, pues si bien sostiene, con manifiesta incongruencia, que la sentencia recurrida no resolvió todos los puntos propuestos por la defensa, en realidad trata de discutir y demostrar que la Sala no debió tomar en cuenta en el fallo, ni admitir como prueba documental, la lectura de unos lugares del sumario; segundo, porque no otorgando la Ley casación de ninguna clase con mo-

tivo de admisión, práctica y apreciación de pruebas el recurso planteado no se encuentra comprendido en caso alguno de los enumerados en los artículos novecientos once y novecientos doce de la Ley procesal y carece de la tercera de las circunstancias que para admisión exige el artículo séptimo de la orden número noventidos; y celebrada en el día de ayer vista para tratar de esta cuestión previa, tuvo efecto con la asistencia sólo del Ministerio Fiscal que sostuvo su impugnación;

*Considerando:* que al disponer el número tercero del artículo séptimo de la orden número noventa y dos que el Tribunal examine si el recurso se funda en algunas de las causas taxativamente señaladas en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento que en él se consignan, es evidente que ese examen tiene por objeto cerciorarse de que la cita del precepto legal que autoriza el recurso, que el recurrente debe hacer en cumplimiento del artículo quinto, guarde la debida congruencia con las infracciones ó quebrantamientos alegados, no pudiendo tenerse como cumplido este último precepto con citar cualquiera de los casos señalados en la Ley de Enjuiciamiento, sino necesariamente ha de ser la del número en que se comprenda la causa que autorice el recurso, dada la infracción ó quebrantamiento que se diga cometido;

*Considerando:* que el quebrantamiento alegado por el recurrente para interponer su recurso es el de haber la Sala practicado una prueba en la reforma que oportunamente la admitió, no obstante la protesta que en el acto del juicio hiciera el recurrente, estos hechos realizados por la Sala, no están comprendidos en el número segundo del artículo novecientos doce de la ley procesal que autoriza el recurso en el caso que la sentencia no resuelva sobre los puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa; y al admitir la Sala sentenciadora, este recurso, no autorizado por el precepto legal que se citó, ha infringido el artículo once en relación con el número tercero del séptimo de la orden número noventa y dos del Gobernador Militar de esta Isla y es procedente la impugnación deducida por el Ministerio Fiscal;

SE DECLARA mal admitido el recurso de casación por quebrantamiento de forma establecido por Miguel Martín Font contra la sentencia de la Audiencia de Santiago de Cuba de diez y ocho de Septiembre último dictada en la causa criminal antes citada; y comuníquesele, por medio de certificación de este auto á dicha Audiencia á los efectos procedentes, con devolución de los originales elevados. Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen.—Antonio González de Mendoza.—Pedro Gon-



zález Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio Castro.

EL M. F. CONTRA NÉSTOR GONZÁLEZ BARRERA.

Auto de 4 de Diciembre de 1899.

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba de 18 de Septiembre de 1899.*

### DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES MENOS GRAVES.

Hay congruencia en un recurso cuando la cuestión en la forma que se plantea, se halla precisamente comprendida en el precepto legal que el recurrente invoca; prescindiendo de la apreciación que dicho recurrente haga de determinados hechos ó preceptos legales que deberán ser tratados en definitiva.

*Resultando:* que la Audiencia de Santiago de Cuba en la causa criminal procedente del Juzgado Norte de esa misma ciudad, contra el negro Néstor González Barrera, vecino de Palma Soriano y de oficio labrador por disparo de arma de fuego y lesiones menos graves, dictó sentencia en diez y ocho de Septiembre próximo pasado, por la cual condenó al procesado, como autor directo de los delitos previstos en los artículos cuatrocientos veinte y uno y cuatrocientos treinta y dos del Código Penal, á la pena de tres años, cuatro meses y ocho días de prisión correccional, accesorias, costas é indemnización ó el apremio personal á falta de ésta; pena que está en perfecta conformidad con lo solicitado por el Fiscal en sus conclusiones, que no se variaron en el acto de la vista pública;

*Resultando:* que por la representación del procesado González Barrera se interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en el motivo que señala el caso tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurso que fué admitido por la referida Audiencia; mandándose emplazar á las partes y elevar en su oportunidad los autos originales á este Supremo Tribunal;

*Resultando:* que, previos los trámites del caso, se confirió instrucción á las partes, y dentro de este período presentó escrito el Fiscal, impugnando dicho recurso, basándose para ello

en el único motivo de que el párrafo tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se cita como fundamento del recurso es incongruente con el mismo, ya que evidentemente en la sentencia no se ha penado un delito más grave que el que ha sido objeto de la acusación; y pedía que en definitiva se declarase mal admitido el recurso con los pronunciamientos del caso;

*Resultando:* que habiéndose señalado la una de la tarde del día veinte y nueve de Noviembre próximo pasado para la vista pública de la cuestión previa de impugnación tuvo efecto, informando solamente el Fiscal, no habiendo asistido al acto la representación del procesado;

*Considerando:* que al expresar el Fiscal el motivo único que tiene para impugnar el recurso y pedir la vista previa dice que el párrafo tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se cita como fundamento del recurso, es incongruente con el mismo;

*Considerando:* que hay congruencia en un recurso, cuando la cuestión, en la forma en que se plantea, se halla precisamente comprendida en el precepto legal que el recurrente invoca, prescindiendo de la apreciación que dicho recurrente haga de determinados hechos ó preceptos legales, como acontece en el presente caso, cuya discusión debe reservarse para la vista en que se debatan en definitiva las cuestiones planteadas en el recurso, conforme al último párrafo del artículo treinta y cuatro de la orden de casación;

SE DECLARA sin lugar la impugnación suscitada por el Ministerio Fiscal y se señala para la vista del recurso el día doce del mes actual á la una de la tarde.

Lo proveyeron y firman los magistrados del margen, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

JOAQUÍN GUTIÉRREZ CONTRA IGNACIO DÍAZ.

Auto de 4 de Diciembre de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Joaquín Gutiérrez contra el*

*auto de la Audiencia de la Habana de 7 de Noviembre de 1899.*

### ESTAFA.

Cuando se pide aclaración de una sentencia, el término para interponer casación debe contarse desde la notificación del auto en que se acceda ó niegue, pues es desde cuando los interesados están en aptitud para consentirlo ó recurrirlo; por lo cual es de aplicarse al procedimiento criminal el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

*Resultando:* que en la causa por estafa contra Ignacio Díaz Valdés y otro la Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad dictó sentencia en veinte y tres de Octubre del corriente año, notificada á las partes el veinte y seis del mismo mes; y que habiendo pedido aclaración de esa sentencia el acusador privado Joaquín Gutiérrez, cuyo recurso fué declarado sin lugar, interpuso con fecha seis de Noviembre último el de casación por infracción de ley contra la referida sentencia de veinte y tres de Octubre, expresando que se consideraba dentro del término legal para interponerlo, porque dicho término debía contarse desde la fecha en que se le notificó el auto denegatorio de la aclaración, ó sea desde el dos de Noviembre del corriente año;

*Resultando:* que por auto del día siete del mismo mes la mencionada Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad negó la admisión del recurso por haberse interpuesto fuera de los cinco días posteriores á la notificación de la sentencia;

*Resultando:* que habiendo acudido en queja el recurrente, se le tuvo por personado, y sustanciado en forma dicho recurso, se designó para la vista el día dos del corriente mes, celebrándose sin asistencia de dicho recurrente;

*Considerando:* que cuando se pide aclaración de una sentencia el término para interponer el recurso que contra ella proceda debe contarse desde la notificación del auto en que se haga ó deniegue la aclaración, porque sólo después de resuelto ese pedimento y notificada su resolución á las partes puede considerarse definitiva la sentencia y, por lo mismo, que los interesados están en aptitud de conocer el verdadero sentido del fallo para consentirlo ó reunir contra él; por todo lo cual es de aplicación al procedimiento criminal el precepto contenido en el artículo cuatrocientos seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

SE DECLARA con lugar la queja interpuesta por Joaquín Gutiérrez contra el auto dictado el día siete del mes de Noviem-



bre del año actual por la Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad, y en consecuencia se ordena á la misma practique lo que determina el artículo octavo de la Orden número noventa y dos sobre casación que es el pertinente al caso de autos, sin especial condenación de costas.

Y comuníquese á la Audiencia de la Habana á los fines dispuestos.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José María García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

JOSÉ FIGUERAS CONTRA JOSÉ M.<sup>a</sup> Y FRANCISCO PAU Y ROBERT, Y BALDOMERO SOLER Y ROVIRA.

Auto de 4 de Diciembre de 1899.

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por José M.<sup>a</sup> y Francisco Pau y Baldomero Soler, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana de 6 de Septiembre de 1899.*

### SIMULACION DE CONTRATO.

No expresándose en el escrito de interposición los conceptos en que fueron quebrantados los artículos 562 y 565 del Código Penal, según lo disponen los artículos 5 y 7 en sus números 4, de la Orden 92 sobre casación, debe declararse mal admitido el recurso.

*Resultando:* que en causa procedente del Juzgado de Instrucción de Guanabacoa y que, por simulación de contrato se siguió entre partes, de la una el querellante José Figueras, cuyo domicilio y profesión no se expresa, y de otra parte el Ministerio Fiscal y José María y Francisco Pau y Robert y Baldomero Soler y Rovira, estos tres del comercio y vecinos de la Habana, la Sala de lo Criminal de esta ciudad dictó sentencia en seis de Septiembre del corriente año, condenando á los mencionados José María y Francisco Pau Robert y Baldomero Soler y Rovira á la pena de dos meses y un día de arresto mayor con las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, á pagar siete mil pesetas de multa y la tercera parte de las costas;

*Resultando:* que contra la referida sentencia interpusieron

los enunciados José María y Francisco Pau y Baldomero Soler recurso de casación por infracción de ley, diciendo que se han infringido los artículos quinientos sesenta y dos y quinientos sesenta y cinco del Código Penal;

*Resultando:* que el Fiscal de este Tribunal Supremo ha impugnado el recurso, porque en el escrito de interposición no se expresa en qué concepto han sido infringidos los citados artículos y, por tanto, se deja incumplido el requisito señalado por el número cuarto del artículo quinto de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de esta Isla, repetido en su concordante número cuarto del artículo séptimo; y pide se declare mal admitido el recurso;

*Considerando:* que, ciertamente, en el referido escrito no se expresa, como lo exige la citada orden número noventa y dos en los casos cuartos de los artículos quinto y séptimo, el concepto en que fueron quebrantados los artículos quinientos sesenta y dos y quinientos sesenta y cinco del Código Penal;

SE DECLARA mal admitido el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por José María y Francisco Pau y Robert y Baldomero Soler y Rovira, sin especial condenación de costas; y comuníquese á la Audiencia de la Habana á los efectos legales.

Lo proveyeron y firman los magistrados del margen de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Ángel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

DR. CARLOS DE PEDROSO Y SCULL CONTRA PEDRO DÍAZ MARTÍNEZ.

**Auto de 7 de Diciembre de 1899.**

*Recurso de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma, interpuesto por Carlos Pedroso y Scull contra el auto de sobreseimiento dictado por la Audiencia de la Habana de 19 de Agosto de 1899.*

## **INJURIAS, INSULTO Y AMENAZAS A UN FUNCIONARIO PUBLICO.**

**RECURSO**

Interpuesto un recurso después de transcurridos los cinco días que fija la Orden 92 sobre casación para que pueda ser admitido; no existiendo congruencia entre el artículo que se invoca y la causa en que se funda; y no teniendo el carácter

de definitiva la resolución contra la cual se interpone dicho recurso, debe declararse mal admitido, por los tres motivos expresados.

*Resultando:* que en causa criminal instruida por el Juzgado de Instrucción del Distrito de Catedral por injurias, insultos y amenazas á un funcionario público, contra Pedro Díaz Martínez y Palacios, el acusador particular, Dr. Carlos de Pedroso y Scull, por su escrito de conclusiones provisionales estableció que los hechos constituyen cuatro distintos delitos respectivamente definidos en los artículos doscientos sesenta y seis, doscientos sesenta y siete, cuatrocientos setenta y uno y cuatrocientos setenta y cinco en relación con el cuatrocientos setenta y seis del Código Penal, de los cuales es responsable como autor el procesado, para quien pidió las distintas penas que estimaba procedentes con referencia á determinadas circunstancias agravantes que á su juicio mediaron en el caso, y pasada al Fiscal la causa, sobre indulto, informó este Ministerio en el sentido de hallarse comprendida en el párrafo tercero del Decreto del Gobernador Militar de la Isla dictado bajo el número sesenta y ocho en primero de Junio último, por cuanto, según tal disposición, las Audiencias debían dictar auto de sobreseimiento en aquellas causas de que estuviesen conociendo por delitos comprendidos en los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del título segundo del Código Penal, en cuya virtud interés se declarase extinguida la responsabilidad penal del procesado, conforme al artículo ciento treinta de dicho Código, y la Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana dictó en diez y nueve de Agosto del corriente año, de conformidad con lo solicitado por el Fiscal, auto sobreseyendo en la continuación de la causa, contra cuyo auto, notificado á las partes el día veinte y uno del propio mes, estableció el acusador particular recurso de súplica que, sustanciado por la Sala, fué desestimado en auto de diez y seis de Septiembre;

*Resultando:* que con fecha veinte y tres del citado Septiembre presentó escrito el acusador particular, manifestando que le había sido notificado el veinte el auto denegatorio de la súplica y que dentro del término legal venía á interponer recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra el auto de sobreseimiento de diez y nueve de Agosto, basado en las causas y motivos siguientes: "Primero: "Que es un auto de sobreseimiento que envuelve una resolución "definitiva, que termina esta causa; motivo especificado en el "número cuarto del artículo ochocientos cuarenta y ocho de la "Ley de Enjuiciamiento Criminal. Segundo: que dicho Decreto



“de indulto no puede aplicarse, como en absoluto no se aplican  
“en término general los indultos decretados por los gobiernos,  
“á una causa donde existe un querellante particular que en  
“forma se ha personado. Tercero: que, á juicio del recurrente,  
“el Decreto de indulto interesado no puede aplicarse al proce-  
“sado, por no comprender tres de los delitos por los cuales se  
“ha querellado, y que son los de desorden público, injuria y  
“calumnia, definidos y penados en los artículos doscientos se-  
“senta y siete, cuatrocientos setenta y uno, cuatrocientos se-  
“tenta y tres, cuatrocientos setenta y cinco y cuatrocientos se-  
“tenta y siete del Código Penal. Cuarto: que tampoco es apli-  
“cable el interesado indulto á esta causa, por cuanto el delito  
“y delitos por los que se ha procesado y de los que aquí se  
“acusa no han sido todavía considerados ni juzgados por esa  
“Sala en juicio contradictorio, y por tanto mientras los delitos  
“especificados en el escrito de calificación del querellante par-  
“ticular no hayan sido apreciados y determinados por la Sala,  
“no se puede resolver que el decreto de indulto comprenda di-  
“chos delitos. Que este último motivo envuelve un vicio de que-  
“brantamiento de forma en el auto apelado comprendido en el  
“número segundo del artículo novecientos doce de la Ley de  
“Enjuiciamiento Criminal; y si bien el recurrente no lo expre-  
“só en su escrito de reforma, fué porque basó la súplica en los  
“motivos más principales, de que el indulto no podía aplicarse  
“á causa donde existiera querellante particular, y de que el  
“mismo indulto comprendía todos los delitos de que aquí se  
“acusa”; y pidiendo se le admitiera el recurso interpuesto con-  
“tra el auto de sobreseimiento de diez y nueve de Agosto úl-  
“timo, como en efecto lo admitió la Sala en veinte y seis del  
“mismo Septiembre antes citado;

*Resultando:* que, personado el recurrente ante este Tribu-  
nal Supremo, el Ministerio Fiscal ha impugnado la admisión  
del recurso, solicitando que se declare mal admitido en atención  
á haberse ambos recursos por infracción de ley y quebranta-  
miento de forma interpuesto fuera del término legal á no ser  
susceptible del recurso por quebrantamiento de forma el auto  
de sobreseimiento y á las omisiones sufridas por el recurrente,  
en su recurso por infracción de Ley, con relación al número ter-  
cero del artículo quinto é igual número del artículo séptimo de  
la Orden número noventa y dos del Gobernador Militar, y, en su  
recurso por quebrantamiento de forma, con relación á los nú-  
meros tercero y quinto del artículo quinto y tercero del artículo  
séptimo de la propia orden número noventa y dos; acerca de  
cuya cuestión previa han informado en vista pública, celebrada

el día cuatro del corriente mes, el representante del Ministerio Fiscal y el letrado recurrente;

*Considerando:* que interpuesto en veinte y tres de Septiembre el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra el auto de sobreseimiento dictado en diez y nueve de Agosto anterior y notificado á las partes en veinte y uno del mismo mes de Agosto, es evidente que al tiempo de su interposición había transcurrido con exceso el término improrrogable de cinco días que fija el artículo tercero de la orden número noventa y dos del Gobernador Militar de la Isla y que, según dicho precepto, debe contarse desde la última notificación de la resolución contra la cual se recurriere, sin que la interposición y sustanciación del recurso de súplica, improcedente á todas luces conforme al artículo doscientos treinta y siete en armonía con el ochocientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alcance á interrumpir ni afectar de ningún modo el mencionado término; de lo que es precisa consecuencia que el recurso de casación establecido carece de la segunda de las circunstancias que para que fuese admisible requiere el artículo séptimo de la Orden número noventa y dos antecitada y debió por tal razón ser denegado en cumplimiento del artículo once de la misma Orden;

*Considerando:* que en el escrito interponiendo éste recurso por infracción de ley y por quebrantamiento de forma no se ha observado lo dispuesto en el número tercero del artículo quinto de la referida Orden número noventa y dos, por cuanto, respecto del primero, se dice autorizado por el número cuarto del artículo ochocientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto reducido á declarar en términos generales, uno de los casos en que habrá lugar al recurso por infracción de ley; pero no invoca el recurrente ninguno de los artículos que exponen cuando, para el efecto de que pueda interponerse el recurso, se entenderá que ha sido infringida la ley, ni por lo tanto, cita el precepto legal que autorice precisamente su recurso; mientras, en lo que atañe al recurso por quebrantamiento de forma, lo supone con notoria incongruencia, comprendido en el número segundo del artículo novecientos doce de la expresada Ley de Enjuiciamiento, que no puede referirse ni se refiere á un acto de sobreseimiento por razón de indulto recaído con anterioridad á la existencia de acusación definitiva y de defensa formal del procesado, sino y únicamente á una sentencia en que se omite fallar sobre algún punto que la acusación y la defensa hayan comprendido, siendo así manifiesto que tampoco el recurrente ha citado precepto legal alguno

en que se funde su recurso por quebrantamiento de forma: en cuya virtud y á tenor de lo ordenado en los artículos séptimo, número tercero y oncenso de la repetida Orden número noventa y dos no ha debido admitirse y sí denegarse el doble recurso establecido;

*Considerando:* en cuanto al recurso por quebrantamiento de forma, que no procede el recurso de esta clase contra cualesquiera resoluciones que no sean sentencias definitivas, puesto que sólo contra éstas lo otorga expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo novecientos diez, relacionado con el ochocientos cuarenta y ocho de la misma Ley, por razón de lo cual no tiene establecido en esta causa la primera de las circunstancias requeridas para su admisión por el artículo séptimo de la Orden número noventa y dos; pero, aunque así no fuera, siempre debió la Sala sentenciadora rechazarlo, con sujeción al repetido artículo once de aquella Orden, por faltarle el requisito que señalan el número quinto del artículo quinto é igual número del artículo séptimo ya citados, toda vez que la simple referencia incidental que al principio de su escrito de interposición hace el recurrente al recurso de súplica que se le había denegado, cuando consigna el día en que se le notificara el auto denegatorio, hecho indudablemente con el único objeto de cumplir la formalidad prescrita por el número primero del artículo quinto y para el fin marcado en el número segundo del artículo séptimo, no equivale y es imposible sustituya á la mención expresa que en lugar oportuno del escrito debe hacerse de las gestiones practicadas en reclamación y para subsanar la falta que se haya dicho cometida, ó, en su caso, de la imposibilidad de reclamar y sus motivos;

*Considerando:* que el artículo treinta y cuatro de la repetida Orden número noventa y dos impone á este Tribunal el deber de dictar auto declarando mal admitido el recurso de casación, primero: cuando se hubiere interpuesto fuera del término legal; segundo: cuando al interponerlo, no se hayan cumplido los preceptos del artículo quinto; y tercero: cuando no concurriesen en el recurso interpuesto todas las circunstancias que para que sea admisible establece el artículo séptimo;

*Se declara* mal admitido el recurso de casación por infracción de Ley y por quebrantamiento de forma interpuesto por el Dr. Carlos Pedroso y Scull contra el auto de sobreesimiento dictado en diez y nueve de Agosto próximo pasado por la Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, sin especial condenación de costas; y comuníquese, para lo que proceda, esta resolución á la Audiencia mencionada con devolución de las actuaciones remitidas á este Tribunal.



Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Ángel C. Betancourt.—Octavio Giberger.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

EL M. F. CONTRA JORGE GARCÍA OÑA.

Auto de 7 de Diciembre de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Jorge García Oña contra el auto de la Audiencia de la Habana de 1.º de Noviembre de 1899.*

### DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES.

No expresándose en el escrito de interposición el precepto legal que autoriza el recurso con arreglo al artículo 5.º de la Orden 92 sobre casación cumple con lo dispuesto en el artículo 7.º de la misma el Tribunal sentenciador al declarar sin lugar el recurso.

*Resultando:* que en la causa seguida contra Jorge García Oña en la Audiencia de esta ciudad por disparo de arma de fuego y lesiones, interpuso dicho procesado por medio del procurador Nicolás Sterling recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de Ley contra la sentencia dictada en la referida causa, por la cual se condena á García Oña á la pena de tres años cuatro meses ocho días de prisión correccional, por cada uno de los dos delitos complejos mencionados; fundándose el recurrente respecto del primero de dichos recursos en haberse violado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus preceptos relativos á la forma y manera en que deben recibirse las declaraciones de los testigos presentados por el Ministerio Fiscal, á pesar de la protesta consignada por el Letrado defensor al oponerse á dicha lectura y cita como infringidos los artículos setecientos diez y ocho y setecientos diez y nueve y el setecientos cuarenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra cuya infracción protestó en el acto del juicio oral celebrado el día veinte y seis de Septiembre último; pero no cita el precepto legal que autoriza dicho recurso; y respecto del segundo ó sea el recurso por infracción de Ley hizo las alegaciones que estimó convenientes;

*Resultando:* que la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana por auto de primero de Noviembre último, consi-

derando que en el recurso por quebrantamiento de forma no concurre la circunstancia tercera del artículo séptimo de la orden de veinte y seis de Junio denegó ese recurso de acuerdo con lo que previene el artículo once de dicha orden y admitió el de infracción de Ley;

*Resultando:* que mandada á expedir la copia certificada de lugares de autos prescrita en el artículo catorce de la orden número noventa y dos sobre casación y entregada al recurrente á los efectos del recurso de queja, manifestó su propósito de interponerlo y se notificó oportunamente á las partes;

*Resultando:* que personado en efecto ante este Supremo Tribunal Jorge García Oña, designando para que lo represente al letrado Antonio Mesa y Domínguez é interpuesto recurso de queja contra el auto de la Audiencia de la Habana denegatorio del de casación por quebrantamiento de forma, previos los trámites correspondientes se celebró la vista sin asistencia de las partes;

*Considerando:* que el artículo quinto de la Orden número noventa y dos sobre casación dispone que en el escrito de interposición del recurso se expresará, entre otros extremos, el precepto legal que lo autorice;

*Considerando:* que el artículo séptimo de la citada orden de casación, impone al Tribunal sentenciador, ante el cual se hubiere presentado el escrito interponiendo el recurso, el deber de examinar, sin oír á las partes, si se han cumplido por el recurrente los preceptos que dicho artículo comprende, entre los que se cuenta el tercero relativo á si el recurso se funda en alguna de las causas taxativamente señaladas por los artículos mil seiscientos noventa y mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil si se tratare de recursos en procedimientos de esta índole por infracción de Ley ó doctrina legal ó por quebrantamiento de forma respectivamente ó en algunos de los fijados en el ochocientos cuarenta y nueve ó en el novecientos once ó novecientos doce y sus concordantes ochocientos cincuenta, ochocientos cincuenta y uno y ochocientos cincuenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en caso de interponerse en causas de esta clase en el fondo ó en la forma también respectivamente; y el artículo once de dicha orden de casación establece que si en el recurso interpuesto no concurre alguna de las circunstancias expresadas en ese artículo séptimo, el mismo Tribunal sentenciador ante el que se interponga, lo negará por auto dictado dentro de tercero día;

*Considerando:* que la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad se ha ajustado á esos preceptos y proveído con

arreglo á derecho, al denegar en el auto de primero de Noviembre último la admisión del recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia dictada en esta causa por no concurrir en aquél la circunstancia tercera del artículo séptimo de la Orden número noventa y dos del Gobernador Militar de esta Isla;

*Se declara* sin lugar el recurso de queja interpuesto por Jorge García Oña contra el auto de la Sección segunda de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana de primero de Noviembre último, denegatorio del de casación con las costas á cargo del recurrente. Y comuníquese á la referida Audiencia de la Habana para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

EL M. F. Y BENITO VIEITES GÓMEZ CONTRA JOSÉ LÓPEZ VILLARINO.

**Sentencia núm. 9 (7 de Diciembre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por Benito Vieites Gómez contra el auto de sobreseimiento dictado por la Audiencia de la Habana en 21 de Septiembre de 1899.*

### COACCION Y ESTAFA.

Fundado un auto de sobreseimiento en el número 1. del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no son de aplicarse preceptos legales que definen ó califican un delito para cuya existencia es condición necesaria que se haya realizado un hecho; y al citarse el artículo mencionado, implícitamente se declara que no ha habido indicios racionales de haberse perpetrado el que dió origen á la formación del proceso.

En la ciudad de la Habana, á siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por infracción de Ley, pendiente ante este Supremo Tribunal, interpuesto por el procurador Ambrosio L. Pereira á nombre de Benito Vieites y Gómez, dependiente de comercio y vecino de esta ciudad, contra el auto de sobreseimiento dictado por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana en la causa iniciada en el Juzgado de Instrucción del Distrito del Pilar por coac-



ción y estafa, en virtud de denuncia hecha por dicho Vieites contra José López Villarino, comerciante y de este vecindario;

*Resultando:* que en el expresado auto, dictado en veinte y uno de Septiembre último se hallan comprendidos los siguientes Resultandos:

*Resultando:* que de lo actuado aparece ser de todo incierto el que Vieites suscribiese en la casa número noventa y ocho de la Calle de Escobar ningún documento, pues á dicha casa morada del Ldo. Secundino Baños sólo fué acompañado de López Villarino á consultar á dicho Letrado acerca de si estaba bien otorgado el documento de fojas veinte y uno, retirándose después de hecha la consulta dichos individuos;

*Resultando:* que en siete de Diciembre último Benito Vieites ante los testigos Enrique Diego y Mateo Carril otorgó un documento por el que se hace constar que al liquidar sus sueldos como dependiente que fué de los Sres. López y Villarino resulta adeudar á la sociedad ciento un pesos veinte y cinco centavos plata por partidas de dinero tomadas por él no anotadas en los libros así como ropas y prendas de oro que también había tomado el cual documento se firmó en un solo acto por Vieites y los testigos en las habitaciones particulares de López Villarino, sin mediar protesta ni amenazas de ninguna clase;

*Resultando:* que también denunció Vieites al Juzgado que José López Villarino como gerente de López y Villarino por medio de inexactitudes cometidas en los libros trataba de defraudar á su socio Gaspar Villarino apropiándose del producto de muebles que había vendido al dueño del café "El Guanche" y de un lote de oro que se vendió en ochenta y cinco centenes así como otros hechos de esa naturaleza procurando para ello que el denunciante se prestase á negar la certeza de esas ventas;

*Resultando:* que por escritura de dos de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho ante Manuel Díaz Quibus de esta ciudad, José López Villarino, Gaspar Villarino y Francisco Gómez Perujo hicieron constar que para poner término á las cuestiones que entre ellos habían surgido celebraron varias conferencias; y practicándose el balance de la casa López y Villarino, fijándose el haber que en la liquidación correspondía al dicho Gaspar, al que se hicieron adjudicaciones, y se daban todos por saldados de sus respectivas cuentas;

*Resultando:* que dicho balance se practicó por terceras personas que nombraron las partes, las cuales vista la incorrección con que eran llevados los libros de "La Cubana" cumplieron su cometido á virtud de las indicaciones de las partes y consignando las partidas, así que eran mutuamente aceptadas por

aquellas, sin que de otra suerte como del sumario se deduce hubieran podido llevar á efecto su encargo;

*Resultando:* que personado en la causa como acusador particular Benito Vieites Gómez, por providencia firme de veinte de Julio último, se previno á dicho querellante que si dentro de segundo día no prestaba fianza por siete mil pesetas en metálico, sólo se le consentiría intervenir en el sumario para investigar los hechos relativos al delito de coacción que se indagaba, sin que aparezca que se haya prestado tal fianza;

*Resultando:* que al evacuar la instrucción el cusador particular pide que se revoque el auto de conclusión del sumario para que se practiquen diligencias cuyo solo objeto es el de esclarecer más los hechos de que acusa á López Villarino para defraudar á su socio, alegando que tiene personalidad para ello porque esos hechos son conexos con el delito de coacción que también ha denunciado;

*Resultando:* que la Sala sentenciadora omitiendo proveer sobre la solicitud de revocación del auto de conclusión del sumario, hecha por el acusador particular y sin haber dispuesto que volvieran los autos á esa parte para el trámite oportuno, dictó auto de sobreseimiento libre en la causa, por el referido auto de veinte y uno de Septiembre en cuanto á los hechos que se refieren á la coacción por estimar que no son constitutivos de delito, pues en primer término aparece ser incierto que se otorgara por Vieites ningún documento en la casa del Letrado Secundino Baños, y en segundo que el de siete de Diciembre fué otorgado sin que antes de ser firmado ni en el acto de serlo, fuese amenazado Vieites para que lo efectuase con causarle un mal que constituyera delito, requisito esencial para que se cometa el de coacción según lo define el artículo quinientos doce del Código Penal y en cuanto á los delitos de estafa de que acusa Vieites á López Villarino, porque no aparecen del sumario indicios racionales de la existencia de aquéllos; en primer lugar porque en esta causa de operaciones mercantiles realizadas por un gerente en el ejercicio de su cargo; en segundo porque al proceso no ha venido ningún dato digno de ser tomado en serio en punto á la mayor ó menor moralidad que informaron esos actos; en tercero, que aun cuando se ha acreditado que la contabilidad de la compañía de López y Villarino á cargo de José López Villarino se llevaba del modo más informal que es posible suponer, no se ha acreditado que el referido López Villarino lo efectuara de un modo consciente ni tampoco que extrajese ó hubiese tratado de apropiarse en perjuicio de su socio lo que por resultas de las informalidades de la conta-



bilidad hubiera podido sustraer sin ser notado á primera vista; y en cuarto lugar que esas informalidades fueron discutidas y aclaradas con el que por ellas hubiera podido resultar perjudicado, sin que éste lo denunciase;

*Resultando:* que contra este auto se ha interpuesto por el procurador Ambrosio L. Pereira en representación de Benito Vieites y Gómez recurso de casación por infracción de Ley, autorizado por los artículos ochocientos cuarenta y ocho número cuarto, ochocientos cincuenta y dos y seiscientos treinta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal designando como infrin-

*Primero:* El artículo seiscientos treinta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su número primero y la doctrina que establece el número dos del artículo ochocientos cuarenta y nueve del mismo Código, por cuanto el primero autoriza el sobreseimiento cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo á la formación de la causa y el segundo autoriza el recurso de casación por infracción de Ley, cuando en los fallos se estiman como probados hechos que no se califiquen ó penen como delitos cuando en realidad lo sean, y de lo actuado aparece que mi representado fué compelido á otorgar un documento de deuda que era injusto desde el momento en que por otro documento anterior estaba acreditado que lejos de ser deudor, era acreedor de aquel á cuyo favor lo otorgaba estando acreditada además la amenaza en cuya virtud se obtuvo el primer documento mencionado;

*Segundo:* Los artículos quinientos quince y quinientos cincuenta y nueve inciso séptimo, ambos del Código Penal, por cuanto D. José López Villarino no estaba autorizado legítimamente para obligar á mi representado á suscribir el documento que anulaba su crédito consignado en el balance, y so pretexto de graves responsabilidades que había de exigirle su socio Don Gaspar Villarino, le obligó á suscribir el indicado documento por el cual pierde mi representado el crédito que tenía contra la sociedad López y Villarino y que venía obligado el primero á pagarle con arreglo al balance que sirvió de base á la liquidación de aquella sociedad; resultando también infringido el mismo artículo quinientos cincuenta y nueve en su inciso quinto por cuanto D. José López al obligar á mi representado en el aludido documento privado á hacerse responsable de todas las faltas que resultaran en la casa, procedió dolosamente tratando de ocultar la distracción de dinero y otros efectos que había recibido como gerente y de los que había dispuesto en su pro-



vecho particular y en perjuicio de la sociedad como resulta con una venta de oro viejo por valor de setenta ú ochenta centenes debidamente acreditada en autos, así como la falta de ingreso en la caja, de la suma de doscientos treinta y cinco pesos setenta centavos que aparecen de menos á fojas doscientas veinte y nueve del libro Diario al pasar el asiento correlativo del folio cuatrocientos sesenta y cinco del Borrador de la casa de compra-venta "La Cubana";

*Tercero:* El artículo seiscientos treinta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reformado por el artículo trece del Decreto ú Orden número ciento nueve del Gobernador General de Cuba de trece de Julio del corriente año publicado en la GACETA del día dos de Agosto, por cuanto en dicho precepto se ordena que "si alguna de las partes acusadoras solicitare tan sólo la revocación del auto de terminación del sumario, el Tribunal se limitará á proveer acerca del extremo pedido. Si lo declarase sin lugar, mandará que los autos vuelvan á aquella parte por término de cinco días para que exponga lo que tenga por conveniente acerca del sobreseimiento, apertura del juicio, calificación y prueba"; y como la Sala sin llenar estos trámites ha declarado el sobreseimiento libre, al infringir el artículo citado, ha dado lugar á un vicio de nulidad en el procedimiento, del que solamente ella es responsable;

*Cuarto:* El mismo artículo seiscientos treinta y siete de la ley procesal, en su número primero por cuanto en él se autoriza solamente el sobreseimiento "cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo á la formación de la "causa"; y de los resultandos primero y tercero aparece que la causa se inició por coacción y estafa, consistente ésta en inexactitudes cometidas por López Villarino en los libros de la sociedad, para defraudar á su socio Gaspar Villarino, apropiándose el producto de muebles que había vendido al dueño del café "El Guanche," el de un lote de oro que importó ochenta y cinco centenes, así como otros hechos de esa naturaleza, procurando para ello que el denunciante, mi representado, se prestase á negar la certeza de esas ventas indicándose en el sexto resultando la realidad de esas inexactitudes que en el cuarto considerando del auto de la Audiencia se reconocen, expresándose que la contabilidad de la compañía de López y Villarino á cargo del acusado D. José López y Villarino, se llevaba del modo más informal que es posible suponer;

*Quinto:* Resulta infringido el artículo primero del Código Penal que reputa voluntarias y por tanto penables las acciones ú omisiones en la Ley definidas como delitos, desde el momento

en que la Sala sentenciadora funda su resolución en el número tercero del cuarto considerando en que no se ha acreditado que López Villarino realizara las informalidades contenidas en los libros de un modo consciente ni que aquel hubiese tratado de apropiarse en perjuicio de su socio, lo que por resultas de las informalidades de la contabilidad hubiere podido sustraer, declarando el Tribunal sentenciador al final de ese mismo considerando que el no haber denunciado Gaspar Villarino esos hechos que le perjudicaban, influye en su ánimo para desvanecer las dudas que sobre la existencia de los delitos denunciados pudieran surgir, y como esa circunstancia, ni destruye los hechos realizados, ni supone que no existan, no puede pronunciarse un sobreseimiento libre, basado en simples conjeturas, en elementos argumentativos más ó menos apreciables y que servirían en su caso para robustecer la duda del Tribunal, cuando el número primero del artículo seiscientos treinta y siete no admite la posibilidad de la duda en el Tribunal sentenciador, sino que es absolutamente necesario que no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo á la formación de la causa; y como el hecho existe según las declaraciones de la Sala, es ineludible proceder á su investigación, ampliando el sumario, como nosotros lo pedimos, ó abriendo el juicio oral para disipar las dudas y adquirir convicción, con cuyo único elemento es dado á los Tribunales administrar justicia; siendo de advertir que la ocultación de la venta del lote de oro en ochenta y cinco centenes se acreditó en el sumario por seis testigos, cuyas declaraciones vendrán por certificación á este Tribunal, así como la certificación del escribano de actuaciones D. Luis Mazón relativa á no existir en los libros asiento alguno referente á esa operación cuya existencia negó el acusado José López Villarino, estando igualmente acreditado en el sumario á fojas setenta y cuatro por certificación del mismo escribano D. Luiz Mazón que, al folio cuatrocientos sesenta y cinco del borrador aparecía un asiento de venta por valor de trescientos doce pesos treinta centavos que había sido trasladado al Diario por la cantidad de setenta y siete pesos sesenta centavos, con lo que quedaba acreditada una ocultación por valor de doscientos treinta y cinco pesos setenta centavos; y es visto que si por los libros no aparece ingresada en la caja social la totalidad de las ventas representadas por esos asientos, el único encargado de la contabilidad de la sociedad, el acusado José López Villarino según lo reconoce el Tribunal sentenciador en el cuarto considerando, ha retenido en su poder para sí y no para la sociedad, la diferencia que hemos fijado; responsa-



bilidad que pretende descargar en mi representado al hacerle suscribir un documento que también vendrá á este recurso, en el que se hace asumir á Benito Vieites esa y todas las demás faltas que resulten en el establecimiento que perteneció á la sociedad de López y Villarino; obligación que le hizo contraer el acusado López Villarino cinco días después de la escritura de separación de la sociedad según aparece del tercero y quinto resultandos;

*Sexto:* Infringe el fallo recurrido los artículos ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por cuanto en el primero se dispone en su último párrafo que los autos se redacten fundándolos en Resultandos y Considerandos y previene el artículo ciento cuarenta y dos en su segundo apartado que en los Resultandos se consignen los hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo; y en todos los resultandos de la sentencia y principalmente en el segundo y el séptimo se mencionan no hechos sino apreciaciones ó razonamientos que la Sala indica deducirse de antecedentes sumariales que no cita, por lo cual este Tribunal no puede apreciar si son ó no delitos, si se ha cometido error de derecho en su calificación, si están ó no comprendidos dentro de un precepto del Código Penal; cometándose al propio tiempo infracción manifiesta del artículo ochocientos cincuenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del número tercero del artículo ciento cuarenta y dos de la misma Ley desde el momento en que no se cita el fundamento legal de la exención de responsabilidad criminal de que se hace mérito en el cuarto considerando, y se argumenta tan sólo por la Sala que el hecho de no denunciarse el delito por él directamente perjudicado, aleja ó destruye los indicios racionales de la existencia del hecho punible, argumentación ó deducción que ha servido de fundamento al sobreseimiento declarado, contra el precepto del artículo seiscientos treinta y uno reformado por el artículo trece de la Orden número ciento nueve del Gobernador General de Cuba;

*Resultando:* que admitido dicho recurso, y anunciado por la Audiencia de la Habana, se presentaron dentro del término por la parte recurrente, los documentos del caso á este Supremo Tribunal y, previo los trámites correspondientes se designó para la vista pública del referido recurso el día veinte y cuatro del mes de Noviembre próximo pasado, informando el Letrado defensor de la parte recurrente;

*Visto:* Siendo Ponente el Magistrado Endaldo Tamayo,

*Considerando:* que no son de estimarse las causas alegadas



en el primero y el cuarto motivos del recurso por cuanto éste no procede contra autos de sobreseimiento fundados en el caso primero del artículo seiscientos treinta y siete, según el texto expreso del ochocientos cincuenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en cuanto á la cita de la doctrina del número dos del ochocientos cuarenta y nueve, no puede estimarse tampoco porque en materia criminal no hay doctrina legal en que pueda fundarse un recurso de casación y porque de hecho, lo que se pretende aplicar es no una doctrina sino un precepto legal que se refiere á resoluciones de naturaleza distinta á la que es objeto del presente recurso;

*Considerando:* en cuanto á los motivos segundo y quinto, que en la resolución recurrida no se han infringido los artículos citados del Código Penal, porque fundándose el auto de sobreseimiento en el número primero del artículo seiscientos treinta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en este fundamento impugnado por el recurrente, no son de aplicación preceptos legales que definen ó califican un delito para cuya existencia es condición necesaria que se haya realizado un hecho, y la Sala, al citar el número primero de dicho artículo, seiscientos treinta y siete de la Ley procesal, implícitamente declara que no ha habido indicios racionales de haberse perpetrado el que dió origen á la formación de esta causa;

*Considerando:* que no puede dar motivo á un recurso de fondo ni estimarse en éstos la infracción del artículo seiscientos treinta y uno reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se cita como tercer motivo del recurso, por ser dicho artículo de orden meramente procesal; y por esta última razón no es de estimarse el sexto motivo del recurso en el cual se citan como infringidos los artículos ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta y dos de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal;

*Considerando:* que si bien la infracción del artículo seiscientos treinta y uno reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cometida por la Sala sentenciadora al sobreseer cuando el acusador había solicitado diligencias sumariales, en lugar de resolver previamente esta pretensión y mandar pasar de nuevo la causa en su caso, al promovente, conforme al citado artículo doscientos cincuenta y ocho, no constituye motivo de casación, es de las infracciones que el Tribunal no puede dejar pasar inadvertidas para evitar su repetición;

*Se declara sin lugar* el recurso de casación establecido por Benito Vieites contra el auto de sobreseimiento, dictado en veinte y uno de Septiembre del corriente año de mil ochocientos

noventa y nueve por la Sección segunda de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana en la causa referida, con las costas á cargo del recurrente, y se llama la atención de la Sala Sentenciadora acerca de la infracción de que se hace mérito en el cuarto Considerando. Así, por esta sentencia, que se comunicará á la Audiencia de la Habana, por medio de certificación de la misma, librándose también copias autorizadas, á la Secretaría de Justicia, para la Colección á su cargo y á la "Gaceta de la Habana" para su publicación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Gíberga.

---

EL M. F. CONTRA VICENTE VIDAL Y COS.

**Sentencia núm. 10 (14 de Diciembre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por el M. F. contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba en 12 de Septiembre de 1899.*

#### **DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES.**

No cabe relacionar la circunstancia 1.<sup>a</sup> del artículo 9.<sup>o</sup> del Código Penal, con los números 12 y 13 del artículo 8.<sup>o</sup>, pues éstas no ofrecen variedad ni composición alguna, si no se refieren á un solo hecho sin requisitos necesarios para su apreciación; cuya circunstancia hace que sea inaplicable también el artículo 85 de dicho Código.

Debe estimarse la atenuante 8.<sup>a</sup> del artículo 9.<sup>o</sup>, cuando en la realización del delito concurre un conjunto de circunstancias bastantes á producir en el ánimo del reo arrebató y obcecación.

En la ciudad de la Habana, á catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación que por infracción de ley pende ante este Supremo Tribunal, interpuesto por el Fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba contra la sentencia dictada por dicho Tribunal en doce de Septiembre del corriente año, á consecuencia de la causa criminal que por disparo de arma de fuego y lesiones se instruyó de oficio en el Juzgado del Distrito Norte de dicha ciudad contra Vicente Vidal y Cos, vecino de Cuba y agente de policía;

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la menciona-

da causa, dicha Audiencia consignó los hechos en los siguientes Resultandos:

*Primero. Resultando* probado: que en la noche del doce de Marzo último, el procesado, como agente de policía secreta recibió, en unión de otro compañero orden de su jefe para detener á Manuel Torres ó Anaya, sujeto de malos antecedentes que ha estado numerosas veces preso y lo está en la actualidad y á quien se acusaba de haber cometido aquella noche un hurto; y habiendo logrado detenerlo hacia la media noche y ocupádole el revólver objeto de dicho delito, lo condujeron á la Cárcel; mas como no fuera allí admitido por no llevar la orden exigida fué uno de los detectives á buscarla quedando el Vidal custodiando al Torres á la puerta de dicho establecimiento y poco después cediendo á los ruegos que el último le hizo de llevarlo á la presencia del jefe así lo verificó, y al llegar á la esquina de las calles de Enramadas y Hospital emprendió el detenido la fuga repentinamente, por lo que Vidal para impedir que la realizara y después de darle el alto y tocar el pito de auxilio, estando ya á varios metros de distancia le disparó su revólver causándole una herida que le hizo caer al suelo y de la que sanó completamente á los diez días de asistencia médica;

*Segundo. Resultando* probado: que el jefe de la Policía secreta, tenía dadas órdenes á sus subalternos y entre ellos al procesado, de que para impedir la fuga de los detenidos que fueran presuntos reos de delitos graves y de malos antecedentes, le hicieran fuego en caso necesario;

*Resultando:* que la Audiencia de Santiago de Cuba declaró que los hechos probados constituyen un delito de disparo de arma de fuego contra una persona y otro de lesiones menos graves, ejecutados ambos en un solo acto, de que era autor Vicente Vidal Cos con la circunstancia especial señalada en el número primero del artículo noveno del Código en relación con la doce y trece del octavo, como eximentes incompletas, y no una análoga á aquella por no existir razón fundada para esa distinción, debiendo estimarse aplicable al caso el artículo ochenta y cinco del Código imponiéndose en tal virtud al culpable la pena inferior en dos grados á la señalada por la ley, ó sea el arresto mayor en su grado mínimo, y en su consecuencia le condenó á la pena de un mes y quince días de arresto mayor, accesorias, costas é indemnización ó el apremio personal á falta de ésta;

*Resultando:* que contra esta sentencia se ha interpuesto por el Fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba recurso de casación por infracción de ley, fundado en el caso quinto del



artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, designando como infringido el artículo noveno del Código Penal, en los casos primero y octavo por su no aplicación y el octavo en sus casos doce y trece y el ochenta y cinco, ambos por aplicación indebida, debiendo haberse aplicado en su lugar el artículo ochenta y uno en relación con el octavo del Código Penal citado y considerarse una atenuante simple y no estimarse en manera alguna un estado de ánimo tal que permita apreciar dos eximentes incompletas;

*Resultando:* que admitido dicho recurso y emplazadas las partes para su comparecencia ante este Supremo Tribunal durante el período de emplazamiento se personó el Fiscal para sostener el aludido recurso, habiéndose celebrado la vista del mismo en la que informó el Ministerio Fiscal;

Visto, siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,

*Considerando:* que por referirse claramente la primera circunstancia del artículo noveno del Código Penal á las eximentes señaladas en el artículo octavo del mismo, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos, es evidente que sólo puede comprender aquellas causas de exención que consten, según su naturaleza de diversos requisitos, siendo inaplicable á aquellas otras como las de los números doce y trece del artículo octavo que no ofrecen variedad ni composición alguna; por razón de lo cual al estimar la Sala sentenciadora, como eximentes incompletas las de los mencionados números doce y trece del artículo octavo y, en tal concepto, constitutivos de la atenuante primera del artículo noveno, ha cometido la infracción alegada por el recurrente;

*Considerando:* que, según lo expuesto, la Sala no ha debido tener en cuenta para la aplicación de la pena correspondiente el artículo ochenta y cinco del Código Penal, por cuanto éste se contrae al caso de no ser el hecho del todo excusable por faltar alguno de los requisitos exigidos para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que trata dicho artículo octavo, siempre que concurriere el mayor número de ellos, por cuanto en la presente causa no se dá circunstancia alguna de tal índole, siendo el aplicable, en lugar del ochenta y cinco, el artículo ochenta y uno en relación con el ochenta, y habiéndose incurrido por tanto, por aplicación indebida, en las infracciones alegadas por la parte recurrente;

*Considerando:* que si bien el exceso en el cumplimiento de un deber excluye la exención de responsabilidad penal, esto no obstante, tomándose en consideración en el hecho de autos la

conducta del preso que correspondía con tan marcada ingratitude á la condescendencia del Policía, el deseo en éste de impedir la fuga y el natural temor de algún castigo por parte de su jefe, son circunstancias que, conforme á las leyes orgánicas del espíritu constituyen, combinadas, una presión moral bastante, á reaccionar sobre la voluntad del agente, para colocarle bajo el imperio de estímulos tan poderosos que por su natural y ordinaria virtud producen arrebató y obcecación, atenuándose el hecho y haciéndose aplicable la circunstancia octava del artículo noveno del Código Penal, y al no estimarlo así el Tribunal *a quo* ha infringido por su no aplicación ese precepto legal; por todo lo cual es procedente el recurso de casación que interpone el Fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación que por infracción de ley ha interpuesto el Fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba contra la expresada sentencia pronunciada por ese Tribunal, la cual casamos y anulamos, declarando de oficio las costas de este recurso; comuníquese esta resolución, con la que á continuación se dicta al Tribunal *a quo*; librándose además de las mismas, dos copias autorizadas, una para la colección legislativa á cargo de la Secretaría de Justicia y otra á la "Gaceta de la Habana" para su publicación.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes. El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala.—Antonio González de Mendoza.—Ángel C. Betancourt.—Octavio Giberger.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, en la causa criminal que procede del Distrito Norte de la Ciudad de Santiago de Cuba se siguió ante esa Audiencia por el delito de disparo de arma de fuego y lesiones contra Vicente Vidal Cos, vecino de dicha ciudad y agente de policía;

*Resultando:* que casada y anulada por sentencia de esta misma fecha la dictada el doce de Septiembre del corriente por la Audiencia de Santiago de Cuba, procede dictarse en seguida la que debe sustituir á la pronunciada por el Tribunal *a quo* conforme á lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la Orden número noventa y dos sobre sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal;

Aceptando la relación de hechos contenida en los dos primeros Resultandos de la sentencia recurrida,

Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,

*Considerando:* que los hechos que se declaran probados en la sentencia casada constituyen el doble delito de disparo de arma de fuego y lesiones menos graves, comprendido en los artículos cuatrocientos veinte y uno y cuatrocientos treinta y dos del Código Penal y que debe penarse conforme al artículo ochenta y ocho del mismo cuerpo legal, siendo autor del mismo por participación directa el procesado Vicente Vidal Cos;

*Considerando:* que la fuga emprendida por el detenido Torres no legitima en modo alguno que Vidal Cos hiciera uso de su revólver contra aquél, infiriéndole lesiones menos graves, por cuanto á ello no le obligaba el cumplimiento de deber alguno ni le autorizaba el ejercicio de su cargo, dado que los agentes de Policía carecen de derecho para realizar á tiros la captura de los perseguidos por ellos, aun en el caso de que indebidamente se les haya ordenado por sus jefes que así lo hagan cuando se trate de presuntos reos de delitos graves; no siendo por lo tanto aplicable al reo el caso doce del artículo octavo del Código Penal, invocado por la defensa;

*Considerando:* que si bien el exceso en el cumplimiento de un deber excluye la exención de responsabilidad penal, esto no obstante tomándose en consideración en el hecho de autos la conducta del preso que correspondía con tan marcada ingratitud á la condescendencia del policía, el deseo en éste de impedir la fuga y el natural temor de algún castigo por parte de su jefe, son circunstancias que, conforme á las leyes orgánicas del espíritu constituyen, combinadas, una presión moral bastante, al reaccionar sobre la voluntad del agente, para colocarle bajo el imperio de estímulos tan poderosos que por su natural y ordinaria virtud producen arrebato y obcecación, atenuándose el hecho y haciéndose aplicable la circunstancia octava del artículo noveno del Código Penal;

*Considerando:* que por el hecho de la presente causa la pena que corresponde aplicar teniéndose en cuenta el último párrafo del artículo ochenta y ocho del Código y la concurrencia de una atenuante es el mínimo del grado máximo de la prisión correccional en sus grados mínimo y medio;

*Considerando:* que quien es responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente y, por Ministerio de la Ley debe pagar las costas;

Vistos los artículos cuatrocientos veinte y uno, cuatrocientos treinta y dos, caso octavo del noveno, ochenta y ochenta y



ocho del Código Penal y treinta y ocho de la Orden número noventa y dos.

*Fallamos:* que debemos condenar y condenamos á Vicente Vidal Cos, como autor del doble delito de disparo de arma de fuego y lesiones menos graves, habiendo concurrido en el hecho una circunstancia atenuante, á la pena de dos años, once meses y once días de prisión correccional, accesorias de suspensión de todo cargo y derecho de sufragio por el tiempo de la condena, indemnización de diez pesos al ofendido y en defecto de pago un día más de detención por cada doce y media pesetas que dejare de satisfacer y las costas, abonándosele la mitad de la prisión preventiva sufrida.

Así, por esta sentencia, irrevocablemente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala.—Antonio González de Mendoza.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL M. F. CONTRA JOSÉ M.<sup>a</sup> REYES GRANADOS.

**Auto de 15 de Diciembre de 1899.**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por José M.<sup>a</sup> Reyes Granados contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana de 26 de Septiembre de 1899.*

### HURTO.

Quando no se expresa en el escrito en que se interpone el recurso ninguna de las causas señaladas en el artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se falta á los preceptos de los números terceros de los artículos 5 y 7 de la Orden 92 sobre casación, debe declararse mal admitido el recurso; sin que sea potestativo de la Sala suplir las omisiones en que hayan incurrido las partes.

*Resultando:* que en causa procedente del Juzgado de Jesús María, de esta capital, y seguida contra José María Reyes Granados, por hurto, la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana dictó sentencia en veinte y seis de Septiembre último, condenando al referido Reyes Granados á la pena de un año y un día de presidio correccional, á las accesorias de suspensión de todo cargo, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y pago de todas las cos-

tas, sin lugar á que se le abone la mitad del tiempo de la prisión preventiva;

*Resultando:* que contra esa sentencia interpuso Reyes Granados recurso de casación por infracción de ley, alegando que se habían infringido el artículo tercero, en su inciso primero del Código Penal, los artículos quinientos treinta y cinco y quinientos treinta y seis, éste en su caso quinto, del mismo Código y el artículo setecientos cuarenta y uno de la Ley procesal vigente; y que lo autorizaban á establecer el recurso los artículos ochocientos cuarenta y siete y ochocientos cuarenta y ocho, éste en su párrafo primero, de dicha ley procesal;

*Resultando:* que la Sala sentenciadora admitió el recurso, por considerar que se había interpuesto contra una sentencia definitiva, dentro del término legal, se fundaba en la causal primera del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se citaban con claridad y precisión los preceptos legales que se conceptuaban infringidos;

*Resultando:* que el Fiscal de este Tribunal Supremo impugnó el recurso, pidiendo que se declarase mal admitido, porque en el escrito de interposición no se mencionó el caso taxativo del artículo ochocientos cuarenta y nueve que lo autorice, ni siquiera se citó este artículo; y se ha omitido así el requisito tercero del artículo quinto de la Orden número noventa y dos del actual Gobierno Militar, artículo relacionado con el inciso tercero del artículo séptimo de la propia orden;

*Resultando:* que previos los debidos trámites, el trece del corriente mes se celebró la vista, en la que informaron el representante del Ministerio Fiscal y el defensor del procesado; en cuyo acto dicho representante del Ministerio Fiscal, después de reproducir su enunciada solicitud, pidió se dijese á la Audiencia de la Habana que no está en sus facultades suplir, como lo ha hecho en el presente caso, las omisiones que se cometan en los escritos interponiendo recurso de casación, y que se abstenga de ello en lo sucesivo;

*Considerando:* que en el escrito en que el representante de José María Reyes Granados interpuso el recurso no se expresó como fundamento que lo autorice ninguna de las causas señaladas en el artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo que no está ni mencionado en el escrito; de modo que faltó un requisito necesario, según el número tercero del artículo quinto de la Orden número noventa y dos, concordante con el número también tercero del artículo séptimo de la misma Orden, para que se pudiese admitir el recurso;

*Considerando:* que el cumplimiento de las formalidades indispensables en el escrito de interposición incumbe al recurrente, sin que sea potestativo á la Sala suplir las omisiones cometidas por el interesado, sino examinar si en el escrito se han llenado ó no aquellas formalidades, para resolver si se debe ó no admitir el recurso, artículo séptimo citado:

*Se declara* mal admitido el recurso de casación interpuesto por el representante de José María Reyes Granados, sin especial condenación de costas; y se llama la atención de la Sala sentenciadora sobre el hecho de haber ella expresado lo que al recurrente correspondía expresar y no expresó, sin que á la Sala tocara el suplir las omisiones en que había incurrido el interesado; y comuníquese á dicha Sala para los efectos procedentes.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala.—Antonio González de Mendoza.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Silverio de Castro.

---

EL M. F. CONTRA EUSEBIO MAURO Y MAURA.

Sentencia núm. 11 (16 de Diciembre de 1899).

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por Eusebio Mauro y Maura contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el 23 de Septiembre de 1899.*

### ESTAFA.

Fundándose el recurso en no ser constitutivos de delito los hechos que se declaran probados, no puede citarse como infringido el número 1º del Artículo 558 del Código Penal, puesto que en él sólo se establece la penalidad correspondiente, según la ascendencia de lo defraudado, lo cual no afecta á la existencia del delito, no habiendo congruencia entre el precepto legal que se invoca y la infracción que sirve de fundamento al recurso.

En la ciudad de la Habana, á diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Supremo Tribunal, á consecuencia del interpuesto por Eusebio Mauro y Maura, corredor y vecino de esta capital, contra la sentencia dictada por la Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta



ciudad, en la causa seguida contra dicho Mauro y otro por el delito de estafa;

*Resultando:* que vista en juicio oral y público la referida causa, la mencionada Sección Primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad en sentencia de veinte y tres de Septiembre de este año, consignó como hechos probados los contenidos en los siguientes Resultandos:

*Resultando probado:* que Don Eusebio Mauro, en concepto de corredor propuso á Don José Modesto Sánchez y Rodríguez el descuento de cuatro recibos de alquileres de la casa calle de Villegas número noventa y seis correspondientes á los meses vencidos en los días seis de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año de mil ochocientos noventa y seis, y que aceptada la negociación por Sánchez se pusieron de acuerdo Mauro y el otro procesado D. Aurelio Olazábal y Risco, extendiendo cuatro recibos que supusieron firmados por el propietario Don Juan Manuel Fernández, y Mauro escribió á Don Modesto Sánchez en cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y seis una carta en que le decía que estaban ya en su poder los cuatro recibos é invitaba á Sánchez para que concurriera aquella tarde á casa del inquilino que era el mismo procesado Don Aurelio Olazábal para que presenciara la aceptación de éste y entregara el importe de los recibos con el descuento del tres por ciento, formulándole una cuenta de la que resultaba que Sánchez debía entregar doscientos veinte y tres pesos ochenta y ocho centavos y percibir doscientos cincuenta y cuatro, cuarenta; realizando así un lucro ó ganancia de treinta pesos cincuenta centavos.

*Resultando probado:* que por medio de este artificio ó engaño Don Aurelio Olazábal percibió los doscientos veinte y tres pesos ochenta y ocho centavos que Sánchez entregó; á cambio de los cuatro recibos antes verificados y en los cuales no se trató de imitar la firma del dueño de la finca si bien éste y Mauro hicieron creer al prestamista que dichos recibos estaban firmados por el referido propietario y que en provecho de éste se realizaba la negociación;

*Resultando igualmente probado* que Don Aurelio Olazábal antes del vencimiento de los cuatro recibos cuyo importe había percibido abonó éste entregando á Don Eusebio Mauro el importe de los dos primeros para que á su vez hiciera entrega á Don José Modesto Sánchez, el del tercero al Licenciado D. Juan Manuel Fernández, quien entregó su importe al acreedor y el del cuarto lo consignó en el Juzgado de Instrucción el cinco de Noviembre ó sea la víspera de su vencimiento por no haberlo

querido percibir el acreedor ni su letrado director á causa de estar hecha ya la denuncia de estafa origen de este proceso;

*Resultando* del mismo modo probado: que Don Eusebio Mauro se apropió y destinó á sus gastos particulares el importe del segundo recibo que Olazábal le entregó para que lo abonara al acreedor Sánchez y que requerido por éste le confesó tener dicha suma en su poder, extendiéndole un documento en que así lo declaraba, siendo éste el único perjuicio que ha recibido el acreedor, quien ha percibido en su oportunidad el valor de los otros tres recibos;

*Resultando*: que en la misma sentencia se declaró que el procesado Mauro y Maura era reo del delito de estafa definido y penado en el inciso quinto del artículo quinientos cincuenta y nueve del Código Penal en relación con el segundo del quinientos cincuenta y ocho, sin concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, condenándolo en consecuencia á la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor con las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de la mitad de las costas, absolviendo al otro procesado con la otra mitad de las costas de oficio;

*Resultando*: que el procesado por medio del procurador Esteban de la Tejera interpuso recurso de casación por infracción de ley fundado en los artículos ochocientos cuarenta y siete, ochocientos cuarenta y ocho y caso primero del ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringidos el inciso primero del artículo quinientos cincuenta y ocho del Código Penal en el concepto de que suponiendo lo más desfavorable para Mauro, sólo resultaría que había dispuesto de la diferencia entre lo entregado y lo recuperado y el precepto que ordena no debe ser condenado quien no esté justificado plenamente que ha delinquido, porque si bien Sánchez manifestó en el juicio oral que consideraba incobrable la deuda que á su favor había reconocido Mauro por documento privado esta manifestación no destruía la que hizo en el sumario de habersele pagado;

*Resultando*: que sustanciado el recurso en este Tribunal se celebró la vista el día nueve del mes actual con intervención del abogado defensor del procesado;

Siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando*: que fundado el presente recurso en las circunstancias de no ser constitutivos de delitos los hechos que en la sentencia recurrida se declaran probados, no puede citarse como infringido el número primero del artículo quinientos cin-

cuenta y ocho del Código Penal, puesto que en ese artículo sólo se establece la penalidad correspondiente según la ascendencia de lo defraudado, lo cual no afecta á la existencia del delito; por cuyo motivo no guarda relación el precepto que se supone infringido con el fundamento del recurso; ni puede alegarse tampoco, como se hace en el segundo extremo del único motivo invocado, la infracción de un precepto doctrinal, al consignarse por el recurrente que ha sido condenado sin justificarse plenamente su participación en el delito, porque en esta clase de recursos es indispensable citar claramente y con toda precisión un precepto legal violado; por todo lo cual no es de estimarse la supuesta infracción en ninguno de sus dos extremos;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Eusebio Mauro y Maura, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de esta ciudad el veinte y tres de Septiembre del corriente año, la cual confirmamos con las costas á cargo del recurrente.

Así, por esta sentencia, que se comunicará la Audiencia de la Habana á los efectos legales librándose además á la Secretaría de Justicia para la Colección á su cargo y á la "Gaceta de la Habana" para su publicación las oportunas copias autorizadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala.—Antonio González de Mendoza.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL M. F. CONTRA ENRIQUE CÓRDOBA Y LEBRIJA.

**Sentencia núm. 3 (20 de Diciembre de 1899).**

*Recurso por quebrantamiento de forma é infracción de Ley, interpuesto por Enrique Córdoba Lebrija contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el 20 de Septiembre de 1899.*

**ROBO.**

No concurriendo en el hecho procesal ninguna de las circunstancias que señala el artículo 520, ni las que enumera el 526; y no pudiendo calificarse de falsa, la llave con qué el procesado abrió la gaveta en que se encontraba el dinero, con arreglo á la definición que de ella dá el artículo 534 del



Código Penal, debe calificarse el hecho de hurto por estar comprendido en el artículo 535 del mismo.

En la ciudad de la Habana, á veinte de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve en la causa procedente del Juzgado de Instrucción del Distrito de Guadalupe, seguida ante la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, por robo, contra Enrique Córdoba y Lebrija, tipógrafo y vecino de esta capital, causa que se halla pendiente ante este Tribunal á consecuencia de recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de ley contra la sentencia dictada por dicha Sala y cuyos fundamentos de hecho son los que literalmente se transcriben en los dos primeros Resultandos siguientes:

*Resultando:* que Antonio Gelí García, Alcalde de Barrio, tenía establecida la Alcaldía en su morada, y en un bufete que había en la Sala baja guardaba el dinero que por concepto de cédulas recaudaba, y cuyo dinero le pertenecía, por satisfacer él por adelantado el importe de las cédulas que se le entregaban; y conocedor Enrique Córdoba y Lebrija de todos estos particulares sustrajo la llave de dicho mueble y al día siguiente, primero de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, pretextando que escribía una obra bufa en el mueble que guardaba el dinero, aprovechó el descuido de los que en la misma habitación se hallaban, y valiéndose de la llave por él sustraída, se apoderó con ánimo de lucro de cuarenta y dos pesos cuarenta-céntavos en oro, ciento sesenta en plata y cuarenta en billetes de Banco;

*Resultando:* que el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, por no apreciar que se sustrajese la llave como medio de apropiarse el dinero, calificó los hechos de hurto, comprendido en el número primero del artículo quinientos treinta y cinco y segundo del quinientos treinta y seis del Código Penal, pidiendo se impusiera al procesado un año, ocho meses y veinte y un días de presidio correccional, cuyas conclusiones modificó en vista de las pruebas del juicio oral, y apreciando el hecho en toda su integridad, lo calificó de robo comprendido en el caso tercero del quinientos veinte y seis en concordancia con el segundo del quinientos treinta y cuatro, pidiendo se impusiera al procesado Enrique Córdoba, dos años, once meses y once días de presidio correccional con las accesorias y costas y obligación de pagar al perjudicado el valor de lo robado; la defensa del procesado sostuvo como definitivas sus conclusiones provisionales en las que afirmaba que Enrique Córdoba y Lebrija no había tenido participación en los hechos y debía ser absuelto;

*Resultando:* que la mencionada Sala pronunció sentencia en veinte de Septiembre último, en la cual calificó de robo el delito y condenó á Enrique Córdoba y Lebrija á dos años, once meses y once días de presidio correccional, con las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas y á satisfacer como indemnización civil, mil ciento diez pesetas á Antonio Gelí García, debiendo sufrir un día más de encierro en el presidio por cada doce y media pesetas que de la indemnización dejase de pagar;

*Resultando:* que el Procurador Luis Plutarco Valdés, en representación del procesado, interpuso contra esa sentencia recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de ley, expresando que el quebrantamiento de forma consistía:

*Primero:* en haber dejado de declarar el testigo Antonio Gelí González propuesto por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales, y cuyo hecho de no declarar dependió de no haberse citado al testigo; y

*Segundo:* el no expresarse en la sentencia clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, porque incluídos en un solo Resultando todos los hechos enlazados con las cuestiones que habían de resolverse, no aparece bien claro si la frase "Resultando probado" comprende todos los hechos que allí se refieren; y la infracción de ley está en haberse cometido error de derecho en la calificación del hecho aplicando indebidamente el artículo quinientos veinte y seis, caso tercero, al considerar robo al delito, y dejando de aplicar los artículos quinientos treinta y cinco, número primero, y quinientos treinta y seis número tercero, pues los hechos que se declaran probados constituyen el delito de hurto;

*Resultando:* que en este Tribunal Supremo el Fiscal se adhirió al recurso de infracción de ley, no solo en virtud de haber calificado de robo el delito que es el de hurto, sino también porque se incurrió en el error de no apreciarse en la sentencia que el procesado obró con abuso de confianza; y así se dejó de aplicar el número once del artículo diez y la regla tercera del artículo ochenta del citado Código;

*Resultando:* que, previos los debidos trámites, el nueve del corriente mes se celebró la vista, en la que informaron el defensor del procesado y el representante del Ministerio Fiscal;

Vistos: siendo Ponente el Magistrado Pedro González Llorente;

*Considerando:* en cuanto á las dos alegadas infracciones de forma: respecto á la primera, que la citación del testigo An-

tonio Gelí González no se reclamó oportunamente en el juicio oral, como lo exige el artículo novecientos catorce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que la sola protesta hecha en el acta baste para motivar el recurso de casación; y en cuanto á la segunda infracción, que la circunstancia de hallarse reunidos en un Resultando los hechos referentes á la cuestión, no impide esté claro como lo está, que la declaración de probados, hecha al principio del Resultando comprenda, según comprende, todos los hechos allí referidos;

*Considerando:* respecto á la infracción de ley: que la Sala sentenciadora ha padecido error de derecho, al calificar de robo el hurto que motivó esta causa, pues, según el artículo quinientos veinte del Código Penal, "son reos de delito de robo, los que, con ánimo de lucrarse, se apoderan de las cosas muebles ajenas, con violencia é intimidación en las personas, ó empleando fuerza en las cosas, ninguna de cuyas tres circunstancias existió en la sustracción ejecutada por Enrique Córdoba y Lebrija; y, según el artículo quinientos treinta y cinco del mismo Código "son reos de hurto los que, con ánimo de lucrarse, y sin violencia é intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, tomen las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño", que fué como el procesado tomó el dinero de Antonio Gelí García;

*Considerando:* que el artículo quinientos treinta y cuatro del propio Código al declarar que "se entenderán llaves falsas las legítimas sustraídas al propietario", no declara que el hurto cuando se cometa con llave legítima sustraída se convierta en robo, sino que ese artículo, colocado en el capítulo que trata solamente de los robos, no hace más que explicar ó ampliar el caso tercero del artículo quinientos veinte y seis del mismo capítulo, artículo en que se señalan las penas de los que "robaren en casa habitada ó edificio público ó destinado al culto religioso y se introdujerén los malhechores en la casa ó edificio donde el robo tuviere lugar, ó en cualquiera de sus dependencias por uno de los medios siguientes:

*Primero:* por escalamiento;

*Segundo:* por rompimiento de pared, techo ó suelo, ó fractura de puerta ó ventana;

*Tercero:* haciendo uso de llaves falsas, gonzúas ú otros instrumentos semejantes;

*Cuarto:* con fractura de puertas, armarios, arcas ú otra clase de muebles ú objetos cerrados ó sellados, ó con sustracción de los mismos para ser fracturados ó violentados fuera del lugar del robo;



*Quinto:* con nombre supuesto ó simulación de autoridad". Y de los hechos que en la sentencia se declaran probados, resulta evidente que el procesado no se introdujo en el edificio ni en ninguna de sus dependencias por medio alguno de los expresados en el artículo quinientos veinte y seis, pues la gaveta que abrió con la llave no era el edificio ni dependencia del edificio; ni el delito que realizó puede comprenderse en caso alguno de los que expresa el artículo;

*Considerando:* que la circunstancia agravante alegada por el Fiscal de obrar el procesado con abuso de confianza, no fué comprendida en la acusación y no se ventiló ante la Sala sentenciadora, la cual no hubiera podido estimarla en el fallo, sin haber empleado la fórmula expresada en el artículo setecientos treinta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según lo previene el artículo catorce de la Orden número ciento nueve del Gobierno Militar de la Isla;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma y haber lugar al de casación por infracción de ley interpuesto por el representante de Enrique Córdoba Lebrija, á cuyo último recurso se adhirió el Fiscal de este Tribunal Supremo, y, en consecuencia, casamos y anulamos la sentencia dictada en esta causa por la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana el veinte de Septiembre del corriente año, sin especial condenación de costas.

Así, por esta sentencia, que con la que á continuación se dicta, se comunicará á la Audiencia de la Habana por medio de certificación á los efectos legales, librándose además las respectivas copias autorizadas para la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia y su publicación en la *Gaceta de la Habana*, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala, Antonio González de Mendoza.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

#### SEGUNDA SENTENCIA.

En la ciudad de la Habana, á veinte de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve en la causa procedente del Juzgado de Instrucción del Distrito de Guadalupe seguida en la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana por robo contra Enrique Córdoba y Lebrija, tipógrafo y vecino de esta capital, causa que se halla pendiente ante este Tribunal Supremo á consecuencia del recurso de casación interpuesto por el procesado;

*Resultando:* que por sentencia de este Tribunal, de esta misma fecha, se casó y anuló la dictada por la mencionada Sala de la Audiencia de la Habana en veinte de Septiembre último;

Aceptando los hechos que se declaran probados en la sentencia casada;

Siendo Ponente el Magistrado Pedro González Llorente,

*Considerando:* que los hechos que se declaran probados constituyen el delito de hurto en cantidad que pasa de doscientas cincuenta pesetas y no excede de mil doscientas cincuenta, penado en el número tercero del artículo quinientos treinta y seis del Código Penal, de cuyo delito es autor por participación directa Enrique Córdoba y Lebrija;

*Considerando:* que por no haber concurrido en el hecho circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, debe imponerse la pena en su grado medio;

*Considerando:* que el responsable criminalmente de un delito está obligado por la ley á la indemnización del daño y al pago de las costas;

Vistos los artículos citados y los uno, once, doce, diez y seis, veinte y seis, cuarenta y nueve y ochenta de dicho Código y el treinta y ocho de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de la Isla;

*Fallamos:* que debemos condenar y condenamos á Enrique Córdoba y Lebrija á la pena de seis meses de arresto mayor, á las accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, á pagar como indemnización civil mil doscientos doce pesetas á Antonio Gelí y García, debiendo en defecto de pago por insolvencia sufrir un día más de encierro por cada doce y media pesetas que de la indemnización dejare de satisfacer, sin que el total de ese encierro exceda de dos meses, y al pago de las costas.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala, Antonio González de Mendoza.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL M. F. CONTRA NÉSTOR GONZÁLEZ, CONOCIDO POR BARRERA.

Sentencia núm. 4 (23 de Diciembre de 1899).

*Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por Néstor*

*González Barrera contra la sentencia dictada por la Audiencia de Santiago de Cuba el 18 de Septiembre de 1899.*

### DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES.

Las conclusiones provisionales presentadas nuevamente, después de anuladas las anteriores, tienen el carácter de definitivas al no ser modificadas; y no pena un delito más grave la sentencia que de conformidad con ellas, impone la que en las mismas se solicita; y por lo tanto no se infringe el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En la ciudad de la Habana, á veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación que por quebrantamiento de forma pende ante este Tribunal Supremo, interpuesto por el Procurador Quintana Almirall, á nombre de Néstor González, conocido por Barrera, vecino de Palma Soriano y labrador contra la sentencia dictada en causa procedente del Juzgado del Distrito Norte de la ciudad de Santiago de Cuba, por la Audiencia de esta, á consecuencia de la causa criminal que por disparo de arma de fuego y lesiones se siguió entre partes, de la una el Ministerio Fiscal y de la otra el mencionado Procurador con la representación referida;

*Resultando:* que que vista en juicio oral y público dicha causa, la expresada Audiencia dictó la referida sentencia el diez y ocho de Septiembre último, consignando los hechos en el siguiente:

*Resultando:* que en la mañana del dos de Febrero último el menor de quince años Francisco Sardiñas, acompañado de su hermano Manuel del propio apellido, de diez años de edad, fué á la vega que en el término municipal de Palma tiene su tío León Beltrán, hoy ocupada por Néstor González Barrera, á cortar un racimo de plátanos para llevar á su madre y comer todos, pues están en gran miseria, y estando en esa operación el Néstor González Barrera, desde la casa vivienda donde estaba recogiendo en el batey un poco de café les gritó: ¿Quién anda ahí?, contestando el Francisco: yo; y porque dice el referido Barrera que no oyó la contestación, confiesa cogió el Remington y disparó un primer tiro y al ver que huían cargó otra vez y le disparó un segundo tiro que alcanzó al menor Francisco y le produjo una herida con el proyectil, el que le entró por la parte posterior del pecho al nivel del homoplato izquierdo saliendo á cinco centímetros por dentro de la tetilla izquierda, cuya herida tardó en sanar treinta días, necesitando durante ellos, asistencia médica y estando impedido para el trabajo, sin que le quedara lesión ni imperfección. Hecho probado.



*Resultando:* que declarado concluso el sumario en ocho de Mayo último se entregó la causa al Fiscal para que ratificara los hechos justiciables, y este funcionario manifestó que el hecho constituía un delito de lesiones menos graves, previsto y penado en el artículo cuatrocientos treinta y dos del Código Penal, calificación con que estuvo conforme la representación del procesado; y una vez señalado día para darse principio á las sesiones del juicio oral la propia Audiencia al notar que en la calificación del delito no se tuvo en cuenta el de disparo de arma de fuego y sí el de lesiones solamente faltando por ello datos para la resolución final, de oficio declaró nulo, por auto de catorce de Junio último, lo actuado desde el ocho de Mayo ordenando que pasara de nuevo la causa al Fiscal para que formulase nuevas calificaciones, lo cual verificó este funcionario, expresando que el hecho constituía un delito de disparo de arma de fuego, y otro de lesiones menos graves, previstos y penados respectivamente por los artículos cuatrocientos veinte y uno y cuatrocientos treinta y dos del Código Penal, en armonía ambos con lo dispuesto en el ochenta y ocho, conclusiones que fueron luego definitivas; é interpuesto recurso de súplica por la representación del procesado contra dicho auto de catorce de Junio para que se dejare sin efecto, la propia Audiencia, por auto de Julio catorce, declaró no haber lugar á suplir, ni enmendar el auto suplicado, ordenando se llenase el trámite del artículo seiscientos cincuenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual fué cumplido;

*Resultando:* que la referida Audiencia calificó los hechos expuestos como constitutivos del doble delito de disparo de arma de fuego y lesiones menos graves, previstos en los artículos cuatrocientos veinte y uno y cuatrocientos treinta y dos del Código, de que era responsable en concepto de autor, sin circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, el procesado Néstor González Barrera, y vistos los artículos citados y demás concordantes del expresado Código lo condenó á la pena de tres años cuatro meses y ocho días de prisión correccional, accesorias, indemnización y costas;

*Resultando:* que contra esta sentencia se interpuso por la representación del procesado recurso de casación por quebrantamiento de forma, autorizado por el artículo novecientos diez en relación con el caso primero del ochocientos cuarenta y ocho, fundado en el número tercero del novecientos doce, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegándose no haber procedido previamente el Tribunal sentenciador como determina el artículo setecientos treinta y tres de la referida Ley procesal, ya

que fué objeto de la acusación y de la defensa el delito de lesiones menos graves, y la Sala condenó no solo por esto, sino también por el de disparo de arma de fuego; cuyo recurso fué admitido;

*Resultando:* que previa la tramitación del caso y declarada sin lugar una impugnación al recurso, tuvo efecto la vista el doce del corriente á la una de la tarde sin asistencia de ninguna de las partes;

VISTOS, siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,

*Considerando:* que según precepto del caso tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando se pone en la sentencia un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no hubiere procedido previamente como determina el artículo setecientos treinta y tres de la propia Ley;

*Considerando:* que si es cierto que las conclusiones provisionales, por su misma índole solo extienden sus efectos hasta el instante de terminarse las pruebas del juicio, también es una verdad que si dichas conclusiones no son variadas en el acto del juicio oral se convierten *ipso facto* en definitivas, que son las únicas á que la Ley atribuye valor y eficacia, debiendo el Tribunal sentenciador atenerse á ellas;

*Considerando:* Que declarada por la Audiencia la nulidad de las primeras conclusiones provisionales y pasada nuevamente al Fiscal la causa, formuló éste nuevas conclusiones que se convirtieron en definitivas en las cuales consideró que el hecho realizado por González Barrera constituía un delito de disparo de arma de fuego y otro de lesiones menos graves previstos y castigados respectivamente en los artículos cuatrocientos veinte y uno y cuatrocientos treinta y dos del Código, en armonía con lo dispuesto en el artículo ochenta y ocho del mismo, pidiéndose en su consecuencia se impusiera al procesado la pena de tres años, cuatro meses y ocho días de prisión correccional, accesorias, costas é indemnización y, á falta de esta, el apremio personal; y el Tribunal *a quo* en su sentencia de diez y ocho de Septiembre próximo pasado no ha discrepado de la acusación Fiscal, por todo lo cual salta á la vista que no se ha penado un delito más grave que el que ha sido objeto de aquella, no habiéndose por consiguiente incurrido en el quebrantamiento de forma determinado en el número tercero del artículo novecientos doce de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en que se funda el recurso;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lu-

gar al recurso de casación que por quebrantamiento de forma se ha interpuesto contra la expresada sentencia de la Audiencia de Santiago de Cuba por la representación de Néstor González, conocido por Barrera, condenando á éste en las costas; con certificación de la presente devuélvase el rollo de la causa á dicha Audiencia para lo que proceda; y se advierte á ésta que en lo sucesivo se abstenga de dictar autos de la índole del de catorce de Junio último, en que se declaró de oficio la nulidad de determinadas actuaciones, pues para enmendar legalmente errores que pueden cometerse en las calificaciones Fiscales está la facultad excepcional que ofrece á las Audiencias el uso moderado del artículo setecientos treinta y tres de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, por esta sentencia, que se comunicará á la referida Audiencia de Santiago de Cuba por medio de la oportuna certificación á los efectos legales, librándose además copias autorizadas á la Secretaría de Justicia para la Colección á su cargo y á la *Gaceta de la Habana* para su publicación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---



## JURISPRUDENCIA CIVIL.

1899

RITA LÓPEZ, COMO APODERADA DE CONCEPCIÓN ORTIZ, CONTRA EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE LA HABANA.

Resolución de la Sección de los Registros y del Notariado de 20 de Abril de 1899.

*Apelación contra la resolución del Presidente de la Audiencia de la Habana de 11 de Marzo de 1899.*

### ANOTACION DE EMBARGO DE INMUEBLE PERTENECIENTE A MUJER CASADA.

Decretado el embargo de cierta finca y librado mandamiento al Registrador de la Propiedad mencionado para que tomase anotación de dicho embargo, fué negado por éste, devolviendo el mandamiento con la nota de no admitida la anotación por estar inscrita la finca á nombre de doña Belén Amalia Molina y Smitt, esposa del deudor, sin que conste del Registro el carácter que tenga la finca embargada.

Declarado sin lugar el recurso por el Presidente de la Audiencia, fué apelada dicha resolución, revocándose la nota del Registrador y disponiéndose la anotación del embargo por estar inscrita la finca á nombre de la esposa del deudor que la había adquirido á título oneroso; fundándose en que los bienes adquiridos por uno de los cónyuges durante el matrimonio tienen el carácter de gananciales mientras no conste ó se pruebe lo contrario.

Por la Sección de los Registros y del Notariado de la Secretaría de Justicia é Instrucción Pública, con fecha 20 del corriente se comunica á la Presidencia de este Tribunal, la resolución siguiente:

SEÑOR: En el recurso gubernativo promovido por Doña Rita López, como apoderada de Doña Concepción Ortiz, contra la negativa del Registrador de la propiedad de la Habana, á anotar un embargo decretado por el Juez de Primera Instancia

del distrito de la Catedral, sobre la casa número 594 de la Calzada del Cerro en esta ciudad;

*Resultando:* que en 28 de Septiembre de 1898, el Juez de Primera Instancia del distrito de la Catedral de esta ciudad, á consecuencia del juicio de menor cuantía que por ante el Escribano D. Francisco de Castro, sigue Doña Concepción Ortiz y Gómez, contra D. José Francisco Ramírez de Estenoz, libró mandamiento por duplicado al Registrador de la Propiedad de la misma, para que tomase anotación preventiva del embargo trabado sobre la casa Calzada del Cerro número 594, por las cantidades que se determinan, debiendo llevar á cabo la anotación bien estuviese inscripta la finca á nombre del demandado ó en el de su esposa Doña Belén Amalia Molina, por haberse designado la finca como bienes gananciales de los cónyuges;

*Resultando:* que en el mismo día 28 de Septiembre devolvió el Registrador el mandamiento con la nota de no admitida la anotación por estar inscripta la finca á nombre de Doña Belén Amalia Molina y Smitt, esposa del deudor, sin que conste del Registro el carácter que tenga la finca embargada, manifestando el Juez en oficio de 11 de Noviembre á virtud de orden de aquél, que la negativa de admisión descansaba en lo que dispone la Regla primera del artículo 92 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria;

*Resultando:* que contra la negativa del Registrador en 10 de Diciembre último, ultimó la Ortiz, por medio de su mandatario Doña Rita López, ante el Presidente de la Audiencia de este territorio, el recurso gubernativo que concede el artículo 120 de dicho Reglamento, alegando que la disposición legal en que se funda el Registrador para su negativa es improcedente, porque no apareciendo del Registro el carácter que tiene la finca, había que considerarla como bienes gananciales conforme al artículo 1407 del Código Civil;

*Resultando:* que el Presidente de la Audiencia denegó la admisión del recurso por no haberse acompañado al escrito en que se interpuso, los documentos que justificasen los hechos á que el mismo se refiere y que cumplida esa formalidad en 9 del mismo mes antes citado, se mandó oír al Juez de Primera Instancia del distrito de la Catedral y al Registrador de Occidente de esta ciudad, por la división practicada del territorio del Registro de la misma;

*Resultando:* que el Juez de Primera Instancia evacuó el traslado manifestando que librado en el juicio de referencia mandamiento al Registrador para que anotase el embargo, no lo admitió por estar inscripta la finca á nombre de persona dis-

tinta del deudor; que el actor presentó escrito manifestando que la finca estaba inscripta á favor de Doña María Luisa Finlay; pero que esa señora la vendió en 1893 á Doña Belén Amalia Molina, esposa del deudor, por lo que á título de gananciales, pertenece á éste la mitad por haberse disuelto la sociedad conyugal, por el fallecimiento de su esposa;

*Resultando:* que llevado á los autos el testimonio de la escritura que acredita esos hechos, se libró al Registrador, con los insertos necesarios, el mandamiento á que recayó la nota que motiva el recurso y que al expedir dicho mandamiento se tuvo presente la disposición del artículo 1407, del Código Civil, según el cual debe reputarse como bienes gananciales la finca embargada por no constar su carácter en el Registro y que en esta virtud debió tomarse por el Registrador la anotación preventiva ordenada;

*Resultando:* que el Registrador de Occidente en 20 de Diciembre, expuso que por carecer de antecedentes que solicitaba del Registrador del Mediodía, no podía evacuar el traslado; que en 3 de Enero siguiente manifestó que á las doce de dicho día había recibido del expresado Registrador, certificación literal del asiento hecho al folio 66 vuelto, del tomo 47 del Diario, referente al mandamiento, y que inmediatamente lo había trasladado al Diario de su oficina, y que como en el asiento no se hacía constar la interposición del recurso lo consignaba al margen: que dicho Registrador el día 24 del propio mes de Enero, solicitó se le remitiera el expediente para poder evacuar el traslado, lo que se verificó en 7 de Febrero; y que en 20 del mismo mes lo evacuó el Registrador, manifestando que confirma y ratifica la calificación hecha en la nota del 29 de Septiembre, por estar ajustada á la regla primera del artículo 92 del Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, en consonancia con el artículo 97 del mismo Reglamento, por cuanto las facultades concedidas á los Registradores, para la calificación de los documentos, no alcanza para resolver cuestiones de derecho, sino para conocer contra qué persona se haya decretado el embargo, razón por la que en dicho artículo 97 se dispone la inserción en el mandamiento de la providencia en que se hubiera decretado el embargo, y que mientras no se modificase la providencia decretando el embargo en los bienes de la Molina, no podía llevarse á cabo la anotación;

*Resultando:* que el Presidente de la Audiencia en resolución de 11 de Marzo, declaró no haber lugar al recurso fundado en que según los artículos 18, párrafo segundo; 20, 42, caso segundo de la ley Hipotecaria y regla primera del artículo 92 del



Reglamento, cuando la propiedad de la finca embargada estuviese inscrita á nombre de persona que no sea aquella contra quien se hubiese decretado el embargo, se denegará la anotación; que decretando el embargo contra bienes de persona que no los tiene inscritos en el Registro y no habiéndose modificado la providencia que así lo ordena, la negativa del Registrador es legal, y que el fallecimiento de Doña Belén Amalia Molina, y la doctrina alegada sobre bienes gananciales, no son bastantes para deducir que á Ramírez Estenoz corresponde la finca inscrita á nombre de su esposa, mientras no se liquide en forma la sociedad de gananciales y se inscriban las adjudicaciones en el Registro;

*Resultando:* que apelada dicha resolución se elevó el expediente á esta sección de los Registros y del Notariado, la que para mejor proveer, dispuso se elevase por el Registrador copia literal de la inscripción de la finca, á nombre de la Sra. Molina; apareciendo de la copia que la inscripción con el número 2,344 fué extendida en 12 de Mayo de 1897, en vista de la escritura de compra-venta otorgada en 9 de Junio de 1903, por doña María Luisa Finlay de Borrés, á favor de Doña Belén Amalia Molina y Smitt, casada con D. José Francisco Ramírez y Estenoz, sin que se hiciese constar ni se aluda al carácter de la parte del precio que se abonó de contado; resultando de la inscripción tercera de la finca, la fecha de la cual no se menciona, que aquella ha sido adjudicada á los herederos de la Sra. Molina;

Vistos los artículos 1401, número 1; 1407, 1408, 1412 y 1413 del Código Civil y las resoluciones de la Dirección de los Registros de 30 de Junio de 1898 y de 8 de Noviembre de 1882;

*Considerando:* que tiene el carácter de gananciales los bienes adquiridos á título oneroso durante el matrimonio á costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos y que para que lo adquirido en tal forma tenga otro carácter, es preciso que se pruebe, sin que basten simples manifestaciones, que pertenecen privativamente al marido ó la mujer; porque de otra suerte serán árbítrios los esposos de burlar el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre los bienes gananciales, entre los que se cuentan las contraídas por marido durante el matrimonio;

*Considerando:* que admitida por Doña Belén Amalia Molina, constante su matrimonio con D. José Francisco Ramírez de Estenoz, la casa número 594 de la Calzada del Cerro, á título oneroso, sin que especificación probada ni tan siquiera mencionada, de que el precio de la compra procedía de bienes privativos de dicha señora, la finca en cuestión tenía de derecho el

carácter de bienes gananciales, pues el Registrador sin dicho antecedente no podía atribuirle otra denominación y respondía á las obligaciones contraídas por Ramírez de Estenoz;

*Considerando:* que en virtud de lo expuesto, expedido el mandamiento de 28 de Septiembre, para que se anotase el embargo sobre la finca de referencia, á fin de asegurar responsabilidades del esposo de la Sra. Molina, no podía el Registrador, para no admitir la anotación alegar el precepto de la regla primera del artículo 92 del Reglamento; porque de la misma inscripción resulta que la finca embargada podía serlo por deudas contraídas por aquél contra el cual el mandamiento de embargo estaba expedido;

*Considerando:* que la disposición que el Registrador de Occidente cita en relación con el artículo 92 del Reglamento, no tiene aplicación tampoco al caso presente; porque de autos consta que el mandamiento de 28 de Septiembre se libró acompañándole certificación con los insertos necesarios y además no la pretextó el Registrador del antiguo territorio de esta ciudad, para no admitir la anotación, y que si el Registrador de Occidente no los ha tenido á la vista ha sido por no haberlo reclamado como era su deber. Esta Sección ha resuelto con revocación de la providencia apelada y de la nota del Registrador de la Propiedad, declarar que procede la anotación de embargo dispuesta por estar inscrita la finca á nombre de Doña Belén Amalia Molina, que aparece del Registro haberla adquirido á título oneroso con el consentimiento de su esposo D. José Francisco Ramírez de Estenoz y tener carácter de bienes gananciales.—Habana, 20 de Abril de 1899.—El Jefe de Sección de los Registros y del Notariado, Juan A. Lliteras.

---

FELIPE TOBIAS MANZANARES CONTRA MANUEL M.<sup>a</sup> Y MARÍA JOSEFA RAMOS IZQUIERDO Y DIAGO Y FRANCISCO RAMOS IZQUIERDO.

Auto de 9 de Junio de 1899.

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Felipe Tobías Manzanares contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el 29 de Enero de 1898.*

#### COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.

No ha lugar á proveer acerca de la admisión de dicho recurso, por aparecer que las partes habían sido citadas y

emplazadas para ante el Tribunal Supremo de España, con fecha 30 de Diciembre de 1898, por lo cual el Tribunal Supremo de esta Isla no tenía competencia para conocer de este asunto.

*Resultando:* que el Procurador Juan Mayorga á nombre de Felipe Tobías Manzanares presentó escrito á este Tribunal, fecha primero de los corrientes, consignando lo hacía en la tercería de dominio establecida por Manuel María y María Josefa Ramos Izquierdo y Diago á los ejecutivos seguidos por dicho Manzanares contra la sucesión de Francisco Ramos Izquierdo, y que en la Secretaría de Justicia tenía presentado un escrito, acompañado de los documentos del caso, formalizando casación por infracción de ley, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en dicho litigio;

*Resultando:* que en el escrito mencionado en el párrafo anterior, se relata, que la Audiencia de la Habana, en veinte y nueve de Enero de mil ochocientos noventa y ocho, dictó sentencia confirmatoria de la del Juez de Guanabacoa, que había declarado con lugar la tercería, habiendo el recurrente preparado en tiempo el recurso de casación por infracción de ley, á cuyo efecto la Audiencia dispuso, á fines de Febrero ó principios de Marzo del mismo año, se expidieran las certificaciones de ambas sentencias, las cuales, sin gestión alguna de su parte le fueron entregadas en treinta de Diciembre siguiente, citándole y emplazándole para acudir á interponer el recurso ante el Tribunal Supremo de España, pero entendiendo que no era procedente ni legal someter á dicho Tribunal cuestiones de derecho, cuando ya era un hecho la cesación de la soberanía de España en esta Isla, acudió al General Brooke y á la Audiencia pidiendo se declarara en suspenso el término, y no habiendo resuelto el primero y negada por la segunda esta pretensión, presentó dentro del término en la Secretaría de Justicia escrito formalizando la casación y con el recibo de éste acudió á la Audiencia para justificar la interposición del recurso, y ese Tribunal ordenó que el Secretario certificara si dentro del término legal había interpuesto dicho recurso ante el Tribunal Supremo de España y visto el informe negativo declaró firme la sentencia, mandó devolver los autos para su cumplimiento; y se pide, en virtud de estos hechos que este Tribunal Supremo, reclame de la Secretaría de Justicia el escrito y documentos referidos, se ordene á la Audiencia abstenerse de declarar desierto el recurso de casación intentado, el cual se tenga por establecido y se mande á sustanciar;

*Resultando:* que la Secretaría de Justicia ha remitido á



este Tribunal, para la resolución procedente, el escrito presentado el cuatro de Marzo último en dicha Secretaría por el Procurador Mayorga, dirigido al Tribunal Supremo de la Isla de Cuba, formalizando recurso de casación por infracción de ley en el juicio referido en el primer Resultando y acompañando testimonio de poder y copia certificada de las sentencias de primera y segunda instancias expedida por el Secretario de la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta Capital, constando al pie de la copia una diligencia fecha treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, justificativa de haber sido citada y emplazada la parte recurrente por término de sesenta días para ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y notificado que el apuntamiento y certificaciones del caso, se remitían á la Península por el correo de la Compañía Trasatlántica que salía de este puerto ese día;

*Considerando:* que el emplazamiento hecho en forma, y aceptado para ante Tribunal competente obliga á la parte á quien se hace á comparecer dentro del término ante dicho Tribunal y no ante otro alguno, salvo el caso que por precepto expreso de la Ley se ordenara lo contrario;

*Considerando:* que inaugurado este Tribunal el día primero del actual, no existía el día del emplazamiento, ni durante todo el término del mismo y en su Decreto de constitución no se le atribuye competencia para conocer de recursos para la formalización de los cuales, las partes hubieran sido emplazadas antes de la cesación de la soberanía española en esta Isla y para ante el Tribunal Supremo de España;

*Considerando:* que no sólo no existe Ley que otorgue competencia en este caso á este Tribunal, sino que el artículo doce del Tratado celebrado en Paris en diez de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho entre España y los Estados Unidos de América explícitamente previene que los pleitos civiles no terminados á la fecha del canje de ratificaciones, que tuvo efecto el once de Abril de mil ochocientos noventa y nueve, continuarán su tramitación en el Tribunal ante el cual se hallare el proceso y es evidente que emplazado el recurrente en treinta de Diciembre y en esta fecha remitido por correo á España los documentos dispuestos por la Ley para formalizar el recurso, este legalmente pudo y debió establecerse ante el Tribunal Supremo de aquella nación y no esperar á la constitución del de esta Isla;

*No ha lugar* á proveer acerca de la admisión del recurso de casación interpuesto por el Procurador Mayorga en sus escritos de cuatro de Marzo y primero del actual, contra la sen-

tencia dictada por la Audiencia de la Habana en los autos á que el presente se refiere y por consiguiente no ha lugar á librar orden á dicha Audiencia para que se abstenga de proveer en el referido pleito, como se solicita en el primero de dichos escritos.

Lo proveyeron y firman los Magistrados de la Sala que al margen se expresan, lo que certifico.—Antonio González Mendoza.—Pedro González Llorente.—José M. García Montes.—Rafael Cruz Pérez.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, Federico García Ramis.

Y para hacerlo constar en este Libro, extendiendo la presente certificación, en la Habana, á diez y ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.—Federico García Ramis.

---

HEREDEROS DE DOMINGO MARCELO BARRERA CONTRA MANUEL LATASA.

Auto de 2 de Agosto de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por la representación de los herederos de Domingo Marcelo Barrera contra el auto de la Audiencia de Matanzas de 20 de Febrero de 1899.*

### ENTERO Y POSESION DE TERRENOS.

No ha lugar á proveer por estar aún en suspenso el procedimiento en virtud del auto en que se señaló el término de sesenta días para que la parte pudiera ejercitar su derecho dentro del que se señalase para interponer el recurso de casación ó de queja: sin que sea posible por el simple criterio de una parte entender que pueda abrirse un término judicialmente suspendido para todas ellas.

*Resultando:* que obtenidos por D. Manuel Latasa y Goicoechea, en diligencias cursadas ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa Clara el entero y posesión de determinados terrenos pertenecientes al realengo de "San Bartolomé" y expedida conforme á providencia de veinte y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro, certificación de antecedentes para practicar la inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad, á la pretensión de Latasa se opusieron en seis de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco, Domingo Marcelo y otros, solicitando que se declarara contencioso el expediente y se dejase sin efecto el entero concedido, cuya solicitud fué denegada por auto del Juzgado de seis de Abril del mismo año y

declarada sin lugar por auto de veinte y uno del siguiente Mayo la reposición que se pidió, interponiéndose en seguida por Marcelo y compartes, el recurso de apelación contra ambos autos y sustanciado este por la Audiencia territorial de Matanzas se decidió en tres de Febrero del año actual no haber lugar á hacer declaratoria alguna sobre la naturaleza contenciosa ó voluntaria del expediente, ni á dejar sin efecto el entero y posesión dada á Latasa, con reserva á los apelantes del derecho de que estuvieren asistidos para hacer uso de él en la vía y forma correspondientes;

*Resultando:* que contra el referido auto de la Audiencia de Matanzas, manifestó la representación de los apelantes su intención de establecer recurso de casación por infracción de ley, pidiendo se le expidiera para comparecer ante el Tribunal competente certificación de las resoluciones dictadas en primera y segunda instancias, lo que le fué negado por la propia Audiencia en auto del día diez del mismo mes de Febrero próximo pasado, del cual se le dió copia certificada conforme á lo establecido en el artículo mil setecientos uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que, á instancia de la propia parte recurrente dictó la mencionada Audiencia, en veinte del referido mes de Febrero último, auto suspendiendo el curso del término de sesenta días concedido á aquel por el artículo expresado para reclamar en queja ante el Tribunal Supremo hasta que estuviese expedito los medios de ejercitar ese derecho, para que lo efectuase dentro del término, forma y modo que en definitiva se acordaron por la autoridad competente; y, sin que el término se haya abierto nuevamente, ni exista resolución alguna posterior del Tribunal que lo declaró suspenso, estimando la parte que comenzó á correr de nuevo desde la fecha en que se constituyó este Tribunal Supremo, ante él ha comparecido dentro de los sesenta días, estableciendo el recurso de queja, por su escrito de veinte y nueve del pasado Julio;

*Considerando:* que publicada oficialmente en catorce de Julio último y vigente desde su publicación, según la Orden número ciento cuarenta y cuatro del Gobernador Militar de Cuba, la Orden número noventa y dos de fecha veinte y seis de Julio anterior, que regula el procedimiento relativo á los recursos de casación y queja, á sus preceptos, y no á los de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aquella expresamente derogados, deben ajustarse desde entonces los litigantes tanto como los Tribunales de Justicia;

*Considerando:* que por no ser posible sin prejuzgar la que-



ja estimar, al tiempo que esta se establece, si el auto ó sentencia contra que se haya interpuesto ó preparado casación es ó no legalmente susceptible del recurso, manifestada que haya sido por parte legítima la intención de interponerlo cuando se trata de infracción de ley, y no existiendo emplazamiento anterior al once de Abril del corriente año, como sucede en el presente caso, puesto que el emplazamiento sólo sería pertinente luego que se declarase con lugar la queja que aún no se ha sustanciado, es de necesaria aplicación la regla que contiene el artículo ciento ocho de la expresada Orden de veinte y seis de Junio;

*Considerando:* que, aun cuando la modificación introducida en cuanto al término para comparecer ante este Tribunal por la vigente orden del Gobernador Militar con relación á la en este punto derogada Ley de Enjuiciamiento Civil no hubiese de afectar al derecho de la parte recurrente, por más que ésta consintió el auto dictado en veinte de Febrero por la Audiencia de Matanzas, que suspendió el curso de los sesenta días para que la parte ejercitara aquel derecho dentro del término que en definitiva se acordase por la Autoridad competente, es indudable que el término de sesenta días que se pretende utilizar ahora está en suspenso aún, dado que por decisión judicial no se ha declarado nuevamente en curso, sin lo cual y por el simple criterio de una parte no cabe entender que pueda en ningún procedimiento abrirse para todos los interesados cualquier término judicialmente suspendido, y mucho menos al tratarse del recurso de queja, en cuya sustanciación concede á todas las partes la reforma procesal recientemente introducida una intervención que no tenían con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Considerando:* que según los precedentes fundamentos, no ha llegado todavía la oportunidad de sustanciar el recurso de queja presentado, mientras por otra parte, no competen á este Tribunal las actuaciones necesarias para llegarse á tal oportunidad;

*No ha lugar* á proveer pudiendo los comparecientes representar ante la Audiencia de Matanzas según convenga á su derecho.

Proveído y firmado por los Magistrados anotados al margen.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—José M. García Montes.—Rafael Cruz Pérez.—Eudaldo Tamayo.—Octavio Giberga.—Ante mí, Federico García Ramis.

Y para hacerlo constar en este libro extendiendo la presente en la Habana, á diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.—Federico García Ramis.

GABRIEL PEDROSO Y CÁRDENAS. PROCURADOR NICOLÁS STERLING  
SOBRE PRESENTACIÓN DE ESCRITURA DE PODER.

Auto de 2 de Agosto de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Nicolás Sterling contra el auto de la Audiencia de la Habana, dictado en 5 de Junio de 1899.*

### PRESENTACION DE ESCRITURA DE PODER.

Se declara no haber lugar á tener por parte á Nicolás Sterling como representante de Gabriel Pedroso y Cárdenas por no presentar escritura en forma que acredite su representación; ni poderse subsanar la omisión con una simple certificación acreditativa de que es procurador en los autos; ni ser procedente librar carta-orden á la Audiencia para que remita copia certificada del poder, puesto que la Ley taxativamente señala como único y exclusivo en el caso de que se trata, la presentación de la escritura de mandato.

*Resultando:* que Nicolás Sterling por escrito fechado en veintinueve del mes de Julio último, que también aparece firmado por Gabriel Pedroso y Cárdenas, interpone ante este Tribunal como representante del último recurso de queja contra el auto de la Audiencia de la Habana, dictado en cinco de Junio próximo pasado, desestimando el de casación por quebrantamiento de forma que dicho Sterling estableció en veintinueve de Mayo del año actual, y no acompaña el poder que acredite su representación, pidiendo en el otrosí de su escrito, que se le tenga por parte á nombre de Pedroso y Cárdenas, toda vez que de la certificación que acompaña, en observancia de lo dispuesto en el artículo diez y ocho de la vigente Ley de Casación, aparece que es el Procurador en los autos; pero que si se estimase necesario que en este Tribunal conste el mandato, suplica se libre carta-orden á la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad para que remita copia certificada del mismo y en su virtud se le tenga por parte;

*Considerando:* que en virtud de lo dispuesto en el artículo diez y nueve de la Ley de Casación citada, Nicolás Sterling, que es quien pide que se le tenga por parte como representante en juicio civil de Gabriel Pedroso y Cárdenas, ha debido presentar escritura en forma que acreditase su representación; no pudiendo subsanarse su omisión por ninguno de los dos modos que indica en el otrosí de su escrito, á que se refiere el anterior Resultando, ni por otro alguno, puesto que la Ley taxativamente señala, como único y exclusivo en el caso de que se trata, la presentación de la escritura de mandato;

SE DECLARA no haber lugar á tener por parte á Nicolás Sterling ni, por tanto, á la admisión del recurso de queja que establece en su mencionado escrito de veintinueve de Julio último y comuníquese esta resolución á la Audiencia de la Habana para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados que al margen se expresan, lo que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—José M. García Montes.—Rafael Cruz Pérez.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Gíberga.—Ante mí, Federico García Ramis.

Y para hacerlo constar en este libro, extendiendo la presente certificación en la Habana, á diez y ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.—Federico García Ramis.—Hay una rúbrica.

---

ROSA PLANAS CONTRA LA SUCESIÓN DE JOSÉ ROFF.

Auto de 12 de Agosto de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Rosa Planas contra el auto dictado por la Audiencia de la Habana en 7 de Junio de 1899.*

#### INCIDENTE SOBRE NULIDAD DE ACTUACIONES.

Se declara no haber lugar á proveer en el presente recurso por no haber llegado la oportunidad legal para conocer del mismo y no tener competencia el Tribunal para sustanciar las diligencias necesarias para llegar á ese trámite, pudiendo la parte recurrir á la Audiencia á hacer uso de su derecho.

*Resultando:* que, interpuesto por el procurador Juan Mayorga, á nombre de Rosa Planas, en incidente sobre nulidad de actuaciones pertenecientes á la testamentaria de José Roff, recurso de apelación contra una resolución del Juez y admitido que fué el recurso en un efecto, por haber durante la sustanciación renunciado el Procurador Mayorga el poder con que representaba y transcurrido sin ser utilizado el término que la Sala de la Audiencia de la Habana señaló para que se constituyera nueva representación, dictó aquella en veinte de Abril del corriente año auto declarando decaído el derecho del apelante, contra cuyo auto recurrió en súplica la última por medio del Procurador Esteban de la Tejera, que se personó al efecto, y la Sala declaró sin lugar dicho recurso;

*Resultando:* que contra el referido auto de la Audiencia de



la Habana manifestó en tiempo la representación del apelante su propósito de establecer recurso de casación por infracción de Ley, solicitando que se le expidiera la correspondiente certificación para comparecer ante el Tribunal Supremo, lo que le fué negado por la propia Audiencia en auto del día siete del mes de Junio próximo pasado, del cual se le dió con fecha doce del propio mes copia certificada en forma con arreglo al artículo mil setecientos uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que el día nueve del corriente mes se ha presentado ante este Tribunal escrito de Letrado, suscrito conjuntamente por el Procurador Esteban de la Tejera y por Rosa Planas, con fecha del anterior día ocho, por el cual se establece recurso de queja contra el auto denegatorio de siete de Junio, cuya copia certificada se acompaña, pidiéndose la resolución de este recurso de conformidad con el artículo mil setecientos tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y por otrosíes del mismo escrito primero, se hace la manifestación de presentarse este recurso dentro de los sesenta días á que se contrae el artículo mil setecientos uno de la mencionada ley; segundo, se hace la manifestación de haber tenido efecto en la antedicha Audiencia determinadas actuaciones, con el propósito, por parte de la recurrente de acomodar este recurso á los preceptos de la Orden del Gobernador Militar de Cuba publicada en la *Gaceta* del día catorce de Julio de este año, y se acompaña copia simple, no autorizada, de un auto que se dice pronunciado por la expresada Audiencia en veinte y seis del mismo mes de Julio, desestimando la pretensión con aquel intento formulada por la parte, contra cuyo auto se recurre también en queja y consiguientemente se solicita, de este Tribunal, que ordene á dicha Audiencia practique la nueva notificación de sus autos de veinte de Abril y siete de Junio ya enunciados; y tercero, se hace la manifestación de que Rosa Planas firma el escrito dirigido á este Tribunal, á pesar de constar por los documentos acompañados el carácter del procurador Tejera, para que no se dude de la personalidad de éste, y en todo caso pueda darse curso á la queja, por la comparecencia personal de la primera;

*Considerando:* que, publicada oficialmente en catorce de Julio último, y vigente desde su publicación, según la Orden número ciento cuarenta y cuatro del Gobernador Militar de Cuba, la Orden número noventa y dos, de fecha veinte y seis de Junio anterior, que regula el procedimiento relativo á los recursos de casación y queja, á sus preceptos, y no á los de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aquella expresamente deroga-

dos, deben ajustarse desde entonces las personas interesadas en el juicio, tanto como los Tribunales de Justicia;

*Considerando:* que por virtud de la reforma procesal recientemente introducida, se concede á las partes del juicio una intervención que anteriormente no tenían para la decisión de los recursos de esta clase, de donde surge la necesidad de notificar á todas las demás la manifestación de la parte recurrente relativa á su propósito de recurrir en queja; sin que por la sola circunstancia de haberse el recurso preparado conforme á la Ley antes vigente pueda privarse á las partes en el mismo interesadas del derecho que les cabe dentro de la sustanciación actual, ni omitirse trámite ó diligencia que sea indispensable á su ejercicio;

*Considerando:* que por no ser posible, sin prejuzgar la queja, estimar definitivamente al tiempo de su presentación, ante este Tribunal, que la sentencia ó auto contra que se haya éste interpuesto ó preparado casación no es susceptible de tal recurso, debe bastar que se haya este interpuesto, cuando se trate de quebrantamiento de forma, ó manifestado la intención de interponerlo, cuando se trate de infracción de ley ó de doctrina legal, y que no exista emplazamiento anterior al once de Abril del corriente año, como sucede en el presente caso, puesto que el emplazamiento sólo sería pertinente luego que se declarase con lugar la queja, que aún no se ha sustanciado, para que sea de necesaria aplicación la regla que contiene el artículo ciento ocho de la expresada Orden número noventa y dos;

*Considerando:* que según los precedentes fundamentos, no ha llegado la oportunidad legal de sustanciar el recurso de queja presentado contra el auto denegatorio de siete de Junio último, mientras, por otra parte, no son de la competencia de este Tribunal las actuaciones necesarias para llegarse á tal oportunidad;

*Considerando:* que tampoco puede este Tribunal dictar resolución alguna tocante á actuaciones judiciales que no vengan legalmente á su conocimiento;

*Considerando:* que, siendo improcedente la inmediata sustanciación del recurso presentado, lo es asimismo toda declaración que se refiera á la personalidad del recurrente;

*No ha lugar* á proveer, pudiendo la parte recurrente representar ante la Audiencia de la Habana según convenga á su derecho.

Lo proveyeron y firman los Magistrados que al margen se expresan, lo certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—José M. García Montes.—Rafael Cruz Pé-

rez.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Gibergera.—Ante mí, Federico García Ramis.

El Presidente forma voto particular en el sentido de que si bien no ha lugar á proveer, es solo porque Rosa Planas no ha comparecido por sí misma, ó sea en persona á presentar el escrito con el recurso de queja ni acompañando escritura de poder en forma, únicos medios que autoriza la vigente Ley de Casación, en su artículo diez y nueve.—Habana, doce de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve.—Antonio González de Mendoza.

Y para hacerlo constar en este libro, pongo en el mismo esta certificación, en la Habana, á diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.—Federico García Ramis.

---

HIPÓLITO ANDRÉS GARCÍA CONTRA FRANCISCA LÓPEZ GUAS.

**Auto de 29 de Agosto de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Hipólito Andrés García contra el auto de la Audiencia de la Habana, dictado en 28 de Julio de 1899.*

### JUICIO DE MENOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.

En los juicios de menor cuantía no se dá el recurso de casación por infracción de Ley ó de doctrina.

La sentencia que declara subsistente un embargo preventivo, ni pone término al juicio ni hace imposible su continuación, por lo cual no es definitiva.

No dándose el recurso por infracción de ley en el juicio principal de menor cuantía, mal puede darse en su incidente.

*Resultando:* que en el Juzgado de Primera Instancia del distrito de la Catedral de esta ciudad Hipólito Anés García promovió juicio de menor cuantía en cobro de pesos contra Francisca López Guás y por un otrosí del escrito de demanda pidió el embargo preventivo de una casa, al cual se accedió; que á instancia de la parte demandada se dejó sin efecto el embargo por auto de veinte y siete de Octubre último, de cuyo auto y del de veinte y uno de Noviembre siguiente, en que se declaró sin lugar la reposición del primero, se estableció apelación para ante la Audiencia de la Habana, la cual por auto de diez y siete de Julio próximo anterior revocó los apelados y declaró subsistente el embargo con las costas de la primera ins-



tancia á cargo de la parte demandada, sin especial condenación respecto á las costas de segunda instancia;

*Resultando:* que el procurador Joaquín González Sarraín, en nombre de la parte demandada, interpuso contra el auto de diez y siete de Julio recurso de casación por infracción de ley, citando como quebrantado el artículo mil cuatrocientos nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que la Sala de la Audiencia por considerar que la resolución recurrida no tiene el carácter de definitiva, pues se ha dictado en incidente á un juicio de menor cuantía, no le pone término ni puede ser separada de la naturaleza del mismo, y contra dicha resolución, por tanto, no cabe el recurso por infracción de ley, con arreglo á los casos primeros de los artículos mil seiscientos ochenta y ocho y mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declaró, según los artículos once y catorce de la vigente Ley de casación, sin lugar la admisión del recurso interpuesto por el Procurador González Sarraín, y ordenó se diese á éste la certificación necesaria para que pudiera recurrir en queja ante el Tribunal Supremo;

*Resultando:* que, personado ante este Tribunal Supremo el mencionado Procurador González Sarraín, y, previos los trámites legales, se celebró la vista, en la que informaron el defensor de la parte recurrente y el representante del Ministerio Fiscal;

*Considerando:* que, según el artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se da recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal en los juicios de menor cuantía;

*Considerando:* que, según el artículo mil seiscientos ochenta y ocho de la propia Ley, tienen el concepto de sentencias definitivas para que haya lugar al recurso de casación, las que recaeando sobre un incidente ó artículo, ponen término al pleito, haciendo imposible su continuación; y el auto que declara subsistente un embargo preventivo, no pone término al pleito, haciendo imposible su continuación, ni obstruye el seguimiento del mismo, por lo cual no tiene el carácter de sentencia definitiva;

*Considerando:* que aunque la resolución recurrida tuviese aquel carácter, que no tiene, de sentencia definitiva, pusiera término, que no pone, al litigio, é imposibilitara la continuación, que no imposibilita, del mismo; como contra la sentencia definitiva del pleito principal, que pondría término á este y haría imposible su continuación, no se daría recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal, por estar esa senten-

cia dictada en juicio de menor cuantía, respecto á los cuales es absoluta la negativa expresada en el artículo mil seiscientos noventa y dos de la ley; en razonamiento jurídico y lógico se haría inexplicable que no dándose el recurso contra la sentencia pronunciada en lo principal, se diera contra la dictada en el incidente, cuando la una y la otra correspondían al mismo juicio, estaban encerradas en la misma esfera de la menor cuantía y sujetas al mismo general precepto del artículo últimamente mencionado;

*Se declara sin lugar* el recurso de queja interpuesto por el Procurador Joaquín González Sarraín á nombre de Carlos López, marido y representante legal de Francisca López Guás, contra el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana el veinte y ocho de Julio último, en que declaró no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley; se condena en las costas al recurrente; y comuníquese á la Audiencia para los efectos legales.

Lo proveyeron y firman los Magistrados que al margen se expresan, lo certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—José M. García Montes.—Rafael Cruz Pérez.—Eudaldo Tamayo.—Ángel C. Betancourt.—Octavio Gibergera.—Ante mí, Federico García Ramis.

---

JOSEFA ROLDÁN Y FERNÁNDEZ, COMO TUTORA DE SUS NIETOS, CONTRA GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA.

Sentencia núm. 1 (14 de Septiembre de 1899).

*Inhibitoria promovida por Gonzalo Fernández de Córdoba ante el Juez Municipal del Pilar para que requiriese de inhibición al de Cárdenas, por ser él competente para conocer de la demanda interpuesta por la Sra. Roldán y Fernández.*

### COMPETENCIA DE JURISDICCION.

Cuando se ejercitan acciones personales, es Juez competente, á falta de sumisión expresa ó tácita, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, el del lugar en que se celebró, aunque se encontrare accidentalmente allí el demandado, ó el de su domicilio; y no constando los dos particulares anteriores, corresponde conocer del asunto al del domicilio del demandado; y no procede la condena de costas cuando sólo se utiliza la inhibitoria ó la declinatoria, aunque se

omita manifestar al hacerlo que no se ha hecho uso del otro medio.

En la ciudad de la Habana, á catorce de Septiembre de mil ochocientos noventa y nueve, en la cuestión de competencia pendiente ante este Supremo Tribunal, promovida por inhibitoria por el Juez Municipal del Distrito del Pilar, de esta ciudad, al de igual clase de la de Cárdenas, en el juicio verbal establecido ante este por Josefa Roldán y Fernández, como tutora legítima de sus nietos Juan y Genoveva de la Fe y Trujillo, contra Gonzalo Fernández de Córdova, en cobro de pesos, sustanciada con solo la audiencia del Ministerio fiscal, por no haber comparecido ninguna de las partes;

*Resultando:* que Josefa Roldán, vecina de Cárdenas, como tutora de sus nietos menores Juan y Genoveva de la Fe y Trujillo, demandó ante el Juez Municipal de aquella ciudad, en juicio verbal, á Gonzalo Fernández de Córdova, vecino de la casa número ciento treinta y uno de la calle de la Zanja, en esta capital, para que se le condenara al pago de noventa pesos plata que era en deber á dichos menores, como herederos de su difunta madre Laura Trujillo y Roldán, resto del precio de tres *guaguas* que á esta había comprado en Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, según documento privado que prometió presentar oportunamente;

*Resultando:* que presentada la papeleta de demanda, se señaló por el Juzgado el día veinte y ocho de Abril último para que tuviera efecto la comparecencia, mandando citar al demandado en su domicilio, á cuyo fin se libró exhorto al Juez Municipal de esta ciudad, á quien correspondiese aquel, habiendo recibido y mandado cumplir dicho exhorto el del Distrito del Pilar, practicándose la diligencia el día veinte de Abril en la casa designada por la actora, número ciento treinta y uno de la calle de la Zanja y entendiéndose personalmente con el demandado;

*Resultando:* que Gonzalo Fernández de Córdova, en escrito presentado al Juez Municipal del Pilar, el día siguiente al de la citación, solicitó requiriesen al de Cárdenas para que se inhibiera del conocimiento del asunto y le remitiesen los autos, por ser competente para conocer del juicio el citado del Pilar, fundándose en que se trataba de una acción personal, que si bien la obligación fué contraída en Cárdenas, no se pactó el lugar del cumplimiento y no encontrándose el demandado en el del contrato, era juez competente el de su domicilio; y dada vista al Ministerio fiscal, este apoyó la solicitud del promovente acce-



diendo á ella el Juzgado por auto fecha veinte y seis del citado mes;

*Resultando:* que el día señalado tuvo efecto la comparecencia sin asistencia del demandado, y en ese acto presentó la demandante en justificación de su derecho un documento que obra á fojas primera y dice: "Soy en deber á la Sra. Doña Laura Trujillo viuda de la Fe, la suma de cien pesos en plata metálica, resto de trescientos veinte y cinco pesos en la misma moneda, en que compré á dicha señora tres guaguas.—Cárdenas, Diciembre 25 de 1897.—Gonzalo F. de Córdova";

*Resultando:* que en la misma fecha, después del acto, se recibió en el Juzgado el requerimiento de inhibición dirigido por el del Pilar y con suspensión del procedimiento se dió vista á la actora quien se opuso á la inhibición sosteniendo la competencia del Juez de Cárdenas, fundada en que tratándose del precio de la venta de vehículos que fueron entregados en esa ciudad y en ella satisfecha la mayor parte del precio, según lo demuestra el documento de fojas primera, era dicha ciudad el lugar del cumplimiento de la obligación conforme al artículo mil quinientos del Código Civil. Oído el Ministerio fiscal se mostró conforme sosteniendo la competencia del Juzgado;

*Resultando:* que el Juez de Cárdenas por auto de diez de Mayo denegó la inhibición y condenó en costas á Fernández de Córdova por no haber consignado en el escrito presentado al Juez del Pilar que no hacía uso de la declinatoria y comunicado á este último Juez el auto denegatorio, insistió en el requerimiento mandando elevar los autos al Tribunal Superior previo aviso al Juez requerido, que á su vez hizo lo mismo;

*Resultando:* que previas algunas actuaciones encaminadas á normalizar la sustanciación de este asunto dentro de los trámites legales hoy vigentes se elevaron por ambos Juzgados los autos á este Tribunal, dónde no se han personado las partes;

Oído el Ministerio fiscal,

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt,

*Considerando:* que la acción ejercitada por Josefa Roldán para hacer efectiva la obligación contenida en el documento de fojas primera es personal, y que es Juez competente para el conocimiento de los pleitos en que tales acciones se deduzcan según el párrafo primero del artículo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, á falta de sumisión expresa ó tácita, el del lugar en que la obligación deba cumplirse, y, á falta de este el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si encontrándose en él, aunque accidentalmente, pudiese ser emplazado;

*Considerando:* que no discutiéndose en el presente nada referente á la sumisión, la controversia queda reducida á esclarecer si por expresa voluntad de las partes ó por precepto legal, dado el origen de la obligación consta determinadamente donde ésta debe cumplirse;

*Considerando:* que en el citado documento de fojas primera no se expresa el lugar en que ha de pagarse la deuda en el mismo reconocida, y que si bien es cierto que se consigna que esta es parte del precio de la venta de unos bienes muebles, no consta, como afirma la actora, el lugar en que dichos bienes fueron entregados, ni el en que se pagó la parte del precio que resulta satisfecha, siendo por consiguiente inaplicable el artículo mil quinientos del Código Civil que al disponer que á falta de lugar expreso en el contrato el precio debe satisfacerse donde se hubiese entregado la cosa vendida, supone que esto último sea conocido ó conste en forma fehaciente;

*Considerando:* que careciendo de los datos antes dichos, el documento de fojas primera, única justificación que presenta la actora del contrato origen de la obligación cuyo cumplimiento reclama, y no hallándose, como no se hallaba el deudor, en Cárdenas, lugar en que contrajo aquélla, al tiempo de hacerse el emplazamiento, es evidente, á tenor del segundo extremo del párrafo primero del artículo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha debido ser demandado ante el Juez de su domicilio;

*Considerando:* que la obligación que impone el artículo setenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil al promovedor de una cuestión de competencia no produce otro efecto que la condenación en costas si faltando á la verdad utiliza los dos medios que la Ley otorga y en este caso la condenación compete al Tribunal dirimente, no á los jueces contendientes;

*Considerando:* que si bien es cierto que Fernández omitió al promover la inhibitoria consignar que no había hecho uso de la declinatoria es también cierto que sólo utilizó aquel medio, y al condenarlo el Juez Municipal de Cárdenas por la sola omisión, al pago de las costas, procedió erróneamente y con incompetencia, infringiendo los artículos setenta y ocho y ciento ocho de la Ley procesal citada;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de la demanda en juicio verbal deducida por Josefa Roldán y Fernández, como tutora legítima de sus nietos Juan y Genoveva de la Fe y Trujillo, contra Gonzalo Fernández de Córdova ante el Juez Municipal de Cárdenas compete al de igual clase del Distrito del Pilar de esta ciudad, á quien se re-

mitirán las actuaciones elevadas á este Tribunal, con certificación de esta sentencia, dándose aviso de lo resuelto al otro Juez, siendo de cargo respectivamente de las partes, las costas causadas en esta cuestión. Adviértase al Juez Municipal de Cárdenas que dictó el auto de diez de Mayo último el error legal en que ha incurrido. Líbrense por el Secretario, además de la certificación correspondiente que ha de constar en el rollo, copias autorizadas, una para su publicación en la *Gaceta* dentro del término de diez días y otra que se remitirá al Secretario de Justicia é Instrucción Pública para su inserción en la Colección de Sentencias de este Tribunal.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EVARISTO MONTALVO Y RODRÍGUEZ POR SÍ Y COMO ADMINISTRADOR  
DE LA SOCIEDAD CIVIL MONTALVO Y HERMANO.

**Auto de 15 de Septiembre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Evaristo Montalvo contra el auto dictado por la Audiencia de Matanzas en 14 de Agosto de 1899.*

**DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA  
SOBRE PRESTACION DE AUXILIO A LA SOCIEDAD  
DE MONTALVO Y HERMANO PARA HACERSE  
CARGO DEL CENTRAL "SAN LINO".**

No se dá el recurso de casación sino contra sentencias definitivas ó contra las que tengan el concepto de tales; y no teniéndolo las resoluciones dictadas en expediente de jurisdicción voluntaria por las cuales se declara contencioso el expediente, no es posible admitir el recurso pues lejos de terminar el juicio ó hacer imposible su continuación lo abre á sustanciación nueva.

*Resultando:* que promovidas por Lino, Evaristo, Hermenegildo y Rosa Montalvo, ante el correspondiente Juzgado de Primera Instancia diligencias de jurisdicción voluntaria al objeto de que se prestaran á la sociedad civil Montalvo y Hermanos, de Cienfuegos, los auxilios necesarios para que el segundo de los antedichos pudiera hacerse cargo como Administrador del



Central "San Lino" perteneciente á aquella sociedad, á cuya solicitud se accedió por el Juzgado, oponiéndose posteriormente el anterior Administrador José Ramón Montalvo, quien por no obtener éxito en sus pretensiones de que se dejaran sin efecto su remoción del cargo mencionado é ineficaz la posesión tomada por Evaristo de igual apellido, apeló de los autos dictados por el Juez en diez y siete y veinte y ocho de Enero del corriente año, que las desestimaban y le reservaban su derecho para que lo ejercitase en la vía y forma correspondiente, por consecuencia de lo cual y sustanciado ante la Audiencia aquel recurso lo resolvió la de Matanzas con fecha veinte y ocho de Julio revocando las referidas decisiones del Juzgado y declarando contencioso el expediente, sin alterar la situación que tuvieren al tiempo de ser incoado, los interesados, y lo que fué objeto del mismo, debiendo este sujetarse á los trámites establecidos para el juicio que corresponda;

*Resultando:* que el Procurador Leopoldo Cantón en nombre de la citada sociedad civil de Montalvo y Hermanos, interpuso contra el auto de veinte y ocho de Julio recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de Ley y de doctrina legal y que, declarado por la Audiencia en auto de catorce del siguiente Agosto no haber lugar á admitir dicho recurso por no tener la resolución recurrida el carácter de definitiva en ninguno de los conceptos que para los efectos de la casación expresan los artículos mil seiscientos ochenta y siete y mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y entregada á dicho interesado certificación de este proveído á los efectos del recurso en queja, manifestó aquel su propósito de interponerlo y se notificó oportunamente á la otra parte interesada;

*Resultando:* que personado en efecto ante este Supremo Tribunal Evaristo Montalvo y Rodríguez mediante representación conferida á Juan Mayorga, por sí y como Administrador de la mencionada sociedad civil Montalvo y Hermanos, é interpuesto formalmente recurso de queja contra el auto de la Audiencia denegatorio del de casación, se ha sustanciado aquel recurso por los trámites legales;

*Considerando:* que el recurso de casación se da en los casos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias y contra las que tengan el concepto de definitivas, según los artículos mil seiscientos ochenta y siete y mil seiscientos ochenta y ocho de la expresada Ley;

*Considerando:* que no es definitiva ni de tal tiene el con-

cepto, la resolución dictada en expediente de jurisdicción voluntaria, por la cual se declara contencioso el expediente, se mantiene la situación que al tiempo de ser incoado tenían los interesados y lo que fué objeto del mismo, y se dispone acomodar el procedimiento á los trámites establecidos para el juicio que correspondiere, puesto que, lejos de terminar el juicio ó hacer imposible su continuación lo abre á sustanciación nueva y precisa;

*Se declara sin lugar* el recurso de queja interpuesto por Juan Mayorga en representación de Evaristo Montalvo y Rodríguez por sí y como Administrador de la Sociedad civil Montalvo y Hermanos de Cienfuegos, contra el auto dictado por la Audiencia de Matanzas en catorce de Agosto último que denegó la admisión del recurso de casación por quebrantamiento de forma é infracción de Ley, se condena al recurrente al pago de las costas y comuníquese á la Audiencia de Matanzas para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen lo certifico.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D. Armando Riva.

---

DOMINGO MARCELO Y COMPARTES CONTRA MANUEL LATASA.

**Auto de 19 de Septiembre de 1899.**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Serafín Cepero y León, Josefa Pérez González y compartes, contra el auto dictado por la Audiencia de Matanzas en 22 de Agosto de 1899.*

**OPOSICION A UN ENTERO Y POSESION DE TERRENO.**

No dándose el recurso de casación en los asuntos que después de terminados pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, no es posible admitirlo contra un auto resolutorio de otro auto en un recurso de reposición contra la resolución que acuerda no haber lugar á declarar contencioso un expediente de entero ya terminado.

*Resultando:* que Manuel Latasa y Goicochea, después de terminados los demolitorios del realengo San Bartolomé, promovió en el Juzgado de Primera Instancia de Santa Clara las correspondientes diligencias en que pidió y obtuvo que se le formase un cuaderno de entero, dictándose en diez y nueve de Di-

ciembre del año mil ochocientos noventa y cuatro la resolución en que se tuvo por hecho dicho entero á favor del promoven- te Latasa y se mandó dar la posesión, lo que se efectuó en terrenos de San Diego del Valle, notificándose á los individuos que allí se encontraban, y que en seis de Marzo del año mil ochocientos noventa y cinco Domingo Marcelo y compartes pidieron que se tuviera por mostrada su contradicción á la solicitud voluntaria de entero de terrenos á Manuel Latasa y se declarase contencioso el expediente á tenor del artículo mil ochocientos diez y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil; re- cayendo á dicha petición el auto de seis de Abril del citado año por el que se acordó no declarar contencioso el expediente ni dejar sin efecto el entero concedido á Latasa, y establecido por Domingo Marcelo y compartes recurso de reposición contra dicho auto se resolvió por el de veinte y uno de Mayo siguiente, que no había lugar á la reposición solicitada é interpuesto re- curso de apelación contra este auto y su concordante para ante la Audiencia de Matanzas se sustanció por todos sus trámites en dicho Tribunal, el cual por auto de tres de Febrero del co- rriente año acordó no haber lugar á hacer declaratoria alguna sobre la naturaleza contenciosa ó voluntaria del expediente ni á dejar sin efecto el entero ni posesión dada á Manuel Latasa con reserva á los apelantes del derecho de que estuvieron asis- tidos para hacer uso de él en la vía y forma correspondientes;

*Resultando:* que Wenceslao Morejón en nombre de Sera- fin y Cepero León y compartes en las diligencias de entero referidas interpuso contra el auto de tres de Febrero último recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal y que declarado por la Audiencia de Matanzas en auto de veinte y dos de Agosto próximo pasado no haber lugar á admitir di- cho recurso por no tener la resolución recurrida el carácter de definitiva; y entregada á dicho Morejón certificación de este proveído á los efectos del recurso de queja manifestó aquel su propósito de interponerse y se notificó oportunamente á la otra parte;

*Resultando:* que personado ante este Supremo Tribunal Juan Mayorga representante de Josefa Pérez y González y de Lino, Carmen, Guillermo, José Domingo, Lorenzo Angel, Vi- cente, Ramón, Cipriano Andrés y Jacinto Marcelo y Pérez é interpuesto en forma recurso de queja contra el auto de la Au- diencia de Matanzas denegatorio del de casación, se ha sustan- ciado aquel recurso por los trámites legales;

*Considerando:* que el recurso de casación solo se da en los casos fijados en la Ley de Enjuiciamiento Civil contra las sen-



tencias definitivas dictadas por las Audiencias y contra las que tengan ese concepto conforme á los artículos mil seiscientos ochenta y siete y mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley citada;

*Considerando:* que el auto objeto del recurso de casación no se halla comprendido en uno ni otro caso, por cuanto que reserva á las partes su derecho para que lo ejerciten en la vía y forma correspondientes;

*Considerando:* que el auto dictado el día tres de Febrero último por la Audiencia de Matanzas es resolutorio de otro auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Santa Clara en un recurso de reposición contra la resolución que acordó no haber lugar á declarar contencioso el expediente ya terminado de entero, ni á dejar sin efecto el concedido á Manuel Latasa;

*Considerando:* que con arreglo al número tercero del artículo mil seiscientos noventa y dos no se dará el recurso de casación en los asuntos que después de terminados pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto;

*Se declara sin lugar* el recurso de queja interpuesto por Juan Mayorga en representación de Josefa Pérez González y de Lino, Carmen, Guillermo, José Domingo, Lorenzo Angel, Vicente, Ramón, Cipriano, Andrés y Jacinto Marcelo y Pérez contra el auto dictado por la Audiencia de Matanzas en veinte y dos de Agosto último que denegó la admisión del recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal; se condena á los recurrentes al pago de las costas y comuníquese á la Audiencia de Matanzas para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, lo certifico.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D. Armando Riva.

---

JERÓNIMO BLANCO CONTRA ANDRÉS ANGULO.

**Auto de 21 de Septiembre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Jerónimo Blanco contra el auto de la Audiencia de Matanzas, dictado el 20 de Julio de 1899.*

### **RECUSACION DE JUEZ.**

No procede el recurso de casación contra la resolución que declara desierta la apelación interpuesta en un incidente

de recusación, por ser la declaratoria de deserción de una apelación, en realidad, un incidente de los autos, y no dándose recurso de casación contra la decisión final del incidente de recusación, no es posible admitir que proceda contra la declaratoria de deserción, porque lo accesorio nunca es de mejor condición que lo principal.

*Resultando:* que en el incidente de recusación del Juez de Primera Instancia del Distrito del Mercado de la ciudad de Matanzas D. José Cabarrocas Migenes, promovido á consecuencia del juicio declarativo de mayor cuantía seguido por Gerónimo Blanco contra Andrés Angulo, interpuso el referido Blanco, por medio del procurador Federico Vinageras, recurso de casación por infracción de ley contra el auto de siete de Julio de este año, que declaró desierta la apelación establecida por el repetido Gerónimo Blanco y que en auto del día veinte y cuatro del mismo mes y año la Audiencia de Matanzas denegó aquel recurso, fundada en que no procedía contra decisiones dictadas en incidentes que, como el de recusación, no ponen término al pleito haciendo imposible su continuación;

*Resultando:* que mandada expedir la copia certificada de lugares de autos prescrita en el artículo catorce de la Orden número noventa y dos sobre casación y entregada al Procurador Vinageras como representante de Gerónimo Blanco, habiendo éste designado, como litigante en concepto de pobre, al abogado José Ignacio Colón para que lo representara ante este Tribunal, estableció dicho Letrado, dentro del término legal correspondiente recurso de queja fundado en que el auto que confirmó la declaratoria de deserción tiene el carácter de definitivo, porque pone término al incidente de recusación y hace imposible continuarlo, citando como infringidos los artículos ochocientos treinta y nueve y cuatrocientos tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que previa la sustanciación correspondiente se designó el día veinte del corriente mes para la vista pública de este asunto y fué celebrada con asistencia del abogado y representante del recurrente;

*Considerando:* que la Audiencia de Matanzas ha proveído con arreglo á derecho al declarar en el auto de veinte y cuatro de Julio de este año que no procede el recurso de casación contra la resolución que declara desierta la apelación interpuesta en un incidente de recusación, puesto que aquel recurso, en los incidentes, sólo se da contra las decisiones que ponen término al juicio principal haciendo imposible la continuación del mismo, y es evidente que la pronunciada por la Audiencia de Matan-

zas lejos de poner término al juicio declarativo de mayor cuantía establecido por Gerónimo Blanco contra Andrés Angulo, más bien allana y facilita su continuación;

*Considerando:* que la declaratoria de deserción de una apelación es en realidad un incidente de los autos donde se dicta, y no dándose, como no se da, el recurso de casación contra la decisión final del incidente de recusación, no es posible admitir que proceda contra la declaratoria de deserción, porque lo accesorio nunca es de mejor condición que lo principal;

*Se declara sin lugar* el recurso de queja interpuesto por el Ldo. José Ignacio Colón á nombre de Gerónimo Blanco contra el auto de veinte de Julio último dictado por la Audiencia de Matanzas, con las costas á cargo del recurrente; y comuníquese esta decisión á la Audiencia de Matanzas para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante mí, lo certifico.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Armando Riva.

---

JERÓNIMO BLANCO CONTRA ANDRÉS ANGULO.

**Auto de 22 de Septiembre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Jerónimo Blanco contra el auto de la Audiencia de Matanzas, dictado el 24 de Julio de 1899.*

### RECUSACION DE JUEZ.

No procede el recurso de casación contra la resolución que declara desierta la apelación interpuesta en un incidente de recusación, por ser la declaratoria de deserción de una apelación, en realidad, un incidente de los autos; y no dándose recurso de casación contra la decisión final del incidente de recusación, no es posible admitir que proceda contra la declaratoria de deserción porque lo accesorio nunca es de mejor condición que lo principal.

*Resultando:* que en el incidente de recusación del Juez de Primera Instancia del Distrito de Palacio de la ciudad de Matanzas, D. Cecilio de Vera y Gómez, promovido á consecuencia del juicio declarativo de mayor cuantía seguido por Gerónimo Blanco contra Andrés Angulo, interpuso el referido Blanco por medio del Procurador Federico Vinageras, recurso de ca-



sación por infracción de ley contra el auto de siete de Julio de este año, que declaró desierta la apelación establecida por el repetido Gerónimo Blanco, y que en auto del día veinte y cuatro del mismo mes y año la Audiencia de Matanzas denegó aquel recurso, fundada en que no procedía contra decisiones dictadas en incidentes que, como el de recusación, no ponen término al pleito haciendo imposible su continuación;

*Resultando:* que mandada expedir la copia certificada de lugares de autos prescrita en el artículo catorce de la Orden número noventa y dos sobre casación y entregada al Procurador Vinageras como representante de Gerónimo Blanco, habiendo este designado, como litigante en concepto de pobre, al abogado José Ignacio Colón para que lo representara ante este Tribunal, estableció dicho Letrado, dentro del término legal correspondiente recurso de queja fundado en que el auto que confirmó la declaratoria de deserción tiene el carácter de definitivo, porque pone término al incidente de recusación y hace imposible continuarlo, citando como infringidos los artículos ochocientos treinta y nueve y cuatrocientos tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que previa la sustanciación correspondiente designó el día veinte del corriente mes para la vista pública de este asunto y fué celebrada con asistencia del Abogado y representante del recurrente;

*Considerando:* que la Audiencia de Matanzas ha proveído con arreglo á derecho al declarar en el auto de veinte y cuatro de Julio de este año que no procede el recurso de casación contra la resolución que declara desierta la apelación interpuesta en un incidente de recusación, puesto que aquel recurso, en los incidentes, sólo se da contra las decisiones que ponen término al juicio principal haciendo imposible la continuación del mismo, y es evidente que la pronunciada por la Audiencia de Matanzas, lejos de poner término al juicio declarativo de mayor cuantía establecido por Gerónimo Blanco contra Andrés Angulo, más bien allana y facilita su continuación;

*Considerando:* que la declaratoria de deserción de una apelación es en realidad un incidente de los autos donde se dicta y no dándose como se da, el recurso de casación, no es posible admitir que procede contra la declaratoria de deserción, porque lo accesorio nunca es de mejor condición que lo principal;

SE DECLARA SIN LLUGAR el recurso de queja interpuesto por el Ldo. José Ignacio Colón á nombre de Gerónimo Blanco, contra el auto de veinte y cuatro de Julio último dictado por la Audiencia de Matanzas, con las costas á cargo del recurrente;

y comuníquese esta decisión á la Audiencia de Matanzas para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante mí, lo certifico.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Armando Riva.

---

MARÍA DE LA CONCEPCIÓN DE LA CANTERA SOLICITANDO AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA VENDER EN PACTO DETERMINADOS CAPITALES DE CENSOS.

Auto de 3 de Octubre de 1899.

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por la Sra María de la Concepción de la Cantera contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 25 de Octubre de 1898.*

#### AUTORIZACION Y HABILITACION PARA VENTA DE BIENES.

No correspondiendo resolver en los recursos de casación por infracción de ley, más asuntos que los que propone y fundamenta el recurrente, no se cumple lo preceptuado en el número 3.º del artículo 5.º de la Orden 92 sobre casación civil, de citar en el escrito de interposición del recurso el precepto que lo autoriza, al indicar en su totalidad los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el 1687 al 1695 comprensivos de materias distintas, por ser esencial la cita, no solo de la causa ó concepto, sino del artículo y número en que está comprendida dicha causa ó concepto, por cuanto así se determina y precisa la cuestión supuesta.

*Resultando:* que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en los autos promovidos en el Juzgado del Cerro por Doña María de la Concepción de la Cantera en solicitud de autorización y habilitación para vender en pacto determinados capitales de censo, dictó sentencia en veinte y cinco de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho, revocando el auto dictado por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe en cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y siete, y dejando sin efecto la autorización y habilitación concedida á dicha señora por el mencionado Juez;

*Resultando:* que cumplido lo preceptuado por el artículo ciento ocho de la Orden número noventa y dos que regula los recursos de casación, el Procurador Sterling y Varona, á nombre de Doña María de la Concepción de la Cantera presentó

escrito ante la sobredicha Sala, manifestando su intención de interponer recurso de casación por infracción de ley, y desde luego lo interponía contra la sentencia mencionada, y pedía se le admitiese dicho recurso y en su consecuencia se mandase emplazar á las partes para su comparecencia ante el Supremo;

*Resultando:* que la antedicha Sala por auto de veinte y nueve de Julio próximo pasado, considerando que el recurso se ajustaba á lo preceptuado en el artículo quinto de la vigente Ley de casación, lo admitió, mandando emplazar á las partes para su comparecencia ante el Supremo;

*Resultando:* que personados en tiempo y forma el recurrente y el recurrido, el Ministerio fiscal presentó escrito durante el término de instrucción impugnando la admisión del recurso, por no haberse cumplido por el recurrente, en su escrito de interposición, el precepto tercero del artículo quinto de la Orden de casación, ni la tercera de las circunstancias que, para que fuese admitido, establece el artículo séptimo de la misma Orden, y pedía al Tribunal se sirviese sustanciar y resolver esta cuestión previa y declarar en su día mal admitido por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana el mencionado recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Sra. de la Cantera;

*Resultando:* que, cumplida la tramitación del caso, se señaló el día veinte y nueve del mes próximo pasado Septiembre para la vista, la cual se celebró, informando en primer término el Fiscal y después el Letrado director de la recurrente Sra. de la Cantera;

*Considerando:* que la vigente Orden de casación número noventa y dos previene de un modo categórico en su artículo quinto que en el escrito por el cual se interponga el recurso se expresará, entre otros particulares, el precepto legal que autorice dicho recurso, lo cual excluye toda generalidad é indeterminación en la cita que se haga;

*Considerando:* que la misma Orden de casación estatuye en su artículo séptimo que el Tribunal sentenciador, ante el cual se hubiere presentado el escrito interponiendo el recurso, examinará, entre otros particulares, si dicho recurso se funda en algunos de los casos taxativamente señalados por los artículos mil seiscientos noventa y mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, comprensivos de las diversas causas en que hay lugar á los recursos de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma;

*Considerando:* que en el recurso de casación por infracción de ley no cabe resolver más asuntos que los que propone



y fundamenta el recurrente, naciendo de aquí el precepto categórico del número tercero del artículo quinto de la Orden número noventa y dos de casación civil de citar en el escrito de interposición del recurso el precepto que lo autorice; y no haciendo el artículo primero de la mencionada Orden de casación más que declarar vigentes los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde el mil seiscientos ochenta y siete al mil seiscientos noventa y cinco, comprensivos en materias distintas, claro es que al citársele en su totalidad no se cumple en modo alguno con lo preceptuado de manera concreta en el número tercero del ya repetido artículo quinto;

*Considerando:* que tratándose de infracción de ley en sentencia definitiva, cada uno de los números del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende problemas jurídicos distintos, lo cual hace esencial la cita, no sólo de la causa ó concepto, sino del artículo y número en que esté comprendida dicha causa ó concepto, por cuanto así se determina y precisa la cuestión propuesta;

SE DECLARA MAL ADMITIDO el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Procurador Sterling Varona, á nombre de la Sra. de la Cantera, sin especial condenación de costas; y comuníquese esta resolución á la Audiencia de la Habana para lo que corresponda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, lo certifico.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—El Secretario P. D., Armando Riva.

---

PEDRO, IGNACIO É ISABEL VALDÉS Y MONTIEL CONTRA ISABEL MENDIOLA, VIUDA DE URBIZU, Y JUAN F. SAAVEDRA.

**Sentencia núm. 1 (6 de Octubre de 1899.**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Pedro, Ignacio é Isabel Valdés y Montiel, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 1.º de Febrero de 1898.*

### JUICIO DE MAYOR CUANTIA SOBRE REIVINDICACION DE TERRENOS.

Cuando se dá á cierto documento interpretación distinta á la que le ha dado el Tribunal Sentenciador y se supone que por este no se ha tenido en cuenta el contenido de algún

otro, cuando es así que se ha apreciado en conjunto con la demás prueba propuesta, no pueden servir de fundamento esos hechos para alegar infracción de Ley.

En la ciudad de la Habana, á seis de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por infracción de Ley, pendiente ante este Supremo Tribunal, interpuesto por el Procurador Ambrosio L. Pereira, á nombre de Pedro, Ignacio é Isabel Valdés y Montiel, ocupada esta última en las faenas domésticas, empleados los dos primeros y vecinos todos de esta Capital, en el juicio declarativo de mayor cuantía sobre reivindicación de terrenos, promovido por el Procurador Miguel Angel Matamoros en representación de aquellos en el Juzgado de primera instancia del distrito de Guadalupe contra Isabel Mendiola viuda de Urbizu y Juan F. Saavedra ambos propietarios y vecinos de esta Capital, y continuado en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad;

*Resultando:* que en la sentencia dictada el primero de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho por la Sala de lo Civil esta aceptó todos los Resultandos contenidos en la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe, entre los cuales se hallan los siguientes:

*Tercero Resultando:* que el Procurador Miguel A. Matamoros, fundó su demanda en los siguientes hechos:

*Primero:* que en el año de mil ochocientos ochenta y dos y después de una posesión de más de treinta años que tenía Gabriel Valdés Hernández, sobre la casa número ciento veinte y ocho de la calle de la Lealtad en esta ciudad, fué demandado en juicio de desahucio por Francisco Díaz de Villegas;

*Segundo:* que tramitado dicho juicio de desahucio fué declarado sin lugar por el Juzgado Municipal de Guadalupe siendo declarada también la apelación interpuesta por Díaz Villegas sin lugar, y confirmada por tanto la sentencia del inferior que absolvió al Sr. Valdés Hernández, según lo comprueba el propio documento;

*Tercero:* que á consecuencia de haber sido perturbado dicho Valdés Hernández por el expresado Díaz de Villegas, en la quieta y pacífica posesión que venía disfrutando en dicha casa, promovió interdicto de retener la posesión, en el juzgado de primera instancia de Guadalupe, en veinte de Junio de mil ochocientos ochenta y dos;

*Cuarto:* que sustanciado dicho interdicto se dictó sentencia en veinte y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, declarándose haber lugar á él y mandando amparar á Gabriel Valdés Hernández en la posesión de la expresada casa número

ciento veinte y ocho de la calle de Lealtad, donde existía en dicha fecha el antiguo teatro asiático;

*Quinto:* que habiéndose apelado dicha sentencia por la representación de Francisco Díaz de Villegas fué revocada la sentencia por la Audiencia en veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y dos reservándose al Sr. Valdés Hernández sus derechos para la demanda de propiedad;

*Sexto:* que el Sr. Valdés Hernández como dueño legal celebraba contratos de arrendamientos sobre dicha casa, como lo acredita con el extendido á favor del asiático Basilio R. Asicó en doce de Febrero de mil ochocientos setenta y seis;

*Séptimo:* que en diez de Julio de mil ochocientos ochenta y dos quedó archivado en el Registro de la Propiedad de esta ciudad el expediente posesorio promovido por Valdés Hernández en el juzgado de primera instancia de Guadalupe, ante Arturo Galletti, según el asiento fojas sesenta y siete vuelto del tomo sesenta y cinco;

*Octavo:* que Francisco Díaz de Villegas por virtud de un título que dijo ser, de dominio de dicha casa, y sin justificar la identidad del inmueble inscribió á su nombre en el Registro de la Propiedad, la casa número ciento veinte y ocho de Lealtad, expresando se llamaba antiguamente de San Andrés;

*Noveno:* que la calle de la Lealtad en esta ciudad, nunca se denominó de "San Andrés";

*Décimo:* que habiéndose hecho la inscripción de dicha casa solamente por copia de escritura exhibida en el Registro, sin acreditar la identidad de dicha casa, se ejecutó por el Sr. Díaz de Villegas un despojo en contra del padre de sus poderdantes, en la quieta y pacífica posesión que disfrutaba á título de dueño;

*Undécimo:* que Gabriel Valdés Hernández, venía abonando las contribuciones al Estado y al Municipio correspondiente á dicha casa á título de dueño como lo comprueban los recibos acompañados;

*Duodécimo:* que con los documentos señalados por los números seis, siete y ocho, acredita el carácter de dueño que la Dirección General de Hacienda, reconocía al Sr. Valdés Hernández así como dicho señor declaró dicha casa como suya;

*Décimotercero:* que dicha casa fué enajenada y dividida en cuatro, que forman hoy los números ciento veinte y ocho, ciento veinte y ocho A, ciento veinte y ocho B y ciento veinte y ocho C;

*Décimocuarto:* que Juan Fernández Saavedra es el actual



dueño de las casas Lealtad ciento veinte y ocho, y ciento veinte y ocho C;

*Décimoquinto:* que Isabel Mendiola, viuda de Urbizu es el actual dueño de las casas Lealtad ciento veinte y ocho A y ciento veinte y ocho B;

*Décimosexto:* que á consecuencia del fallecimiento de Gabriel Valdés Hernández, fueron declarados herederos de sus derechos y acciones sus legítimos hijos mis poderdantes según justificaré con la oportuna certificación en el término de prueba;

Por su derecho alegó:

*Primero:* que la posesión de los bienes puede tenerse en el concepto de dueño, Ley tercera, título treinta, partida tercera, en relación con el artículo cuatrocientos treinta y dos del Código Civil;

*Segundo:* Que la buena fe en un poseedor se presume siempre y con más motivo si posee á título de dueño;

*Tercero:* Que la posesión adquirida y disfrutada á título de dueño, sirve de título para adquirir el dominio, Ley doce, título XXIII, partida tercera;

*Cuarto:* por la prescripción se adquiere el dominio, Ley primera, título XXIX, partida tercera;

*Quinto:* Los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones;

*Sexto:* Nadie puede ser privado de la posesión sin haber sido oído y vencido en juicio, Ley segunda, título XXXIV, libro undécimo de la Novísima Recopilación y sentencias del Tribunal Supremo de cinco de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres; y veinte y cuatro de Febrero de mil ochocientos sesenta y cinco;

*Séptimo:* Que la naturaleza de los interdictos posesorios concede siempre al litigante el derecho de reclamar la propiedad en el juicio correspondiente;

*Octavo:* La inscripción de un título en el Registro de la Propiedad, sin acreditarse con los correspondientes documentos ó asientos de los libros antiguos, la identidad de la finca es nula y por tanto no puede perjudicar los legítimos derechos de un poseedor que paga las contribuciones á título de dueño;

Y ejecutando la correspondiente acción de propiedad sobre el terreno en el que se encuentran edificadas las casas Lealtad ciento veinte y ocho, ciento veinte y ocho A, ciento veinte y ocho B y ciento veinte y ocho C, concluyó suplicando se le tuviera por interpuesta la presente demanda en juicio de ma-

por cuantía contra Juan F. Saavedra é Isabel Mendiola viuda de Urbizu, admitirla desde luego á los efectos de la súplica contenida en el segundo otrosí de este propio escrito y suspender luego su curso hasta la resolución de la demanda previa de pobreza que se está sustanciando ya; y en su oportunidad emplazar á los demandados para que dentro del término legal comparezcan en los autos personándose en forma, y hecho, se les ordene la contesten dentro de veinte días, y en definitiva dictar sentencia declarando nulos los títulos de dominio que ostentan, condenándolos á que devuelvan el terreno sobre el que se encuentran edificadas las casas Lealtad ciento veinte y ocho, ciento veinte y ocho A, ciento veinte y ocho B, y ciento veinte y ocho C y á las costas que se causen;

Por el primer otrosí acompañó copia simple de los documentos uno, dos y tres, á reserva de traer á los autos copias fehacientes, en atención á que teniendo promovida pobreza no le ha sido posible á sus poderdantes obtener copia fehaciente;

Por el segundo otrosí solicitó, de acuerdo con el precepto del artículo veinte y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dentro del derecho que le otorga el artículo cuarenta y dos inciso primero de la vigente Ley Hipotecaria, la anotación de la demanda en el Registro de la Propiedad acordándose en su consecuencia se libren los mandamientos, duplicados, oportunos;

*Octavo Resultando:* Que el Procurador José de Zayas por su escrito de diez y siete de Abril último fojas ciento ochenta y una, presentó dentro del término y en forma su contestación, á la demanda, la que fundó en los siguientes hechos:

*Primero:* Que por escritura otorgada el día veinte y uno de Noviembre de mil ochocientos seis ante el Escribano Juan de Dios Ayala, que se anotó al folio trescientos cinco del libro treinta y cuatro de hipotecas de esta Ciudad, le vendió Doña María de la Soledad Quijano á D. Agustín de Santa Cruz una casa en la calle de San Andrés hoy de la Lealtad que lindaba por un costado con Andrea Brito y José Núñez y por el otro con Juan Martínez, reconociendo cuatrocientos pesos á favor de los herederos de Pedro Rodríguez y Robado, como se ve de la mencionada escritura que marcada con el número uno y por carecer de otra fehaciente, acompaña en copia simple, de acuerdo con el artículo quinientos cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Segundo:* que al practicarse la división de los bienes dejados por Agustín de Santa Cruz á su esposa Antonia María Guerrero entre sus hijas María Josefa y Dolores Santa Cruz, por escritura fecha cinco de Mayo de mil ochocientos cincuenta

y nueve ante el Escribano de Cienfuegos Ramón Hernández de Medina se adjudicó María Josefa la casa de la calle de la Lealtad número ciento treinta y cuatro que perteneció á su padre Agustín de Santa Cruz y que es la misma señalada hoy con el número ciento veinte y ocho como lo acredita la nota de inscripción al pie de la mencionada escritura que presentó con el número dos;

*Tercero:* que ocurrido el fallecimiento de María Josefa Santa Cruz de Villegas, se adjudicó su hijo Leopoldo Díaz de Villegas una casa en la calle de la Lealtad, cerca de la Calzada de la Reina habiéndose protocolizado esa divisoria el día diez de Enero de mil ochocientos ochenta y uno, ante el Notario de Cienfuegos José J. Verdaguer, quien expidió con vista de la misma testimonio por exhibición de la hijuela de Leopoldo, que acompaña con el número tres;

*Cuarto:* Que por escritura de cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno, ante el propio Notario Verdaguer que acompaña con el número cuatro, le vendió Leopoldo Díaz de Villegas á su hermano Francisco, la casa número ciento veinte y ocho moderno de la calle de la Lealtad entre la de Salud y Reina, en la cual se hallaba establecido un teatro chino, fabricado de madera;

*Quinto:* La casa número ciento veinte y ocho de la calle de la Lealtad, antes de San Andrés, reconocía en quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno, como lo justifica la certificación del Registro, que con el número cinco es adjunta, trescientos veinte pesos á favor de los herederos de Pedro Rodríguez Robado, es decir, el mismo gravamen á que se refiere la escritura del primero de los hechos, con diferencia de unos pocos pesos;

*Sexto:* Que en Mayo de mil ochocientos sesenta y ocho pagaron los herederos de Agustín de Santa Cruz, quinientos un escudos cuarenta milésimas por la cloaca de la calle de la Lealtad número ciento veinte y ocho, abonando ellos también el impuesto urbano de ese año; en mil ochocientos setenta y seis no se presentó relación jurada por el propietario de la casa sino que la comisión de empadronamiento la anotó á nombre de Gabriel Hernández; pero en el padrón que se formó en mil ochocientos ochenta y dos, aunque se presentaron dos relaciones juradas, una por el mencionado Hernández y otra á nombre de Francisco Díaz de Villegas figurando como inquilino Hernández, la contaduría exigió los títulos de dominio y no los presentó sino el apoderado de Díaz de Villegas á cuyo favor se inscribió en el padrón, según todo lo acredita el certificado ex-



pedido por la Secretaría del Ayuntamiento, que acompaña con el número seis y el ejemplar de la relación devuelto á Díaz de Villegas que lleva el número séptimo;

*Séptimo:* Que en diez de Julio de mil ochocientos ochenta y tres, ante el Notario José Miguel Nuño, cuya escritura presenta con el número ocho, le vendió Francisco Díaz de Villegas á los Sres. Isabel Mendiola viuda de Urbizu y Juan F. Saavedra la casa Lealtad ciento veinte y ocho, entre las de Salud y Reina, que tenía inscrita á su nombre en el Registro de la Propiedad, sin más gravamen que el de trescientos veinte pesos á favor de Pedro Rodríguez Robado;

*Octavo:* Que esa casa Lealtad ciento veinte y ocho la derribaron sus poderdantes y en su terreno fabricaron las cuatro casas número ciento veinte y ocho y ciento veinte y ocho A, B y C, que dividieron entre sí por escritura de ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro ante Nuño, la cual es adjunta con el número nueve, adjudicándose la Mendiola los números ciento veinte y ocho A y ciento veinte y ocho B, y el Saavedra los números ciento veinte y ocho y ciento veinte y ocho C, dejaron proindiviso un pedazo de terreno de noventa y dos metros, siete decímetros planos;

*Noveno:* Que desde Julio de mil ochocientos ochenta y tres en que adquirieron sus poderdantes con justo título y buena fe la casa Lealtad ciento veinte y ocho de quien la tenía inscrita á su nombre en el Registro de la Propiedad han estado en quieta y pacífica posesión de la misma hasta el año de mil ochocientos noventa y seis en que se inicia el presente juicio, es decir durante trece años;

*Décimo:* Que las contribuciones de la casa vienen satisfaciéndose también hace diez años á nombre de sus actuales dueños; en prueba de ello acompañó con el número diez un recibo correspondiente al primer trimestre de mil ochocientos ochenta y siete á mil ochocientos ochenta y ocho expedido á favor de D. Juan F. Saavedra;

*Undécimo:* D. Gabriel Valdés Hernández encargado y arrendatario que fué de la casa Lealtad número ciento veinte y ocho, inició en veinte de Junio de mil ochocientos ochenta y dos un interdicto de retener su posesión que falló en contra suya la Audiencia, con fecha veinte y cinco de Noviembre de aquel año, bajo el fundamento de ser necesario acreditar que el que establece un interdicto de retener se halla en posesión de la cosa objeto del mismo, lo cual no resultaba en ese caso, ya que por el contrario el demandado D. Francisco Díaz de Villegas, justificó estar en posesión de la casa Lealtad número

ciento veinte y ocho que se le otorgó en diez y nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, por el Escribano D. Francisco de Castro á virtud de exhorto del señor Juez de primera instancia de Cienfuegos;

*Duodécimo:* Que con anterioridad á mil ochocientos ochentitrés pagó á su nombre D. Gabriel Valdés Hernández algunas contribuciones de la casa Lealtad ciento veinte y ocho y la declaró como suya en la Hacienda, tramitando, además, un expediente posesorio que no se inscribió en el Registro de la Propiedad, donde sí se hallaba inscripto el dominio que tienen sus poderdantes mediante transmisiones legítimas de los anteriores dueños de la casa, cuya titulación conocida y por documentos públicos data de un siglo;

*Décimotercero:* Que antes que obtuviese D. Francisco Díaz de Villegas en mil ochocientos ochentidos la posesión judicial de la casa Lealtad número ciento veintiocho, estableció un juicio de desahucio contra D. Gabriel Valdés Hernández, que se falló en contra de Villegas porque no acreditó que fuese Valdés Hernández arrendatario de la finca, si bien los documentos que acompañó justificaban el dominio de Villegas sobre la misma.

Por su derecho alegó:

*Primero:* Que la propiedad se adquiere mediante la tradición por consecuencia de ciertos contratos establecidos por la Ley, uno de los cuales y el más usual es la compra-venta en cuya virtud adquirieron sus representados la casa de la calle de la Lealtad número ciento veintiocho de quien era su legítimo dueño, habiendo mediado los requisitos esenciales del consentimiento, objeto, causa ó precio cierto en dinero y el otorgamiento de escritura pública por cuyo motivo no puede anularse la adquisición, artículos seiscientos nueve, mil doscientos sesentiuno y mil doscientos ochenta del Código Civil, de acuerdo con las leyes anteriores y los principios generales del derecho;

*Segundo:* Los actos ó contratos que se ejecuten ú otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto á tercero una vez inscritos, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante, en virtud de título anterior no inscrito ó de causas que no resulten claramente del mismo Registro, según lo declara el artículo treinta y cuatro de la Ley Hipotecaria y en tal concepto aunque fuera posible declarar ineficaz el título que ostenta D. Francisco Díaz de Villegas, respecto á la casa Lealtad ciento veinte y ocho, como la tenía inscrita en el Registro de la Propiedad,



donde no resultaba causa alguna que invalidasen su dominio, no es posible anular el título de sus representados á la casa referida;

*Tercero:* Que por la posesión de diez años entre presentes, con justo título y buena fe se adquiere el dominio de los bienes inmuebles de acuerdo con el artículo mil novecientos cincuenta y siete del Código Civil y Ley diez y ocho, título veinte y nueve de la Partida tercera, en cuyo concepto, mediando todas esas condiciones en la adquisición que hicieron sus representados el año de mil ochocientos ochenta y tres á falta de otro título habían adquirido ya por prescripción directa la casa Lealtad ciento veinte y ocho, aunque no les aprovechase, que sí les aprovecha, la prescripción de cien años que existe á favor de sus causantes, en virtud de los títulos mencionados en los hechos de este escrito y acompañados con el mismo;

*Cuarto:* Que la posesión puede tenerse en concepto de dueño ó en el de tenedor de la cosa para disfrutarla, perteneciendo el dominio á otra persona, y sólo la primera sirve de título para adquirir el dominio conforme á los artículos cuatrocientos treinta y uno y cuatrocientos cuarenta y siete del Código Civil, siendo evidente, por esta razón, que D. Gabriel Valdés Hernández no pudo adquirir derechos sobre la casa Lealtad número ciento veinte y ocho, que ocupaba como encargado é inquilino; pero no en el concepto de dueño, cuyo carácter nunca pudo atribuírsele porque abonase á su nombre algunos recibos de contribuciones, ni porque quisiera declarar como suya la finca en el Ayuntamiento ni porque estableciera un interdicto de retener que se falló en contra suya, ni porque ganara un desahucio bajo el fundamento de que no se acreditó que fuese arrendatario de la casa Lealtad ciento veinte y ocho, aunque sí probó el demandante Díaz de Villegas ser dueño de la misma, ni por último, porque tramitara un expediente posesorio que no logró inscribir en el Registro de la Propiedad, y

*Quinto:* Que el que por acción ú omisión causa daño á otro interviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño causado, según declara el artículo mil novecientos dos del Código Civil, de acuerdo con el cual debe condenarse á los actores al pago de las costas de este juicio promovido sin razón y al de los daños y perjuicios que ocasione á mis poderdantes la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. Y concluyó suplicando que se le tuviera por contestada la demanda y en definitiva se declarara sin lugar, condenando á los demandantes al pago de las costas y al de los daños y perjuicios que origina la anotación preventiva de la misma;



*Resultando décimo:* Que por providencia de diez y nueve de Abril último se tuvo por contestada la demanda confiriéndose traslado al actor en réplica, el que evacuó por su escrito de treinta de Abril último, fojas ciento ochenta y nueve, á la foja ciento noventa y cuatro inclusive, formulando los siguientes hechos:

*Primero:* Que reproduce todos los de su escrito de demanda;

*Segundo:* Que niega el hecho primero del escrito de contestación, en cuanto supone que la casa que enajenó la señora Quijano en la calle de San Andrés, sea hoy Lealtad;

*Tercero:* Que no reconoce la certeza de los hechos segundo al sexto del escrito de contestación por lo que se refiere á la casa Lealtad número ciento veinte y ocho;

*Cuarto:* Aceptamos los hechos séptimo y octavo de la contestación, pero sin reconocer la buena fe y justo título que se alega en el noveno hecho;

*Quinto:* Que no perjudica al derecho de su parte que los demandados hayan venido abonando las contribuciones;

*Sexto:* Que no acepta el concepto de encargado y arrendatario que en el undécimo hecho se atribuye á D. Gabriel V. Hernández, sino el de poseedor, en concepto de dueño hacía más de treinta años;

*Séptimo:* Que reconoce la certeza del hecho duodécimo de la contestación mas no el dominio que tienen los demandados, ni la legitimidad de las transmisiones que afirma;

*Octavo:* Que reconoce la certeza del hecho décimo tercero en cuanto se reconoce que no prosperó el desahucio que se interpuso contra Hernández, lo cual justifica que nunca fué arrendatario de Díaz de Villegas ni de los que le enajenaron el dominio de las casas que se afirma ser hoy la de Lealtad número ciento veinte y ocho;

Por su derecho reprodujo los de su demanda, adicionándolos con el precepto del artículo mil novecientos cincuenta y cuatro del Código Civil, que establece la necesidad de probar el justo título, que no se presume nunca;

Concluyó suplicando se le tuviera por evacuado el trámite de réplica; y por otrosí solicitó el recibimiento á prueba;

*Resultando undécimo:* Que por providencia de seis de Mayo último se tuvo por evacuado al Procurador Aparicio como sustituto del de igual clase Matamoros, el traslado que se le confirió y satisfizo en el escrito que acaba de resultarse, disponiéndose siguiera en dúplica con la representación demandada, la que evacuó á su vez por su escrito de diez y ocho de dicho

mes de Mayo, fojas ciento noventa y seis en el que consignó como puntos de hecho los siguientes:

*Primero:* que reproduce íntegramente los trece formulados en el escrito de contestación á la demanda sin tener que adicionarlos ni modificarlos;

*Segundo:* que confiesa la certeza de los cinco primeros hechos de la demanda con la salvedad de que la posesión que tuvo Valdés Hernández, nunca fué la de propietario de la casa Lealtad ciento veinte y ocho, sino la de inquilino y encargado, ignorando sus poderdantes el número de años que duró esa posesión;

*Tercero:* reconoce el hecho sexto, ó sea que Valdés Hernández celebraba contratos de arrendamiento y se titulaba dueño de la finca pero niega que tuviera nunca ese carácter, el cual tampoco se atribuyó en el contrato de arrendamiento que se acompaña á la demanda;

*Cuarto:* que desconoce y niega por lo tanto, que se archivara en el Registro de la Propiedad, según afirma el séptimo hecho, el expediente posesorio que tramitó Valdés Hernández, y que nunca llegó á inscribirse;

*Quinto:* que acepta el octavo hecho de la demanda, menos en cuanto pone en duda el título de dominio presentado por D. Francisco Díaz de Villegas y la identidad de la casa que inscribió como suya;

*Sexto:* que niega los hechos noveno y décimo de la demanda;

*Séptimo:* que confiesa la certeza de los que llevan los números once al diez y seis, pero no admite que los recibos de contribución, ni los oficios de la Hacienda, confriesen á Valdés Hernández, un dominio que no tenía, y

*Octavo:* que nada tiene que manifestar respecto á los hechos de la réplica, pues que sólo reproduce los de la demanda y aceptan ó niegan los de su contestación;

Como puntos de derecho reprodujo los de su escrito de contestación y concluyó suplicando que se le tuviera por satisfecho el trámite de dúplica y en definitiva se fallara este pleito en los términos que se tenían solicitados. Por otrosí, solicitó también se recibiese á prueba el pleito;

*Resultando:* que previos los trámites correspondientes, el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe dictó sentencia en siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete, absolviendo á Isabel Mendiola viuda de Urbizu y á Juan F. Saavedra de la demanda promovida contra ellos por Isabel,

Pedro é Ignacio Valdés y Montiel sin especial condenación de costas;

*Resultando:* que habiendo apelado los demandantes de dicha resolución, la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, previa la sustanciación necesaria dictó sentencia en primero de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, confirmando la apelada, con las costas de ambas instancias á cargo de los actores;

*Resultando:* que contra esta sentencia interpusieron los demandantes recursos de casación por infracción de ley autorizado por los incisos primero y séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estimando infringidos:

*Primero:* Los incisos tercero y cuarto del artículo quinientos noventa y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, toda vez que en la sentencia se niega validez bastante á la certificación expedida por este Ayuntamiento, en la que con vista de los antecedentes de su archivo, se expresa no haber constancia de que la calle de la Lealtad se llamara antiguamente de San Andrés;

*Segundo:* El ya citado artículo quinientos noventa y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su inciso cuarto, toda vez que se prescinde en la sentencia, de apreciar el valor legal y eficacia de la certificación expedida por el Registro de la Propiedad de esta ciudad, que consta en los autos referentes á un asiento de la antigua Anotaduría en el año de mil ochocientos cuarenta, en la que se hace constar la hipoteca sobre una casa vendida por Agustín de Santa Cruz situada en la calle de San Andrés ó Escobar, lo que demuestra que al despojarse de la posesión al padre de mis poderdantes, se hizo con temeridad y mala fe;

*Tercero:* El artículo mil novecientos cincuenta y cuatro del Código Civil, que determina expresamente, que el justo título debe probarse, no se presume nunca, lo cual no han probado los demandados, toda vez que el primer asiento de dominio en los libros del Registro, referente á los terrenos en litigio, se hizo por medio de una segunda copia sin citación contraria del poseedor, sin trasladarse el asiento de los libros de la antigua Anotaduría, y haciéndose constar, porque sí, en dicha primera inscripción que la calle de Lealtad se titulaba antes San Andrés;

*Cuarto:* El artículo cuatrocientos treinta y dos del Código Civil vigente, en relación con la Ley tercera título treinta, partida tercera, toda vez que habiendo vencido en un juicio de



desahucio y en la primera instancia de un interdicto, D. Gabriel Valdés, el poseedor y padre de mis poderdantes, al demostrarse en este pleito la nulidad del título que ostentan los demandados, deben ser reintegrados los herederos en la posesión de los terrenos despojados;

VISTO, siendo Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo,

*Considerando:* que no puede estimarse el primer fundamento del recurso interpuesto porque en la sentencia objeto del mismo no se niega validez á la certificación expedida por el Ayuntamiento, como erróneamente afirman los recurrentes, sino que lejos de eso se examina y aprecia en su verdadero alcance y sentido, fijando el concepto con arreglo á su texto literal sin deducir de él afirmaciones contrarias á sus términos claros y explícitos como hacen los promoventes, pretendiendo que allí donde se dice, con vista de los antecedentes del archivo que no hay constancia de que la calle de la Lealtad se llamara antiguamente de "San Andrés", se expresa que aquella nunca tuvo este nombre, lo que es sustituir por una afirmación concreta un concepto dubitativo que nada afirma ni niega; por lo que la sentencia recurrida al fijar la verdadera inteligencia de la certificación indicada no ha infringido la disposición que con ese carácter invocan los demandantes;

*Considerando:* Que tampoco es de estimarse el segundo motivo de casación alegado, porque en la sentencia no se prescinde del valor legal y eficacia de la certificación expedida por el Registro de la Propiedad de esta Capital, sino que se aprecia con los demás datos del pleito, para deducir de su conjunto el verdadero derecho de los litigantes, no infringiéndose por tanto el precepto invocado en ese sentido;

*Considerando:* Que no cabe estimar el tercero de los fundamentos aducidos para sostener el recurso, porque si bien es cierto que el artículo mil novecientos cincuenta y cuatro del Código Civil expresa que el justo título no se presume nunca sino que debe probarse, no se ha infringido en la sentencia ese precepto, por cuanto, que, al dar esta, aquel carácter á la escritura en que fundan sus derechos los demandados ha obrado en uso del suyo apreciando la eficacia de dicho documento, y á esa apreciación debe atenderse este Tribunal;

*Considerando:* Que no es de estimarse el cuarto motivo de casación alegado porque no se ha infringido el artículo cuatrocientos treinta y dos del Código Civil toda vez que no ha sido la posesión sino el dominio del derecho objeto del litigio y de la sentencia;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber

lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Ambrosio L. Pereira en representación de Isabel, Pedro é Ignacio Valdés y Montiel, contra la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, con las costas á cargo de los recurrentes, y comuníquese al Tribunal sentenciador con devolución del apuntamiento remitido.

Así, por esta sentencia, que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente, en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

ALBERTO CADAVAL Y MARTÍ CONTRA MATILDE JAPÓN, VIUDA DE VILLAGELIÚ.

Sentencia núm. 1 (6 de Octubre de 1899).

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Matilde Japón, viuda de Villageliú, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 16 de Agosto de 1897.*

### JUICIO DE MENOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.

La citación de las partes para la celebración de la comparecencia equivale en los juicios de menor cuantía á la citación de las mismas para sentencia.

Absteniéndose un Juez de resolver sobre la excepción perentoria de prescripción, con arreglo al artículo 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber estimado procedente la de incompetencia, la Audiencia, al conocer de la apelación no ha debido resolver sobre la cuestión de fondo, pues su competencia estaba circunscripta á lo que fué materia de la apelación.

En la ciudad de la Habana, á seis de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por quebrantamiento de forma pendiente ante este Supremo Tribunal, interpuesto por Doña Matilde Japón, viuda de Villageliú, ocupada en las faenas domésticas y vecina de esta Capital en el juicio declarativo de menor cuantía que en cobro de pesos le promovió Alberto Cadaval y Martí, estudiante y vecino también de esta Capital, en el Juzgado de primera instancia del distrito

de Jesús María, y continuado en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad;

*Resultando:* que la sentencia dictada el día diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa y siete por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital, aceptó los siguientes Resultandos contenidos en la sentencia dictada por el Juez de primera instancia:

*Resultando primero:* que por medio del escrito de fecha diez de Septiembre del año próximo pasado de mil ochocientos noventa y seis, fojas cinco, D. Alberto Cadaval y Martí estableció demanda declarativa de menor cuantía contra Doña Matilde Japón y Ramos, en cobro de mil ciento sesenta y cuatro pesos, setenta y dos centavos oro, fundando dicha demanda en los siguientes hechos:

*Primero:* que según aparece del documento que marcado con el número primero acompaño en primero de Julio de mil ochocientos ochenta, D. Jacinto Villageliú recibió de D. Andrés Lobato, en calidad de préstamo, la suma de mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos en billetes, obligándose á devolverla en igual día del año de mil ochocientos ochenta y uno;

*Segundo:* que según consta del otro documento que también acompaño, marcado con el número dos, en cinco de Julio de mil ochocientos ochenta, el propio Jacinto Villageliú, recibió de Andrés Lobato, en igual concepto de préstamo, la suma de mil cuatrocientos cincuenta pesos en billetes, obligándose á devolverla el día treinta y uno de Abril de mil ochocientos ochenta y uno;

*Tercero:* que vencidos los pagarés, se han practicado cuantas gestiones humanamente han sido posibles para obtener el cobro, resultando todas ellas infructuosas;

*Cuarto:* que Jacinto Villageliú falleció en cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y cinco, sin sucesión, según consta de la certificación del Registro Civil correspondiente que acompaño, y bajo disposición testamentaria otorgada en esta ciudad ante el Notario D. Francisco de Castro, en nueve de Febrero de mil ochocientos noventa y cinco, dejando por única y universal heredera á su esposa Matilde Japón;

*Quinto:* que los referidos pagarés fueron endosados al que habla, y que gestionó también cuanto fué posible para lograr que la Sra. Japón le abonara su importe, resultando estas gestiones tan inútiles como las anteriores;

*Sexto:* que en los pagarés no se consignó interés, pero es claro que deben abonarse los legales desde la fecha en que se reclaman judicialmente;



*Séptimo:* que el préstamo se realizó en billetes del Banco Español, que han de reducirse á oro, á razón del doscientos cuarenta y nueve y medio por ciento, que fué el tipo á que terminó la recogida del mismo, según decreto de Marzo de mil ochocientos noventa y dos;

*Octavo:* que acompañó certificación del Juzgado Municipal del distrito de Guadalupe, de la que consta haberse intentado inútilmente la conciliación; y concluyó suplicando se condene á la demandada Sra. Japón y Ramos al pago de los mil ciento sesenta y cuatro pesos setenta y dos centavos en oro antes dichos, con los intereses legales desde la interpelación judicial y las costas causadas y que se causaren hasta el efectivo pago;

*Resultando segundo:* que admitida la demanda y emplazada Matilde Japón y Ramos, fojas 9, dentro del término legal, compareció por medio del Procurador José Urquijo y evacuó el trámite de contestación, fojas 12, fundándose en los siguientes hechos:

*Primero:* que no me consta la certeza de los tres primeros hechos del escrito de demanda, por tratarse de cosas relativas á D. Jacinto Villageliú y no á mi poderdante;

*Segundo:* que es cierto el cuarto hecho del referido escrito;

*Tercero:* no me consta el primer extremo del quinto hecho y niego el segundo extremo del mismo;

*Cuarto:* respecto del sexto y á juzgar por la copia, parece cierto que no se consignó interés en los pagarés, dado que sean ciertos;

*Quinto:* ignoro el hecho séptimo por no referirse á ningún acto propio de la demanda;

*Sexto:* es cierto el hecho octavo;

*Séptimo:* mi defendida es y fué siempre vecina de Jaruco y reside accidentalmente en esta ciudad;

*Octavo:* los pagarés no expresan el lugar en que ha de cumplirse la obligación;

*Noveno:* el endoso es posterior en muchos años al vencimiento de los mismos;

*Décimo:* se intenta su cobro, muchos años también después de vencidos; y concluye suplicando que en definitiva se declare haber lugar á la excepción dilatoria de incompetencia, disponiendo que se remitan los autos al Juez de Jaruco para que resuelva acerca del pleito, con las costas de cargo del demandante, y que si á esto no hubiere lugar, se declare que ha prescrito la acción que se ejercita, absolviendo de la demanda á su poderdante é imponiendo el pago de las costas al actor;

*Resultando décimotercero:* que concluso el término de la prueba, se unieron á los autos las practicadas y se convocó á las partes á comparecencia celebrándose esta el día once del actual, con la concurrencia del actor y de la representación de la demanda, alegando cada una en dicho acto lo que estimaron conveniente á su derecho;

*Resultando:* que recibido el juicio á prueba y practicadas las que ofrecieron los litigantes en apoyo de sus respectivas pretensiones y celebrada la comparecencia que previene la ley en esa clase de juicios, se dictó sentencia en diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y seis, declarando con lugar la excepción dilatoria de incompetencia propuesta por la parte demandada, y que se remitieran los autos al Juez de primera instancia de Jaruco para que resolviera sobre el fondo de la demanda, con las costas á cargo del demandante;

*Resultando:* que interpuesta apelación por éste, y admitida en ambos efectos, se elevaron los autos á la Audiencia de esta ciudad y previa la sustanciación necesaria, se mandó traer los autos á la vista para sentencia con citación de parte, señalándose para el acto de la vista el día nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, en el cual tuvo efecto con intervención de la apelada, declaró la Sala de lo Civil sin lugar las excepciones de incompetencia y de prescripción, y con lugar la demanda, condenando á Doña Matilde Japón viuda de Villageliú como heredera de éste, al pago dentro del término de quinto día de la cantidad reclamada y sus intereses legales desde la interpelación judicial á D. Alberto Cadaval, como cesionario de Andrés Lobato;

*Resultando:* que contra esa sentencia interpuso Matilde Japón, viuda de Villageliú, recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en los casos cuarto y sexto del artículo mil seiscientos noventa y uno y lo dispuesto en el mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no haberse practicado citación para sentencia, ni en primera ni en segunda instancia, y porque la Sala no dió lugar á que fallara ningún Juez en el fondo del pleito, puesto que lo hizo ella en primera y única instancia; sin que, por otra parte, le fuera posible hacer gestión alguna para obtener la subsanación de esa falta, por haberse cometido en la misma sentencia de la Sala;

*Resultando:* que negado ese recurso, por estimar la Sala que no estando declarada pobre por sentencia firme la recurrente, debió constituir el depósito que exigía la ley entonces vigente; é interpuesto recurso de queja contra el auto de dos



de Octubre de mil ochocientos noventa y siete denegatorio del de casación; expedidas las certificaciones del caso y personado en tiempo ante el Supremo de Madrid, ese Tribunal en auto de diez y nueve de Enero de mil ochocientos noventa y ocho revocando el denegatorio de la Audiencia de la Habana, admitió el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la recurrente contra la sentencia que en diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa y siete dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, disponiendo que se le remitieran los testimonios necesarios, previos los emplazamientos oportunos;

*Resultando:* que mandado guardar, cumplir y ejecutar lo resuelto por el Tribunal Supremo de Madrid en auto de veinte y uno de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, quedó sin cumplir ese precepto, y publicada la vigente Orden sobre casación, se dispuso, á solicitud de Cadaval, se notificara nuevamente la sentencia de la Audiencia á los efectos de los artículos 108 y 109 de dicha Orden, lo que verificado y habiendo reproducido el Procurador Esteban de la Tejera á nombre de la recurrente, el escrito de casación anterior, la Audiencia dispuso en veinte y seis de Julio de este año se remitieran los autos á este Tribunal Supremo para la sustanciación del recurso de casación, admitido por el Supremo de Madrid;

VISTOS, siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* que la citación de las partes para la celebración de la comparecencia equivale, en los juicios de menor cuantía, á la citación de las mismas para sentencia, y constando, como consta, que se cumplió aquel trámite, no es de estimarse el recurso en cuanto se funda en ese pretendido quebrantamiento de forma;

*Considerando:* que tampoco procede el recurso por falta de citación para sentencia en la segunda instancia, porque esa formalidad fué observada oportunamente, según consta de las diligencias extendidas á consecuencia de lo dispuesto en la providencia de treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y siete;

*Considerando:* que al abstenerse el Juez de primera instancia de Jesús María de esta ciudad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo seiscientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de resolver sobre la excepción perentoria de prescripción, por haber estimado procedente la de incompetencia alegada, la apelación establecida por Alberto Cadaval, no ha podido comprender aquel primer extremo, y, por consi-



guiente, la Audiencia de esta ciudad no ha debido resolver sobre la cuestión de fondo, puesto que su competencia en grado estaba circunscrita á lo que fué materia de la apelación;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos con lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, de diez y seis de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, la cual casamos y anulamos, sin especial condenación de costas; devuélvanse los autos á la referida Sala de lo Civil, para que reponiéndolos al estado de dictar sentencia los termine de nuevo con arreglo á derecho.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el periódico oficial del gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Gibergera.

---

MANUEL ANTÓN, JOSÉ SEBASTIÁN Y RAMÓN MORALES Y SOTOLONGO, CONTRA MARÍA DE LOS DOLORES NUBIOLA Y CELEDONIO, EDUARDO Y JUANA CAMACHO Y GONZÁLEZ.

**Auto de 14 de Octubre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Francisco Escassis, á nombre de los demandados, contra el auto dictado por la Audiencia de la Habana el 19 de Agosto de 1899.*

### **COBRO DE REDITOS DE CENSOS.**

Cuando falta en el escrito de interposición del recurso la fecha de la última notificación hecha á cualquiera de las partes según lo requiere la Orden número 92 en el número 1.º artículo 5.º y el número 7.º del artículo 7.º no es posible admitir el recurso.

*Resultando:* que en juicio de menor cuantía seguido por Joaquín González Sarraín, como representante de Manuel Antón, José Sebastián y Ramón Morales y Sotolongo, contra María de los Dolores González Nubiola, y Celedonio, Eduardo y Juana Camacho y González en cobro de réditos de un censo, la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana dictó sentencia en veinte y tres de Junio de mil ochocientos noventa y ocho,

contra la cual Francisco Escassi como apoderado de los demandados, interpuso en escrito fecha doce de Julio de aquel año, recurso de casación por quebrantamiento de forma, que le fué admitido por auto de diez y siete de Octubre del mismo año; y por no haber sido emplazadas las partes antes del once de Abril del año actual, la Sala, de conformidad con el artículo ciento ocho de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de esta Isla, artículo que en la copia certificada de la sentencia hoy recurrida se designa con el número ochenta, mandó notificar nuevamente á las partes;

*Resultando:* que Francisco Escassi, con su expresada representación de los demandados manifestó que reproducía el recurso de casación que tenía interpuesto desde el trece de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, haciendo constar que la última notificación que se le había hecho, había sido el doce de Agosto del corriente año, pero no expresó la fecha de la última notificación á cualquiera de las partes, y pidió se hubiese por reproducido íntegramente el escrito de doce de Abril de mil ochocientos noventa y ocho y se le admitiese nuevamente el recurso de casación que le había sido admitido por el auto de diez y siete de Octubre del propio año;

*Resultando:* que la Sala de la Audiencia consideró que el citado artículo de la Orden número noventa y dos al disponer que se notifique de nuevo la sentencia contra la cual se hubiese interpuesto el recurso por infracción de ley ó doctrina ó por quebrantamiento de forma, previene que se interponga el recurso, en los términos, formas y condiciones que la propia Orden expresa, lo cual excluye la manera que la Sala califica de anómala, escogida por Francisco Escassi, ó sea, la de reproducir el escrito que había redactado con arreglo á la legislación que aquella Orden derogó, porque no se ajusta el nuevo recurso á las nuevas formas y condiciones, debiendo prescindirse de todo lo actuado con posterioridad á la sentencia recurrida; declaró en auto de diez y nueve de Agosto del corriente año, no haber lugar á admitir el recurso que por quebrantamiento de forma había Escassi intentado interponer, y mandó se diera á éste la certificación necesaria para que pudiese ocurrir en queja ante el Tribunal Supremo;

*Resultando:* que contra este auto interpuso Escassi, dentro del debido término, recurso de queja ante este Tribunal, y previos los trámites legales se celebró la vista, en que informaron;

*Considerando:* que aunque la petición de que se hubiese por reproducido el escrito de doce de Abril de mil ochocientos noventa y ocho, era conforme con la práctica forense y no obs-

taba á que teniéndose por reproducido aquel escrito, se examinara si en él y el nuevo en que se hacía aquella solicitud resultaban ó no observadas las formas y condiciones que la Orden número noventa y dos exige; en el nuevo escrito, si bien Escassi manifestó la fecha de la última notificación que se le había hecho á él, no expresó la de la última notificación á cualquiera de las partes siendo esta postrera circunstancia una de las que deben consignarse en el escrito en que se interponga el recurso, pues así lo requiere la repetida Orden número noventa y dos en el número primero del artículo quinto y el número séptimo del artículo séptimo;

VISTOS los citados artículos quinto y séptimo y los veinte y tres y cuarenta de dicha Orden número noventa y dos,

SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de queja interpuesto por Francisco Escassi como apoderado de María de los Dolores González Nubiola, Celedonio, Eduardo y Juana Camacho y González, contra el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana el diez y nueve de Agosto del presente año, en que declaró no haber lugar al recurso de casación que por quebrantamiento de forma interpuso Escassi con su enunciada representación; se condena en las costas al recurrente; y comuníquese á la Audiencia para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, lo certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—El Secretario P. D., Armando Riva.

---

JOSÉ SOMARRIBA Y HUMARA CONTRA GERARDO RUIZ DE LA PEDRAJA Y FEDERICO DE LA VIESCA.

Auto de 16 de Octubre de 1899.

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Gerardo Ruiz de la Pedraja y Federico de la Viesca contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el 1.º de Agosto de 1899.*

### JUICIO EJECUTIVO.

Al interponerse el recurso por quebrantamiento de forma, ha de expresarse no sólo en lo que consistió el quebrantamiento, sino que además se ha de expresar qué reclamación se ha hecho para la subsanación de la falta cometida, indicando



caso de imposibilidad para hacerlo, la causa y sus motivos; sin que baste la manifestación de que desde la primera instancia viene reclamando contra dicha infracción.

*Resultando:* que el Procurador Ambrosio L. Pereira, como representante de D. Manuel Sollinde en su carácter de apoderado de Gerardo Ruiz de la Pedraja y de Federico de la Viesca, interpuso, por su escrito de siete de Agosto próximo pasado, ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia de dicha Sala, que confirmó la dictada en veinte y cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y ocho, por el Juez de Primera Instancia de Marianao en los autos del juicio ejecutivo promovido por José Somarriba y Humara contra los indicados Ruiz de la Pedraja y Viesca, por la cual mandó á seguir adelante la ejecución hasta hacer trance y remate de los bienes embargados en dicho juicio; pidiendo el recurrente en su referido escrito que se le admitiera el recurso expresado y se mandase á emplazar á las partes para su comparecencia ante este Tribunal;

*Resultando:* que la referida Sala, por auto de diez de Agosto último, admitió dicho recurso por considerarlo ajustado á las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil declaradas vigentes por el artículo primero de la Orden número noventa y dos sobre casación, y el artículo quinto de la misma;

*Resultando:* que personadas las partes en tiempo y forma, el Ministerio Fiscal presentó escrito durante el término de instrucción, impugnando la admisión del recurso por no haberse cumplido por el recurrente el quinto requisito del artículo quinto de la Orden número noventa y dos y el precepto del artículo mil seiscientos noventa y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, y pidió al Tribunal se sirviera sustanciar y resolver esta cuestión previa, y declarar en su día, mal admitido por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana el mencionado recurso por quebrantamiento de forma;

*Resultando:* que cumplida la tramitación de la causa se celebró la vista señalada el día trece del mes actual, informando el Fiscal y las otras partes por su orden;

*Considerando:* que el caso quinto del artículo quinto de la Orden número noventa y dos sobre casación impone al que interpusiere recurso por quebrantamiento de forma no solo el deber de expresar en el escrito correspondiente, en que consiste dicho quebrantamiento, sino además, y en el mismo escrito, el de expresar también qué reclamación ha practicado para obtener la subsanación de la falta cometida, indicando, en caso de

que no le hubiese sido posible hacerlo, esa imposibilidad y sus motivos;

*Considerando:* que la manifestación hecha por el recurrente de haber venido gestionando desde primera instancia y reproducido en la segunda los motivos y causas en las cuales funda la casación que interpone, no constituye la expresión de la reclamación practicada para obtener la subsanación de la falta cometida, con lo que no se cumple el precepto legal citado que establece esa obligación por parte del recurrente;

SE DECLARA MAL ADMITIDO el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Procurador Ambrosio L. Pereira, á nombre de D. Manuel Sollinde como apoderado de Gerardo Ruiz de la Pedraja y de Federico de la Viesca, sin especial condenación de costas y comuníquese esta resolución á la Audiencia de la Habana para lo que proceda.

Lo proveyeron los Magistrados del margen y firman, lo certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, p. d., Armando Riva.

CASIMIRO ESCALANTE Y DIEGO CONTRA LA SOCIEDAD “NUEVA FÁBRICA DE HIELO”.

Sentencia núm. 2 (19 de Octubre de 1899).

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Casimiro Escalante y Diego contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 9 de Julio de 1898.*

### JUICIO DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El incumplimiento por parte del mandatario, de las obligaciones ó condiciones derivadas del mandato, no puede reputarse como uno de los modos de acabarse este contrato, pues el artículo 1,732 del Código Civil sólo señala entre dichas causas la revocación por parte del mandante, la renuncia del mandatario, la muerte, la interdicción, y la quiebra ó insolvencia del mandante ó mandatario; sin que el mandato aceptado pueda ser tácitamente renunciado, en contra del precepto que ordena poner la renuncia en conocimiento del mandante.

Celebrado un contrato por un comisionista con las formalidades de derecho, el comitente debe aceptar todas las

consecuencias de la comisión, salvo su acción para repetir contra el comisionista por las faltas ú omisiones cometidas al cumplirlo.

En la ciudad de la Habana, á diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por infracción de ley pendiente ante este Tribunal Supremo é interpuesto por el Procurador Juan Mayorga en representación de Casimiro Escalante y Diego, del comercio y vecino de esta capital, en el juicio declarativo de mayor cuantía, sobre cumplimiento de contrato promovido por el Procurador Francisco del Barrio en representación de aquél, en el Juzgado de primera instancia del distrito de Guadalupe, contra la Sociedad Nueva Fábrica de Hielo de la que es Presidente Cosme Blanco Herrera, del comercio y también vecino de esta ciudad, y continuado en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital;

*Resultando:* que el actor con los documentos justificativos de su derecho presentó demanda que fundó en los siguientes hechos:

*Primero:* que la Sociedad anónima Nueva Fábrica de Hielo celebró con Casimiro Escalante y Diego un contrato que se formalizó en un documento privado que á la letra dice: "Conste por el presente documento que queremos tenga igual fuerza y valor que si fuese instrumento público ante Notario y testigos, que de una parte Juan Antonio Bances, Presidente accidental de esta Sociedad y su legítimo representante, y de otra parte Casimiro Escalante, nombrado agente de la misma empresa para la venta de hielo, han convenido lo siguiente:

Primero: Casimiro Escalante se obliga á procurar la adquisición del mayor número de consumidores de hielo;

Segundo: la sociedad anónima Nueva Fábrica de Hielo abonará al Sr. Escalante el tres por ciento sobre el importe total á que ascienda el hielo consumido por los clientes adquiridos por el mismo;

Tercero: la liquidación se hará mensualmente y el importe á que ascienda le será entregado de contado bajo recibo;

Cuarto: si alguna cuenta de cliente proporcionado por el Sr. Escalante resultare fallida será obligación de dicho señor gestionar su cobro;

Quinto: el mencionado tres por ciento ó la comisión de venta será reconocido al Sr. Escalante por todo el tiempo que dure el consumo de los clientes por él adquiridos;

Sexto: con el objeto de facilitar sus gestiones al Sr. Escalante la Sociedad Nueva Fábrica de Hielo se obliga á sufra-



gar los gastos de suscripción por el término de seis meses de un aparato telefónico en el punto que designe el Sr. Escalante, y conformes ambas partes con lo determinado en este contrato firman dos de un tenor y á un solo efecto en la Habana, á catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno.—J. A. Bances.—C. Escalante'';

*Segundo hecho:* que por virtud de ese contrato la compañía dirigió al actor la comunicación que dice: Sociedad Anónima Nueva Fábrica de Hielo. Presidencia. La directiva de esta Sociedad en sesión ordinaria celebrada el día ocho del corriente año acordó nombrar á Vd. agente de la empresa para la venta de hielo en esta localidad bajo las condiciones que determina el contrato que tengo el gusto de remitirle adjunto, del cual se servirá Vd. devolverme firmado un ejemplar, si como espero, está conforme con sus extremos. Lo que participo á Vd. para su conocimiento y efecto consiguiente.—Dios guarde á Vd. muchos años. Habana, Julio catorce de mil ochocientos noventa y uno.—El Presidente p. a., el Vicepresidente, J. A. Bances;

*Hecho tercero:* que en cumplimiento del contrato el actor procedió á practicar las gestiones y diligencias necesarias, obteniendo por sus vastas relaciones en el comercio de esta plaza consumidores constantes para la fábrica, servicio de gran importancia para la empresa, pues surgió en la plaza para hacer competencia á otra ya establecida acreditada y que satisfacía las necesidades del consumo, de ahí el convenio pactado con el Sr. Escalante, su duración indefinida y la remuneración pactada;

*Hecho cuarto:* que hasta Junio de mil ochocientos noventa y dos, la Nueva Fábrica de Hielo hizo liquidaciones periódicas con Escalante entregándole sus alcances, pero desde Abril último y sobre todo desde Mayo próximo pasado la fábrica se ha negado á hacer la liquidación y se ha negado también á surtir de hielo á los consumidores adquiridos por el actor, violando así en todas sus partes el contrato inserto en el número primero;

*Hecho quinto:* las gestiones extrajudiciales practicadas sin resultado y el acto de conciliación intentado sin efecto por no asistencia de la identidad demandada, demuestra la temeridad de esta, terminando el escrito de demanda con la súplica de que se tuviese por presentada la misma contra la Nueva Fábrica de Hielo representada por su Presidente Cosme Blanco Herrera y en definitiva á condenar á la indicada Sociedad á que dentro de quinto día cumpla el contrato de catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno, por el cual nombró agente para la venta de hielo en esta ciudad al actor, asignándole el tres

por ciento del importe del hielo consumido por los clientes que adquiriese durante el tiempo que continuasen consumiendo, le satisfaga sus alcances previa liquidación, proporcione á los consumidores adquiridos por el agente el hielo que éste pida y le indemnice previa liquidación los daños y perjuicios que ha ocasionado y ocasiona la resistencia al cumplimiento de lo pactado con más las costas de este juicio;

*Resultando:* que personada en forma la Sociedad demandada, compareció su Presidente y contestó á la demanda fundando aquella en los siguientes hechos:

Primero: son ciertos los hechos primero y segundo de la demanda por cuanto lo son los documentos en ella transcritos. El contrato privado celebrado en catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno por Juan Antonio Bances, Presidente accidental de la Sociedad y su legítimo representante, y de la otra el actor y la comunicación expedida en la misma fecha del contrato, sobre nombramiento de agente hecho al actor por la referida sociedad para la venta de hielo en esta localidad bajo las condiciones que determina el contrato anteriormente dicho;

*Hecho segundo:* el tercer hecho en que descansa la demanda Escalante está redactado en un párrafo que no tiene desperdicio en cuanto á atribuirse aquel cualidades excepcionales de éxito en sus gestiones de obtener consumidores constantes para la Sociedad fabricadora de hielo, dadas sus vastas relaciones en el comercio de esta plaza que sólo interesa dejar sentado de la manera más solemne, que Escalante no cumplió jamás con la obligación de la cláusula primera del contrato y por ende es incierto todo cuanto pretende afirmar en ese hecho número tres, que después de bien leído no se afirma que llevara los consumidores obtenidos á la Sociedad Nueva Fábrica de Hielo. Lo importante es hacer constar que la Sociedad demandada jamás vió un solo consumidor adquirido por el actor, habiendo en este concepto sufrido un fracaso el actor, asegurando que no encontrará un solo dato en que apoyar lo contrario;

*Hecho tercero:* el hecho número cuatro, tal cual aparece escrito en la demanda, patentiza la poca ó ninguna firmeza que tiene el demandante en su pretensión pues dice aquel "Hasta Junio de mil ochocientos noventa y dos la Nueva Fábrica de Hielo hizo liquidaciones periódicas con Escalante entregándole sus alcances, pero desde Abril último y sobre todo desde Mayo próximo pasado la fábrica se ha negado á hacer liquidaciones y se ha negado también á surtir de hielo á los consumidores adquiridos por mi cliente, violando así en todas sus partes el contrato inserto en el número primero; sometiéndolo á un aná-



lisis, se ve que contiene tres extremos correspondientes á los tres periodos de tiempo que alcanza, primero desde el catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno hasta Junio de mil ochocientos noventa y dos; segundo, desde esa fecha hasta Abril ó Mayo último, y tercero, desde esa fecha hasta en la que se redacta dicho párrafo que es la de la demanda, primero de Junio del año actual.

La sociedad no registra en sus libros cuenta abierta ni de ninguna clase á nombre de Escalante, ni de ninguno que se dijera que le representaba, que á ser ciertas esas liquidaciones y esos alcances que dice el actor le entregaron, tendrían su constancia con toda clase de requisitos, en una sociedad que, además de regirse por las prescripciones de la Compañía Mercantil está constituida en forma anónima, con administradores amovibles con la obligación de publicar mensualmente el balance detallado de las operaciones, pudiendo afirmar no existe en términos absolutos constancia ni antecedente alguno que indique la existencia de esas negociaciones afirmadas por el actor, y que dice tuvieron lugar hasta Junio de mil ochocientos noventa y dos. El contrato se firmó el catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno y su duración no era indefinida, como lo supone Escalante, sino que la duración alcanzaba solo á seis meses. La frase *duración indefinida* que se encuentra al final del tercer hecho, no guarda orden ni concierto en lo que dice. La cláusula tercera del dicho contrato dice: que las liquidaciones se harán mensualmente y este dato hace deducir que el contrato no se celebró por años, sino por meses y luego la cláusula sexta que dice: "con el objeto de facilitar sus gestiones al Sr. Escalante, la Sociedad Nueva Fábrica de Hielo se obliga á sufragar los gastos de suscripción por el término de seis meses, de un aparato telefónico en el punto que designe el Sr. Escalante" completa la verdad de la intención que tuvieron los contratantes de hacer durar solo seis meses el contrato. La sociedad demandada cumplió las obligaciones de su cargo, nombró agente al actor, hizo instalar un aparato telefónico para facilitar sus gestiones y en esta situación aguardó hasta el cumplimiento de los seis meses ó sea, el catorce de Enero de mil ochocientos noventa y dos, en cuyo período de tiempo nada hizo Escalante que determinase el cumplimiento por su parte de lo que el mismo contrato le exigía, *ipso facto* quedó relevado ese nombramiento y retirado el servicio del teléfono y terminado el contrato por haber expirado el tiempo de su duración. Nada tenía que reclamar Escalante porque no estaba en condiciones para ello toda vez que no había cumplido las obligacio-



nes de su parte, hasta Enero de mil ochocientos noventa y dos que finiquitó el contrato y desde este, hasta Junio del mismo año que él señala, no sólo no hubo liquidación ni alcances como se ha manifestado, que no los hubo nunca, sino que ya entonces no había ni contrato: el segundo período de tiempo de ese hecho, número cuatro, es el comprendido entre Junio de mil ochocientos noventa y dos y Mayo de mil ochocientos noventa y siete, no pudiendo descifrar lo que ocurriese en esos cinco años en que Escalante dice siguió suministrando consumidores á la empresa, y esta omisión es capitalísima dentro de una demanda que se establece exigiendo el cumplimiento de un contrato. El último extremo del párrafo que contesto no se sabe a ciencia cierta en qué fecha empieza y en cuál acaba, pues dice que las negativas á hacer la liquidación y á surtir de hielo á los consumidores comenzaron desde Abril último y sobre todo desde Mayo. Quedando el primer mes formando lote con aquel largo período de tiempo superior á cinco años, en que ni Escalante ni persona alguna á su nombre dan signo de vida en cuanto á la gestión. El mes de Mayo último fué el de las negativas, y en él comenzaron por concluir á los veinte y cuatro días si el término fué la conciliación ó treinta y uno, si aquellos continuaron hasta la demanda, que tiene fecha primero de Junio. Extrañando, como no puede menos, que quien en cinco años no reclamó, quien en veinte y cuatro días viniese manifestando que no le han liquidado y que no se suministró hielo llegando hasta consignar que la Sociedad demandada ha violado el contrato en todos sus extremos;

*Hecho cuarto:* el quinto hecho de la demanda envuelve poco interés, las gestiones extrajudiciales que dice el actor ha practicado sin resultado pudieran referirse á visitas ó conferencias con la Sociedad demandada, no son suficientes para hacer descansar en ellas la justificación del derecho á pedir el cumplimiento de un contrato. El demandante jamás ha visitado ni con ese ni con otro motivo la casa de la Sociedad demandada ni á su nombre ha ido á ver á persona alguna, y si las gestiones se refieren al requerimiento por acto notarial hecho en diez y ocho de Mayo último al Secretario de la Empresa por ausencia del administrador de la misma, se ve en aquella que se refieren á hechos consignados por el Notario á instancia de parte interesada y con ello no adelanta nada el actor porque con requerimiento y sin él la Sociedad demandada insiste en declarar como hecho incierto el de llevar consumidores adquiridos por su gestión en ningún tiempo desde la fecha del contrato hasta el de la demanda y le niego el derecho después de la fe-

cha catorce de Enero de mil ochocientos noventa y dos á mandarlos consumidores. Y todo el hecho quinto que trata de las gestiones practicadas por el actor para acreditar sus buenos deseos de avenirse con él la Sociedad demandada y á las cuales añade la falta de asistencia el acto de conciliación, no tiene todo ello otro objeto que llamar á aquélla temeraria, no entendiendo que la simple incomparecencia al acto conciliatorio indique temeridad, creyendo reuna esta cualidad el actor terminando con la súplica de que se tuviera por contestada la demanda y por negada la misma por no haber el actor cumplido con la obligación de la cláusula primera del contrato, pues no llevó nunca á la Sociedad un solo consumidor de hielo y consecuente con esta emisión, jamás se hicieron liquidaciones ni alcances ni razón para acceder á las mismas con posterioridad á fecha ninguna; y en definitiva declarar sin lugar dicha demanda absolviendo de ella á la Sociedad demandada, condenando al actor á perpetuo silencio y al pago de todas las costas del juicio;

*Resultando:* que dado traslado al actor, evacuó el escrito de réplica, exponiendo que la Sociedad demandada había reconocido en la contestación á la demanda los hechos fundamentales de la demanda, si bien procurando desvirtuar su aquiescencia con ingeniosas divagaciones, encaminadas á mortificar al actor y aun cuando niega que el actor tuviera consumidores, ya demostrará lo contrario en el período probatorio; rebatiendo que el contrato se hubiera hecho por seis meses sin más fundamento que el convenio de que durante ese plazo estaba obligada la compañía á pagar á Escalante un servicio telefónico, prescindiendo al discurrir así la Sociedad demandada, de todas las restantes cláusulas del documento que expresamente dicen lo contrario en sus cláusulas primera y segunda á que se remiten, y sobre todo en la quinta que dice: el mencionado tres por ciento ó comisión de venta será reconocido al Sr. Escalante por todo el tiempo del consumo de los clientes por él adquiridos; fijando como puntos definitivos del debate los mismos hechos de la demanda que da por reproducidos en el referido escrito de réplica, haciendo constar que han sido reconocidos como auténticos los documentos privados transcritos en los hechos primero y segundo y que la Sociedad demandada confiesa haber pagado las seis mensualidades del aparato telefónico instalado en cumplimiento de la cláusula sexta del contrato; negando las obligaciones de la Sociedad demandada y fallar en definitiva como tienen solicitado;

*Resultando:* Que conferido traslado á la Sociedad deman-



dada en dúplica la evacuó reproduciendo en todos sus extremos el escrito de contestación á la demanda, haciendo consideraciones acerca de los testigos que figuran en el acta que se acompañó á la demanda para demostrar lo ineficaz de ese acto llamado por el actor en apoyo de su aserto, reproduciendo además los fundamentos de hecho y de derecho de la contestación, negando nuevamente la demanda y todos los extremos del escrito de réplica, fallando en definitiva como tiene solicitado;

*Resultando:* que previos los demás trámites legales procedentes, el Juzgado dictó sentencia en treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, declarando sin lugar la demanda, absolviendo de ella á la Sociedad "Nueva Fábrica de Hielo" y condenando en las costas al actor, é interpuesta por éste apelación, que fué debidamente sustanciada, la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, estimando entre otros fundamentos, que el contrato celebrado entre las partes es en realidad un simple contrato de mandato ó de comisión mercantil, sin tiempo de duración determinado, cumplido durante cierto tiempo por ambos contratantes y con posterioridad dejado de cumplir por el actor, cuyo abandono y la no revocación del mandato ó comisión por la otra parte, como también la falta de excitación de la última al primero, para el desempeño del mandato, hacen presumir que Escalante renunciaba la agencia, mandato ó comisión que se le había conferido y que tácitamente ambas partes daban por terminado el contrato, falló, en nueve de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, confirmando la sentencia apelada é imponiendo al actor las costas de la segunda instancia;

*Resultando:* que contra la referida sentencia de la Sala interpuso el actor recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal citando como infringidos á su juicio:

Primero. El artículo mil setecientos treinta y dos del Código Civil, por presumirse en la sentencia que el contrato feneció por el abandono de las gestiones de Escalante como agente de la Compañía, siendo así que el tal abandono pudiera originar una reclamación por daños y perjuicios, pero no una rescisión del contrato, puesto que no es ninguno de los tres casos enumerados taxativamente en dicho artículo mil setecientos treinta y dos del Código Civil;

Segundo. La constante doctrina legal del Tribunal Supremo, en virtud de la cual, las sentencias no pueden comprender más de lo alegado y probado, así como también de lo pedido, por estimarse en la sentencia la excepción de prescripción de acción, no alegada por la sociedad demandada, que se limitó á



negar rotundamente la demanda; cuyos motivos de casación expresó el recurrente ser los comprendidos en los números primero y tercero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que personados ante este Supremo Tribunal los litigantes y dada al recurso la tramitación correspondiente, se celebró la vista en once del que cursa con asistencia de ambas partes personadas;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,

*Considerando:* que el artículo mil setecientos treinta y dos del Código Civil se concreta á señalar precisamente y en párrafos distintos, primero la revocación por el mandante; segundo: la renuncia del mandatario; tercero: la muerte, interdicción, quiebra ó insolvencia del mandante ó del mandatario, como modos de acabarse el mandato, no comprendiendo entre estos el incumplimiento por el mandatario de las obligaciones derivadas del mandato, cuya no ejecución solo produce, con relación á aquel, las responsabilidades expresamente consignadas en otras disposiciones, sin que por otra parte pueda el mandato ya aceptado, ser tácitamente renunciado en contra del precepto que ordena al mandatario poner la renuncia en conocimiento del mandante: de todo lo cual se desprende que, al atribuir la sentencia recurrida á la omisión de Escalante el valor y efecto que concede á la renuncia el mencionado artículo mil setecientos treinta y dos del Código Civil, lo ha infringido por su indebida aplicación al caso del juicio;

*Considerando:* en cuanto al segundo de los motivos de casación aducidos, que la supuesta infracción de doctrina legal, consistente en comprender la sentencia recurrida más de lo alegado y probado en el juicio, aun cuando como es indispensable y no se ha hecho por el recurrente, hubiese este citado el precepto legal que autoriza el recurso en dicho caso, de ningún modo podría aceptarse como fundamento para la casación solicitada, toda vez que parte del supuesto inexacto de estimarse en el fallo de la Sala la excepción de prescripción, que no se estima; y por la misma razón es igualmente ineficaz para el objeto del recurso, la supuesta infracción de comprender el fallo más de lo pedido, y como también porque no otorga más de lo pedido la sentencia que declara la demanda sin lugar y absuelve de ella al demandado, conforme en esto con la solicitud de dicha parte según así lo afirma la Jurisprudencia constantemente establecida, contra la cual tampoco el recurrente, como debió hacerlo, invoca decisión alguna determinada de Tribunal idóneo para sentar doctrina, ni hace la necesaria referencia al

texto legal á que concierne la que en tan vagos términos pretende se ha infringido;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos haber lugar por el primero de los motivos alegados al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Casimiro Escalante y Diego y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en nueve de Julio de mil ochocientos noventa y ocho dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital, sin especial condenación de costas: líbrese á dicha Audiencia la correspondiente certificación de esta sentencia y de la que á continuación se dicta, con devolución del apuntamiento remitido y publíquese en la *Gaceta de la Habana* y en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

OTRA. En la ciudad de la Habana, á diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia del distrito de Guadalupe y en la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital, por Casimiro Escalante y Diego del comercio y vecino de esta ciudad, representado en dicha Audiencia por el Procurador Juan Mayorga y defendido por el Ldo. Leopoldo Canceio, contra la Sociedad Mercantil Nueva Fábrica de Hielo, constituida en esta ciudad y representada por su Presidente Cosme Blanco Herrera, cuyos procurador y abogado en la segunda instancia fueron respectivamente Esteban de la Tejera y Ldo. Alfredo Bernal, sobre cumplimiento de contrato é indemnización de daños y perjuicios, pendiente ante este Supremo Tribunal, por casación de la sentencia dictada en apelación por la referida Sala en nueve de Julio de mil ochocientos noventa y ocho y recurrida por el mencionado demandante. Aceptando los resultados de la sentencia dictada por el Juez en treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete;

*Resultando:* que contra la referida sentencia, por la cual el Juez declaró sin lugar la demanda establecida, absolviendo en ella á la Nueva Fábrica de Hielo con las costas á cargo del demandante, interpuso este recurso de apelación que le fué admitido en ambos efectos y se elevaron los autos á la Audiencia para la tramitación de la segunda instancia;

*Resultando:* que en la ulterior sustanciación del juicio se han observado las prescripciones legales pertinentes;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,



*Considerando:* que por no haber sido objeto de contención en el juicio la certeza, validez y eficacia de contrato, antes bien, implicando la reclamación del demandante para su cumplimiento por el demandado, juntamente con la oposición del último fundada en el incumplimiento por el primero, la aceptación por ambas partes de que el contrato es cierto, válido y eficaz, sobre cuyos extremos, además, han hecho durante el curso del litigio diversas manifestaciones que los presentan expresamente contestes en esta materia, sólo importa fijar en la presente decisión, como cuestiones en debida forma planteadas, si el contrato subsiste ó se ha extinguido, si se han cumplido ó no por uno y otro contratantes las respectivas obligaciones del mismo derivadas, en cuanto se dicen infringidas, y si la falta de su cumplimiento por parte del actor puede ó no constituir excepción útil en favor del demandado, y, consiguientemente, resolver sobre las pretensiones concretas de ambos litigantes;

*Considerando:* que el contrato celebrado en catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno entre Casimiro Escalante y Diego y la empresa anónima Nueva Fábrica de Hielo, por virtud del cual se obligó aquel, mediante encargo de esta, á procurar la adquisición del mayor número de consumidores del hielo producido por la misma, quien á su vez quedó obligada á abonarle en concepto de comisión de venta, por todo el tiempo que durase el consumo de los nuevos clientes que llevara, el tres por ciento del importe total del hielo por tales clientes consumido, constituye, por su naturaleza y forma, un mandato especial y retribuido de los regulados en el título noveno del Libro cuarto del Código Civil, y que, por ser su objeto un acto de comercio y comerciante la compañía mencionada, debe reputarse comisión mercantil y regirse por las disposiciones del título tercero, libro segundo del Código de comercio y en defecto de reglas aplicables conforme al derecho especial de que se trata, por los preceptos de la legislación común;

*Considerando:* que en el contrato referido no se contiene estipulación alguna determinante de su duración, pues el término de seis meses que se señala en la cláusula final, después de consignarse en la penúltima que la comisión de venta, será reconocida á Escalante por todo el tiempo que dure el consumo de los clientes que él adquiriera, se refiere con toda precisión y claridad á la obligación de carácter secundario contraída por la Sociedad, de satisfacer determinados gastos, consiguientes al empleo de un aparato telefónico destinado á facilitar las gestiones del comisionista y carece por tanto, del alcance que se le atribuye en la infundada interpretación del comitente, quien,



por el contrario, siendo como fué para él causa del contrato, el beneficio que habrían de obtener sus intereses merced al aumento del consumo que trajeran los servicios del comisionista, al no limitar de modo expreso la importancia ó cuantía del propuesto aumento, sino encargar al comisionista que procurase adquirir el mayor número de consumidores, significó evidentemente una intención que relacionada con el hecho á la sazón probable y hoy día por la realidad acreditado, de continuar la fábrica produciendo hielo por un período más largo de seis meses, no autoriza, antes se opone á dicha interpretación; mientras, por otra parte, dadas la índole de la industria que ejercía el comitente, su facultad de revocar en cualquier estado del negocio al mandato referido y la del mandatario de renunciar el mismo, aparece del todo racional que no se redujese á plazo definido la duración de tal encargo, cuyos efectos ni aun en el supuesto establecido por la Compañía demandada podían cesar completamente al concluir el término pactado, porque subsistiría sin posible duda, la obligación del comitente de pagar al comisionista el premio convenido por todo el tiempo que más allá de los seis meses se prolongase el consumo procurado durante dicho término;

*Considerando:* que las alegaciones de la Compañía demandada, negando que Escalante le haya procurado en ningún tiempo consumidores, que haya entre ambos mediado liquidación alguna, ni existido jamás alcances de éste contra aquélla ó hecho nada por el mismo que determine el cumplimiento por su parte de lo que el contrato le exigía, están en pugna con la prueba recibida en el juicio según la cual, no solamente por medio de testigos que presentaron el actor y la propia compañía demandada y por medio también de documentos, sino además por el examen de los libros de comercio de dicha Compañía, se ha acreditado que Escalante en su calidad de agente, le proporcionó consumidores que se han surtido de la Fábrica, practicó con esta liquidaciones y percibió de ella cantidades por razón de tal consumo, habiéndose asimismo justificado que la requirió notarialmente para que sirviera otros pedidos que rehusaba servir la Sociedad, todo lo cual demuestra el desempeño de la comisión por el comisionista, sin que por extraordinarias y graves que fueren la morosidad, negligencia ó abandono en que respecto de su ejecución pueda haber incurrido durante la época que medie desde su última gestión aceptada por la compañía hasta el primer pedido que esta rehusó servir, quepa cambiar la naturaleza propia y valor legal de semejantes ú

otras omisiones para confundirlas, como pretende la parte demandada, con el total incumplimiento de la comisión;

*Considerando:* que aun en el caso de no haber Escalante en absoluto cumplido la comisión pactada, no por ello la comisión se había terminado, porque el efecto de la falta de cumplimiento por el comisionista es aumentar y no extinguir sus obligaciones primitivas, con el nacimiento de responsabilidades que no originó el contrato, sino la omisión del contratante; y que la revocación tácita, que invoca la compañía demandada, no puede darse en el contrato de mandato, bien sea civil ó mercantil, porque, aunque el otorgamiento y la aceptación pueden sí ocurrir tácitamente, la revocación, al igual que la renuncia deben por su índole peculiar y por prescripción terminante de la Ley, realizarse en forma expresa, tanto en la esfera del derecho especial como en la del común;

*Considerando:* que las afirmaciones contenidas en los escritos de contestación y réplica, sosteniendo que á nada estaba obligada la Sociedad Nueva Fábrica de Hielo por virtud del contrato celebrado, en razón á que el actor nunca cumplió las que á él correspondían, alegando que el contrato expiró á los seis meses de otorgado, por ser este el término de su duración, sin que Escalante hubiese llevado á la Fábrica consumidor alguno, y negándole el derecho de llevarlos después de transcurridos los seis meses, y la reiteración de alguno de estos fundamentos, aun después de practicada la prueba en el trámite de conclusión, lejos de suponer el cumplimiento de sus obligaciones por la Compañía demandada, implican el reconocimiento de que no las ha cumplido, y en relación con el conjunto de la prueba, convence plenamente de su parcial incumplimiento;

*Considerando:* que la obligación impuesta por el contrato al demandante de adquirir consumidores para la Nueva Fábrica de Hielo no se concibe, porque sería de imposible cumplimiento, sin la obligación correlativa á cargo de la Sociedad de entregar á los clientes adquiridos por aquél el hielo que pidiesen para su consumo, entrega en realidad indispensable para que llegasen á ser consumidores, siendo además inadmisibles que la Sociedad no haya contraído dicha obligación, porque valdría tanto como dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de uno de los contratantes, aparte de que son reglas conocidas de la comisión mercantil que, celebrado un contrato por el comisionista con las formalidades de derecho, el comitente deberá aceptar todas las consecuencias de la comisión, salvo su acción para repetir contra el comisionista por faltas ú omisio-



nes cometidas al cumplirlas: que si el comisionista contrata en nombre del comitente, con manifestación de dicha circunstancia, el contrato y las acciones derivadas del mismo producirán su efecto entre el comitente y la persona ó personas que contrataren con el comisionista: y que hasta en el caso de revocar el comitente la comisión conferida al comisionista, lo que habrá de poner en su noticia, queda siempre obligado á las resultas de las gestiones practicadas, antes de haberle hecho saber la revocación;

*Considerando:* que los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia ó morosidad y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas, quedan sujetos á la indemnización de los daños y perjuicios causados, cuya indemnización comprende, no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de tener el acreedor: que, si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y á falta de convenio en el interés legal, que, conforme al Código Civil, es de seis por ciento al año; y que los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán en los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes ó por la ley al día siguiente de su vencimiento;

*Considerando:* que por no ser posible ahora fijar en cantidad líquida el importe de los daños y perjuicios causados al actor porque faltan en los autos elementos para la exacta determinación de su cuantía, procede establecer las bases á que deberá sujetarse su liquidación en el curso de las actuaciones necesarias para la ejecución de esta sentencia;

*Fallamos:* que debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por el Juez de primera instancia del distrito de Guadalupe de esta capital, en treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, y declaramos con lugar la demanda establecida por Casimiro Escalante y Diego, contra la Sociedad mercantil Nueva Fábrica de Hielo, á la cual en consecuencia condenamos:

Primero: á cumplir en el término de quinto día el contrato celebrado con el referido Escalante en catorce de Julio de mil ochocientos noventa y uno á cuyo efecto le pague la cantidad que, según liquidación que se practique, resulte adeundarle por razón del tres por ciento de premio convenido sobre el importe total de las ventas de hielo efectuadas con su intervención co-



mo comisionista ó agente de la Sociedad, computándose para la liquidación todo el tiempo de duración del consumo procurado por aquel, con excepción de lo ya liquidado y satisfecho mediante operaciones anteriores entre ambos contratantes: entregue á los nuevos consumidores que Escalante haya procurado ó procurase mientras no se extinga legalmente la comisión estipulada, los pedidos concretos de hielo recibidos y pendientes y cuantos más reciba: y sobre el total valor del hielo que á partir de la liquidación antes dispuesta sigan consumiendo los antiguos compradores y del que compraren los nuevos consumidores que Escalante adquiriera, pague al mismo Escalante conforme á la liquidación mensual que oportunamente verifiquen por todo el tiempo que dure en lo adelante el consumo de unos y otros clientes, la cantidad que corresponda al tres por ciento de premio convenido como comisión de venta;

Segundo: á que indemnice al mencionado Escalante de los daños y perjuicios que le ha causado por su falta de cumplimiento del contrato, á cuyo efecto le pague: primero, el tres por ciento del total valor que corresponda á los pedidos concretos de hielo realizados por aquél para tercero ó por tercero, mediante la gestión de aquél y dejados de cumplir por todo el tiempo de consumo anunciado al realizarlos, partiendo de la fecha en que debieron comenzar á ser cumplidos; segundo, el interés legal de seis por ciento al año sobre el importe de las cantidades que resulten según liquidaciones mensuales que se practicarán, por el concepto expresado en la base precedente: cuyo interés comenzará á contarse respecto de cada partida ó cantidad mensual que resultare, desde el día primero del mes siguiente á aquel á que la respectiva partida corresponda;

Tercero: el interés legal de seis por ciento al año sobre el importe de las cantidades que resulten según liquidaciones mensuales que se practicarán, por concepto del tres por ciento de premio correspondiente á Escalante en el valor de las ventas realizadas por la gestión del mismo, computándose la totalidad del consumo procurado con excepción del comprendido en liquidaciones ya concluidas entre ambos contratantes; cuyo interés se liquidará en la forma que establece la base precedente sin especial condenación de costas en ninguna de las dos instancias.

Así, por esta sentencia, que se publicará en la *Gaceta de la Habana* y en la Colección legislativa, para lo cual se expedirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llo-

rente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

RAFAEL GONZÁLEZ GARI CONTRA JOSÉ DE OSTOLAZA.

Auto de 20 de Octubre de 1899.

*Recurso de casación por infracción de doctrina legal, interpuesto por González Gari contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el día 9 de Agosto de 1897.*

### JUICIO DE MENOR CUANTIA.

Los recursos de casación no se dan contra las resoluciones que no tienen el carácter de definitivas; y tratándose de un incidente á un juicio de menor cuantía, no otorgándose en lo principal, menos puede darse en lo accesorio.

*Resultando:* que á consecuencia de un incidente sobre embargo preventivo promovido por Rafael González Gari en los autos declarativos de menor cuantía contra José de Ostolaza, interpuso el primero el recurso de casación por infracción de doctrina legal contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad el día nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, que le fué notificada al mencionado González Gari, á los efectos del artículo ciento ocho de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de esta Isla, el veinte y nueve de Julio de este año;

*Resultando:* que admitido este recurso, y personados ambos litigantes en este Tribunal, durante el término de instrucción promovió Juan Mayorga como representante de José Ostolaza el incidente previo de impugnación del recurso admitido; señalándose el día diez y ocho para la vista pública de dicho incidente; en cuyo acto informaron los abogados de las partes;

*Considerando:* que según el precepto del artículo siete de la Orden sobre casación, el Tribunal sentenciador ante el cual se hubiere presentado un escrito interponiendo un recurso de aquella naturaleza, debe examinar si se ha interpuesto contra una sentencia definitiva ó que tuviere carácter de tal ó contra una resolución que fuere susceptible, según la ley, de dicho recurso, y no reuniendo algunas de esas condiciones debe declarar sin lugar la admisión del mismo;

*Considerando:* que la sentencia dictada por la Sala de lo

Civil de la Audiencia de esta ciudad el nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y siete ni es definitiva ni tiene tal concepto, por cuanto recayó en un incidente no poniendo término al pleito principal haciendo imposible su continuación; ni, por otra parte, es resolución susceptible del recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal, en atención á que el incidente en que recayó como derivado de un juicio de menor cuantía participa la naturaleza de éste, y no dándose el referido recurso en dicha clase de juicios, tampoco puede darse en sus incidentes; por todo lo cual fué mal admitido por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad y es procedente declararlo así, conforme al precepto del artículo treinta y cuatro en relación con los siete y veinte y ocho de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de esta Isla, sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal;

SE DECLARA MAL ADMITIDO el recurso de casación por infracción de doctrina legal interpuesto por el Procurador Esteban de la Tejera á nombre de Rafael González Garí contra la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad de nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, sin especial condenación de costas; y con devolución del apuntamiento, comuníquese á la referida Audiencia para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los señores Magistrados del margen, lo certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D. Armando Riva.

---

MANUEL A. JUNCO, ADMINISTRADOR DEL INTESADO DE D.<sup>a</sup> MERCEDES AMADOR, CONTRA FRANCISCO MESTRE Y DOMÍNGUEZ.

Auto de 23 de Octubre de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Manuel A. del Junco contra el auto de 11 de Septiembre de 1899, dictado por la Audiencia de la Habana.*

### INCIDENTE EN JUICIO EJECUTIVO.

El auto por el cual una Audiencia manda cumplir dentro de un incidente de embargo un exhorto de otro Juzgado, no tiene el carácter de resolución definitiva y por lo tanto no cabe contra ella el recurso de casación.

*Resultando:* que en cuatro de Febrero de mil ochocientos



noventa y seis la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana al resolver un incidente al juicio ejecutivo de D. Manuel A. Junco, administrador abintestato de Doña Mercedes Amador, contra D. Francisco Mestre y Domínguez, confirmó el auto apelado de diez y nueve de Mayo y su concordante de treinta de Abril de mil ochocientos noventa y cuatro, en los cuales se ordenó el cumplimiento de un exhorto del Juez de Primera Instancia de San Antonio de los Baños;

*Resultando:* que habiéndose entonces interpuesto por Junco recurso de casación por quebrantamiento de forma y anunciándose el de infracción de ley le fué admitido por lo primero, negándosele por lo segundo; pero no habiéndosele emplazado antes del once de Abril de mil ochocientos noventa y ocho, en cumplimiento del artículo ciento ocho de la Orden de casación vigente le fué notificado nuevamente el auto dictado en cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y seis, y, á consecuencia de ello, el Procurador Mayorga, á nombre de Junco, presentó escrito ante la mencionada Sala de lo Civil en nueve de Septiembre próximo pasado interponiendo recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley y de doctrina legal en los términos, formas y condiciones que la mencionada Orden establece, y la Sala de lo Civil, por auto de once de Septiembre declaró no haber lugar á admitirlo por no ser el auto de cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y seis de los que ponen término al pleito haciendo imposible su continuación conforme al número primero del artículo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que el propio Junco cumplido lo ordenado en el artículo diez y seis de la Orden de casación, interpuso la queja ante este Tribunal Supremo en escrito de seis del corriente con arreglo al artículo diez y ocho de la propia Orden, y, llenados los trámites del caso, se señaló para la vista del recurso la una de la tarde del día diez y nueve del corriente, en cuya fecha tuvo aquella efecto, informando el abogado director del recurrente;

*Considerando:* que el recurso de casación sólo procede contra las sentencias definitivas, ó contra las que merezcan el concepto de tales por recaer en un incidente y poner término al pleito principal, haciendo imposible su continuación;

*Consideración:* que según el número primero del artículo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil tendrán el concepto de sentencias definitivas, para que haya lugar al recurso de casación, las que recayendo sobre un incidente ó artículo pongan término al pleito, haciendo imposible

su continuación; y el auto de cuatro de Febrero de mil ochocientos noventa y cuatro por el cual la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana mandó cumplir, dentro de un incidente de embargo, un exhorto del Juez de Primera Instancia de San Antonio de los Baños, si bien puso fin á la cuestión incidental, no por ello puso término al ejecutivo de Junco, pleito principal, ni hizo imposible su continuación, por cuyo motivo no tiene dicho auto el carácter de sentencia definitiva; y la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, al declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto contra aquel auto, obró con estricto arreglo al derecho procesal vigente;

SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de queja interpuesto por D. Manuel A. Junco con las costas á cargo del mismo; y con certificación de este auto comuníquese á la Audiencia de la Habana para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, lo certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Gibergera.—Ante mí, P. D. Armando Riva.

#### SUCESIÓN DE FELIPA VALDÉS CONTRA FEDERICO VENERIO Y COMPARTES.

Auto de 26 de Octubre de 1899.

*Recurso de casación por infracción de Ley y de doctrina legal, interpuesto por la sucesión de Felipa Valdés contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 30 de Diciembre de 1898.*

#### NULIDAD DE VENTA JUDICIAL.

Al citarse por el recurrente como causa de casación los casos 1.º, 4.º y 7.º después de haber citado antes el artículo 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque omite citar el artículo en que se comprenden dichos casos, bien se comprende que se refiere á dicho artículo 1,690, por ser este el único de los citados en que se fijan los casos por infracción de Ley; y por lo tanto no es motivo para la impugnación del recurso.

*Resultando:* que por escrito de catorce de Agosto del año corriente el Procurador Mayorga á nombre de la sucesión de Doña Felipa Valdés en juicio declarativo de mayor cuantía so-

bre nulidad de la venta judicial de una casa en esta ciudad y devolución de frutos contra D. Federico Venerio y compartes, interpuso recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en treinta de Diciembre del año próximo pasado fundado en los artículos mil seiscientos ochenta y siete al mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando al efecto como infringidas las disposiciones que á continuación enumera, cuya infracción está comprendida, como causa justificativa de casación en los casos primero, cuarto y séptimo de la precitada Ley; habiéndose cumplido previamente, respecto á los litigantes lo preceptuado en el artículo ciento ocho de la Orden de casación número noventa y dos; y que por auto del diez y nueve de Agosto próximo pasado la propia Sala de lo Civil admitió dicho recurso por considerar cumplido en dicho escrito lo exigido, respecto á tiempo y forma, en la mencionada Orden;

*Resultando:* que personado ante este Tribunal Supremo el recurrente y corriendo el período de instrucción, común á las partes, el Fiscal por escrito de trece de Octubre corriente impugnó dicho recurso por entender que en el escrito de interposición había indeterminación al fijarse por el recurrente los preceptos legales que autorizan dicho recurso, faltándose por ello á lo exigido en el artículo quinto de dicha Orden número noventa y dos, y pidió que en su oportunidad se declarase mal admitido el recurso y no haber lugar á su sustanciación;

*Resultando:* que habiéndose señalado para la vista de la cuestión previa la una de la tarde del día veinte y tres del corriente, tuvo lugar aquella, informando primeramente el Fiscal y después el abogado director de la sucesión de Doña Felipa Valdés;

*Considerando:* que al citar el recurrente como causa justificada de casación, los casos primero, cuarto y séptimo después de haber citado el artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque omite consignar el artículo en que se comprenden dichos casos, no se ofrece duda de que dicho artículo es el mil seiscientos noventa antes mencionado, por lo mismo que este es el único de los citados en que se fijan los casos por infracción de ley, y á mayor abundamiento ninguno de los otros artículos sobre infracción de ley contiene más de cuatro párrafos ó números, y por tanto no existe la indeterminación alegada por el Fiscal;

SE DECLARA SIN LUGAR la impugnación establecida por el Ministerio Fiscal contra el recurso interpuesto por el Procura-



dor Mayorga á nombre de la sucesión de Doña Felipe Valdés, sin especial condenación de costas, y dése cuenta para proveer lo demás que corresponda.

Lo proveyeron y firman los señores Magistrados del margen, ante mí, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Armando Riva.

---

EVARISTO RUIZ ABASCAL, COMO CESIONARIO DE ALBERTO DE CASTRO, CONTRA CONCEPCIÓN DE LA CANTERA.

Auto de 27 de Octubre de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Evaristo Ruiz Abascal contra el auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana de 16 de Septiembre de 1899.*

#### JUICIO DE MENOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.

Para que sea admitido el recurso de casación por quebrantamiento de forma es indispensable que se haya pedido la subsanación de la falta en la instancia que se cometió, sin que sea admisible la salvedad de que vino á enterarse el recurrente cuando no había términos para pedir la subsanación.

*Resultando:* que Evaristo Ruiz Abascal como cesionario de Alberto de Castro, promovió demandada de menor cuantía contra Concepción de la Cantera en cobro de pesos, y tramitada en primera instancia se elevaron los autos en virtud de apelación á la Audiencia de la Habana, quien dictó la correspondiente sentencia;

*Resultando:* que el Procurador Esteban de la Tejera en nombre del demandante Evaristo Ruiz Abascal interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma contra dicha sentencia, fundándola en el caso segundo del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ó sea falta de personalidad en la demandada y en su procurador porque la Sra. de la Cantera compareció en primera instancia por medio del Procurador Juan Martí, á quien otorgó poder, en virtud de una autorización que le fué otorgada por el Juez de Guadalupe supliendo la licencia marital que no podía concederle su esposo Juan Gobel; autorización de carácter general para todos los asuntos y todos los pleitos que fué objeto de recurso de apelación por dicho Gobel y revocada por la Sala de

lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, en auto de veinte y uno de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete, hecho que dice el recurrente sólo pudo conocer y alegar en el acto de la vista, enterándose también el día antes de la interposición del recurso, de que la Sra. de la Cantera, estando ya en trámite de señalamiento en segunda instancia el pleito seguido contra ella, revocó el poder otorgado, por lo que según expone no pudo alegar esa falta de personalidad ni pedir su subsanación en primera y segunda instancias, siendo de aplicarse por ese motivo el artículo mil seiscientos noventa y cinco de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana por auto de diez y seis de Septiembre último declaró no haber lugar á admitir dicho recurso por no haberse pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, con arreglo al artículo mil seiscientos noventa y cuatro de la Ley procesal citada, sin que baste alegar que se ignoraba la infracción cometida, caso no comprendido en el artículo mil seiscientos noventa y cinco que invoca en su favor el recurrente;

*Resultando:* que personado ante este Supremo Tribunal Evaristo Ruiz Abascal, é interpuesto en forma, recurso de queja contra el auto de la Audiencia de la Habana denegatorio del de casación, se ha sustanciado aquel recurso por los trámites legales;

*Considerando:* que el artículo mil seiscientos noventa y cuatro impone como condición indispensable para que se admita el recurso por quebrantamiento de forma, que se haya pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió; disposición concreta que no admite la alegación hecha por el recurrente de haberse enterado de la falta de personalidad de la Sra. de la Cantera y de su procurador, cuando ya no podía pretender que se subsanase, porque si esa hubiera sido la mente del legislador habría establecido dicha salvedad, limitando así el carácter absoluto del precepto legal indicado;

*Considerando:* que el artículo mil seiscientos noventa y cinco, como el anterior, se refiere al tiempo ú ocasión en que se cometió la falta, y no al en que tuviese conocimiento de la misma, el que la invoque, como motivo del recurso, y se contrae además al caso en que la infracción se haya cometido en la segunda instancia cuando fuere ya imposible reclamar contra ella, caso distinto del presente, por lo que no puede favorecer al recurrente el expresado artículo que alega en apoyo de su recurso;

SE DECLARA NO HABER LUGAR al recurso de queja interpues-

to por Evaristo Ruiz Abascal contra el auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, de diez y seis de Septiembre último, denegatorio del de casación, con las costas á cargo del recurrente.

Y comuníquese á la Audiencia de la Habana para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los señores Magistrados del margen, por ante mí, de lo que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Armando Riva.

---

BENITO CELORIO, COMO APODERADO DE CARLOS BALERDI, CONTRA EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CENTRO, DE LA HABANA.

Auto de 30 de Octubre de 1899.

*Recurso gubernativo interpuesto por Benito Celorio, como apoderado de Carlos Balerdi, contra la nota negativa de inscripción puesta por el Registrador de la Propiedad del Centro.*

### ESCRITURA DE TRANSACCION Y CESION DE BIENES EN PAGO.

Se cumple con lo dispuesto en el número 6.º del artículo 9.º de la Ley Hipotecaria al designarse colectividad de herederos de una persona, teniendo éstos una representación común; y máxime cuando la herencia yacente ha venido considerándose como persona jurídica.

*Resultando:* que el Presidente de la Audiencia, resolviendo el recurso interpuesto, revocó el auto apelado, declarando que procedía realizar la inscripción de las escrituras de diez y ocho y veinte y cuatro de Mayo del año actual, y haciendo otras declaraciones pertinentes al caso; que notificada dicha resolución á las partes, por escrito de diez y nueve de Septiembre próximo pasado el Registrador del Centro apeló de dicha resolución para ante el Presidente del Tribunal Supremo, basándose en el artículo ciento doce del Reglamento hipotecario y diez y seis del Decreto de creación del Supremo; que admitida la apelación interpuesta, según providencia de veinte y uno de Septiembre próximo pasado el mismo día se elevó el expediente original al Presidente del Tribunal Supremo; que en tres de



Octubre corriente se excusó de conocer de este asunto el Presidente del Supremo, por cuanto es un hijo político del mismo el Notario autorizante de las escrituras, cuya inscripción fué denegada, ordenando pasase el conocimiento del asunto al Magistrado más antiguo Sr. González Llorente, quien, á su vez, por diligencia de veinte del propio Octubre, alegó que por tener todo su tiempo ocupado en negocios de que es Ponente se dispusiera pasase el asunto á otro Magistrado, como así se hizo por providencia del veinte y cinco, tocando el conocimiento del asunto al que provee;

*Resultando:* que en nueve de Octubre fué presentado por el Registrador del Centro un escrito de fecha siete del mismo mes, escrito en que hace algunas apreciaciones acerca de la resolución del Presidente de la Audiencia;

Aceptando los Considerandos de la propia Presidencia de la Audiencia, excepción hecha del particular en que se tiene por yacente la herencia de la Sra. Rodríguez de Ortega y el Sr. Juan Sigler cuando es realmente una herencia adida, viniendo á ser por consiguiente innecesaria la suposición de la existencia de la personalidad del difunto para todos los efectos legales, bastando para estos el nombre colectivo de los herederos ó del representante de los mismos;

*Considerando:* que por ser del todo extemporáneas, no son de tomarse en cuenta ninguna de las alegaciones estampadas en el escrito del Registrador del Centro, de fecha siete de Octubre corriente;

*Considerando:* que con arreglo al artículo noveno, circunstancia quinta, de la Ley Hipotecaria y veinte y cinco, número noveno, de su Reglamento, la designación de la persona á cuyo favor se hace una inscripción, ha de hacerse según conste del título, expresando su nombre y apellido, si fuere aquella determinada, y, en otro caso, el nombre de la Corporación ó el *colectivo de los interesados*, (Resolución de la Dirección General de veinte y nueve de Abril de mil ochocientos ochenta); precepto que está bien cumplido al inscribirse á favor de la *colectividad de herederos* de la Sra. Bárbara Rodríguez de Ortega y del Sr. Juan Sigler los bienes dejados por éstos, operación que pudieron hacer legítimamente como la hicieron en el Registro, los representantes de esos mismos herederos;

*Considerando:* que al exigir el número sexto del artículo noveno de la Ley Hipotecaria el nombre y apellido de la persona, ó el nombre de la Corporación ó *persona jurídica* de quien procedan inmediatamente los bienes ó derechos que deban inscribirse, esa persona jurídica, y reduciendo la cuestión

al caso de este expediente, está constituida por la *colectividad de herederos* de la Sra. Bárbara Rodríguez de Ortega y el señor Juan Sigler, representados legítimamente por los señores Fernando Quintana y Domingo Mora y Chávez; siendo razón poderosa que apoya esta consideración el hecho de que si la herencia yacente venía considerándose, como *persona jurídica*, según sentencia de cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y uno, quince de Marzo de mil ochocientos ochenta y uno y nueve de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, no hay razón alguna en el terreno de elevados principios de derecho para que no pueda considerarse también como *persona jurídica* una herencia, adida, como la de que se trata;

*Considerando:* respecto al artículo mil treinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que este se reduce á preceptuar, cumplidos ciertos requisitos, que el Juez podrá decretar la *venta* de cualesquiera de los bienes del abintestato, verificándolo en pública subasta y previo avalúo por peritos y en semejante precepto, que se contrae á *enajenaciones* en el sentido estricto de la palabra, no hay mandato expreso alguno respecto á *transacciones* con acreedores y *daciones en pago* de deudas, como es el caso del actual expediente ocurriendo, á mayor abundamiento, que dicho artículo mil treinta de Enjuiciamiento Civil está en parte modificado por el artículo mil treinta del Código Civil en su final;

*Se confirma* la resolución del Presidente de la Audiencia de la Habana de nueve de Septiembre próximo pasado; y con certificación de este auto comuníquese para lo que proceda, publicándose también en la *Gaceta de la Habana*.

Así lo provee y firma el Magistrado del Tribunal Supremo de la Isla de Cuba, Rafael Cruz Pérez, en funciones de Presidente, por sustitución, lo que certifico.—Rafael Cruz Pérez.—Ante mí, Federico García Ramis.

---

MARCELINO GONZÁLEZ, COMO ESPOSO DE CAROLINA VILLANUEVA,  
CONTRA FRANCISCO MESA COMO REPRESENTANTE DE SU ESPOSA  
SIXTA RUBIO.

Sentencia núm. 2 (1º de Noviembre de 1899).

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por Marcelino Gon-*

*zález contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Jaruco en 23 de Agosto de 1899.*

### JUICIO DE DESAHUCIO.

No se quebranta la forma del procedimiento al conocer un Juez de Primera Instancia de una apelación en juicio de desahucio, aun cuando no se hayan consignado las rentas, cuando la finca se poseía en precario; no pudiendo derivarse de ésto la incompetencia del Juez de Primera Instancia para conocer de dicha apelación.—Y no es admisible el recurso por infracción de Ley, cuando en su interposición se falta á lo que previene el Artículo 5 número 4 de la Orden 92 sobre casación.

En la ciudad de la Habana, á primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley interpuesto por Marcelino González Ruiz, propietario y vecino de la misma, en representación de su esposa Carolina Villanueva y Gómez, también propietaria, contra la sentencia dictada en veinte y tres de Agosto del presente año por el Juez de primera instancia de la ciudad de Jaruco en el juicio de desahucio promovido por aquél, en su carácter expresado, contra Francisco Mesa y Bello, por sí y como representante de su esposa Sixta Rubio, vecinos ambos de Santa Cruz del Norte, Término Municipal de Jibacoa, sin que en el juicio conste su profesión;

*Resultando:* según la sentencia recurrida, que D. Marcelino González Ruiz, á nombre y en representación de su esposa Doña Carolina Villanueva presentó demanda de desahucio en el Juzgado Municipal de Jibacoa en ocho de Junio del corriente año, contra Doña Sixta Rubio por haber terminado el contrato de arrendamiento de la finca conocida por "Chipiona" de la propiedad de Doña Carolina Villanueva;

*Resultando:* según la propia sentencia recurrida, que admitida la demanda por el Juzgado, señalado día para la comparecencia verbal, notificadas las partes se celebró la comparecencia en catorce del propio mes y año ya citados, en cuyo acto el actor reprodujo su demanda, acompañando los documentos para acreditar la propiedad de la finca y la prueba testifical que creyó conveniente á su derecho y el demandado negó la demanda, fundado en la incompetencia de jurisdicción, pues á su juicio, en caso de proceder, correspondía el conocimiento de la misma al Juzgado de primera instancia;

*Resultando:* según la misma sentencia recurrida, que dictada sentencia en veinte y seis del mismo mes y año el Juez



Municipal declaró con lugar la demanda de desahucio, aperebiendo de lanzamiento á D. Francisco Mesa y á Doña Sixta Rubio si no desalojaban la finca en el acto de ser firme la sentencia y condenándoles igualmente al pago de las rentas vencidas desde el diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y cinco, hasta el día ocho del mes y año actual; y de los intereses de seis por ciento que resulten de estas sumas desde el día ocho referido en que se interpuso la demanda, hasta que quede hecho el pago de dichas rentas;

*Resultando:* según dicha sentencia recurrida, que notificando de esa sentencia (la del Juzgado Municipal) D. Francisco Mesa, interpuso apelación en tiempo y forma, la cual le fué negada por el Juzgado, en atención á que no acreditaba tener satisfechas las rentas vencidas, ni haberlas consignado al interponer la apelación;

*Resultando:* según la expresada sentencia del Juez de primera instancia de Jaruco, que Doña Sixta Rubio por medio de su legítimo esposo, interpuso en treinta de Junio recurso de reposición contra el auto que le denegó la alzada, y denegada la reposición por el Juzgado interpuso el de queja ante este Juzgado, acompañado de los documentos en que fundaba los motivos de su queja;

*Resultando:* según la sentencia recurrida, que admitido el recurso, se dispuso que el Juez Municipal de Jibacoa informase con justificación sobre los particulares que motivaron la queja; y remitidos por aquel Juzgado los autos originales se dictó auto por este Juzgado en veinte de Julio último declarando con lugar el recurso de queja por denegación de apelación, entendiéndose admitida aquélla en ambos efectos y ordenándose al Juez Municipal de Jibacoa que con suspensión de todo procedimiento remitiera los autos que se le devolvían, previa citación y emplazamiento de las partes;

*Resultando:* además, que de los fundamentos consignados por el actor en el escrito de demanda aparece que la finca "Chipiona" fué de la propiedad de la demandada Sixta Rubio, quien la vendió en pacto de retro á Rafael Aguiar y éste, á su vez, la vendió posteriormente á Marcelino González Ruiz, habiendo el último al vencerse la obligación del pacto, en diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, prorrogado dicha obligación por otros tres años más, ó sea hasta el diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis, en cuya fecha, por no haberse satisfecho el precio, se resolvió aquella condición y ya dueño en absoluto dominio González Ruiz de la finca

mencionada, la vendió en veinte de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete á Francisco Mañas y Sánchez Aparicio, quien al día siguiente requirió por medio del Juez Municipal á Francisco Mesa y su esposa Sixta Rubio para que la desocuparen por haber vencido desde diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis el término estipulado en el contrato de arrendamiento, que venció justamente con la resolución de pacto, después de lo cual, y sin que los ocupantes hubieren atendido al requerimiento practicado, Francisco Mañas, con fecha once de Enero del corriente año, vendió la finca á Carolina Villanueva y Gómez; siendo el contrato de arrendamiento á que se alude el conjuntamente con el de compra venta convenido como dueño por el primer comprador en pacto con la verdadera Sixta Rubio, quien por consecuencia de aquel doble contrato, pasó de dueña á ser arrendataria;

*Resultando:* asimismo, que la demanda establecida no se fundó tan sólo en haber cumplido el término estipulado en el contrato, que es el único fundamento consignado en el primero de los Resultandos de la sentencia recurrida transcritos más arriba, sino también en venir disfrutando los demandados la finca en precario y habérseles requerido desde el año mil ochocientos noventa y siete para que la desocupasen;

*Resultando:* además, que la parte demandada no se limitó en la comparecencia ante el Juez Municipal, aludida en el segundo de los resultandos transcritos, á las manifestaciones que dicho resultando expresa, sino, además, alegó no tener contrato con González, y estar en posesión de la finca por virtud de retro-compra, realizada mediante consignación judicial del precio convenido á la disposición de González, hecho antes de vencerse el término del pacto con que aquella fué vendida, anteriormente por la parte demandada, cuya consignación dijo la parte haber verificado por no estar González en su residencia;

*Resultando:* que sustanciada por el Juez de Primera Instancia de Jaruco la apelación que antes se ha dicho, dictó sentencia en veinte y tres de Agosto último, por la cual, estimando que el contrato de arrendamiento en que fundó González la demanda había vencido en diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis, sin que existiese tácita reconducción del mismo, puesto que á ello se opone el requerimiento que hizo el arrendador por medio del Juez Municipal; que terminado el contrato de arrendamiento y conocida la expresa voluntad del dueño de que no siguieran los arrendatarios ocupando la finca, no puede decirse que estos la ocupen por virtud de convenio expreso ó tácito, ni puede alegarse el contrato para pedir ante



el Juez Municipal el desahucio; que, á mayor abundamiento, el actor fundó expresamente su demanda en que los demandados vienen disfrutando la finca en precario, lo cual, en efecto, resulta de la larga ocupación posterior al vencimiento del contrato, sin consentimiento del dueño ni estipulación de nuevas rentas y por razón de ello y dándose como causa del desahucio una distinta de las expresamente consignadas en el artículo mil quinientos sesenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Juez Municipal, es incompetente para conocer de la demanda; que la sentencia apelada debió limitarse declarando solamente haber ó sin lugar el desahucio conforme al artículo 1579, sin condenar al pago de rentas, ni disponer el embargo y retención de bienes, porque lo primero no es procedente en el desahucio, y lo segundo, luego que cause ejecutoria al efectuarse el lanzamiento; revocó la sentencia dictada en veinte y seis de Junio anterior por el referido Juez Municipal de Jibacoa sin especial condenación de costas;

*Resultando:* que contra la enunciada sentencia del Juez de Primera Instancia interpuso el demandante, por su escrito de veinte y seis de Agosto próximo pasado, recurso de casación por quebrantamiento de forma, que fundó en el número sexto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando la incompetencia del referido Juez de Primera Instancia para conocer de un asunto ya terminado, á juicio del recurrente, por sentencia firme, porque sólo tenía competencia, y eso para su ejecución, el Juzgado que la dictó, conforme á los artículos 368 y 918 en relación con los 54 y 56 del Enjuiciamiento, y añadiendo otras manifestaciones relativas á las reclamaciones posibles practicadas con anterioridad para obtener la subsanación de la falta que se supone cometida: y al mismo tiempo y por el propio escrito interpuso recurso de casación por infracción de ley, apoyado, según dice, en los casos primero, quinto, sexto y séptimo del artículo mil seiscientos noventa del Enjuiciamiento, los cuales comprenden los términos que se acaban de transcribir dentro de un solo párrafo, señalando como infringidos los artículos mil quinientos sesenta y cinco, mil quinientos sesenta y seis, causa primera del mil quinientos sesenta y nueve, mil quinientos setenta y siete, mil quinientos ochenta y uno y causa segunda del mil novecientos sesenta y seis del Código Civil, y los mil quinientos sesenta, causa primera, mil quinientos sesenta y dos; mil quinientos sesenta y tres, número primero; mil quinientos sesenta y cuatro, mil quinientos sesenta y cinco y mil quinientos ochenta y uno del Enjuiciamiento, cuyas citas se consignan conjunta-



mente del modo aquí transcrito, sin referencia alguna de los preceptos que se suponen infringidos á las distintas causas de casación que se mencionan y sin expresión del concepto en que aquéllos lo hayan sido;

*Resultando:* que admitidos ambos recursos de casación por el Juez ante quien se interpusieron, y personadas las partes del juicio ante este Supremo Tribunal, se señaló para la vista pública, el día veinte y siete del mes próximo pasado, en cuya fecha tuvo efecto, con asistencia de aquéllas;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,

*Considerando:* en cuanto al recurso por quebrantamiento de forma, que en manera alguna puede estimarse como eficaz para la casación pedida, pues, aparte de ser precisamente el Juzgado de Primera Instancia, y no el Municipal, el competente para conocer del juicio de desahucio establecido por la simple razón de dirigirse la demanda, según ella expresa, contra poseedores en concepto de precario, la sentencia dictada por el Juez Municipal en los procedimientos de esta especie es apela-ble en ambos efectos para ante el Juez de Primera Instancia, sin que el precepto prohibitivo de la admisión de tal recurso, cuando lo establece el demandado que no acredite tener satisfec-  
chas, ó, en su defecto, no consigne las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas, sea, porque no puede ser de aplicación al caso en que el actor alega en su demanda la posesión á título de precario por el demandado; en cuya virtud, apelada como fué en tiempo y forma la resolución del Juez Municipal, no cabe reconocerla el carácter de sentencia firme, del cual se pretende derivar la supuesta incompetencia del Juez de Primera Instancia, quien, por el contrario, pudo y debía conocer legalmente del asunto en virtud de dicha alzada, siendo así manifiesto que no se ha cometido la infracción procesal invocada por el recurrente como causa del recurso que interpuso por quebrantamiento de forma;

*Considerando:* que interpuestos á un tiempo y conjuntamente tramitados ambos recursos de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, cuando el primero sea improcedente, debe la misma sentencia por la cual esto se declare, decidir acerca del segundo;

*Considerando:* por consiguiente, en cuanto al recurso por infracción de ley, que es inadmisibile el recurso en cuya interposición se falta á lo dispuesto por el número cuarto del artículo quinto de la Orden número 92 del Gobernador Militar de la Isla, en cuyo caso está el presente, como todo aquel en que, al interponerlo, no se expresen con la debida separación

sus diversos fundamentos ó no se exponga con precisión y claridad el concepto en que hayan sido infringidas las leyes que como infringidas se mencionan, derivándose de tales omisiones la confusión ó indeterminación del problema jurídico, y con ellas la imposibilidad de discutirlo y resolverlo concreta y acertadamente; de lo cual es precisa consecuencia que el artículo séptimo de la citada Orden número 92 no autorice la admisión de un recurso en tales condiciones interpuesto, como también que, si indebidamente es admitido por el Juez ó Tribunal sentenciador y por falta de impugnación cumplidamente tramitado, debe definitivamente declararse sin lugar, ya que ni la admisión acordada contrariamente á la ley, ni la sustanciación debida á una omisión de parte, son suficientes para atribuirle una virtualidad incompatible con su original ineficacia;

*Considerando:* que las costas deben imponerse al recurrente que haya interpuesto de un modo simultáneo ambos recursos por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, cuando ambos fuesen declarados sin lugar;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, conjuntamente establecido por quebrantamiento de forma y por infracción de ley, por Marcelino González y Ruiz, en representación de su esposa Carolina Villanueva y Gómez, contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia de Jaruco, en veinte y tres de Agosto último, é imponemos las costas al citado recurrente, líbrese la correspondiente certificación de esta sentencia al Juzgado referido, con devolución de los autos elevados: y publíquese en la *Gaceta de la Habana* y en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se pasen las necesarias copias.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos,—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

EL ASILO GENERAL DE DEMENTES CONTRA IGNACIO VALOR COMO CURADOR DE ANTONIO ACOSTA.

Auto de 4 de Noviembre de 1899.

*Recurso de queja interpuesto por Ignacio Valor contra el auto*

*dictado por la Audiencia de la Habana el 27 de Septiembre de 1899.*

### JUICIO DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.

La nueva notificación de la sentencia á las partes que no hubiesen sido emplazadas con anterioridad al once de Abril de 1899, coloca á los litigantes en la misma situación que cuando fueron notificados por primera vez de la sentencia; por lo cual deben atemperarse para la interposición del recurso de casación á los preceptos de la Orden 92 sobre casación: y al no hacerlo así se hace inadmisibile el recurso.

*Resultando:* que á consecuencia del juicio declarativo de mayor cuantía, en cobro de pesos, seguido por la representación del Asilo General de Dementes contra el Ldo. Ignacio J. Valor como curador ejemplar de Antonio Acosta y Brunet, estableció el segundo recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley y de doctrina legal contra la sentencia dictada por la Audiencia de esta ciudad el día cinco de Enero de mil ochocientos noventa y dos que le fué nuevamente notificada á los efectos del artículo ciento ocho de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de esta Isla; cuyos recursos fueron declarados sin lugar por auto de veinte y siete de Septiembre, por los fundamentos de no consignarse en el escrito de interposición de los mismos la fecha de la notificación de la sentencia al recurrente y de la última notificación á cualquiera de las partes, ni el precepto legal que autorice el recurso establecido por infracción de ley y de doctrina legal;

*Resultando:* que contra ese auto denegatorio interpuso el recurrente recurso de queja, y que sustanciado este conforme á derecho se designó para la vista el día dos del mes actual; en cuyo acto informó como abogado el mismo recurrente;

*Considerando:* que la nueva notificación de la sentencia á las partes en los asuntos en que no hubieren sido emplazadas con anterioridad al once de Abril del corriente año, coloca á los litigantes en la misma situación jurídica que tenían en el momento en que por primera vez fueron notificados de la sentencia dictada por la Audiencia, quitando todo efecto á los actos posteriores al expresado momento, quedando, por lo mismo, obligados al interponer de nuevo los recursos á sujetarse á los términos, forma y condiciones de la Orden número noventa y dos sobre la sustanciación de procedimientos ante este Supremo Tribunal, conforme al precepto contenido en el artículo ciento ocho de dicha disposición;



*Considerando:* que, dado ese precepto, el recurrente debió, al ser notificado de nuevo de la sentencia de la Audiencia de esta ciudad, al interponer los recursos de casación por quebrantamiento de forma é infracción de ley y de doctrina legal, ajustarse á los requisitos establecidos en la referida Orden número noventa y dos; y como en el nuevo escrito de interposición de ambos recursos no consta expresada la fecha en que se le notificó la sentencia, ni la de la última notificación á cualquiera de las partes, como tampoco el precepto legal que autorizara el recurso por infracción de ley y de doctrina legal, es evidente que no llenó las condiciones externas que exige el artículo cinco de la repetida Orden número noventa y dos y por consiguiente, la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad ha procedido con arreglo á derecho al no admitir uno y otro recurso por ser á ambos aplicables las formalidades consignadas en dicho artículo cinco; siendo por las mismas razones improcedente la queja interpuesta;

*Considerando:* que cuando se declara sin lugar un recurso de queja debe condenarse en las costas al recurrente;

SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de queja interpuesto por el Ldo. Ignacio Valor y Acosta como curador ejemplar de Antonio Acosta y Brunet contra el auto de veinte y siete de Septiembre del corriente año dictado por la Audiencia de esta ciudad, con las costas á cargo del recurrente; y comuníquese esta decisión á la referida Audiencia para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, por ante mí, de que certifico.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, p. d. Armando Riva.

---

JOSÉ LARA Y NADAL CONTRA EUGENIO CRESPO.

**Sentencia núm. 3 (4 de Noviembre de 1899).**

*Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por José Lara y Nadal contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de la Catedral en 10 de Agosto de 1899.*

### JUICIO DE DESAHUCIO.

El conocimiento del juicio de desahucio de establecimiento mercantil ó fabril, corresponde al Juez de Primera

año, revocó la del Juez Municipal, declaró con lugar la excepción de incompetencia alegada por Crespo, y sin lugar la demanda establecida por Nadal, reservando á éste sus derechos Instancia; sin que sea necesario tener en cuenta el precio del arrendamiento.

En la ciudad de la Habana, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, pendiente ante este Tribunal Supremo é interpuesto por José Lara y Nadal, vecino de esta ciudad, sin constar su profesión, en juicio de desahucio contra Eugenio Crespo, del mismo vecindario y zapatero;

*Resultando:* que en la sentencia apelada se aceptó la relación de hechos contenidos en los Resultandos de la del Juez Municipal que dicen así:

“*Resultando:* que establecida la demanda antes relacionada en tres del corriente se ordenó en providencia de dicho día, la citación de las partes para la celebración del juicio á la una de la tarde del ocho del corriente;

*Resultando:* que en el día y hora señalados comparecieron las partes, ratificándose por el actor la demanda contestándose por el demandado que la negaba, estableciendo la excepción de incompetencia de jurisdicción, por no tratarse de una habitación para una familia, sino de un local donde se halla instalado un establecimiento mercantil, autorizado con licencia y recibo de contribución que exhibió en comprobación de su aserto, de que tiene conocimiento el demandante: que la ley taxativamente ordena que cuando se trate de un establecimiento fabril ó mercantil ó de una finca rústica cuyo precio exceda de cinco mil pesetas anuales, corresponde su conocimiento al Juzgado de Primera Instancia, solicitando la declaración de incompetencia dejando sin efecto la demanda, con las costas al actor, y expedito á éste su derecho para que lo ejercite ante la autoridad competente;

*Resultando:* que el que provee se reservó para en definitiva resolver respecto á la excepción propuesta confiriéndose al demandante el trámite de réplica: que éste reprodujo su demanda y que era cierto existía un pequeño taller de zapatos: que en dúplica el demandado reprodujo su negativa, sosteniendo su excepción; que no habiéndose solicitado el período de prueba, se ordenó se diera cuenta para dictar esta resolución;

*Resultando:* que contra ese fallo estableció Crespo apelación para ante el Juez de Primera Instancia de la Catedral, el cual, por sentencia pronunciada en diez de Agosto del presente

para que los deduzca en la vía y forma correspondientes, y condenando á Nadal al pago de las costas de Primera Instancia, sin hacer condenación especial respecto á las costas de la segunda instancia;

*Resultando:* que contra esa última sentencia interpuso Nadal recurso de casación por quebrantamiento de forma, recurso que, según dijo, estaba autorizado por el inciso segundo del artículo mil seiscientos ochenta y siete y el inciso sexto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil; citó como infringidos los artículos mil quinientos sesenta y uno en relación con el mil quinientos setenta y nueve y mil quinientos noventa y cuatro de la propia Ley, manifestando que el quebrantamiento de forma se había cometido al dictarse sentencia en segunda instancia, lo que le había impedido solicitar que aquél se subsanara;

*Resultando:* que admitido el recurso por el Juez de Primera Instancia y emplazadas las partes se remitieron los autos y el rollo á este Tribunal Supremo, donde se ha sustanciado el recurso por sus debidos trámites;

VISTO, siendo Ponente el Magistrado Pedro González Llorente,

*Considerando:* que según el artículo mil quinientos sesenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde á los Jueces de Primera Instancia el conocimiento de los juicios de desahucio, cuando estos “tengan por objeto el desahucio de un establecimiento mercantil ó fabril, ó el de una finca rústica cuyo precio de arrendamiento exceda de cinco mil pesetas anuales”; y está claro que en esa redacción, separadas por una conjunción disyuntiva las dos especies de propiedades á que se contrae el artículo, no es posible sin que se violente el sentido natural, propio y correcto de las palabras, aplicar al primer término, ó sea á los establecimientos mercantiles ó fabriles, las relativas al precio del arrendamiento, que sin disyunción alguna siguen á la mención de las fincas rústicas; como claro es también que si el legislador hubiera querido señalar la entidad del precio como la sola causa determinante de la competencia, lo mismo de los establecimientos mercantiles ó fabriles que de las fincas rústicas, habría adoptado otra forma de redacción, que, sin distinguir entre los unos y las otras, á todos los comprendiera en la propia idea;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de la Catedral en diez de Agosto del corriente año, y condenamos en las



costas al recurrente; comuníquese la presente resolución á dicho Juez, devolviéndose los autos; y librense de la misma dos copias, una para la publicación en la *Gaceta Oficial* y otra para que se inserte en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

MAGDALENA FOLCH CONTRA CARMEN É IRENE PANTIGA; IRENE, JUSTA, RAMÓN Y GUILLERMO OCHOA, Y OTROS.

**Sentencia núm. 4 (6 de Noviembre de 1899).**

*Recurso por quebrantamiento de forma interpuesto por Carmen é Irene Pantiga y compartes, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 10 de Noviembre de 1897, y auto declaratorio de la misma de 6 de Diciembre siguiente.*

### JUICIO EJECUTIVO.

La sumisión de que habla el artículo 57 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de hacerse por los interesados, renunciando el fuero propio y designando con toda precisión el Juez á quien se someten sin que sea suficiente señalar determinada ciudad en que deban practicarse todas las actuaciones que provengan de una escritura.

A falta de sumisión expresa ó tácita, cuando no existe, es Juez competente para conocer de un juicio en que se ejercitan acciones mixtas el del lugar en que se hallen las cosas ó del domicilio del demandado, á elección del demandante.

En la ciudad de la Habana, á seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, visto el recurso de casación por quebrantamiento de forma procedente de la Audiencia de la Habana, interpuesto por los ejecutados contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de dicha Audiencia en diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete y auto de seis de Diciembre siguiente, en el juicio ejecutivo seguido en cobro de pesos en el Juzgado de Primera Instancia de Guanabacoa por Magdalena Folch y Almandoc, domiciliada en aquella villa y ocupada en las labores de su casa, contra Carmen é Irene Pantiga y González; Irene, Justa, Ramón y Guillermo Ochoa y Pantiga las primeras ocupadas en su casa, el último médico y el anterior propietario, y todos vecinos de la villa de Regla; y

la sucesión de Francisco Ochoa y Pantiga, representada por su viuda María Estanislao de la Torre, con igual vecindad y ocupada también en las labores de su casa;

*Resultando:* que en la sentencia recurrida se acepta la relación de hechos de la de Primera Instancia con las salvedades y adiciones, de que es el mil trescientos dos el número de la escritura de diez de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, cuya primera copia obra al folio tres de los autos: que la primera hipoteca convenida en ese documento para seguridad del pago del capital adeudado, de los intereses estipulados al nueve por ciento anual, de los de demora si los hubiere, y de las cantidades que se fijaron para costas y papel sellado, se constituyó sobre siete casas que se describieron, consignándose que están situadas en el pueblo de Regla, partido judicial de Guanabacoa, pertenecían á los deudores que respectivamente se indicaron, y respondería cada una de ellas de las sumas mencionadas en la cláusula décima; que por la undécima se especificó que el débito había de satisfacerse por partes iguales por Doña Carmen, Doña Irene y la sucesión de Doña Rosa Josefa Pantiga; que la demanda ejecutiva se dedujo tan sólo para obtener el cobro de los tres mil seiscientos cuarenta y un pesos cuatro centavos de intereses del crédito, devengados durante tres años y once meses y los legales de demora desde la reclamación judicial de aquéllos: que el ejecutante manifestó los domicilios que en Regla tenían los ejecutados y pidió se les requiriera de pago por mil doscientos trece pesos sesenta y ocho centavos oro á cada una de las Sras. Carmen é Irene Pantiga y por doscientos cuarenta y dos pesos setenta y tres centavos á Irene, Justa, Ramón, Guillermo Ochoa y Pantiga y á Doña María Estanislao de la Torre, ésta por sí, como viuda de Don Francisco Ochoa y como madre y representante legítima de sus hijos D. Francisco, Doña Dolores, D. José Agustín, D. Pedro María y D. Fernando Ochoa y de la Torre solicitando, además, que, en su caso, se les embargaran bienes por el orden que señala la ley y especialmente los frutos, rentas ó alquileres de las casas hipotecadas; que la ejecución fué despachada por auto de veinte y tres de Junio, entre otros fundamentos, con arreglo al artículo tercero del decreto del Gobierno General de diez y nueve de Abril del corriente año: que todos los requerimientos de pago y citaciones de remate se practicaron en Regla, donde tienen su domicilio los ejecutados: que la sustanciación del incidente sobre declinatoria de jurisdicción se dejó sin efecto á instancia sólo de su promovente D. Ramón Ochoa, quien desistió de aquél, optando por oponerse á la ejecución;



*Resultando:* que la relación de hechos de la sentencia de primera Instancia que aceptó la Audiencia con las salvedades y adiciones ya transcritas se consignan en los Resultandos que se insertan á continuación:

“*Resultando:* que por escritura pública número trescientos dos otorgada en la ciudad de la Habana en diez de Agosto del año mil ochocientos noventa y dos, ante el Notario Don Francisco de Castro y Flaquer, Doña Carmen é Irene Pantiga y González, ésta por sí y como apoderada de D. Francisco Ochoa y Pantiga y además Irene, Justa, Ramón y Guillermo Ochoa y Pantiga como herederos de Josefa Pantiga y González, se confesaron deudores de Magdalena Folch y Almandoc por la cantidad de diez mil trescientos veinte y nueve pesos veinte centavos en oro que habían recibido en concepto de préstamo, é hicieron constar, primero en pagarés y luego en escritura pública de nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, ante el Notario de la Habana D. Miguel Nuño y Steegers, la que se obligaron á pagar en la misma especie en dicha ciudad de la Habana, en el término de tres años á contar desde la fecha de dicho documento y en tres plazos de tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos seis centavos el primero y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con veinte centavos el segundo y tercero, los que vencerían en los días diez de Agosto de los años de mil ochocientos noventa y tres y mil ochocientos noventa y cuatro y mil ochocientos noventa y cinco con el interés del nueve por ciento anual pagadero por mensualidades vencidas á contar desde la citada fecha del documento constituyendo al efecto primera hipoteca sobre distintas propiedades urbanas pertenecientes unas á las Sras. Pantiga y González y otras á los demás ejecutados en su concepto de herederos de su legítima madre Doña Rosa Josefa Pantiga y González;

*Resultando* que por la cláusula diez y siete de la citada escritura los otorgantes eligieron la ciudad de la Habana para que en ella tuvieran lugar todas las diligencias judiciales que originara, así como las extrajudiciales, dicha escritura, la cual, previo el pago de los derechos correspondientes, fué inscrita en el Registro de la Propiedad;

*Resultando:* que fundada en las estipulaciones de la escritura de diez de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, Doña Magdalena Folch estableció demanda ejecutiva contra los deudores, comprendiendo entre ellos á la sucesión de D. Francisco Ochoa y Pantiga, compuesta de su viuda María Estanislao de la Torre y sus hijos, D. Francisco, Doña Dolores, José, Agustín, Pedro María y Fernando Ochoa y de la Torre, por los intere-



ses que adeudaban, vencidos desde el diez de Agosto de mil ochocientos noventa y tres á la fecha de la demanda ó sean tres años doce meses que importaban tres mil seiscientos cuarenta y un pesos cuarenta centavos haciendo uso para ello de la acción hipotecaria y protestando admitir en pago abonos legítimos;

*Resultando:* que despachada la ejecución, requeridos de pago y citados de remate los deudores D. Ramón Ochoa y Pantiga promovió incidente previo de incompetencia de jurisdicción por declinatoria fundándola en que los otorgantes de la escritura de diez de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, en el hecho de elegir la ciudad de la Habana para que en ella tuvieran lugar todas las diligencias judiciales y extrajudiciales que por virtud de la misma se originaron, se habían sometido expresamente á la jurisdicción de los jueces de dicha ciudad, haciendo constar, á la vez, que no había hecho uso de la inhibitoria;

*Resultando:* que posteriormente el mismo D. Ramón Ochoa y los demás ejecutados se personaron en los autos oponiéndose á la ejecución y que habiéndoseles tenido por opuestos en tiempo á la misma, se acordó, con suspensión de todo procedimiento, conferir traslado al ejecutante y á los demás ejecutados respecto de la incompetencia de jurisdicción alegada por D. Ramón Ochoa;

*Resultando:* que, á petición de la representación de los ejecutados, se dejó sin efecto la sustanciación del incidente de incompetencia promovido por D. Ramón Ochoa, y se mandó que los ejecutados formalizaran la oposición, la que hicieron dentro del término legal, oponiendo como excepción de la misma incompetencia de jurisdicción que el ejecutado D. Ramón Ochoa había promovido como incidente previo, la cual fundaron en lo estipulado en la cláusula diez y siete de la escritura de diez de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, y, además, en que no obstante haberse ejercitado la acción hipotecaria, como la única procedente era la personal, con arreglo á ella debía conocer del juicio el Juez del lugar en que debía cumplirse la obligación, ó sea los de la Habana;

*Resultando:* que la parte ejecutante impugnó la excepción de incompetencia alegada, porque la cláusula diez y siete de la escritura de diez de Agosto de mil ochocientos noventa y dos no contenía sumisión expresa á los jueces de la Habana y porque ya se estimara que la acción intentada era de una ú otra naturaleza, siempre resultaba competente este Juzgado, tanto por estar en su demarcación el domicilio de los ejecutados y los

bienes hipotecados, cuanto porque en la escritura no se había pactado el lugar donde habían de pagarse los intereses;

*Resultando:* que por no haber solicitado ninguna de las partes el recibimiento á prueba se mandaron traer los autos á la vista, con citación de las mismas para sentencia;

*Resultando:* que dictada sentencia por la Audiencia revocando la del Juzgado, la representación de los ejecutantes, el mismo día de la notificación presentó escrito pidiendo se supliera la omisión y aclarara el concepto oscuro que se notaba en aquélla en sentido que la ejecución debe seguir por principal, interés y costas de la Primera Instancia y que la declaración de que no se hace especial condenación de costas, se refiera á la segunda;

*Resultando:* que en seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete, la Sala dictó auto que dispuso se uniera á la sentencia y por el cual dijo suplía la omisión cometida en aquélla, al no resolver sobre el pago de las costas de primera instancia, que desde luego ordenaba fueran de cargo de los ejecutados, aclarando que las de segunda se entendiesen en la forma ordinaria, sirviendo de base á diho auto aclaratorio los siguientes resultandos:

*Resultandos:* que en diez de Noviembre último se dictó en los autos á que corresponde este rollo la sentencia certificada al folio veinte y tres vuelto, cuya parte dispositiva dice así: Fallamos que con revocación de la sentencia apelada, y desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción, única alegada por los ejecutados, debemos declarar y declaramos competente al Juzgado de Primera Instancia de Guanabacoa para conocer del presente juicio; ordenando siga la ejecución adelante hasta que con los alquileres ó rentas de las casas hipotecadas, en la proporción debida, quede pagada Doña Magdalena Folch y Almandoc no sólo de la cantidad de tres mil seiscientos cuarenta y un pesos cuatro centavos oro, que reclama por razón de intereses vencidos de su crédito, sino también de los legales por éstos devengados desde la presentación de la demanda en doce de Junio último, sin que para el dicho pago de ambas sumas pueda hacerse trance y remate de las fincas gravadas, y no decretamos especial condenación de costas;

*Resultando:* que notificado dicho fallo á las partes en veinte y siete del citado mes, la representación de la ejecutante y apelante Doña Magdalena Folch estableció en igual fecha el recurso del artículo trescientos sesenta y dos de la Ley de trámites, para que no sólo se aclarase que las únicas costas abonables en la forma ordinaria son las de alzada, sino que también

se supliese la omisión padecida en la sentencia al no resolver acerca de las costas de Primera Instancia, que además de haber sido objeto del auto que despachó la ejecución y de los consiguientes requerimientos de pago, deben, conforme al número primero del artículo mil cuatrocientos setenta y dos, imponerse á los ejecutados, cuando se mande seguir la ejecución adelante;

*Resultando:* que la representación de los ejecutados interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma, fundado en el número sexto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil por los siguientes motivos:

*Primero:* incompetencia del Juzgado de Guanabacoa para conocer del juicio, porque la acción ejercitada es personal y por la cláusula diez y siete de la escritura las partes se sometieron á los Jueces de la Habana, y por la tercera, se señalaba esta ciudad como lugar en que debía cumplirse la obligación; siendo competente, por tanto, el de esta dicha ciudad que designara el turno, conforme á los artículos cincuenta y nueve, caso primero del sesenta y dos regla tercera del sesenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Segundo:* incompetencia de la Sala sentenciadora al aclarar la sentencia y suplir omisiones sobre costas, mediante la aceptación expresa de recursos que la Ley no reconoce y con infracción del artículo trescientos sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que admitido el recurso, se ha sustanciado en este Supremo Tribunal, celebrándose la vista del mismo el día veinte y cinco del mes próximo pasado, en la cual informaron el letrado de la parte ejecutada como recurrente, sosteniendo el recurso, y el de la ejecutante oponiéndose al mismo;

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt,

*Considerando:* que según el artículo cincuenta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil la sumisión expresa ha de hacerse por los interesados renunciando clara y terminantemente el fuero propio, y designando con toda precisión el Juez á quien se sometiesen, y, dados los términos explícitos de este artículo, no puede entenderse que exista sumisión por el solo hecho de hacer constar las partes en términos generales que eligen una ciudad para que en ella tengan lugar todas las diligencias judiciales y extrajudiciales que origine una escritura, pues á esa manifestación faltan los dos requisitos que para la sumisión expresa exige la ley;

*Considerando:* que la clasificación de las acciones no ha



sido objeto de precepto alguno en el derecho Civil antiguo, ni en el Código, limitándose éste, la Ley de Enjuiciamiento y algún otro cuerpo legal, al designarlos en conjunto, á usar la denominación doctrinal generalmente seguida ó aceptada por la jurisprudencia; y que la circunstancia de no tener en cuenta el Código Civil en sus disposiciones el carácter de mixtas, atribuido á algunas acciones, no es motivo para prescindir de tal carácter, cuando otras leyes lo toman en consideración para regular derechos que son objeto privativo de ellas, como acontece con la de Enjuiciamiento Civil al fijar la competencia;

*Considerando:* que la acción nacida de un contrato con garantía hipotecaria ejercitada contra la persona que inmediatamente contrajo la obligación y en cuyo poder se encuentran los bienes, está comprendida entre las denominadas mixtas por participar de los caracteres de las llamadas reales y personales y teniendo en cuenta la Ley procesal aquella denominación para fijar la competencia, debe ser estimada á ese efecto en el presente caso, por cuanto la acción ejercitada en el juicio del cual procede este recurso es de la clase antes mencionada, sin que altere su naturaleza la vía en que se ejercita, ni obste á su clasificación que, por virtud del Decreto del Gobernador General de esta Isla de diez y nueve de Abril de mil ochocientos noventa y siete, sólo pueda reclamarse con ella el pago de los intereses y hacerse efectivo sobre los productos del inmueble, pues quedaron también hipotecados y la garantía se hizo extensiva á dichos intereses;

*Considerando:* que conforme á la regla cuarta del artículo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil á falta de sumisión expresa ó tácita, que en este caso no existe, es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones mixtas el del lugar en que se hallen las cosas ó el del domicilio del demandado á elección del demandante, y reuniendo ambas condiciones el Juez del Distrito de Guanabacoa es evidente su competencia; y la Audiencia de la Habana al declararlo así no ha cometido el quebrantamiento de forma, que se alega como primer motivo del recurso;

*Considerando:* que, según el artículo trescientos sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los Tribunales pueden, á instancia de parte, deducida, suplir en sus sentencias alguna omisión ó aclarar algún concepto oscuro, sobre puntos discutidos en el litigio, y habiendo dictado la Sala sentenciadora el auto aclaratorio sobre costas, de seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, á instancia de parte, presentada en tiempo, realizó un acto para el cual tenía competencia, y, por

consiguiente, tampoco procede la casación por el segundo motivo alegado en el recurso;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Carmen é Irene Pantiga y compartes, contra la sentencia de diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete y auto aclaratorio de la misma de seis de Diciembre siguiente, dictados por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en juicio ejecutivo seguido por Magdalena Folch contra dichos recurrentes declarando á cargo de éstos las costas del recurso. Con devolución del apuntamiento y autos originales comuníquese la presente por medio de certificación á la citada Audiencia, y publíquese en la *Gaceta* y en la Colección legislativa á cargo de la Secretaría de Justicia á cuyo efecto líbrense las oportunas copias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberger.

LA COMPAÑÍA DE SEGUROS "EL IRIS" CONTRA JUAN LLAVERIA Y MASSIP.

**Sentencia núm. 3 (9 de Noviembre de 1899).**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por la Compañía "El Iris" contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el 27 de Octubre de 1897.*

## CONSTITUCION DE HIPOTECA EN GARANTIA DE DOS DIVIDENDOS DE UN SEGURO.

La preferencia que concede al asegurador sobre los demás créditos el artículo 220 de la Ley Hipotecaria, no constituye una hipoteca tácita, que no reconoce ya la Ley, sino un derecho de preferencia que se convierte en hipoteca legal y por el cual puede exigirse al dueño del inmueble la constitución de dicha hipoteca; pero no puede exigirse esa constitución del que adquiere la finca sin haberse constituido en ella la expresada hipoteca.

En la ciudad de la Habana, á nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, visto el recurso de casación por infracción de ley establecido por el Procurador Esteban de la Tejera á nombre de la Compañía de Seguros Mutuos contra

incendios titulada "El Iris", constituida en esta ciudad contra la sentencia de la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en los autos del juicio seguido por Florentino Fernández Garay, cuyo domicilio y profesión no constan en su carácter de Presidente de dicha Compañía contra Juan Llaveria y Masip, del comercio, cuyo domicilio tampoco consta, sobre constitución de una hipoteca en garantía de dos dividendos de un seguro;

*Resultando:* que en la sentencia recurrida se aceptaron los Resultandos de la de Primera Instancia que dice así:

"*Resultando:* que el mencionado Procurador D. José Urquijo, con el carácter expresado por lo principal de su escrito de fojas doce estableció la correspondiente demanda contra el referido D. Juan Llaveria y Masip, la que fundó en los siguientes hechos:

*Primero:* que Doña María de la Cruz Sotolongo, como propietaria de la casa calle Séptima número treinta y cinco en el Vedado, celebró con la Compañía, su representada, un contrato de seguro de la expresada finca;

*Segundo:* que la referida señora falleció en esta ciudad en mil ochocientos ochenta y cuatro y sus herederos Doña Emilia, Doña María, Doña Isabel, D. Carlos, D. Bernardo, D. Leopoldo, D. Alberto, Doña Elisa y Doña Virginia Costales y Sotolongo representados por su padre D. Bernardo manifestaron en mil ochocientos ochenta y nueve que daban por terminado el contrato de seguro, sin que se satisficieran las anualidades que adeudaba la contratante Sra. Sotolongo;

*Tercero:* que D. Juan Llaveria y Masip es en la actualidad el propietario de la casa mencionada y como al fallecer la contratante estuvieron pendientes de pago las liquidaciones correspondientes al año de mil ochocientos ochenta y cuatro que importaban la primera nueve pesos y la segunda ciento doce pesos en oro, que hacían un total de ciento veinte y un pesos en oro, por cuya suma y la de ciento cincuenta pesos para papel sellado y quinientos pesos más para costas debería constituirse la hipoteca especial sobre la antes expresada casa; y después de alegar las consideraciones de derecho referentes al caso, concluyó suplicando al juzgado, se sirviera haberle por presentado dicho escrito, tenerle por acompañadas el acta de adhesión, los recibos sin pagar, la fe de óbito y la comunicación del señor Costales y el testimonio de poder, y en mérito de lo que arrojaba tenerle por parte á nombre de quien comparecía y de acuerdo con lo prevenido en el inciso tercero del artículo ciento sesenta y cinco de la Ley Hipotecaria, disponer fuese citado



D. Juan Llaveria y Masip para que en el día y hora señalados compareciese á manifestar su conformidad con la constitución de la hipoteca por las cantidades que se expresaban librándose caso de avenencia los mandamientos por duplicado al Registrador de la Propiedad á los efectos consiguientes, disponiendo se le confriese traslado de esta demanda, como ordena el inciso quinto del artículo ciento sesenta y cinco de la Ley Hipotecaria en caso de no avenencia y en definitiva declarándola con lugar, ordenar se libren los mandamientos al registrador de la propiedad para la constitución de la hipoteca por ciento veinte pesos en oro, ciento cincuenta para papel sellado y quinientos para costas condenándolo al pago de las que se ocasionen por el primer otrosí de dicho escrito acompañó la copia simple del mismo y de los documentos á los fines legales, por el segundo otrosí y en virtud de ignorar el domicilio de D. Juan Llaveria, solicitó la citación por medio de los periódicos oficiales y por el tercero solicitó que en su oportunidad se abriera á prueba el presente incidente, por lo que, por providencia de diez y seis de Diciembre del pasado año, fojas diez y siete, fué tenido por parte el referido Procurador con el carácter con que comparecía y se dispuso asimismo que á reserva de proveer á las demás solicitudes contenidas en lo principal y en el segundo otrosí, se acreditara que D. Juan Llaveria, era de domicilio desconocido y que las copias simples acompañadas por el primer otrosí las reservara el actuario en su poder así como que en su oportunidad se proveería acerca de la solicitud contenida en el tercero;

*Resultando:* que á instancia de dicho Procurador Urquijo, fojas veinte, en veinte y tres de Diciembre del pasado año, se dispuso librar el correspondiente oficio al señor Alcalde Municipal de esta ciudad, á fin de que informase como era cierto que D. Juan Llaveria y Masip no tenía su residencia en esta ciudad, librado que fué éste en veinte y seis del propio mes fojas veinte y una, devueltas sus resultas, fojas veinte y dos se certificó por la referida Corporación que según informes de los señores Tenientes de Alcalde resultaba que D. Juan Llaveria y Masip no aparecía como vecino con domicilio legal en este Término Municipal, por cuya virtud á instancia de dicho Procurador Urquijo fojas veinte y tres, y en veinte y dos de Febrero del corriente año, fojas veinte y cuatro, se señaló para la comparecencia á que se refiere el párrafo tercero del artículo ciento sesenta y cinco de la ley hipotecaria el día diez y seis de Marzo del presente año y que al efecto se citara á la representación del demandante así como á D. Juan Llaveria y Masip por medio de edictos que se publicarían en la *Gaceta y Boletín*

*Oficial* de esta ciudad y se fijarían en los sitios públicos de costumbre de acuerdo con la solicitud contenida en la súplica de dicho escrito y en el segundo otrosí de fojas doce, lo que así se verificó según consta á fojas veinte y cuatro y su vuelta y de la certificación visible á fojas veinte y seis y su vuelta y llegado que fué el referido día diez y seis no comparecieron las partes citadas para el acto, según así se hizo constar en el propio día á fojas veinte y siete;

*Resultando:* que el Procurador Urquijo, por lo principal de su escrito de fojas treinta y siete solicitó se confiriese traslado de la demanda establecida á D. Juan Llaveria, á lo que se accedió por providencia de doce de Mayo del presente año, concediéndosele el término de seis días con dicho objeto y habiéndose personado en estos autos, fojas cuarenta y uno, Don Cecilio Llaveria y Pascual en su carácter de apoderado general de D. Juan Llaveria y Masip, acompañando el correspondiente testimonio de poder fojas treinta y nueve por auto de quince de Julio del corriente año fojas cincuenta y seis vuelta, se dispuso que el traslado de la demanda dispuesto en providencia de doce de Mayo último se entendiera con él, con el carácter expresado; que al efecto se le entregaran las copias simples correspondientes, lo que así se verificó en diez y ocho de Julio fojas sesenta y una vuelta;

*Resultando:* que el Procurador D. Tomás J. Granados, por su escrito de fojas ochenta y seis acompañando el correspondiente testimonio de poder, se personó en estos autos á nombre de D. Juan Llaveria y Masip contestando la referida demanda y alegando como hechos los siguientes:

*Primero:* que el hecho primero de la demanda podía ser cierto y no dudaba de su certeza en lo más mínimo, pero hacía constar que no había venido á conocimiento de su representado, ni aun de su hijo apoderado general el Ldo. D. Cecilio Llaveria sino como consecuencia del establecimiento de la demanda que contestaba, que de él antes no se tenía conocimiento;

*Segundo:* que era cierto el hecho segundo en cuanto á la muerte de la Sra. Sotolongo, pero en cuanto á que avisaran sus herederos que no continuaban en el seguro prestado por la difunta sería cierto si fuera legítima la carta acompañada por el actor como lo creía;

*Tercero:* que era cierto que D. Juan Llaveria es el propietario de la casa que en el tercer hecho de la demanda se indicaba y podía ser cierto que la Sra. Sotolongo debiera las anualidades de mil ochocientos ochenta y tres y ochenta y cuatro como podía serlo también que importasen lo que en ese hecho se



indicaba, pero en modo alguno lo era por todo ello que D. Juan Llaveria adeudase á la Compañía "El Iris" anualidad alguna de seguros ni que debía de constituirse á favor de esa Compañía ninguna clase de hipoteca;

*Cuarto:* que D. Juan Llaveria y Masip adquirió la casa calle Séptima número treinta en el Vedado por el título y en las condiciones siguientes: en cobro de parte de un crédito hipotecario constituido por Doña María de la Cruz Sotolongo y Pérez de Costales como primera hipotecaria á favor del menor D. Pedro Pablo Marín y Parra cuyo crédito había llegado á pasar en su tercera parte á ser propiedad de D. Félix Ginesta y Roig, habiendo establecido el procurador D. Santiago Montero á nombre de éste un juicio ejecutivo según aparecía en las primeras cláusulas de la escritura que como título de dominio de D. Juan Llaveria acompañaba al presente escrito y en cuya escritura se detallaban las circunstancias y accidentes del referido crédito hipotecario. En dicho juicio se dictó sentencia de remate en rebeldía de los ejecutados y la finca se sacó á remate con la certificación de gravámenes que se insertaba en la cláusula sexta de la escritura que acompañaba en cuya certificación nada se decía del seguro en cuestión en estos autos ni en aquellos del aludido ejecutivo se mencionó jamás semejante contrato. En el acto de la subasta se presentó como postor D. Juan Ginesta y Roig como apoderado de su hermano D. Félix, ejecutante con calidad de ceder el remate á un tercero; remató y cedió el mismo á D. Juan Llaveria representado por su hijo y apoderado general D. Cecilio, otorgándosele por el que provee la correspondiente escritura (la cual era la que en testimonio acompañó), en nombre y representación de los sucesores de la Sra. Sotolongo, ejecutados, á excepción de D. Alberto Costales y Sotolongo que personalmente concurrió á la escritura á hacer la transmisión de dominio de la parte al mismo correspondiente, no reconociéndose por Llaveria más gravamen que el del censo que afectaba al terreno sin la menor expresión del seguro cuyas pensiones se reclaman. La escritura fué otorgada en siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, ante el Notario Don Alejandro Núñez de Villavicencio é inscrita en el Registro de la propiedad en once de Noviembre del propio año. Desde entonces nadie había molestado al Sr. Llaveria en su tranquila y legítima posesión ni le había reclamado gravamen alguno que pesase sobre la finca excepto las pensiones del censo; y después de alegar las consideraciones de derecho referentes al caso concluyó suplicando al Juzgado se sirviera haberle por acompañado el testimonio de poder y en su mérito tenerle por parte á nom-



bre de D. Juan Llaveria y Masip, por contestada la demanda interpuesta contra su representado declarándola en definitiva sin lugar con imposición de costas á la Compañía actora, por el primer otrosí del referido escrito acompañó asimismo la escritura de que antes había hablado título de dominio de su poderdante y suplicó al Juzgado que habiéndola por acompañada y teniéndola en cuenta en su oportunidad, llamaba especialmente la atención del Juzgado acerca del hecho de que en su cláusula diez y nueve al final de ella y al describirse la finca sobre que versa se dijo que no estaba asegurada de incendio, en cuya inteligencia pues, la adquirió su representado, y por el segundo otrosí de dicho escrito, acompañó la copia simple del mismo, del poder y de la escritura antes referida á cuyo procurador se le tuvo por parte en providencia de treinta y uno de Agosto último, fojas noventa y dos y por contestada la demanda y en su virtud en diez y seis de Octubre pasado fojas noventa y cuatro, se abrió á prueba el presente juicio por término de veinte días comunes á las partes para proponer y ejecutar las mismas;

*Resultando:* que la representación de la Sociedad demandante como parte de su prueba por lo principal de su escrito de fojas ciento diez y nueve reprodujo el mérito favorable de autos y por el primer otrosí no habiendo sido puesta en duda la certeza del documento de fojas tres, ni dudado el de fojas siete, toda vez que en cuanto al primero se consignaba en el primer hecho de la contestación que no se dudaba en lo más mínimo de la certeza del hecho que se consignaba en el documento aludido de fojas tres expresándose en cuanto al segundo de fojas siete, en el segundo hecho de la contestación que se creía en la legitimidad de la carta, se hacía innecesario el reconocimiento ó el cotejo dadas las manifestaciones antes referidas y lo dispuesto en los artículos seiscientos tres y seiscientos cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por el segundo otrosí también como parte de su prueba interesó que por el actuario se certificara con vista de los libros de la Compañía de seguros mutuos contra incendio "El Iris", como era cierto que el acta de adhesión suscrita por Doña María de la Cruz Sotolongo de Costales asegurando por diez mil pesos oro la casa de su propiedad calle séptima número treinta y cinco en el Vedado que lleva el número de orden veinte mil ochocientos veinte y seis quedó sin valor á consecuencia del fallecimiento de la propietaria participado por su legítimo consorte D. Bernardo Costales y Govantes, quien manifestó que los herederos no continuaban el contrato, asimismo certificara

el actuario como era cierto con vista de los libros que exhibiera previo requerimiento, el Secretario de la Compañía, que la señora Sotolongo quedó adeudando las anualidades correspondientes á los años de mil ochocientos ochenta y tres y mil ochocientos ochenta y cuatro, los que importaban la suma de ciento veinte y un pesos en oro y que al efecto, previo señalamiento de día y hora, se practicara la prueba con citación contraria, la que admitida que fué por providencia de veinte y seis de Octubre último fojas ciento veinte vuelta se dispuso la práctica de la misma señalándose al efecto el día veinte y nueve del propio mes en el local de la referida Compañía y llegado que fué el mencionado día tuvo lugar la práctica de la misma según consta á fojas ciento veinte y dos vuelta de la que aparece en el libro "Registro General número siete" al folio ochenta y seis existe un asiento que dice así: número de la póliza veinte mil ochocientos veinte y seis, fecha primero Enero mil ochocientos ochenta y tres; suscriptor María de la Cruz Sotolongo de Costales; objeto asegurado casa, situación del seguro Vedado calle Séptima número treinta y cinco; categoría segunda, suscrito inmueble según categoría inmueble quince mil, duración del seguro cinco años, número de la anulación treinta y uno Diciembre ochenta y siete; asimismo que á fojas ciento veinte y cinco del libro titulado cuota de liquidación de mil ochocientos ochenta y tres y cargos sociales de mil ochocientos ochenta y cuatro se halla un asiento que dice así: Póliza veinte mil ochocientos veinte y seis, socio María de la Cruz Sotolongo de Costales, riesgo segunda, objeto asegurado, casa calle Séptima número treinta y cinco Vedado, valor asegurado diez mil, cuota de liquidación de mil ochocientos ochenta y tres nueve, provisión de mil ochocientos ochenta y cuatro veinte y dos cincuenta, administración diez. Total: cuarenta y uno cincuenta, y por último, que al folio ciento veinte del libro de cuotas de liquidación de mil ochocientos ochenta y cuatro y cargas sociales del ochenta y cinco se halla un asiento que dice: Póliza veinte mil ochocientos veinte y seis, socio María de la Cruz Sotolongo de Costales, riesgo asegurado, objeto asegurado casa calle Séptima número treinta y cinco Vedado, valor asegurado inmueble diez mil, cuota de liquidación de mil ochocientos ochenta y cuatro setenta y nueve cincuenta, provisión de mil ochocientos ochenta y cinco veinte y dos cincuenta, administración diez. Total: ciento doce, cuyos particulares certifica el actuario que obran á los folios y libros citados: Que la representación del demandado por su escrito de fojas ciento veinte y cinco como parte de su prueba reprodujo el mérito favorable de autos y



además solicitó el cotejo del testimonio de escritura acompañando con su escrito de contestación á la demanda con la matriz otorgada en siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres y al efecto admitida que fué dicha prueba por providencia de cuatro de Noviembre último fojas ciento veinte y seis se señaló para el acto el día siete del propio mes en el local de la Notaría de D. Alejandro Núñez de Villavicencio previa citación de las representaciones de las partes y llegado que fué el mencionado día se procedió al cotejo dispuesto observándose que en el primer pliego del testimonio en la cuarta cara en el oncenno renglón dice entre las palabras *de y señores dichos* y en la matriz *los mismos* en el cuarto pliego, duodécimo renglón de la cuarta cara, entre las palabras ofreciendo calidad *en* y en la matriz *á*, en el sexto pliego, cara primera, cuarto renglón entre las palabras Costales *la sobre* y en la matriz *en*;

*Resultando:* que como más prueba la representación del demandado fojas ciento veinte y siete solicitó que se dirigiera mandamiento al registrador de la propiedad á fin de que certificara á continuación del mismo como era cierto que cuando su representado adquirió la casa que se decía asegurada, no constaba que la misma reconocía gravamen de ninguna clase ni la más ligera alusión ni antecedente respecto á la hipoteca que pretende imponer sobre ella la Compañía actora, la que admitida que fué por providencia de cinco de Noviembre último, fojas ciento veinte y siete vuelta y dispuesta la práctica de la misma con citación contraria previo el libramiento del mandamiento interesado se señaló para el acto el día nueve del propio mes en el local del Registro de la Propiedad de esta ciudad y expedida que fué dicha certificación visible á fojas ciento treinta y una, resulta que el funcionario encargado de dicho Registro certifica: que habiendo examinado los libros del moderno Registro pasaba á consignar, primero: que á fojas ciento cuarenta y dos del tomo cuatrocientos siete, inscripción séptima de la finca número quinientos ochenta y cuatro se había inscrito la escritura otorgada ante D. Alejandro Núñez en siete de Marzo de mil ochocientos noventa y tres por la cual D. Juan Llaveria y Masip adquirió de Doña Isabel Costales y Sotolongo y hermanos la casa número sesenta y cuatro hoy, antes treinta y cinco de la calle Séptima en el barrio del Vedado no constando de la citada inscripción ni de las anteriores, ningún gravamen ni hipoteca por valor de ciento veinte y un pesos á favor de la compañía de seguros mutuos contra incendio "El Iris", ni inscrita por la citada compañía hipoteca alguna á su favor



sobre la misma casa. Segunda: que no certifica cualesquiera otro gravamen que á favor de persona distinta de la compañía de seguros "El Iris" pudiera afectar á la casa citada en la fecha de adquisición del Sr. Llaveria en los que hayan podido gravitar la misma casa con posterioridad á dicha adquisición porque no se solicitaba en el mandamiento que precedía, certificación de esos extremos;

*Resultando:* que habiéndose certificado por el actuario fojas ciento diez y siete que el término de prueba por el cual fué abierto este juicio para proponer y ejecutar las mismas, había vencido, se mandaron unir á los autos las practicadas y que se trajeran los mismos á la vista para dictar la presente resolución;

*Resultando:* que dictada sentencia por la Audiencia en veinte y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, confirmando con costas la de primera instancia, que declaró sin lugar la demanda, é impuso las costas al actor, la representación de éste interpuso el presente recurso de casación fundado en el caso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando como infringidos:

*Primero:* el artículo ciento sesenta y ocho caso sexto de la Ley Hipotecaria porque desconoce la existencia de la hipoteca legal á favor del "Iris", por los dos últimos dividendos repartidos, niega el derecho de la misma á exigir la constitución de una hipoteca especial en tanto que está pendiente de cumplimiento la obligación que debe asegurarse";

*Segundo:* el artículo doscientos diez y nueve y doscientos veinte de la Ley Hipotecaria porque la sentencia niega el derecho de "El Iris" á pedir la constitución de la hipoteca especial por los dos últimos dividendos y desconoce la preferencia del crédito del asegurador en tanto no se constituya la hipoteca";

*Tercero:* Los artículos mil ochocientos setenta y cinco, mil novecientos veinte y tres y mil novecientos veinte y siete del Código Civil, porque la sentencia desconoce y niega el derecho que tiene el asegurador, no sólo para exigir la constitución de la hipoteca especial, sino para sostener la existencia de la hipoteca tácita sobre el inmueble asegurado por los dividendos de los dos últimos años. Los expresados artículos doscientos diez y nueve y doscientos veinte de la Ley Hipotecaria, por que el fallo niega á "El Iris" el derecho á dirigirse contra el tercero que adquirió el inmueble siendo así que lo adquirió con la hipoteca tácita por los dividendos de los dos últimos años, sin que el silencio pueda perjudicar el derecho que la Ley da al asegu-

rador, derecho independiente de la voluntad de los contratantes”;

*Resultando:* que admitido el recurso se ha sustanciado en este Supremo Tribunal con sólo la comparecencia del recurrente, celebrándose la vista pública el día veinte y ocho del mes próximo pasado, en la cual informó únicamente el Letrado de dicha parte, sosteniendo el recurso;

Siendo Ponente el Magistrado Angel C. Betancourt,

*Considerando:* que la preferencia que concede el artículo doscientos veinte de la Ley Hipotecaria, al crédito del asegurador, sobre los demás créditos, por los dos últimos dividendos del seguro mutuo, mientras no se devenguen, no constituye como supone el recurrente una hipoteca tácita, de duración indefinida, sino un privilegio solo subsistente en cuanto á terceros, que tengan ó adquieran derechos sobre el inmueble asegurado, hasta tanto quede devengado el segundo dividendo, y después para surtir aquellos efectos, deberá exigirse conforme al artículo doscientos veinte y uno una hipoteca en garantía del importe total de la cantidad que se debiere; ó lo que es lo mismo á partir de ese momento, el derecho de preferencia se convierte en el de hipoteca legal sobre el inmueble; y al entenderlo así la Sala sentenciadora no ha desconocido la extensión y efectos del citado artículo doscientos veinte, el cual consiguientemente no ha infringido;

*Considerando:* que la hipoteca legal antes dicha, que es la que establece el número sexto del artículo ciento sesenta y ocho de la Ley Hipotecaria á favor de los aseguradores sobre los bienes asegurados, por el importe de los dos últimos dividendos repartidos, no otorga otro derecho que el consignado en términos generales, en el artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley citada y párrafo segundo del mil ochocientos setenta y cinco del Código Civil, ó sea el de exigir la constitución de una hipoteca especial suficiente, sin que la salvedad que contiene al final el último citado artículo, con referencia á la Ley Hipotecaria, tenga otro alcance que el de reconocer la preferencia de que se ha hecho mención en el Considerando anterior;

*Considerando:* que aplicando el principio general del citado artículo ciento cincuenta y ocho, á los aseguradores, dice el doscientos diez y nueve de la misma Ley, que estos tienen derecho á exigir una hipoteca especial sobre los bienes asegurados, cuyos dueños no hayan satisfecho el importe de dos ó más de los últimos dividendos con lo que claramente se expresa, que el dueño del inmueble tiene la obligación de constituir la hipoteca, en tanto, en cuanto esté obligado al pago del dividendo;



*Considerando:* que es ocioso examinar esa obligación como originada de un contrato, pues, en el caso que se discute, el recurrente reconoce que no proviene de ninguno, haciéndola derivar de la ley, en el supuesto erróneo, de que la hipoteca legal no es un mero derecho á exigir la constitución de una especial, sino que, calificándola de tácita, le atribuye eficacia bastante á sujetar directamente los bienes que afecta, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación que garantiza, teoría inexacta, no sólo porque la ley no reconoce la clase de hipotecas tácitas, sino porque expresamente determina los efectos de la legal, de que ya se ha hecho mérito de los cuales se deduce, que, para que esta pueda tener eficacia como tal hipoteca, es indispensable que se constituya de un modo expreso, conforme á la ley y se inscriba en el Registro, no surtiendo efectos la inscripción, sino desde su fecha, según dispone el artículo doscientos veinte y uno de la Ley Hipotecaria;

*Considerando:* que no habiendo exigido la Compañía "El Iris", después de devengados los dos últimos dividendos, la constitución de la hipoteca especial, á las personas obligadas al pago de aquellos, por virtud del contrato de seguro celebrado sobre la casa calle Séptima número treinta y cinco del Vedado, y habiendo con posterioridad al término del contrato, adquirido el inmueble Juan Llaveria y Masip, por virtud de subasta pública sin gravamen alguno á favor de dicha Compañía é inscrito su dominio en esas condiciones en el Registro de la Propiedad, no tiene aquella derecho para exigir del tercer poseedor, la constitución de hipoteca especial en garantía de los dividendos antes dichos, y al entenderlo así la Sala sentenciadora declarando sin lugar la demanda, no ha desconocido ningún derecho que la mencionada Compañía tuviese, fundado en los artículos ciento sesenta y ocho, caso sexto, y doscientos veinte y uno de la Ley Hipotecaria y mil ochocientos setenta y cinco del Código Civil;

*Considerando:* que debatiéndose en el juicio del cual procede este recurso, solamente el derecho á exigir el asegurador una hipoteca especial al tercer poseedor del inmueble que estuvo asegurado, y no la preferencia ó prelación de su crédito en concurrencia con otros sobre determinados bienes del deudor, no son de aplicación los artículos mil novecientos veinte y tres y mil novecientos veinte y siete del Código Civil, que reconocen y regulan la preferencia de créditos, y no habiéndolos aplicado la Sala, no ha podido infringirlos, como en tal concepto no ha podido ser infringido el doscientos veinte de la Ley Hipotecaria y procede no estimar estos motivos del recurso;



*Considerando:* que por todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso interpuesto;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la Compañía de seguros mutuos contra incendios "El Iris" contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en veinte y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, en el juicio seguido por aquella contra Juan Llavería y Masip, con las costas á cargo del recurrente. Con devolución del apuntamiento, comuníquese por medio de certificación esta sentencia á dicha Audiencia y publíquese en la *Gaceta de la Habana* y en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

NICOLÁS, JUANA Y ELVIRA GONZÁLEZ MILIÁN CONTRA MARIO FERNÁNDEZ CARBALLÉS, COMO ADMINISTRADOR DEL INTESTADO DE SEBASTIÁN GONZÁLEZ.

**Sentencia núm. 4 (9 de Noviembre de 1899).**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Nicolás, Juana y Elvira González Milián, contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana el 21 de Enero de 1899.*

**RENDICION DE CUENTAS.**

No pueden ser objeto de un recurso por infracción de Ley, las infracciones referentes al procedimiento; y refiriéndose los artículos 1,019 y 1,030 de la Ley de Enjuiciamiento Civil á las formalidades que han de observarse para la venta de frutos y otros bienes, no cabe estimar en casación la violación de sus preceptos.

En la ciudad de la Habana, á nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Nicolás, Juana y Elvira González Milián, propietarios y vecinos de San Cristóbal de la Laguna, de Tenerife, Islas Canarias, contra la sentencia dictada en veinte y uno de Enero del corriente año por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital en el incidente sobre cuen-

tas rendidas por Mario Fernández Carballés como administrador judicial del abintestato de Sebastián González Melián;

*Resultando:* según la sentencia de Primera Instancia cuyos fundamentos de hechos acepta la resolución recurrida, que por virtud del abintestato de D. Sebastián González Melián, fué nombrado administrador judicial D. Mario Fernández, el que con fecha diez de Julio último rindió su cuenta que ocupa el folio veinte y cuatro, según el cual importa el debe y el haber igual cantidad de doscientos ochenta y cinco pesos seis centavos oro y quinientos cuarenta y dos pesos setenta y dos centavos billetes plata, con cuyas cuentas presentó los comprobantes que ocupan del folio primero al veinte y tres, consistentes en un recibo firmado por el Ldo. Miguel A. Planas de tres de Mayo último, por la suma de doce pesos oro, honorarios devengados por una consignación en el Juzgado Municipal del Cerro del alquiler ó renta de la estancia "Requena": otro recibo de veinte y nueve de Marzo del corriente año de noventa y siete, firmado por D. Ricardo Illás, secretario del Juzgado Municipal del Distrito del Cerro, á nombre de D. Epifanio González, por siete pesos, por derechos de las diligencias de ocupación de los bienes, fojas dos: otro recibo de fojas tres, de trece de Marzo, á nombre del Administrador judicial firmado por Ramón Veis por veinte y cinco pesos, por tres fanegas de maíz: otro recibo fojas cuatro de treinta y uno de Marzo firmado por Epifanio González, por quince pesos plata para alimentos de los dependientes de la finca de que es encargado por el Administrador: otro recibo fojas cinco, firmado por Ramón Basulta por veinte y ocho pesos por tres fanegas de maíz: otro recibo fojas seis, firmado por Epifanio González en diez de Abril, por quince pesos noventa centavos oro: otro recibo fojas siete, firmado por Benito Nicolás y Compañía en catorce de Abril por veinte y siete pesos cincuenta y siete centavos billetes, por efectos suministrados á la finca: otro recibo folio ocho, de quince de Abril firmado por Juan Ignacio Piedra por veinte y cinco pesos billetes por su trabajo y dirección en la prevención del abintestato: otro recibo fojas nueve de la misma fecha firmado por Epifanio González por catorce pesos treinta y seis centavos billetes importe del papel sellado en el abintestato: otro recibo de Ignacio Lorenzo de un peso, por conducción de maíz: otro recibo folio diez, de diez y seis de Abril firmado por Epifanio González de diez pesos plata por alimentos de los mozos que trabajan en la estancia: otro recibo folio once, firmado por el mismo en veinte y seis de Abril por treinta y tres pesos plata, gastos del intestado: otro recibo fojas doce, firmado Pedro Pé-



rez Verna, por siete pesos de catorce días de trabajo en la estancia: otro recibo fojas trece firmado Epifanio González de treinta y uno de Abril por diez y siete pesos plata de gastos del intestado: otro recibo fojas catorce de veinte y dos de Abril, firmado por Francisco Pérez, compra de un buey enfermo: otro recibo, folio quince, firmado por Juan Ignacio Piedra, en primero de Mayo por veinte pesos plata por la dirección y trabajo en el abintestato: otro recibo folio diez y seis, de primero de Mayo firmado por Ricardo Illás por cincuenta pesos alquiler del mes de Abril de la estancia la Requena: otro de fojas diez y siete de veinte pesos billetes de dos fanegas de maíz por José Noriega, en cuatro de Mayo: otro recibo folio diez y ocho, firmado José Herrera, por once pesos billetes, limpieza de letrinas: otro recibo firmado á fojas diez y nueve por Epifanio González de diez y ocho pesos plata para alimentos de los dependientes, en fecha catorce de Mayo: otro de fojas veinte, de veinte y dos de Mayo por diez pesos en oro, firmado Ldo. Miguel A. Planas, por honorarios en el desahucio contra D. Modesto Melián: otro recibo folio veinte y uno, firmado José Hevia por treinta y dos pesos, limpieza de letrinas: otro recibo folio veinte y dos, firmado Epifanio González en ocho de Junio por treinta y siete pesos diez centavos, para gastos de la declaratoria de herederos, y otro recibo de fojas veinte y tres, de tres de Julio firmado por Ldo. Miguel A. Planas, por sesenta y ocho pesos oro, honorarios de diferentes consultas y examen de autos; cuya cuenta y comprobantes fué presentada, con el escrito folio veinte y cinco, y se mandó formar pieza esparada;

*Resultando:* según la propia sentencia recurrida, que el procurador Tomás Granados, presentó escrito, folio veinte y siete al treinta y tres, estableciendo incidente é impugnación á las cuentas del administrador, fundándola en los hechos siguientes:

*Primero:* que D. Mario Fernández Carballés fué nombrado administrador judicial de este abintestato, sin más facultades que las determinadas en la Ley;

*Segundo:* que D. Mario Fernández ha ejercido el cargo más de tres meses y ha enajenado bienes del abintestato sin tasación ni subasta, y ha vendido frutos de la finca entregada á su administración sin la intervención de corredores, habiéndolos en esta capital;

*Tercero:* que ha empleado lo que expresa ser importe de dichas rentas, en pagos cuya certeza no admitimos, y cuya necesidad no está justificada; y solicitó se diera por impugnada en su totalidad la cuenta de administración, ordenando se tramitase en



forma incidental y en definitiva se declare con lugar en tanto no se acredite la verdad de los gastos que se dan por hechos y especial señaladamente en lo que se contrae á la venta de bienes del juicio y de productos de la finca, hechos sin los requisitos legales; se declarasen nulos y ordenar que el administrador reintegre al abintestato el valor real de los bueyes vendidos y el de los frutos que da por recolectados y que vendió por haberse prescindido, en cuanto á los últimos, de la intervención de corredor ordenada expresamente en la Ley, condenándole en las costas, y por otrosí, que el incidente se reciba á prueba;

*Resultando:* según dicha sentencia, que del incidente establecido se dió traslado por seis días al administrador judicial que lo evacuó por el escrito folio setenta y uno al setenta y cinco, sentando como hechos:

*Primero:* que nombrado administrador judicial del abintestato de D. Sebastián González Melián, ha cumplido estrictamente sus deberes de tal administrador;

*Segundo:* que al cesar por disposición del Juzgado en el cargo ha presentado justificadas sus cuentas y deduce de ellas que ninguna responsabilidad pesa sobre él, y

*Tercero:* que en el desempeño del referido cargo, ha empleado la debida diligencia, pagando y cobrando lo que era de necesidad conforme al misérrimo valor de los bienes que tuvo que administrar y solicitó se declarase sin lugar la impugnación que contiene aprobando definitivamente las cuentas presentadas por D. Mario Fernández, condenando en las costas á la representación del procurador Granados;

*Resultando:* además, que durante el período de prueba, á instancia de la parte demandante, absolvió posiciones el administrador judicial, se recibió informe del Colegio de Corredores de esta plaza y se puso certificación de varios particulares con referencia á las actuaciones practicadas en el juicio principal y á instancia del administrador cuentadante se recibió nuevo informe del Colegio de Corredores y fueron examinados Ricardo Illás, Ramón Veis, Epifanio González, Ramón Batista, Benito Nicolás y Juan Ignacio Piedra, quienes reconocieron como legítimas sus respectivas firmas, obrantes en los documentos presentados por el administrador judicial; y vencido el término de prueba se dictó sentencia en veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Cerro, de esta capital, que conocía del asunto, declarando sin lugar la impugnación de la cuenta rendida por Mario Fernández, exento á éste de toda responsa-

bilidad, y de cargo de los demandantes las costas del incidente: cuya sentencia, apelada que fué por tales demandantes, y sustanciada dicha apelación confirmó en segunda instancia la Sala de la Audiencia con fecha veinte y uno de Enero del presente año, imponiendo á los apelantes las costas del recurso;

*Resultando:* que contra la expresada sentencia de la Sala interpusieron los demandados Nicolás, Juana y Elvira González Melián, recurso de casación por infracción de ley, fundado:

*Primero:* en el inciso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haberse infringido, mediante su errónea interpretación y aplicación los artículos mil diez y nueve y mil treinta de la misma, en cuanto la sentencia aprueba la enajenación de frutos y semovientes del abintestato realizada sin intervención de corredor respecto á los primeros, y sin audiencia del Ministerio Fiscal ó de los herederos, ni subasta con relación á los demás;

*Segundo:* en el inciso séptimo del citado artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil por haberse infringido el artículo seiscientos tres de la propia Ley, incurriéndose en error de derecho en la apreciación de las pruebas de las partidas de las cuentas, al aceptar como válidos documentos privados impugnados expresamente y no reconocidos por las personas que lo afirman;

*Resultando:* que personados los recurrentes ante este Supremo Tribunal y sustanciado el recurso se celebró la vista en treinta y uno de Octubre próximo pasado sin asistencia de las partes;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,

*Considerando:* en cuanto al primero de los motivos invocados, que no pueden ser objeto de un recurso de esta clase las infracciones referentes al procedimiento, y, tratando los artículos mil diez y nueve y mil treinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil que por el recurrente se dicen infringidos, de las formalidades que en el juicio de abintestato se deben observar para la venta de frutos y de bienes inventariados pertenecientes al juicio, no cabe por tanto estimar en casación de fondo la violación de sus preceptos;

*Considerando:* en cuanto al segundo motivo del recurso, que por no haberse producido en el incidente, á los efectos de la prueba, documento alguno otorgado por las partes demandante ó demandada, y sí tan solo diferentes recibos privados suscritos por terceros, no ha podido el Tribunal sentenciador al apreciar la prueba recibida incurrir en la infracción por los recurrentes alegada, del artículo seiscientos tres de la Ley de



Enjuiciamiento Civil, relativo únicamente á documentos otorgados por quienes sean partes en las actuaciones;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Nicolás, Juana y Elvira González Melián contra la sentencia dictada en veinte y uno de Enero de este año por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta capital, con las costas á cargo de dichos recurrentes: comuníquese á la mencionada Audiencia con certificación de esta sentencia y devolución del apuntamiento elevado: y publíquese en la *Gaceta de la Habana*, y en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, librándose al efecto las copias necesarias.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

CASTO S. FERNÁNDEZ CONTRA LA SOCIEDAD L. SÁENZ Y C.<sup>a</sup>

**Sentencia núm. 5 (10 de Noviembre de 1899).**

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Casto S. Fernández contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana. (No se expresa la fecha.)*

### JUICIO DE MENOR CUANTIA SOBRE LIQUIDACION Y PAGO DE SUELDOS.

La prueba que se proponga debe limitarse á los hechos fijados definitivamente en los escritos de réplica y dúplica, ó en los de demanda y contestación, cuando se trate de juicios de menor cuantía: debiendo rechazarse la que no se acomode á este principio.

Para que pueda estimarse motivo de casación, la negación de una diligencia de prueba, es preciso que esta sea admisible y que su falta haya producido indefensión.

En la ciudad de la Habana, á diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el juicio de menor cuantía pendiente ante este Supremo Tribunal por recurso de casación por quebrantamiento de forma, seguido sobre liquidación y pago de sueldos ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Catedral, de esta ciudad, y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de este mismo territorio por D. Casto S. Fernández, vecino de esta capital y dependiente de comercio, contra la So-



ciudad mercantil de L. Sáenz y Compañía, domiciliada en esta propia ciudad;

*Resultando:* que en la sentencia apelada se aceptó la relación de hechos contenidos en el fallo de la primera instancia, la cual dice así:

*Resultando:* que el procurador D. Manuel López Vizoso, á nombre de D. Casto S. Fernández, interpuso juicio declarativo de menor cuantía contra la Sociedad Mercantil de L. Sáenz y Compañía, á fin de que convenga en liquidarle sus sueldos como dependiente que ha sido de la expresada casa á razón de sesenta y ocho pesos oro del cuño español, mensuales, desde los primeros días del mes de Junio de mil ochocientos noventa y seis, hasta fines de Junio del corriente año, estableciendo como hechos los siguientes:

*Primero:* que D. Casto S. Fernández, estuvo colocado en la casa de comercio de los Sres. L. Sáenz y Compañía, ganando los primeros años veinte pesos en oro mensuales;

*Segundo:* que por el tiempo comprendido desde el mes de Enero de mil ochocientos noventa y seis á Junio del mismo año, tenía asignados cuarenta pesos en oro mensuales, con lo cual estaba conforme;

*Tercero:* que desde principios de Junio de mil ochocientos noventa y seis á fines de Junio de mil ochocientos noventa y siete, desempeñó D. Casto S. Fernández, además de la plaza anterior por la cual se pagaban cuarenta pesos, otra por la que se estuvo pagando al que la desempeñaba anteriormente sesenta y ocho pesos oro mensuales; y cuarto: que adeuda, por consiguiente, la Sociedad de L. Sáenz y Compañía á D. Casto S. Fernández, la cantidad de quinientos treinta y cuatro pesos doce centavos en oro, esto es, ciento noventa y ocho pesos con doce centavos, que alcanzaba en la casa, liquidándole como quisieron liquidarle sus sueldos á razón de cuarenta pesos mensuales, más trescientos treinta y seis pesos que resultaban de multiplicar doce por veinte y ocho que era la diferencia que había de cuarenta á sesenta y ocho y se tenían los quinientos treinta y cuatro pesos con doce centavos, terminando por suplicar al Juzgado:

*Primero:* que se le tuviera por parte y por presentada la certificación del acto de conciliación y el testimonio de poder, admitir la demanda establecida con el fin de que la Sociedad de L. Sáenz y Compañía convenga en liquidarle, y le liquide, los sueldos que, como dependiente que ha sido de la referida razón social, le corresponden desde Enero del noventa y seis á Junio del mismo año por una parte, y, por otra, desde princi-

pio de Junio del noventa y seis hasta fines de Junio último, en que además de desempeñar la plaza anterior, sustituyó en otra á un dependiente que ganaba sesenta y ocho pesos; y

*Segundo:* para que le abonen la suma de quinientos treinta y cuatro pesos doce centavos en oro que en virtud de esa liquidación resultaría adeudársele condenándosele en definitiva al pago de dicha cantidad, intereses legales y costas: por un otrosí solicitó que, en su oportunidad, se recibiera el juicio á prueba;

*Resultando:* que el procurador D. José Urquijo á nombre de la Sociedad L. Sáenz y Compañía, por su escrito de fojas diez y siete contestó á dicha demanda, estableciendo como hechos los siguientes:

*Primero:* que D. Casto S. Fernández entró al servicio de los comerciantes de esta plaza, Sres. Loychate, Sáenz y Compañía, en calidad de dependiente meritorio por carecer en absoluto de todo conocimiento mercantil á principios del año de mil ochocientos noventa y tres;

*Segundo:* que con el propósito de estimularlo, y para hacerle favor, sus jefes le asignaron, ya en Julio de dicho año, el sueldo mensual de veinte pesos; alcanzando en treinta y uno de Diciembre del mismo año—porque ganó ciento veinte pesos y tomó á cuenta de ellos cien con sesenta centavos—la cantidad de diez y nueve pesos treinta centavos;

*Tercero:* que durante el año mil ochocientos noventa y cuatro los Sres. Loychate, Sáenz y Compañía, persistiendo en su propósito de mejorar la condición de su dependiente D. Casto S. Fernández le favorecieron con la asignación mensual de veinte y cinco pesos; gratificándole, además, al fin del año con la cantidad de sesenta pesos treinta y seis centavos. Y que como el importe anual del nuevo sueldo ascendió á trescientos pesos, sumados á tal cantidad el saldo del año precedente y la gratificación espontánea que se deja explicado, prodújose en favor del dependiente D. Casto un haber de trescientos setenta y nueve pesos setenta y seis centavos. Pero que como á cuenta del aludido haber tomara trescientos veintinueve pesos setenta y seis centavos, quedó aquél reducido sólo á cincuenta pesos, al terminar el año de referencia;

*Cuarto:* que en mil ochocientos noventa y cinco se señaló por los dichos Sres. Loychate, Sáenz y Compañía á su dependiente D. Casto, el sueldo, también mensual, de treinta pesos. Que el sueldo tal y el saldo á su favor del año anterior sumaron en treinta y uno de Diciembre, para el citado dependiente, un haber de cuatrocientos diez pesos, cuya cantidad, deducidos los trescientos sesenta y cuatro pesos cincuenta centavos toma-



dos á cuenta, quedó limitada á la de cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos. Que consistió la ocupación de D. Casto durante el año, en acompañar á los capitanes de los vapores, de que eran consignatarios sus principales—y entonces sólo les venían consignados dos al mes,—ya á la Capitanía del Puerto, ya á los Consulados para el despacho de dichas naves;

*Quinto:* que en mil ochocientos noventa y seis los señores Loychate Sáenz y Compañía, subieron hasta cuarenta pesos, cada mes al liquidar los negocios de ese año, el sueldo del mencionado dependiente, motivando tal aumento la circunstancia de habersele asignado á D. Casto, interinamente un nuevo cargo en la casa, propiamente incompatible con el que venía sirviendo, por ser el uno de calle y el otro de escritorio; cargo el último para cuyo desempeño fué preciso enseñarle, que consistía simplemente en lo que sigue: anotar día por día en un libro borrador, las órdenes que los vendedores de la casa expedían por la mañana en la Lonja, contraídas esas órdenes á la venta de mercancías hechas por aquéllos, trasladar del expresado libro á otro, cuando á bien lo tuviera D. Casto, los asientos de referencia, y llevar luego tales asientos á un tercer libro llamado de Consignaciones;

*Sexto:* que el nuevo sueldo del dependiente D. Casto, importó al finalizar el año la cantidad de cuatrocientos ochenta pesos la que con el saldo á su favor del año precedente, hizo la suma de quinientos veinte y cinco pesos cincuenta centavos. Y si bien tal haber quedó reducido á ciento treinta pesos cincuenta y ocho centavos, por haber tomado para sus gastos durante el año, el aludido dependiente, trescientos noventa y cuatro pesos noventa y dos centavos había, sin embargo, que agregar á ese producto la cantidad de cien pesos con que espontánea y generosamente gratificaron á aquel subalterno los Sres. Loychate, Sáenz y Compañía, al disolver el treinta y uno de Diciembre del mismo año mil ochocientos noventa y seis, la Sociedad representada por dicha razón social, en escritura de dos de Enero de este año autorizada ante el Notario de esta ciudad D. Juan Larrey y García é inscrita en el Registro Mercantil de la provincia, con fecha veinte y dos del mismo mes de Enero. Que este hecho y los precedentes aparecen acreditados por la copia, letra A, de la cuenta corriente abierta al actor por aquella extinguida compañía, copia que acompañó debidamente reintegrada;

*Séptimo:* que como derivación precisa de cuanto queda expuesto, al disolverse la razón social de referencia, resultó acreedor de ella D. Casto S. Fernández por la cantidad líquida



inclusa la gratificación explicada de doscientos treinta pesos cincuenta y ocho centavos; lo que desde entonces se hizo saber al referido D. Casto, entregándole al efecto, según costumbre antigua de la casa en relación con sus dependientes el extracto de su cuenta corriente; y recibido, ni la contradijo ni lo impugnó por entonces; no viniendo á objeccionarlo hasta después de su salida, el veinte y cuatro de Junio último, del escritorio de los demandados;

*Octavo:* que por lo que resulta de los hechos que anteceden, D. Casto S. Fernández no fué dependiente de los señores L. Sáenz y Compañía sino de la Sociedad Loychate Sáenz y Compañía desde mil ochocientos noventa y seis, siendo, por lo tanto, de todo punto incierto que los Sres. L. Sáenz y Ca. por sí ó en su particular—y en esta única forma aparecen demandados—deban nada al actor por virtud de los sueldos á que se viene aludiendo, toda vez que ellos corresponden á servicios prestados á personas, á entidad jurídica distinta de la que constituyen los demandados; constando todo esto de los libros de la extinguida razón de Loychate Sáenz y Compañía;

*Noveno:* Que la Sociedad de L. Sáenz y Compañía, la demandada por D. Casto S. Fernández, se constituyó por escritura de dos de Enero del año en curso, otorgada ante el Notario de esta ciudad D. Juan Larrey y García; apareciendo inscrita oportunamente en el Registro Mercantil de la Provincia, según se acredita por lo testimoniado en la copia de poder que deja acompañada;

*Décimo:* que D. Casto S. Fernández pasó á desempeñar en la expresada compañía en comandita desde la fecha de su constitución, igual destino que el que tuvo últimamente á su cargo en la extinguida de Loychate Saenz y Compañía, ganando el mismo sueldo mensual de cuarenta pesos que en dicha sociedad se le tenía asignado;

*Undécimo:* que D. Casto S. Fernández sirvió—y no ventajosamente por cierto—á los Sres. L. Sáenz y Compañía hasta veinte y cuatro de Junio último, ó lo que es igual cinco meses y veinte y cuatro días, que suman un sueldo total de doscientos treinta y dos pesos. Pero como dicho dependiente tomó á cuenta de su indicado sueldo, doscientos sesenta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos resulta que lejos de ser acreedor de dicha casa mercantil el aludido D. Casto, lo es de este, aquella, en la cantidad de treinta y dos pesos cuarenta y seis centavos. Que así aparecía de la copia letra B de la cuenta corriente abierta al actor por los demandados copia que acompaña reintegrada debidamente;

*Duodécimo:* que D. Casto S. Fernández atribuyéndose contra la realidad de los hechos el carácter de dependiente de los Sres. L. Sáenz y Compañía, durante el período comprendido entre el quince de Julio de mil ochocientos noventa y seis y el treinta y uno de Diciembre del mismo año, reclama á dichos comerciantes el pago á razón de sesenta y ocho pesos mensuales de sus sueldos á tal espacio de tiempo correspondientes; y ya quedaba demostrado que no habiéndose constituido la mencionada sociedad de comercio durante el día dos de Enero del año actual mal pudo ser dependiente de ella, en el último semestre de mil ochocientos noventa y seis, el demandante; siéndolo exclusivamente entonces de los Sres. Loychate Sáenz y Compañía;

*Décimotercero:* Que si bien como quedaba expuesto en los hechos décimo y undécimo, fué D. Casto dependiente de los demandados desde el dos de Enero, hasta el veinte y cuatro de Junio de este año, carece de todo derecho para solicitar que sus servicios le sean remunerados á razón de sesenta y ocho pesos cada mes; y esto porque tenía aceptada sin contradicción ni repugnancia la asignación de cuarenta pesos con que recompensaba sus trabajos—los mismos que hizo en la casa de los demandados—la Sociedad de Loychate Sáenz y Compañía; porque no pactó con dichos demandados, ni estos aceptaron por tanto, que al pasar él, á prestarles iguales servicios que á los expresados Sres. Loychate Sáenz y Compañía había de ser con el aumento que demanda; y porque los servicios de referencia explicados en los hechos cuarto y quinto resultan equitativamente remunerados con los mismos cuarenta pesos mensuales fijados á D. Casto por sus anteriores jefes de la extinguida casa tantas veces citada de Loychate Sáenz y Compañía. Y que no arguya D. Casto como sin razón lo hace, que el dependiente propietario del destino que á él se confió, sólo interinamente, D. Bernardo Sáenz, ganaba sesenta y ocho pesos; porque sobre ser ese D. Bernardo peritísimo en asuntos comerciales, como jefe que fué de importante casa mercantil en la Península—pericia nunca advertida en el actor—y ya se sabe que los trabajos valen más ó menos, aun siendo los mismos según como se efectúan, quisieron los Sres. Loychate Sáenz y Compañía, mostrarse agradecidos con el antiguo jefe de uno de los gerentes de tal Sociedad y favorecer además al mismo como cercano pariente del indicado gestor. Que no pida pues D. Casto sesenta y ocho pesos por ser esta la asignación, fundada en motivos especiales de D. Bernardo Sáenz. Que pida lo que su trabajo, el limitado trabajo de un mancebo de Comercio, sin ilustración ni expedi-



ción vale en sí; y que se deje de compararse con persona tan inteligente, tan perita y tan antigua en los ramos de comercio como el citado D. Bernardo Sáenz;

*Décimocuarto:* que D. Casto S. Fernández demanda todo lo que tiene solicitado con el carácter que se atribuye desde mil ochocientos noventa y tres, de dependiente de los Sres. L. Sáenz y Compañía y pide contra estos todo cuanto les exige en su sola personalidad de L. Sáenz y Compañía;

*Décimoquinto:* que los repetidos Sres. L. Sáenz y Compañía no resultan demandados en nada ni para nada por D. Casto S. Fernández, en su carácter, que le atribuye personalidad distinta de la propia suya de liquidadores de la disuelta sociedad de Loychate Sáenz y Compañía, ni aquel litigante tampoco pide nada como dependiente que fué de esta casa mercantil;

Y *Décimosexto:* que negaba los hechos de la demanda en cuanto no guarden absoluta conformidad con los que debajaba enumerados: terminando por suplicar al Juzgado se sirviera:

*Primero:* haberlo por personado en tiempo y forma con el poder que acredita su personalidad, y demás documentos adjuntos y tenerlo por parte;

*Segundo:* haber por contestada la demanda en los términos negativos que resultan del escrito, por oponerse á ella en sus respectivos extremos la excepción de falta de acción y la de pago ambos perentorios; y

*Tercero:* que se declare en definitiva sin lugar dicha demanda absolviendo de la misma á los demandados é imponiéndole condenación de costas al demandante. Por el primer otrosí manifestó que á los efectos del artículo quinientos tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil hacía presente:

*Primero:* que los originales de las cuentas corrientes que acompañaba, se encontraban respectivamente en los libros de comercio de la extinguida Sociedad de Loychate Sáenz y Compañía y en los de L. Sáenz y Compañía, cuyos libros obraban en poder de la última; y

*Segundo:* que la escritura de disolución de la primera de ambas sociedades y la de Constitución de la segunda radicaban en el protocolo de D. Juan Larrey y García; por el segundo otrosí hizo constar que los Sres. L. Sáenz y Compañía en su carácter de liquidadores de la Sociedad disuelta de Loychate Sáenz y Compañía, no se habían opuesto nunca á satisfacer á D. Casto S. Fernández, como dependiente que fué de dicha extinguida razón social el importe de su alcance por sueldos tal como consta de los libros de esa razón social doscientos treinta pesos cincuenta centavos deducidos lo que tenía cobrado de



más, veintidos pesos cuarenta y seis centavos á los demandados como dependiente de estos; por el tercer otrosí que no se oponía al recibimiento á prueba;

*Resultando:* que contra el fallo de la primera instancia, declarando sin lugar la demanda por falta de acción en el demandante y pago alegados por los demandados, se estableció apelación por Fernández para ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de este Territorio, la cual confirmó en todas sus partes la resolución del interior, é interponiéndose luego ante la propia Sala, por la representación del demandante, recurso de casación por quebrantamiento de forma por denegación de una prueba pericial, autorizado por el número quinto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiéndose reclamado oportunamente en ambas instancias, la subsanación de la falta cometida; y una vez cumplido lo preceptuado en el artículo ciento ocho de la Orden de Casación número noventa y dos, se admitió dicho recurso emplazándose á las partes para ante el Supremo;

*Resultando:* que personados en tiempo y forma el recurrente y no recurrente, previas las actuaciones del caso, se señaló la una de la tarde del día treinta de Octubre próximo pasado para la vista del recurso, la cual tuvo efecto, informando respectivamente por las partes sus abogados directores;

Visto, Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,

*Considerando:* que siendo un precepto de ley procesal que la prueba que se proponga se concretará á los hechos fijados definitivamente en los escritos de réplica y dúplica, ó en los de demanda y contestación, como resulta en el caso de autos por ser juicio de menor cuantía, debiendo los jueces repeler por impertinentes ó inútiles las que no se acomoden á dicho precepto, y al no resultar hechos de la demanda, ni de la contestación los que el demandante quiere someter á prueba pericial, procedieron con arreglo á estricto derecho el Juez del Distrito de la Catedral y la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana al tener por impertinente tal prueba y no admitirla;

*Considerando:* que para que pueda estimarse como motivo de casación la denegación de una diligencia de prueba es necesario que, además de ser admisible conforme á las leyes procesales, su falta haya podido producir indefensión; y en el caso de autos, estimadas en ambas instancias las excepciones perentorias de falta de acción y de pago alegadas por los demandados, declarándose sin lugar la demanda, la prueba pericial propuesta, no tiene influencia alguna en la cuestión objeto del de-

bate, y el hecho de haberse denegado no ha podido producir indefensión;

*Considerando:* que á tenor del artículo cuarenta de la orden de casación, cuando se declare sin lugar un recurso de casación se impondrán siempre las costas del mismo á la parte ó partes recurrentes;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de D. Casto S. Fernández condenando á éste en las costas del recurso. Con devolución del apuntamiento y autos originales comuníquese la presente por medio de certificación á la Audiencia de la Habana y publíquese en la *Gaceta* y en la Colección Legislativa á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto librense las oportunas copias.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

FRANCISCO DE CÁRDENAS Y VIERA CONTRA JOSÉ GANDÓS Y GÁLVEZ.

**Sentencia núm. 5 (15 de Noviembre de 1899).**

*Recurso por infracción de Ley interpuesto por José Gandós y Gálvez contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana de 3 de Marzo de 1898.*

## RESCISION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Si bien es cierto que en las obligaciones recíprocas puede el perjudicado por su falta de cumplimiento, optar por la rescisión del contrato, con sus consecuencias legales, ó por exigir su cumplimiento, con arreglo al artículo 1,124 del Código Civil, no ha de entenderse que de solo esa opción pueda derivarse la resolución del contrato, ni que sea aplicable á toda clase de obligaciones el Artículo 1,133 del mismo Código, que sólo se refiere á las obligaciones alternativas; siendo de aplicarse á otros casos preceptos legales más en armonía con su índole y naturaleza.

No fundándose la rescisión de un contrato de arrendamiento, en la falta de diligencia de alguna de las partes contratantes, sino en un caso fortuito, no se infringen los artículos 1,559 y 1,100 del Código, al no tenerlos en cuenta para fijar la fecha de la rescisión.

En la ciudad de la Habana, á quince de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el juicio de mayor cuantía se-

guido en el Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal y en la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta Capital por Francisco de Cárdenas y Viera, propietario y vecino de esta ciudad, contra José Gandós y Gálvez, empleado y vecino de Marianao, sobre rescisión de un contrato de arrendamiento pendiente ante este Supremo Tribunal en virtud del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Gandós y Gálvez:

*Resultando:* que en la resolución recurrida se aceptaron los hechos de la sentencia del Juez inferior, de los cuales se transcriben como pertinentes los siguientes: "Resultando: que en veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis, presentó escrito en este Juzgado D. Oscar Nodarse y Hernández, vecino de San Cristóbal, á falta de procurador habilitado, á nombre de D. Francisco de Cárdenas y Viera, formulando demanda para sustanciarse por los trámites del juicio declarativo de mayor cuantía, en solicitud de que se declare rescindido el contrato de arrendamiento que ante el Notario Gutiérrez de Celis otorgaron en veinte y seis de Octubre de mil ochocientos noventa y cinco, D. Francisco de Cárdenas y Viera y D. José Gandós y Gálvez, y se condene al último á que indemnice los daños y perjuicios que hubiere ocasionado la falta de cumplimiento por parte del arrendador de las obligaciones impuestas por el artículo mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil y la ley del contrato, cuya demanda funda en los siguientes hechos: que por escritura pública otorgada en San Cristóbal en veinte y seis de Octubre de mil ochocientos noventa y cinco, ante el Notario D. Santiago H. Gutiérrez de Celis, D. José Gandós y Gálvez, dueño de la finca rústica titulada Santa Bárbara, destinada á Potrero y labor y situada en el término municipal de Santa Cruz de los Pinos, la dió en arrendamiento á D. Francisco de Cárdenas y Viera con sus casas, fábricas, entradas y servidumbres anexas y las dotaciones de animales por término de cinco años y nueve meses, calculándose el precio del arrendamiento en su totalidad en la suma de cuatro mil doscientos pesos oro español, á razón de setecientos pesos por los nueve meses comprendidos desde primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco, hasta el treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y seis, y de setecientos pesos por cada un año de los de duración del contrato, de cuyo precio han sido satisfechas las rentas vencidas, hasta primero de Abril de mil ochocientos noventa y seis, quedando pendientes las correspondientes á los meses de Abril á Julio, ambos inclusive, que importan en junto trescientos once pesos ocho centavos, y suman con la de los cinco años un total de tres mil ocho-



cientos once pesos, ocho centavos, cantidad reguladora de la cuantía de la demanda; que el mismo día del otorgamiento de la escritura de arriendo, recibió Gandós, de Cárdenas, ciento setenta y seis pesos catorce centavos, como anticipo por cuenta de las rentas que por mensualidades habían de ser satisfechas, quedando por acuerdo de las partes, esas mesadas reducidas á cincuenta y ocho pesos treinta y ocho centavos; que convinieron las partes en la citada escritura respecto á reparaciones y atenciones de la finca arrendada, estar á lo dispuesto en el Código Civil, habiendo faltado el arrendador abiertamente á lo preceptuado en el inciso segundo del artículo mil quinientos cincuenta y cuatro de dicho Código y convenio expreso de las partes, y que siendo convenio también el que Cárdenas tendría derecho á que le fueran sustituidas por otras las dotaciones de animales cuando estas se perdieran en cantidad que excediera de la cuarta parte del número total, llegó el caso y faltó Gandós al convenio, mientras que el Sr. Cárdenas, arrendatario, interín estuvo en posesión pacífica de la finca arrendada, cumplió todas las obligaciones que la Ley y el contrato le imponían; que en los primeros días del mes de Abril de mil ochocientos noventa y seis, las partidas rebeldes destruyeron la finca por medio del incendio, llevaron y sacrificaron los animales que constituían su dotación, destruyeron las cercas, labores, fábricas y casas, haciendo materialmente imposible la posesión de la finca, de cuyos sucesos tuvo pleno conocimiento el Sr. Gandós como vecino de Santa Cruz, participándosele además el Sr. Cárdenas y requiriéndole para que le volviera el goce del arrendamiento en los términos convenidos ó le rescindiera el contrato indemnizándole los daños y perjuicios que había experimentado: que Gandós solicitó espera de algún tiempo para llegar á un acuerdo definitivo y dejó transcurrir con promesas incumplidas hasta el mes de Octubre en que Cárdenas le demandó en conciliación, en cuyo acto alegó la excepción de incompetencia y no obstante todo esto Gandós, mientras obtenía aplazamientos había acudido al Juzgado por escrito de diez y ocho de Julio solicitando se despachara mandamiento de ejecución por el importe de las rentas correspondientes á los meses de Abril á Julio durante los cuales así como los siguientes, Cárdenas no ha disfrutado de la finca ni estuvo en el uso y goce del arrendamiento; y que la destrucción de la finca y la falta de cumplimiento por parte del arrendador, de sus obligaciones, ocasionaron á Cárdenas daños y perjuicios que ascienden por destrucción de la finca en ropas, muebles, ganados, aves, labores, plantíos y por utilidades que deja de percibir en el término del arrendamiento, en junto,

á catorce mil trescientos ochenta y seis pesos y treinta y tres centavos, pidiendo al actor como consecuencia, que en definitiva se condenase á D. José Gandós y Gálvez á la rescisión del contrato de arrendamiento desde primero de Abril con sus consecuencias, á indemnizar el demandante los daños y perjuicios que hubiere sufrido y fueren de su cuenta, al pago de las costas causadas y reintegro de las cantidades que ha percibido anticipadas; y por medio de otrosí, se decretare la anotación de la demanda en el Registro de la Propiedad de San Cristóbal;

*Resultando:* que habiendo sido emplazado el demandado compareció en este Juzgado por medio de escrito el Procurador D. José de la Puente, para personarse á nombre de D. José Gandós y Gálvez, promoviendo en otrosí la insolvencia y pidiendo para acreditar su personalidad se pidiera testimonio de los poderes que obraban en juicio ejecutivo que seguía en este Juzgado contra D. Francisco de Cárdenas en virtud de lo que se tuvo por personado en forma el Procurador Puente, disponiéndose lo demás procedente en providencia de veinte y uno de Enero de la cual solicitó reforma la parte contraria, y pidió se declarase rebelde al demandado D. José Gandós, con fundamento en que el Procurador compareció sin testimonio de poder y en que los Escribanos puramente actuarios no pueden expedir copias de escrituras matrices, y en su consecuencia se diese por contestada la demanda y se decretase el embargo de sus bienes muebles de toda clase é inmuebles que expresa el artículo setecientos sesenta y uno y siguiente de la Ley procesal; y habiéndose tramitado el recurso de reposición que fué impugnado por el demandado, con petición de que se declarase sin lugar la reforma por ser Procurador del Juzgado y del demandado, cuyos poderes obran en autos, incoados contra el demandante en este Juzgado, sin que en el presente caso se tratase de copia en vista de la escritura matriz, se acordó por auto de seis de Febrero, reponer la providencia dejándose sin efecto lo ordenado en la misma y sin curso el escrito del Procurador Puente, teniéndose por acusada la rebeldía y por contestada la demanda con las costas del recurso al demandado, reservándose proveer el Juzgado en cuanto á los demás extremos después que el auto fuere firme;

*Resultando:* que en nueve de Febrero siguiente compareció D. Pedro Rodríguez, con objeto de personarse á nombre de D. José Gandós, acompañando á su escrito testimonio de poder, pidiendo se abriese á prueba el pleito en su oportunidad y reproduciendo por medio de otrosí, la promoción de insolvencia solicitada en el escrito que fué dejado sin curso; en virtud de



lo que se le tuvo como parte á nombre de Gandós, mandando se entendieran con él las actuaciones sucesivas sin retroceder en la sustanciación, decretando no haber lugar á la retención y embargo solicitados por haber cesado la rebeldía, disponiendo dar traslado á la otra parte por término de diez días á los efectos de la réplica y formar pieza separada para la sustanciación de la insolvencia pedida, providencia contra la que el demandante interpuso recurso de reposición en cuanto se declaró no haber lugar á decretar la retención y embargo de bienes, de cuyo recurso desistió por escrito de veinte y dos de Febrero, acordándose tenerlo por desistido;

*Resultando:* que el demandante renunció el trámite de réplica, solicitando que el juicio se recibiera á prueba por el término legal, cuyo derecho se tuvo por renunciado, no permitiéndose la dúplica y se acordó recibir el pleito á prueba por el término de quince días comunes á las partes para que cada una propusiera dentro del mismo lo que le conviniera;

*Resultando:* que dentro del término legal la parte actora propuso como prueba: la confesión judicial, bajo juramento indecisorio del demandado, á tenor del pliego que ofreció presentar; documentos, consistentes en el mérito favorable de autos, certificación literal de los hechos primero, segundo y tercero de la demanda formulada por Gandós, en este juicio promoviendo el beneficio de pobreza, certificación con vista del juicio ejecutivo seguido en este Juzgado por Gandós contra Cárdenas; de la correspondencia desde Santa Cruz de los Pinos inserta en el diario "La Discusión"; comunicación dirigida al Juzgado por el que fué Alcalde Municipal de Santa Cruz de los Pinos; comunicación del Alcalde de Barrio de Bermejales, la del Alcalde Municipal de San Cristóbal, oficio del Alcalde Municipal de Santa Cruz de los Pinos, diligencia fecha tres de Marzo del año corriente y providencia recaída el mismo día y declaración de los testigos D. Cándido Ruenes, D. Paulino Labarta, D. Silvestre Fabregat, D. Luis Sánchez y D. Ramón Alfaro; mandamiento compulsorio al Notario D. Santiago Gutiérrez de Celis, para poner copia literal del contrato de arrendamiento entre las partes, comparecencia de D. Cándido Ruenes, D. Juan J. Ruenes y D. José Gandós para que bajo juramento reconozcan las firmas y contenidos, respectivamente de los documentos presentados con la demanda y señalados con las letras B. C. D. y E.; testifical por medio del examen de testigos que ofreció presentar y designar en lista á tenor del interrogatorio que se acompaña al escrito; reconocimiento judicial para el examen de la finca "Santa Bárbara"; copia certificada



de los considerandos y parte dispositiva de la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo seguido entre las partes; oficio al Comandante Militar para que manifestase si desde Abril del año pasado á la fecha D. José Gandós había solicitado autorización para tener fuerza armada que custodiase la finca "Santa Bárbara", ó requirió auxilio para dar posesión á Cárdenas de arrendamiento, si en esa finca hay fuerza armada que la custodie y si por orden de D. Francisco de Cárdenas se ha traído de ella algún ganado para las fuerzas de la Comandancia; y en nuevo escrito solicitó como más prueba que los testigos que se citan en el acta levantada por el demandado sean examinados á tenor del pliego de repreguntas que ofreció presentar; que se adicione la comunicación que se dirija á petición del demandado al Alcalde Municipal inquiriendo de este quién era el propietario de los animales, si su valor se ha satisfecho, á quien, por orden de qué personas se trajeron y en qué fecha, indicando sería procedente traer los antecedentes del pardo Guzmán dirigiendo oficio al Comandante de la Guardia Civil, cuyas pruebas se tuvieron por propuestas, declararon pertinentes, excepción hecha del oficio al Comandante de la Guardia Civil en la forma que se indicó y mandaron practicar dentro del término del segundo período con citación de la parte contraria;

*Resultando:* que abierto el segundo período, por término de veinte y cinco días comunes á las partes y señalados que fueron los días y horas en que debía tener lugar la práctica de la prueba admitida y lo mismo la del examen de los testigos, después que fué presentada su lista se realizó por lo que concierne al demandante lo siguiente: comparecieron Cándido Ruenes y Juan J. Ruenes que reconocieron respectivamente como suyas las firmas, y cierto el contenido de los documentos señalados con las letras B y C en las cuales manifestaban á D. Francisco de Cárdenas, en el mes de Noviembre último, que si creían pudiera haber nadie que reedificase nada en la finca en las condiciones que se encontraban las cosas y que las cercas y casas estaban destruídas, diciendo el segundo que no tenía noticias de que se hubiera hecho reparación alguna en la finca y que todo estaba destrozado y destruído; los testigos D. Faustino Medal, D. Domingo López, D. José Pruneda y D. Serafin Ruiz, que igualmente comparecieron, manifestaron ser cierto que por razón del cargo que desempeñaban, pasaban con frecuencia por la finca "Santa Bárbara", habiendo visto que las fábricas, cercas, labores y plantíos de esa finca están completamente destruídos, si bien Pruneda no lo asevera en cuanto á los plantíos por no haberse fijado; el segundo, tercero y cuarto de dichos

testigos, afirman, que en la finca no hay ganado alguno ni se está ejecutando en ella obra ni trabajo alguno para reparar las fábricas y cercas destruidas; y el primero y tercero exponen que cuando han paseado por la finca no han visto en ella fuerza armada; y el segundo y cuarto que D. José Gandós no ha puesto en ella fuerza para custodiarla; el testigo Norberto Díaz y Hernández, que dijo ser cuñado de D. José Gandós, manifestó que el Sr. Cárdenas abandonó la finca ignorando la causa porque lo hizo, no habiendo vuelto á ver á dicho Cárdenas desde que salió de la finca y que el Sr. Gandós no ha hecho obra de reparación alguna en el potrero "Santa Bárbara", hallándose destruidas las fábricas y cercas de la finca; el testigo Luis Hernández Cruz manifestó que desde Abril del año pasado no ha vuelto á ver á Cárdenas en San Cristóbal, Santa Cruz de los Pinos, ni en la finca y que no recibió orden en ninguna ocasión de D. José Rodríguez, alias Ché; el testigo Guzmán Hernández, que Gandós le recomendó á Cárdenas al declarante como persona de confianza que el Sr. Cárdenas salió para la Habana, quemando los insurrectos la finca al día siguiente sin que desde Abril del año pasado lo haya vuelto á ver en San Cristóbal, ni en Santa Cruz ni en la finca, teniendo el testigo hasta hace poco tiempo una hija al cuidado de Gandós, y que los muebles que tiene en su poder son de Gandós, que se los entregó para su cuidado no habiendo recibido orden en ninguna ocasión de D. José Rodríguez; y el testigo Pedro Rodríguez, que desde Abril del año próximo pasado no vió á Cárdenas en San Cristóbal, Santa Cruz ni en la finca; que por los de asistencia se puso certificación con vista del juicio ejecutivo:

*Primero:* de la correspondencia del diario "La Discusión", que dice, en síntesis, que Gandós ha perdido en el potrero "Santa Bárbara", muebles, ropas, carruaje, en junto más de veinte mil pesos, aludiendo al estado del Término Municipal de Santa Cruz desde la invasión y enumerando otras pérdidas;

*Segundo:* comunicación del que fué Alcalde de Santa Cruz, que dice recibió un aviso verbal en los primeros días del mes de Abril del arrendatario de la finca "Santa Bárbara" manifestando que los insurrectos habían incendiado y destruido las casas, cercas y labranzas de la referida finca;

*Tercero:* de la del Alcalde de Barrio de Bermejales que dice: que el Jueves Santo del año pasado incendiaron y destruyeron las casas, cercas y siembras de la finca "Santa Bárbara";

*Cuarto:* de la del Alcalde de San Cristóbal, diciendo no aparece documento oficial en que ninguna autoridad haya dado parte de la destrucción de la finca "Santa Bárbara" del ba-



rrio de Bermejales, por más que extraoficialmente es del dominio público lo ocurrido en dicho poblado;

*Quinto:* del Alcalde Municipal de Santa Cruz de los Pinos, expresando que en los primeros días del mes de Abril los rebeldes incendiaron y destruyeron la finca "Santa Bárbara", en el barrio de Bermejales;

*Sexto:* de la diligencia en que se hace constar que no ha podido practicarse el reconocimiento judicial, por el estado actual de guerra, mandándose hacer saber á las partes;

*Séptimo:* declaración de los testigos D. Cándido Ruenes, D. Faustino Labarta, Silvestre Fabregat, Luis Sánchez y Ramón Alfaro, los cuales la prestaron á tenor de un interrogatorio, cuyas preguntas no se consignaron en ellas, ni la parte pidió se certificase dicho interrogatorio pero esto no obstante, se deduce que dichas declaraciones se contraen y afirman que la finca "Santa Bárbara" fué destruída con todos sus enseres, cuyos lugares certificados según nota, son copia de los originales del cuaderno de prueba de Cárdenas en el juicio ejecutivo que fué practicado con citación contraria y dentro del término legal; que igualmente se puso certificación por los testigos de asistencias de los considerandos y parte dispositiva de la sentencia recaída en el juicio ejecutivo, cuyos Considerandos se contraen á la apreciación de los puntos de derecho que hacen relación en dicho juicio, en el cual se mandó en su parte dispositiva seguir la ejecución adelante; que igualmente se certificaron por los de asistencia los hechos primero, segundo y tercero de la demanda de pobreza, formulada por el Sr. Gandós en los cuales se dice que este posee las fincas rústicas "Santa Bárbara", "Matilde" y "San José", en el término de Santa Cruz, cuyas fincas se encuentran hoy improductivas y abandonadas, la de "Santa Bárbara" por su arrendatario Cárdenas, sin que en la actualidad perciba renta alguna; que el Comandante Militar, manifiesta que D. José Gandós no ha solicitado tener fuerza armada para custodiar la finca Santa Bárbara, ni requerido auxilio alguno, no existiendo en dicha finca destacamento alguno, ni antecedentes en la Comandancia de que se hayan traído reses para las fuerzas: que por el Notario Santiago Gutiérrez de Celis se puso copia literal del contrato de arrendamiento otorgado entre las partes y de la cual aparece: que D. José Gandós, dueño de la finca Santa Bárbara, conviene dar en arrendamiento á D. Francisco de Cárdenas, con sus casas, entrada y servidumbre anexas y terrenos que le pertenecen por el término de cinco años y nueve meses, á contar desde el día primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco, y



que igualmente da en arrendamiento por igual término las dotaciones de animales de dicha finca, siendo el precio del arrendamiento en totalidad el de cuatro mil doscientos pesos en oro español, á razón de setecientos por los nueve meses primeros y de setecientos por cada un año de los de duración del contrato, cuyo precio se pagará por mesadas adelantadas, el de los primeros nueve meses, y por anualidades vencidas, el de cada un año, conviniendo en estar ambos contratantes, respecto á las reparaciones y demás atenciones de la finca á lo que dispone el Código Civil, y que, en caso de que la pérdida, muerte ó nulidad de los animales llegue, sumadas las diferentes especies, á la cuarta parte del número, lo repondrá Gandós ó Cárdenas por cuenta de él, con su consentimiento ó se rebajará el importe de la renta en la proporción que corresponda á cuyo fin y solo á los efectos de esa regulación, se fijen como tipo las cantidades de cuatrocientos cincuenta pesos para el inmueble y doscientos cincuenta para las dotaciones de animales, que estando Cárdenas en el caso de poner en conocimiento del arrendador el extravío ó muerte de cualquier animal y dar los oportunos partes al Alcalde de Barrio respectivo: que según diligencia de diez y nueve de Abril último y cinco de Mayo siguiente no fué posible practicar el reconocimiento judicial solicitado por la parte actora por el estado de guerra, y que D. José Gandós no compareció á pesar de ser citado por segunda vez;

*Resultando:* que el demandado dentro del término legal propuso como prueba el mérito favorable de autos, la confesión judicial del demandante bajo juramento indecisorio, á tenor de las posiciones comprendidas en pliego cerrado, que se presentó; reconocimiento del contenido de un documento privado que se acompaña por los testigos que los suscriben, D. Luis Hernández, D. Guzmán Hernández y D. Manuel Vega; comunicación al Alcalde de San Cristóbal á fin de que exprese que para suministro de carne de las fuerzas del ejército y voluntarios se extrajeron de la finca Santa Bárbara un número de animales, y testifical, para que los testigos que ofreció presentar fuesen examinados á tenor del interrogatorio acompañado cuya prueba fué admitida y declarando pertinente el interrogatorio ordenado se practicase con citación dentro del segundo período;

*Resultando:* que dentro del segundo período de prueba y en virtud de la propuesta por la parte demandada compareció el testigo Luis Hernández, diciendo no le constaba la certeza del contenido del documento que se le exhibió en el cual se hace constar que en poder del pardo Guzmán se encuentran varios muebles de la propiedad de Gandós, los cuales habían

sido entregados á D. Francisco de Cárdenas en el arriendo de la finca Santa Bárbara, así como las manifestaciones hechas por dicho pardo, cuyas manifestaciones expresa también en dicho documento Luis Hernández ser ciertas, añadiendo el testigo que no hizo la manifestación que se le atribuye en dicho documento y sólo puso al pie del mismo por indicación de D. Manuel Vega su firma, sin que le diese lectura de él; comparecieron también los testigos D. Manuel Vega, que expresó ser amigo, aunque no íntimo del Sr. Gandós, D. Norberto Díaz que dijo ser cuñado de dicho Gandós y D. Pedro Rodríguez, que manifestaron ser suyas las firmas que aparecen en el referido documento y haber presenciado las manifestaciones que en él constan sin que pueda afirmar la certeza de su contenido, y del mismo modo compareció Guzmán Hernández el cual expresó no era cierto que el declarante hubiere hecho manifestación alguna de las que se contienen en el citado documento ni ciertos tampoco los hechos á que en él se hace referencia; manifestó el Alcalde de San Cristóbal que de la finca "Santa Bárbara" fueron extraídas desde el once de Febrero al diez y ocho de Marzo del año pasado, veinte y ocho reses, y del 19 de Marzo al 31 de Mayo de dicho año, ocho reses, ignorando á nombre de quién pudieran estar inscritas y quién pudiera ser su dueño, así como la columna ó fuerza que las trajeron y día en que lo verificaron, sin que su precio haya sido satisfecho; declaró D. Francisco de Cárdenas, después de haber sido declaradas pertinentes las posiciones presentadas al efecto, que es cierto arrendó el día primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco la finca "Santa Bárbara" y tomase posesión de ella marchándose Gandós; que es cierto que las partidas insurrectas entraron en la provincia de Pinar del Río en primero de Enero del año pasado puesto que llegaron á la finca el día siete y quemaron el potrero, estando el declarante en la finca hasta el mes de Abril, de donde tuvo que salir huyendo porque los insurrectos la quemaron, sin haber podido tomar medida alguna para asegurar derechos, pues solamente trató de salvar la vida y la de sus familiares; y no comparecieron los testigos de la lista presentada, á pesar de haberse practicado las oportunas citaciones;

*Resultando:* que la Sala sentenciadora agregó los resultados siguientes:

*"Resultando:* que el Juez de Primera Instancia de San Cristóbal, dictó sentencia en diez de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, declarando rescindido desde la interposición de la demanda en veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos



noventa y seis, el contrato de arrendamiento de la finca Santa Bárbara, celebrado en escritura pública de veinte y seis de Octubre de mil ochocientos noventa y cinco por D. José Gandós y D. Francisco de Cárdenas; y absolviendo á aquel de la indemnización de daños y perjuicios reclamada y del reintegro de las cantidades que percibió adelantadas, sin especial condenación de costas, y con reserva el actor de los derechos que le otorgan la cláusula quince del convenio rescindido y el artículo mil quinientos setenta y cinco del Código Civil;

*Resultando:* que el demandante D. Francisco de Cárdenas interpuso apelación contra el indicado fallo, pero sólo en cuanto declaró rescindido el contrato de arrendamiento desde la interposición de la demanda en veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis y no á contar del primero de Abril, como se pidió en la demanda; absolvió á D. José Gandós del reintegro de las cantidades que percibió anticipadamente; no hizo especial condenación de costas á pesar de la temeridad del demandado, y resulta incongruente con la demanda en particular que no expresa el apelante”;

*Resultando:* que la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad dictó sentencia en tres de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho, declarando que la fecha desde la cual ha de entenderse rescindido por la sentencia apelada el contrato de arrendamiento celebrado por los litigantes es la de primero de Abril de mil ochocientos noventa y seis, y que no ha lugar á decretar la devolución al arrendatario de ninguna cantidad en concepto de rentas anticipadas al arrendador, ni á imponer á éste las costas causadas en el inferior;

*Resultando:* que contra ese fallo interpuso José Gandós y Gálvez recurso de casación por infracción de ley fundado en los incisos primero, segundo, tercero, sexto y séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y citando como infringidos:

*Primero:* El artículo mil doscientos catorce del Código Civil y el principio de derecho “*actore non probante reus est absolvendum*”, porque la sentencia recurrida, sin declarar probados los hechos de la demanda, supone el incumplimiento de obligaciones por parte del arrendador para fundar en dicho incumplimiento la rescisión del contrato, dictando por tanto un fallo sin base legal alguna;

*Segundo:* Infracción del artículo trescientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la sentencia recurrida se ha limitado á señalar la fecha desde la cual se ha de contar la rescisión del contrato, omitiendo todo pronuncia-



miento sobre la procedencia ó improcedencia de esa misma rescisión, y por defecto de esa omisión no sólo se deja de hacer declaración expresa sobre el extremo más importante de la demanda, sino que se incurre en defecto en el ejercicio de la jurisdicción al dejar de conocer sobre asunto que fué legalmente sometido á la Sala;

*Tercero:* Error de hecho al entender que el fallo de primera instancia quedó firme en cuanto al extremo que declaró rescindido el contrato de arrendamiento, por consentimiento de los litigantes; pues lo que resulta cierto de documentos tan auténticos como la sentencia de primera instancia y las actuaciones posteriores, es que el recurrente consintió el fallo del Juez inferior en el cual se declaraba rescindido el contrato de arrendamiento á partir desde el veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis, sin que sea lícito aplicar el consentimiento de Gandós á extremos distintos de aquel fallo, ni suponer que consintió pura y simplemente la rescisión del contrato; porque su conformidad existía condicionada á la fecha fijada por el Juez de Primera Instancia y dejó de surtir efecto desde que apeló el actor;

*Cuarto:* Aplicación indebida del artículo mil quinientos cincuenta y ocho del Código por referirse á una situación distinta á la que ha motivado el pleito; dejando de aplicarse, al propio tiempo, el precepto del artículo mil ciento cinco del mismo Código;

*Quinto:* Infracción del artículo mil quinientos cincuenta y cuatro en relación con el ya citado mil ciento cinco, ambos del Código, al suponer que la obligación del arrendador de hacer las reparaciones necesarias en la cosa arrendada, es exigible en todo tiempo y circunstancia, cuando lo cierto es que tal obligación no existe ni puede exigirse en condiciones excepcionales;

*Sexto:* Aplicación indebida del mismo artículo mil quinientos cincuenta y cuatro, porque pudiendo destinarse la cosa arrendada á usos para los cuales no era indispensable la reparación de las casas destruídas, es evidente que el arrendador no estaba obligado á las reparaciones aludidas;

*Séptimo:* Infracción del principio jurídico de que en las obligaciones bilaterales la causa de pedir es el incumplimiento de lo debido y también del artículo mil quinientos cincuenta y nueve del Código; porque no habiendo el arrendatario participado las novedades ocurridas en la finca ni la necesidad de reparaciones urgentes, no ha podido utilizar acciones procedentes de un contrato bilateral sin haber antes cumplido las que la ley le imponía;

*Octavo:* Falta de aplicación de los artículos mil quinientos sesenta y cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código, porque la desposesión que sufrió el arrendatario provino de una perturbación de mero hecho realizado por las fuerzas revolucionarias, circunstancia no tenida en cuenta por la Sala sentenciadora;

*Noveno:* Falta de aplicación del artículo mil quinientos sesenta y tres del Código, porque siendo el arrendatario responsable del deterioro ó pérdida de la cosa arrendada, no cabe que pueda pedir la rescisión por faltas ajenas y que de existir sólo traerían aparejada responsabilidad contra él;

*Décimo:* Infracción del artículo mil quinientos setenta y cinco del Código, por no aplicación, porque siendo fortuito el caso de autos, sólo ha podido el arrendatario pretender la rebaja de rentas por pérdida de más de la mitad de los frutos, siendo por ello sólo procedente esa declaratoria y no la de rescisión;

*Décimoprimer:* Para el caso de no prosperar los anteriores motivos y de admitirse como procedente la rescisión del contrato de arrendamiento, la infracción del artículo mil ciento treinta y tres en relación con el mil ciento veinte y cuatro, porque confiriendo el último al arrendatario la facultad de escoger entre la rescisión ó su cumplimiento, es indudable que habiendo elegido Cárdenas la rescisión, sólo desde el momento de esa elección puede entenderse rescindido el contrato, declarándolo rescindido la Sala desde primero de Abril de mil ochocientos noventa y seis cuando de autos consta que hasta el veinte y ocho de Diciembre de ese mismo año no optó Cárdenas por la rescisión;

*Décimosegundo:* Infracción del artículo mil quinientos cincuenta y nueve del Código y del principio de derecho "*at impossibilia nemo tenetur*", porque si el arrendatario no requirió al dueño hasta la interposición de la demanda, sólo desde ese momento incurrió Gandós en mora y pudo entenderse como exigibles las obligaciones contraídas, conforme al artículo mil cien, también violado por la Sala, viniendo á imponérsele la obligación de indemnizar sin haber sido enterado de la necesidad de las reparaciones;

*Resultando:* que personado el recurrente ante este Supremo Tribunal y sustanciado el recurso se celebró la vista en tres de Noviembre corriente, informando los letrados directores de las partes;

Vistos, siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* que al no interponer el recurrente apelación contra la sentencia del Juez de Primera Instancia de San Cristóbal que declaró con lugar la rescisión del contrato de arrendamiento desde el veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis, fecha de la demanda, ni haberse luego adherido á la establecida por el actor, limitada al particular de esa fecha, es indudable que aceptó la procedencia de la rescisión, y que, por ello, el punto apelado quedó circunscrito á la determinación de la fecha desde la cual habría de surtir sus efectos la rescisión; y que decidido en la sentencia recurrida que fuera la del primero de Abril de mil ochocientos noventa y seis, por el caso fortuito de la guerra, los motivos del presente recurso solo pueden referirse al punto accesorio de la fecha y no al fundamental de la rescisión; porque de otro modo vendría á darse el remedio extraordinario de la casación para un caso en que no se utilizó por ninguno de los litigantes el ordinario de la apelación;

*Considerando:* que admitido como cierto el criterio de la Sala sentenciadora, no es necesario examinar la pertinencia ó impertinencia de los diez primeros motivos en atención á que se refieren á la improcedencia de la rescisión en absoluto y no desde fecha determinada; único punto, este último, que fué sometido al conocimiento y decisión de la Sala y que, por lo mismo, puede ser objeto del presente recurso;

*Considerando:* respecto al motivo once que la sentencia no ha infringido los dos artículos del Código que en el mismo se citan, porque refiriéndose el mil ciento veinte y cuatro á la facultad que corresponde al perjudicado en las obligaciones recíprocas de escoger entre el cumplimiento ó la resolución de las mismas, y el mil ciento treinta y tres á que la elección no produce efecto sino desde que fuere notificada; no puede deducirse de la opción consignada en el primero de esos artículos, la necesaria consecuencia de que sólo de ella ha de entenderse rescindido el contrato, ni en el caso que ha motivado el pleito se ha tratado del cumplimiento de obligaciones alternativas, únicas á que se refiere el artículo mil ciento treinta y tres, sino del ejercicio de un derecho regulado por otros principios y preceptos legales;

*Considerando:* que tampoco ha infringido la sentencia los artículos mil quinientos cincuenta y nueve y mil cien del Código, ni el principio de derecho citado en el motivo doce, al declarar la improcedencia de la rescisión desde primero de Abril de mil ochocientos noventa y seis, porque de no haber cumplido el arrendatario la obligación que le impone el primero de



esos artículos, no se deriva la improcedencia de la rescisión del contrato de arrendamiento desde la fecha determinada, sino tan sólo la responsabilidad de los daños y perjuicios que sufra el propietario por la negligencia del arrendatario, según expresamente lo establece en su último párrafo; y porque habiéndose fundado la rescisión, desde la fecha indicada, no en la falta de diligencia de ninguno de los contratantes sino en el forzoso incumplimiento de la obligación por el hecho fortuito é inevitable de la guerra, no ha sido necesario tener en cuenta ni resulta aplicable el precepto que define las circunstancias necesarias para incurrir en Mora, como tampoco resulta infringido en modo alguno el principio de derecho de que nadie está obligado á lo imposible;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el procurador Ambrosio L. Pereira en representación de José Gandós y Gálvez, con las costas á cargo del recurrente; y comuníquese á la audiencia de esta ciudad, con devolución del apuntamiento.

Así, por esta sentencia, que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Antonio González de Mendoza.— Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

JOSÉ SEBASTIÁN MORALES CONTRA MANUEL ANTÓN RECIO DE MORALES.

Auto de 18 de Noviembre de 1899.

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por José S. Morales contra el auto dictado por la Audiencia de la Habana en 14 de Febrero de 1898 y sus concordantes de 13 de Agosto y 22 de Octubre de 1897.*

### JUICIO ARBITRAL.

No contrayéndose ninguno de los artículos de la Ley citados por el recurrente á los motivos en que ha de fundarse el recurso de casación; y no citándose tampoco ninguna de las causas de las señaladas en el artículo 1,690 de la Ley

Procesal, en alguna de las cuales ha de fundarse el recurso, según la Orden 92 sobre casación, se hace inadmisibile el interpuesto.

*Resultando:* que José Sebastián Morales en el juicio arbitral con Manuel Antón Recio de Morales, interpuso recurso de casación por infracción de ley contra el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en catorce de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho y sus concordantes de trece de Agosto y veintidos de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, expresando que autorizaban el recurso los artículos cuatrocientos uno, cuatrocientos tres y mil seiscientos ochenta y ocho, caso primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Resultando:* que la referida Sala por considerar llenos los requisitos exigidos por el artículo quinto de la nueva Ley de casación, que el recurso se establecía dentro del término señalado por la misma ley, contra una sentencia susceptible de casación y concurrían las circunstancias requeridas por el artículo séptimo, admitió el recurso;

*Resultando:* que ante este Tribunal Supremo el Fiscal ha impugnado la admisión del recurso, porque al omitir el recurrente en el escrito de interposición la cita de alguno de los números del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dejó de cumplir el tercero de los requisitos del artículo quinto, de la Orden número noventa y dos, y por ello el recurso carece de la tercera de las circunstancias que para que fuese admisible exige el artículo séptimo de la repetida Ley de casación;

*Resultando:* que el Procurador Nicolás Sterling y Varona, representante de Manuel Antón Recio de Morales también ha impugnado la admisión del recurso, fundándose:

*Primero:* en que contra el auto de trece de Agosto de mil ochocientos noventa y siete no se estableció recurso alguno;

*Segundo:* en que el auto de veintidos de Octubre del propio año no fué citado en la súplica del escrito en que se estableció el recurso de casación, y

*Tercero:* en que si bien puede interponerse ese recurso contra los autos que cayendo en un incidente, ponen término al pleito, haciendo imposible su continuación, en el caso actual ni ha habido incidente, ni tal auto ha podido poner término á un pleito terminado ya por sentencia definitiva; por todo lo cual ha pedido se declare que no ha lugar á sustanciar dicho recurso;

*Resultando:* que, previos los trámites legales, se celebró la

vista, en que informaron un representante del Ministerio Fiscal y los respectivos defensores de Morales y Recio de Morales;

*Considerando:* que los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil citados por el representante de José Sebastián Morales para autorizar el recurso, se refieren: el cuatrocientos uno al recurso de súplica contra las sentencias ó autos resolutorios de incidentes que se promuevan en segunda instancia; el cuatrocientos tres á la procedencia del recurso de casación contra las sentencias y los autos que resuelvan los indicados recursos de súplica, y el mil seiscientos ochentiocho declara cuáles son las resoluciones que tienen el concepto de definitivas; sin que ninguno de los mencionados artículos se contraiga á los motivos en que ha de fundarse el recurso de casación;

*Considerando:* que en el escrito en que el Procurador Luis P. Valdés, á nombre de José Sebastián Morales, estableció el recurso de casación, no se cita ninguna causa de las señaladas en el artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en alguna de las cuales según el número tercero del artículo séptimo de la Orden número noventa y dos ha de fundarse el recurso, por lo que al admitirse el interpuesto en este asunto, se han infringido ese artículo séptimo y el once de la propia Orden según el cual, si en el recurso interpuesto no concurriese alguna de las circunstancias expresadas en el artículo séptimo, el Tribunal ante el que se interpusiere deberá denegararlo;

*Considerando:* que la infracción expuesta en el Considerando anterior hace superfluo el examen de los motivos alegados por el representante de Manuel Antón Recio de Morales, puesto que bastando aquella para declarar mal admitido el recurso, no quedan términos hábiles para discurrir sobre si debe ó no sustanciarse; y que no se sustancie es lo solicitado por Recio Morales;

SE DECLARA MAL ADMITIDO el recurso de casación interpuesto por el Procurador Luis P. Valdés, en nombre de José S. Morales contra el auto dictado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en catorce de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho y sus concordantes de trece de Agosto y veintidos de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, sin especial condenación de costas; y comuníquese á dicha Audiencia para los efectos que procedan, con devolución del apuntamiento.

Lo proveyeron y firman los señores Magistrados del margen ante mí de que certifico como Secretario por delegación.—



Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, Armando Riva.

---

COSME BLANCO HERRERA CONTRA OCTAVIO PEIRET.

**Sentencia núm. 6 (20 de Noviembre de 1899).**

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Octavio Peiret contra la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe de esta Ciudad el 4 de Septiembre de 1899.*

### JUICIO DE DESAHUCIO.

Una barbería y peluquería, no tiene el carácter de establecimiento mercantil, pues su verdadera naturaleza está determinada por el ejercicio de una industria personal, que legalmente considerada constituye un arrendamiento de servicios y no un cambio de productos.

No pudiendo establecerse la recusación después de citadas las partes para sentencia, menos puede proceder cuando se encuentra dictada la sentencia.

En la ciudad de la Habana, á veinte de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el juicio de desahucio seguido en el Juzgado Municipal y en el de Primera Instancia del distrito de Guadalupe de esta ciudad por Cosme Blanco Herrera, comerciante, contra Octavio Peiret, barbero, ambos vecinos de esta capital, pendiente ante este Supremo Tribunal en virtud del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el demandado Peiret;

*Resultando:* que en la sentencia dictada el cuatro de Septiembre del corriente año por el indicado Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe aceptó los siguientes Resultados contenidos en la dictada por el Juez Municipal;

“*Resultando:* que en el juicio verbal que se celebró, el actor ratificó su demanda y presentó una copia de la carta que dirigió á Peiret en Mayo último, para que desalojara la accesoria, y la respuesta por escrito del propio Peiret, negándose á abandonar la casa el demandado, consignando el importe del alquiler correspondiente á la mensualidad vencida, estableció la excepción de incompetencia por declinatoria por no corresponder el conocimiento del juicio á este Juzgado, sino al de Primera Instancia, toda vez que en la accesoria de que se trata

tiene una barbería y peluquería en que se dedica á la venta y reventa de arte en pelo, teniendo ese establecimiento, por ese concepto el carácter de mercantil; estableció también la excepción de falta de acción en el demandante porque carece de ella para pretender el desahucio por falta de pago, porque jamás ha faltado á esa obligación pues por costumbre y por ministerio de la ley, el demandante Herrera tenía que hacer el cobro en el domicilio del demandado y si no percibió la mensualidad de Mayo, fué porque no quiso recibirla, á pesar de haberle sido ofrecido en privado y hasta judicialmente, queriendo ampararse en unos días transcurridos por su propia voluntad y su propósito negativo á cobrar para encontrar un fundamento; que por lo que hace al término del contrato, carece también de acción, porque el demandado por convención verbal y siguiendo la costumbre estauída para el arrendamiento de todo local que se destina á establecimiento, no arrendó por meses sino por un año, aunque el precio hubiera de pagarse por mensualidades vencidas y en ese sentido no ha podido vencer un término que está todavía cursando y porque aunque así no fuera y hubiera de estimarse que el contrato se hizo por meses quedó subsistente por tácita reconducción y está vigente dentro de este mes por que transcurrieron los quince días primeros del presente mes sin hacerse el requerimiento en la forma que la Ley determina, ó sea de un modo expreso ó concreto, para que se diera por terminado el arrendamiento sin que tal omisión pueda suplirse, por la carta que en copia se acompaña, puesto que de su texto se ve que no se daba en ella por terminado el arrendamiento, sino que se pedía la casa pura y justamente para reparaciones que es cosa muy distinta, no sólo como hecho si que también por las consecuencias que al derecho entraña, toda vez que si por necesitarse la realización de obras, puede quizás ser procedente un desahucio, tal fundamento no es ninguno de los comprendidos en el artículo mil quinientos sesenta, y la acción pues ha de ejercitarse en el Juzgado de Primera Instancia, según el inciso segundo del artículo mil quinientos sesenta y uno de la Ley procesal;

*Resultando:* que el actor en réplica insistió en su demanda y agregó que no obstante las alegaciones hechas son tan claras las razones en que se funda el desahucio que no necesita hacer nueva manifestación sobre ello que no puede ser considerada la barbería del demandado como un establecimiento mercantil ó fabril y por lo tanto no resulta fundada la excepción de incompetencia; que en cuanto á la falta de pago no habiendo exhibido el demandado el recibo que acredite haberlo efectuado en su

oportunidad, aquélla resulta justificada; que por lo que respecta al vencimiento del contrato de arrendamiento, estando demostrado que este se realizó por meses por ser ese el término por el cual se abonaba las rentas sólo tendrá el Juzgado que examinar para decretar el desahucio por ese fundamento, lo dispuesto en el artículo mil quinientos ochenta y uno del Código Civil, en relación con el mil quinientos sesenta y seis; y que por lo demás el actor ha requerido al demandado para que le entregara la accesoria que ocupa por necesitarla para hacer reparaciones urgentes en ella á virtud de requerimiento que á su vez le ha hecho el Jefe de Sanidad; y el demandado en duplica reprodujo su contestación afirmando que hay contrato verbal de arrendamiento por un año, que no tiene recibo de los alquileres porque Herrera no quiso cobrarlos y que su establecimiento se dedica á la venta y reventa de efectos lícitos, como son obras de arte en pelo y tiene el concepto de mercantil;

*Resultando:* que habiéndose desestimado la excepción de incompetencia alegada por el demandado, por ser el establecimiento de este puramente industrial, se tuvo por interpuesta la apelación que estableció dicho demandado'';

*Resultando:* que personado Peiret en el Juzgado de Primera Instancia del distrito de Guadalupe á consecuencia de la apelación que estableció y le fué admitida contra la sentencia dictada por el Juez Municipal del mismo Distrito, recusó al Juez Felipe de Pelayo y Gowen por amistad íntima con el actor, pasando por ese motivo el conocimiento del asunto al Juez del Distrito de Jesús María, ante quien se celebró en treinta y uno de Agosto último, el acto verbal que dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo Juez de Jesús María en la misma fecha de la celebración del acto verbal, dispuso se diera cuenta al Juez del Distrito del Pilar por haber cesado el motivo por el que se le había pasado á él el conocimiento de este asunto, disponiendo á su vez el del Pilar se diera cuenta al del Cerro y este al de Guadalupe para la resolución correspondiente; fundado el del Cerro en haber cesado en el cargo de Juez del distrito de Guadalupe el recusado Felipe de Pelayo y Gowen y haber tomado posesión de dicho Juzgado Guillermo Chaple y Suárez;

*Resultando:* que notificado Peiret con fecha cuatro de Septiembre del año actual de la providencia del Juez del distrito del Cerro, en esa misma fecha dictó sentencia el Juez del Distrito de Guadalupe declarando sin lugar lo solicitado por el actor de no haberse estimado en la apelación el motivo de desahucio por haber vencido el término del arrendamiento y que



este era por meses; confirmando á la vez la del Juez Municipal que declaró con lugar el desahucio con las costas de la segunda instancia también á cargo del apelante;

*Resultando:* que al día siguiente de dictada esa sentencia presentó Peiret escrito de recusación del nuevo Juez de Primera Instancia del distrito de Guadalupe, que este declaró no había lugar á proveer, por haberse celebrado ya la vista y dictado sentencia en el pleito apelado;

*Resultando:* que el apelante Peiret interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia del Juez de Primera Instancia del distrito de Guadalupe, fundado en los números sexto y séptimo del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil; porque tratándose del desahucio de un establecimiento mercantil no fué Juez competente el municipal, ni podía por la misma razón serlo, en apelación, el de Primera Instancia; y porque recusado por causa legal y en tiempo y forma el Juez que dictó la sentencia recurrida, se le había denegado siendo procedente agregando que oportunamente reclamó la subsanación de la falta de competencia en el Juzgado Municipal y reprodujo la misma petición en la segunda instancia, no habiéndolo hecho respecto á la recusación por haberse cometido el defecto en el Juzgado de Primera Instancia, cuando no era ya posible reclamar contra el mismo;

*Resultando:* que el recurrente ha consignado oportunamente las rentas vencidas y que admitido el recurso, personados ambos litigantes ante este Supremo Tribunal y sustanciado en forma se designó para la vista el día quince del corriente mes, celebrándose con asistencia del abogado de la parte no recurrente;

VISTO, siendo Ponente el Magistrado José M. García Montes,

*Considerando:* en cuanto al primer motivo del recurso, que es competente un Juez Municipal para conocer de la demanda de desahucio de una accesoria situada en su distrito y en donde existe un establecimiento de barbería y peluquería, en atención á que esa clase de establecimientos no tienen el carácter de mercantiles, porque su verdadera naturaleza se encuentra determinada por el desempeño de un oficio ó industria personal por parte del arrendatario, oficio ó industria que legalmente considerado constituye un arrendamiento de servicio y no un cambio de productos; sin que, por otra parte, no habiendo aceptado el demandante que en la referida accesoria existiera establecimiento mercantil alguno, ni ofrecido el demandado prueba res-

pecto á ese extremo, sea posible, por todas esas razones, estimar como fundamento del recurso la incompetencia alegada;

*Considerando:* respecto al segundo motivo del recurso, que no pudiendo hacerse la recusación, en ningún caso, después de citadas las partes para sentencia en la primera instancia ni de comenzada la vista del pleito en la Audiencia, es evidente que menos puede proceder cuando ya se ha dictado sentencia, como sucede en el caso que ha motivado el presente recurso, puesto que el derecho de recusación deja de ser utilizable desde los indicados momentos de citación para sentencia ó comienzo de la vista, y siendo el trámite de sentencia posterior á los referidos momentos, no hay términos hábiles para deducirlo después que han transcurrido;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Octavio Peiret contra la sentencia del Juez de Primera Instancia del distrito de Guadalupe de esta ciudad, con las costas á su cargo; y comuníquese á ese Juzgado, con devolución de las actuaciones, para lo que proceda.

Así, por esta sentencia, que se publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se sacarán y remitirán las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

ALFREDO GONZÁLEZ BENARD, COMO CESIONARIO DE PEDRO EGCHÉGOYEN, CONTRA ENRIQUE ALEXANDER.

Sentencia núm. 2 (22 de Noviembre de 1899.)

*Inhibitoria propuesta á instancias de Enrique Alexander ante el Juzgado de Primera Instancia del Cerro para que se inhibiera á su favor el de Cárdenas, donde se le citaba.*

#### DILIGENCIAS PREPARATORIAS DE LA VIA EJECUTIVA.

Las diligencias preparatorias de la vía ejecutiva no tienen el carácter de juicio, por lo cual está mal formada la competencia con motivo de haber sido citado por el Juez de Cárdenas un vecino de la Habana, para el reconocimiento de una firma: cuestión que debe ventilarse con arreglo al artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En la ciudad de la Habana, á veinte y dos de Noviembre

de mil ochocientos noventa y nueve, en la cuestión de competencia pendiente ante este Tribunal Supremo, por razón de inhibitoria propuesta por el Juez de Primera Instancia del Distrito del Cerro de esta capital al de igual clase de la ciudad de Cárdenas, en las diligencias promovidas ante el último por Alfredo González Benard, abogado y vecino de dicha ciudad de Cárdenas, como cesionario de Pedro Etchegoyen y Bidegaín, para preparar juicio ejecutivo contra Enrique Alexander y Cockerill, comerciante y de esta vecindad;

*Resultando:* que en veinte y siete de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, acudió Alfredo González Benard al Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Cárdenas, presentando testimonio de una escritura otorgada en la misma con fecha veinte de Septiembre del propio año, expresiva de la cesión hecha á su favor por Pedro Beltrán Etchegoyen y Bidegaín de un crédito ascendente á mil setecientos cuarenta y seis pesos, cincuenta y tres centavos que expuso el último tener á cargo de Enrique Alexander, vecino de la Habana, por importe de distintas piezas de maquinaria vendidas á éste por el cedente y por la Sociedad que en Cárdenas giraba bajo la razón de Labourdette, Etchegoyen y Compañía, á la cual había el cedente pertenecido, para el Ingenio Central "Nueva Paz", y por trabajos de fundición para la expresada finca hechos en su taller de dicha ciudad, cuyo crédito objeto de cesión le correspondía en parte por derecho propio y el resto por adjudicación de las propiedades sociales hecha al disolverse la Sociedad antecitada; presentando, asimismo, el promovente González Benard una cuenta firmada por el referido Etchegoyen, por la cual aparece acreditar este de H. Alexander, por distintas piezas de maquinaria vendidas y trabajos de fundición realizados para el Ingenio Central Nueva Paz, varias partidas ascendentes en conjunto á la suma mencionada de mil setecientos cuarenta y seis pesos, cincuenta y tres centavos, con expresión de haberse dichas piezas remitido á aquel ingenio por orden y cuenta de Alexander y figurando algunas entregadas á un empleado de la finca que se nombra, cuya cuenta expuso el producente contener la relación al pormenor del crédito cedido; y alegando hacer uso del derecho que le otorgue el artículo mil cuatrocientos treinta de la Ley Procesal, en relación con los mil ciento doce y mil quinientos veinte y ocho del Código Civil, al intento de preparar la acción ejecutiva contra el expresado Alexander, solicitó la citación de éste para que bajo juramento indecisorio y con vista de la cuenta pormenor acompañada, confesase la certeza de la deuda, citación que pidió se realizara mediante ex-



horto dirigido al Juzgado de la Habana á quien correspondiere;

*Resultando:* que por haber el Juez de Cárdenas accedido á dicha solicitud se practicó la citación en seis de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete por el Juzgado del Cerro, de esta capital, al cual correspondió el asunto en repartimiento y ante el mismo presentó Alexander escrito de fecha quince del citado mes de Noviembre proponiendo por inhibitoria la cuestión de competencia, por estimar que carecía de esta el Juzgado de Cárdenas, teniéndola por el contrario el del Cerro, de esta capital, en atención á desprenderse de los términos de la cédula de citación la naturaleza personal de la acción cuyo ejercicio había iniciado el actor González Benard á que, en la hipótesis de ser cierta la deuda no constaba, ni podía constar, por la falta de documento alguno en que la obligación se hubiese estipulado, la previa designación de la ciudad de Cárdenas, ni de otro punto, como lugar para su pago, ni tampoco había posibilidad de que los contratantes se hubiesen sometido á Juez determinado para el cumplimiento de la supuesta obligación: y á que siendo esta Capital el domicilio del citado, según estaba reconocido por el promovente, no podía dudarse de la competencia de los Juzgados de esta Capital, con arreglo al inciso primero del artículo sesenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por virtud de lo cual, y asegurando no haber hecho uso de la declinatoria, solicitó se requiriese al Juez de Cárdenas para que se inhibiera del conocimiento del asunto y remitiera al Juez del Cerro los autos promovidos; con cuya pretensión se manifestó conforme el Ministerio Fiscal por los propios fundamentos de Alexander y por entender que la confesión judicial constituía en este caso una incidencia previa y parte integrante del juicio en que se debía utilizar, siendo por tanto, Juez competente para decretarla y recibirla el que lo fué para conocer del juicio que se intentaba establecer, según los preceptos del artículo cincuenta y cinco y párrafos segundo y tercero del mil cuatrocientos veinte y siete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el Juzgado, por auto de veinte y seis del mismo mes, se declaró competente para conocer de las aludidas diligencias, y mandó librar oficio inhibitorio al Juez de Cárdenas;

*Resultando:* que recibido por el de Cárdenas el requerimiento del Juez del Cerro, sin que se hubiese verificado todavía, aunque sí dispuesto, la segunda citación de Alexander, é instruido de dicho requerimiento el promovente se opuso á la inhibición interesada, invocando el artículo sesenta y dos regla primera de la Ley de Enjuiciamiento Civil y varias sentencias

del Tribunal Supremo de España, y aduciendo que, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, tiene preferente competencia para conocer del juicio en que se ejerciten acciones personales el Juez del lugar donde la obligación deba cumplirse, cuyo lugar tratándose del pago del precio de una cosa vendida, es el de la entrega de la cosa, á no ser que se hubiera pactado lo contrario según lo dispuesto en el artículo mil quinientos del Código Civil, conforme al cual, además está obligado el comprador á pagar el precio de la venta, si no se hubiese fijado lugar en el contrato, en el tiempo y lugar en que se haga entrega de la cosa vendida, y que esta se entiende entregada en el lugar en que esté situado el establecimiento mercantil que la expende desde el momento que la factura y remite á disposición y por cuenta del comprador, con cuyos fundamentos se mostró conforme el Ministerio Fiscal y, por virtud de ellos estimó, como el actor, que no era de accederse á la inhibición pedida, resolviendo así el Juez requerido en auto de fecha siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, que comunicó en forma al recurrente, con encargo de que á la mayor brevedad manifestase si le dejaba en libertad para continuar actuando ó, en otro caso remitiese los autos respectivos al Tribunal Supremo para la decisión de la competencia; é insistiendo en la inhibitoria el Juez del Cerro, por auto de siete de Enero de mil ochocientos noventa y ocho, y acordando elevar las actuaciones á la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, por entender que á esta, y no al Tribunal Supremo correspondía decidir el conflicto de jurisdicción, á dicha Sala remitieron ambos Jueces sus respectivas actuaciones;

*Resultando:* que sin haberse las partes personado ante dicha Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, oído por esta el Ministerio Fiscal, que pidió se declarase no haber lugar á decidir la competencia y se devolviesen los autos á los Juzgados respectivos, porque no pudiéndose dar el carácter de juicio á las diligencias preparatorias del ejecutivo, no debió en ellos promoverse la cuestión de competencia, conforme á las sentencias del Tribunal Supremo de España de doce de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve y veinte y dos de Abril de mil ochocientos noventa, la Sala en resolución de cinco de Marzo de mil ochocientos noventa y ocho, estimando que, por no tratarse de una cuestión surgida entre Jueces de Primera Instancia y otros especiales ó con los de diverso fuero que desempeñaran sus cargos en la Audiencia de esta Isla ó de Puerto Rico, sino entre dos jueces de Primera Instancia que los desempeñaban en territorio de dos distintas Audiencias territoriales, como eran

la de Matanzas y la de la Habana por razón de la cual no era la Sala el Superior jerárquico común, y sí el Tribunal Supremo, al que correspondía resolver la contienda entablada, falló declarándose incompetente para decidir el conflicto jurisdiccional y disponiendo la remisión de los autos al Tribunal Supremo; habiendo el Magistrado suplente Juan F. O'Farrill formulado voto particular en el sentido de que la Sala era competente para resolver y procedía hacerlo de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal;

*Resultando:* que, elevados los autos á este Tribunal Supremo, se personó ante el mismo Joaquín González Sarraín, á nombre de Enrique Alexander y Cockerill, por escrito presentado en dos de Octubre último no habiendo comparecido la otra parte, y se sustanció el asunto con arreglo á derecho, oyéndose al Ministerio Fiscal que por escrito de fecha ocho del corriente y en su informe oral en el acto de la vista, celebrado el siguiente día veinte, sostuvo la competencia de este Tribunal Supremo para decidir la pugna establecida y pidió se declarase mal planteada y por tanto improcedente la cuestión de competencia con los demás pronunciamientos del caso, en virtud de estar limitada por la ley la proposición de inhibitoria, como la de declaratoria, á aquellos en que haya juicio promovido, lo cual no ocurre en los presentes autos, en que no se ha deducido ni demanda ni acción, y falta la base esencial para resolver la competencia suscitada, obligando á discurrir en supuesto para apreciar la naturaleza de la acción, lo cual es inadmisibile en derecho;

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga,

*Considerando:* que al Tribunal Supremo corresponde según el número quinto del artículo noventa y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decidir las cuestiones de competencia promovidas entre dos Jueces de Primera Instancia que ejerzan su jurisdicción en territorios de distintas Audiencias, por no hallarse tal caso comprendido entre los que señalan los cuatro anteriores números del propio artículo; cuyo precepto en este punto, se ratifica claramente por el número octavo del artículo séptimo de la Orden número cuarenta y uno del Gobierno Militar de la Isla, que atribuye al Tribunal Supremo de nueva creación, constituido en Sala de Justicia, el conocimiento de las cuestiones de competencia que se susciten entre Jueces y Tribunales que no tengan otro superior común;

*Considerando:* que toda cuestión de competencia presupone la existencia de un juicio de que pretendan ó rehusen conocer dos Jueces ó Tribunales distintos y puede ser propuesta, se-



gún el caso y conforme al artículo setenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en forma de inhibitoria ó de declinatoria por quien sea citado al juicio promovido ó en él pueda ser parte;

*Considerando:* que por no haberse deducido demanda en el presente caso, no hay incoado todavía juicio alguno, concretándose las actuaciones iniciadas al objeto único de prepararlo mediante confesión de deuda ante el Juez de Primera Instancia de Cárdenas, después de lo cual podrá el promovente entablar ó no el correspondiente juicio, pero mientras no lo entable, reducida como debe estimarse á los precisos límites del artículo quinientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil la situación procesal que se deriva de la resistencia del citado residente en la Habana, á comparecer ante Juez distinto del de su residencia no ha llegado el caso de plantearse la contienda jurisdiccional, y es por tanto improcedente la empeñada en estos autos;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos mal formada y en consecuencia que no ha lugar á decidir esta cuestión de competencia, siendo de cargo respectivamente de las partes las costas ocasionadas en la misma; devuélvanse las actuaciones á los Juzgados de que proceden con certificación de esta sentencia; y publíquese en la *Gaceta de la Habana*, dentro del término de diez días, y en la colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se libren las necesarias copias.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

IGNACIO VALOR CONTRA EL MARQUÉS DEL REAL SOCORRO Y MELCHOR ARMENTEROS.

Auto de 24 de Noviembre de 1899.

*Recurso de queja establecido por Ignacio Valor contra el auto de la Audiencia de la Habana, dictado en 18 de Octubre de 1899.*

### MEDIDA Y DESLINDE DE LA HACIENDA "SAN JULIAN" Y OTRAS.

Las notificaciones hechas á los procuradores de las partes surten el mismo efecto que las hechas á éstas directamente,

salvo en los casos que la Ley dispone se haga directamente á las partes: y las hechas al sustituto del procurador tienen la misma eficacia que si hubiesen sido hechas al sustituido.

*Resultando:* que en cinco de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, el procurador Nicolás Sterling á nombre de Ignacio Valor, presentó escrito á la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, en los autos de los cuales procede este recurso, desistiendo del de casación que tenía preparado, contra la sentencia dictada en dichos autos, y la Sala en nueve del referido mes de Febrero, le tuvo por separado de su pretensión y firme la sentencia dictada por el Tribunal; habiéndose notificado este auto á los procuradores de las partes en veinte de Mayo del mismo año;

*Resultando:* que en nueve de Octubre último, el Procurador Bernardo Cotoño á nombre del mismo Valor, solicitó de la Sala antes dicha se declarase sin efecto la resolución de nueve de Febrero, negándose esta súplica por entender la Sala que la resolución era firme; y posteriormente, en diez y seis del mismo mes de Octubre, el ya citado Procurador interpuso recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma contra el repetido auto de nueve de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, y la Sala, por el diez y ocho de Octubre próximo pasado, negó la admisión del recurso fundándose en que era firme la resolución contra la cual se establecía;

*Resultando:* que contra este auto denegatorio ha recurrido en queja Ignacio Valor ante este Supremo Tribunal alegando, entre otros motivos, que por referirse al fondo de la cuestión no son de tomarse en cuenta en el estado actual de la misma, que el auto recurrido no era firme, porque emanando su firmeza de la notificación que de él se hizo al Procurador sustituto de Sterling, esta notificación era ineficaz por cuanto al Procurador Sterling desde el momento que se le tuvo por desistido del recurso no tenía personalidad para continuar en la representación que antes ostentaba, conforme á lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo noveno de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y no habiéndose hecho la notificación á la parte interesada, esta estaba en aptitud de recurrir dentro de término contado desde que á su conocimiento llegó la resolución que le afectaba; y sustanciado el recurso en forma se celebró la vista pública el día de ayer con asistencia sólo del recurrente, quien informó sosteniendo la procedencia de la queja por los motivos dichos;

*Considerando:* que fundada la negativa de la Sala sentenciadora, en que era firme el auto contra el cual se interpuso la

casación, la cuestión que es necesario examinar en primer término es si realmente tenía ese carácter la resolución recurrida, pues en este caso, son inútiles, á los efectos del presente recurso, todas las otras alegaciones que contra ella se hicieren;

*Considerando:* que conforme á lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las notificaciones hechas á los Procuradores de las partes, surtirán todos sus efectos legales, como si directamente se hubieran hecho á estas, cualquiera que sea la naturaleza de la resolución notificada, excepto el caso de emplazamiento, citación ó requerimiento que la Ley ordena se hagan al interesado en persona ó tengan por objeto la comparecencia obligatoria del mismo, efectos estos últimos que no producía el auto de nueve de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, teniendo por desistido de un recurso, á instancia suya, al mismo procurador que lo preparó;

*Considerando:* que conforme al precepto del artículo cuatrocientos noventa y uno de la Compilación de Disposiciones orgánicas de la Administración de Justicia en esta Isla, autorizando la sustitución de los procuradores de una misma población en casos de licencia, enfermedad é impedimento, es válida y legítima la notificación hecha al sustituto del procurador tenido por parte en los autos, surtiendo los mismos efectos que si la diligencia se hubiese entendido con éste, sin necesidad de que dicho sustituto ostente poder del litigante;

*Considerando:* que según el artículo trescientos tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los términos judiciales empiezan á contarse desde el siguiente día al en que se hubiese hecho la notificación; que el trescientos doce ordena que transcurridos los términos improrrogables se tendrá por perdido el recurso que se hubiere dejado de utilizar, y el trescientos diez incluye en los de esta clase el concedido para la preparación ó interposición de los recursos de casación y el señalado para este objeto en los artículos mil seiscientos noventa y ocho y mil setecientos cuarenta y siete aplicables al caso de autos, es de diez días; y habiéndose notificado al Procurador representante del recurrente en veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho, el auto de nueve de Febrero anterior, sin que contra él hubiese establecido dentro del término legal recurso alguno, es evidente que quedó firme de derecho por el transcurso de aquel y en tal estado se encontraba en diez y seis de Octubre del corriente año, cuando se interpuso el recurso de casación, denegado por la Audiencia y que es objeto de la presente queja;

*Considerando:* que al negar la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana el referido recurso de casación interpues-



to fuera de término con el fundamento de ser firme la resolución recurrida, obró acertadamente y cumplió lo dispuesto en el artículo oncenno en relación con el número segundo del séptimo de la Orden número noventa y dos del Gobernador Militar de esta Isla;

NO HA LUGAR al recurso de queja establecido por Ignacio Valor contra el auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana de diez y ocho de Octubre próximo pasado denegatorio de los recursos de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma establecidos por aquél contra el auto del nueve de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, dictado en los seguidos por el Marqués del Real Socorro contra Melchor de Armenteros sobre medida y deslinde de la hacienda San Julián y otras: comuníquese á la Audiencia para lo que proceda, con las costas á cargo del recurrente.

Lo proveyeron y firman los señores Magistrados del margen por ante mí de que certifico como Secretario por delegación.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, Armandó Riva.

---

BEATRIZ DE CASTRO Y CHIRINO Y COMPARTES, CONTRA JOSÉ ANGULO DE LEÓN Y CONTRA LA SUCESIÓN DE MARÍA FRANCISCA RAMOS.

Auto de 1º de Diciembre de 1899.

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por José Venancio Angulo contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 11 de Diciembre de 1894.*

### TERCERIA DE DOMINIO.

Para interponer dicho recurso no basta citar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que al mismo se refieren, sino que es preciso citar también el número ó números del 1,691 como precepto legal que lo autorice; y además decir en qué consiste el quebrantamiento, reclamación que se ha hecho para subsanarlo y, caso de no haber sido posible hacer dicha reclamación, expresar los motivos, con arreglo á los números 3.º y 5.º de la Orden 92 sobre casación.

*Resultando:* que en los autos de tercera de dominio promovidos por Beatriz de Castro y Chirino y compartes, en el Juzgado de Primera Instancia de Guanabacoa, á consecuencia

de los ejecutivos seguidos por José Angulo y León como padre de José Venancio Angulo y Gómez contra la sucesión de María Francisco Ramos, interpuso el mencionado José Venancio Angulo y Gómez, directamente, por haber arribado á la mayor edad, recurso de casación por quebrantamiento de forma contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad en once de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro, la cual fué nuevamente notificada á las partes de este juicio á los efectos del artículo ciento ocho de la Orden número noventa y dos sobre casación;

*Resultando:* que admitido ese recurso y personados ante este Supremo Tribunal el ejecutante y los terceristas, la representación de los últimos y el Ministerio fiscal han impugnado la admisión fundados, el Ministerio Fiscal en que en el escrito de interposición se han omitido las citas de algunos de los párrafos del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la enumeración de las reclamaciones practicadas para obtener la subsanación de la falta que se dice cometida ó los motivos por los cuales no hubiere sido posible hacerlo; y la representación de los terceristas, en que al notificarse de nuevo la sentencia á la ejecutante, había transcurrido más de un año desde la última notificación sin haberse instado el curso de los autos, por lo que había caducado la instancia y era firme la sentencia dictada; y en que tampoco se había expresado en el escrito de interposición el precepto legal que autorice el recurso, ni en qué consiste el quebrantamiento de forma, ni qué reclamación se hubiere practicado para obtener su subsanación, ó el motivo porqué no pudo hacerse;

*Resultando:* que señalado el día veinte y nueve de Noviembre del corriente año para la vista de la impugnación se celebró con la intervención del representante del Ministerio fiscal y del abogado de los terceristas;

*Considerando:* que no basta citar en el escrito de interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que al mismo se refieren, sino que es indispensable expresar el número ó números del mil seiscientos noventa y uno como precepto legal que lo autorice y además, en qué consiste el quebrantamiento y qué reclamación se ha practicado para obtener la subsanación de la falta cometida, ó en el caso de que no hubiere sido posible hacer la reclamación, ha de expresarse la imposibilidad y sus motivos, según los preceptos contenidos en los números tercero y quinto del artículo quinto de la Orden número noventa y dos sobre casación;

*Considerando:* que en el escrito de interposición del recurso establecido por José Venancio Angulo y Gómez se han omitido las formalidades referidas en el anterior Considerando, procediendo, por ello, y en virtud de la doble impugnación formulada por el Ministerio Fiscal y el representante de los terceristas, la declaratoria de mal admitido dicho recurso;

*Considerando:* en cuanto al fundamento de la caducidad de la instancia, que no encontrándose comprendido en ninguno de los casos á que se refiere el artículo treinta y cuatro de la Orden número noventa y dos sobre casación, no puede estimarse como motivo para la impugnación previa del recurso, sino que en todo caso correspondería decidirlo en el fallo que en definitiva hubiere de dictarse;

SE DECLARA mal admitido el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por José Venancio Angulo y Gómez contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad en once de Diciembre de mil ochocientos noventa y cuatro, sin especial condenación de costas; y con devolución de las actuaciones remitidas, comuníquese á la referida Audiencia para lo que proceda.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante mí de que certifico como Secretario por delegación.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D., Armando Riva.

---

LUTGARDA Y RAMÓN HERRERA Y VALDÉS CONTRA LA SUCESIÓN DE FRANCISCA VALDÉS LAZO DE LA VEGA.

**Sentencia núm. 6 (1º de Diciembre de 1899.)**

*Recurso de casación por infracción de Ley y de doctrina interpuesto por Lutgarda y Ramón Herrera y Valdés contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 30 de Diciembre de 1899.*

### **JUICIO DE MAYOR CUANTIA SOBRE NULIDAD DE VENTA DE UNA CASA.**

Tratándose de bienes hipotecarios sujetos á los preceptos de la antigua legislación, bastaba que para la tramitación del ejecutivo de que se trata se citara la heredera universal, sin ocuparse de la legataria que para nada figuraba con arreglo á aquellos preceptos.

Para fundar un recurso en infracción de doctrina, no bas-



ta citar un principio cualquiera, sino que es preciso que se citen los reiterados fallos de la jurisprudencia en casos idénticos y se justifique que la doctrina legal está admitida por la jurisprudencia.

En la ciudad de la Habana, á primero de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el juicio de mayor cuantía seguido en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Cerro y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana por el Procurador Zubizarreta, á nombre de Doña Felipa Valdés, viuda de Herrera, hoy difunta, y continuados luego por sus herederos Doña Lutgarda y D. Ramón Herrera y Valdés, vecinos de esta ciudad, ocupada la primera en los quehaceres domésticos y jornalero el segundo; contra la sucesión de Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega, compuesta de D. Federico, D. Ramón y Doña Dolores Venerio y Valdés y Doña Manuela Beraza y Valdés de Ros contra Doña Emilia Valdés de Díaz, todos de este vecindario, empleado el primero, jornalero el segundo y ocupadas en los labores domésticos las tres últimas, á fin de que se declare la nulidad de la venta de la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas; juicio que pende ante este Tribunal Supremo en virtud de recurso de casación que por infracción de ley y doctrina legal interpuso el Procurador Mayorga, á nombre de los ya citados demandantes Doña Lutgarda y D. Ramón Herrera y Valdés, contra la sentencia dictada por la referida Sala de lo Civil en treinta de Diciembre próximo pasado;

*Resultando:* que en la sentencia recurrida se aceptan los resultandos de la de Primera Instancia, entre los cuales se consignan los siguientes:

*“Resultando:* que el Procurador D. Ramón Zubizarreta, fundó su demanda en los hechos siguientes:

*Primero:* Que D. Mauricio Irola por la cláusula diez y siete del testamento cerrado bajo el cual falleció y había otorgado en primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro ante el Escribano de esta ciudad D. Manuel Pimentel, legó por terceras partes á Doña Clara, Doña Jacoba y Doña Felipa Valdés el usufructo de la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas en esta ciudad, en término de que por fallecimiento de una de estas legatarias pasara su derecho á las otras y el todo del usufructo á la última que sobreviviera, cuyo testamento con las diligencias de su apertura que cursaron en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Catedral, Escribanía de D. Francisco de Castro, se incorporó en veinte y

nueve de Octubre de mil ochocientos sesenta y cinco, al protocolo general del Escribano y Notario D. Arturo Galletti;

*Segundo:* Que por fallecimiento de D. Mauricio Irola y de los legatarios D.<sup>a</sup> Clara y D.<sup>a</sup> Jacoba Valdés, ocurridos respectivamente en diez y siete de Septiembre de mil ochocientos sesenta y cinco, catorce de Septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho y veinte y uno de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, adquirió la otra legataria ó sea su mandante Doña Felipa Valdés las dos terceras partes que á aquellas correspondían del usufructo de la citada casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas y habiéndose reunido así en la señora su poderdante esas dos porciones con la tercera restante que directamente le fué mandada, vino á radicar en ella por modo definitivo conforme á la voluntad del testador la pertenencia de todo el usufructo de la misma casa;

*Tercero:* que D. Mauricio Irola adquirió la aludida finca, casa de Villegas número sesenta y cuatro, antes noventa y siete, por escritura de adjudicación con los herederos de Doña Francisca Hernández en el archivo de Gobierno en diez y ocho de Octubre de mil ochocientos cincuenta y seis;

*Cuarto:* Que su mandante ha sido y se halla legítimamente privado del ejercicio de aquel derecho de usufructo en la mencionada casa, á virtud de venta de la misma finca que Doña Emilia Valdés como heredera del indicado Irola y representada por su curador el Ldo. D. José de los Dolores Ponce, hizo sin exceptuar el usufructo del inmueble á favor de Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega por escritura otorgada en veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y nueve ante el Escribano y Notario que fué de esta ciudad D. Agustín Valerio y González;

*Quinto:* Que la vendedora Doña Emilia Valdés, como heredera de D. Mauricio Irola, ni por otro título, jamás fué usufructuaria de la casa de referencia, y en este concepto por más que la enajenó como ejecutada en los autos que le siguió Don Guillermo Delane en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Catedral ante el citado Escribano Valerio y á consecuencia de remate que de la misma finca llevó á cabo en esas actuaciones la compradora Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega ni ella transmitió, ni esta adquirió legítimamente otro derecho que la mera ó nuda propiedad, pero no el usufructo del inmueble;

*Sexto:* que Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega, primero desde la fecha en que le fué otorgada la indicada escritura de venta, hasta el veinte y uno de Agosto de mil ochocien-

tos noventa en que falleció y después hasta el día, sus herederos D. Federico, D. Ramón y Doña Dolores Venerio y Valdés y Doña Manuela Beraza y Valdés, que lo son por el testamento que otorgó en veinte de Agosto de mil ochocientos noventa ante el Notario D. Antonio Mendoza y Aranda, han venido poseyendo, gozando y disfrutando la aludida finca en concepto de dueños absolutos;

*Séptimo:* Que de la propia escritura de venta consta que la compradora Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega tenía conocimiento de los títulos de dominio de la finca vendida, y de esta suerte aparece que vendió de mala fe la adquisición del inmueble siendo conocedora de que la enajenante Doña Emilia Valdés carecía de justo título para transmitirle el usufructo de aquel predio;

*Resultando:* que el Procurador Zubizarreta acompañó con la demanda cuatro certificados parroquiales para acreditar el fallecimiento de Doña Jacoba Valdés ocurrido en veinte y uno de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, de Doña Clara Valdés en catorce de Septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, de D. Mauricio Irola en diez y siete de Septiembre de mil ochocientos setenta y cinco y de Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega en veinte de Agosto de mil ochocientos noventa; y que á instancia del mismo Procurador, se trajeron los documentos que se explican á continuación: copia de la escritura de diez y ocho de Octubre de mil ochocientos cincuenta y seis ante el Escribano de Gobierno D. Francisco de Castro, por la que D. Mauricio Irola de acuerdo con los demás herederos de Doña Francisca Hernández adquirió la casa número noventa y siete de la calle de Villegas: el testamento de D. Mauricio Irola otorgado en primero de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro ante el Escribano D. Manuel Pimentel, en el cual instituyó por sus únicos y universales herederos á los impúberes D. José Federico y Doña Emilia María Homobona Valdés, á quienes nombró por su curador ad-bona y ad-litem al Ldo. José de los Dolores Ponce, disponiendo por la cláusula décimasexta que la casa calle de Villegas número sesenticuatro antes noventisiete y las de la calle de la Lealtad número sesenta y sesentidos las poseyeran de mancomún en calidad de usufructo Doña Clara, Doña Jacoba y Doña Felipa Valdés, para que como hermanas distribuyeran por terceras partes sus alquileres y según fueran falleciendo irían reasumiendo dicho usufructo las que sobrevivieran, de manera que la última poseería el todo del usufructo hasta su muerte, en cuyo caso pasarían las citadas tres casas á sus herederos, con la precisa condición de que los alquileres que gana-



ran las casas los cobraría su segundo albacea D. Juan González, para que de ellos sacara las cargas municipales, los réditos del censo que gravaba la casa de la calle de Villegas, las reparaciones necesarias para su conservación y el líquido producido lo distribuirá fraternalmente entre las tres legatarias, copia de la escritura de veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y nueve, ante el Escribano y Notario público Ldo. D. Agustín Valerio y González, en la que el Ldo. D. José de los Dolores Ponce, como curador ad-bona de la menor Doña Emilia Valdés, vendió en pleno y absoluto dominio á Doña Francisca Valdés y Lazo de la Vega la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas, en virtud de haberla adquirido para ella en pública subasta el Ldo. D. Manuel de Jesús Ponce, á consecuencia del incidente á la testamentaria de D. Mauricio Irola, promovido por D. Guillermo Delane en cobro de pesos, según consta del acta de remate inserta en dicha escritura, y en cuya acta consta que el rematador Ldo. Ponce expresó haber examinado los títulos de dominio de la finca y por estar conforme con ellos, convino en que se omitiera su presentación; copia del testamento que ante el Notario de esta ciudad D. Antonio Mendoza y Aranda otorgó Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega en veinte de Agosto de mil ochocientos noventa, instituyendo por sus únicos y universales herederos á su hijos legítimos D. Federico, D. Ramón y Doña Dolores Venerio y Valdés y á su hija natural Doña Margarita Beraza y Valdés; un certificado del Registro Civil del Juzgado Municipal del Distrito de la Catedral, donde consta que Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega, falleció en esta ciudad el veinte de Agosto de mil ochocientos noventa; y un certificado del Registrador de la Propiedad de esta misma ciudad en que consta que la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas, está inscrita proindiviso á nombre de D. Federico, D. Ramón y Doña Dolores Venerio y Valdés y Doña Manuela Beraza y Valdés como herederos de Doña Francisca Valdés y Lazo de la Vega, según escritura ante D. Antonio Mendoza y Aranda, en veinte y tres de Septiembre de mil ochocientos noventa;

*Resultando:* que conferido traslado de la demanda con emplazamiento á D. Federico, D. Ramón y Doña Dolores Venerio y Valdés, Doña Manuela Beraza y Valdés y Doña Emilia Valdés se personó á nombre y con poder de los tres primeramente nombrados el Procurador D. Juan Martí, el Procurador Juan V. Castillo por Doña Manuela Beraza de Ros y por Doña Emilia Valdés de Díaz, el Procurador D. Tomás J. Ganados, acompañando el procurador V. Castillo un certificado del Registro

Civil del Juzgado Municipal del Distrito de la Catedral, en que aparece que la demandante Doña Felipa Valdés falleció en esta capital el día veinte y uno de Julio del año de mil ochocientos noventa y seis, dejando por sucesión dos hijos nombrados Don Ramón y Doña Lutgarda Herrera y Valdés, por lo que en providencia de trece de Agosto de ese mismo año, se mandó citar á los hijos de Doña Felipa Valdés para que dentro de nueve días se personaran en los autos, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar;

*Resultando:* que el Procurador D. Ramón Zubizarreta se personó en los autos á nombre de Doña Lutgarda y D. Ramón Herrera y Valdés con el poder que éstos le confrieron y certificación expedida por el Escribano D. Juan Hipólito Vergel, en que se inserta el auto en que sus representados fueron declarados herederos abintestato de su madre legítima Doña Felipa Valdés viuda de Herrera, y reprodujo los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda deducida por ésta, notificándola en virtud del fallecimiento de su causante, á fin de que en la sentencia definitiva se comprendan las siguientes resoluciones:

*Primera:* Que se declare la nulidad de la venta de la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas, en esta ciudad, que Doña Emilia Valdés representada por el entonces su curador Ldo. D. José de los Dolores Ponce, realizó á favor de Doña Francisca Valdés y Lazo de la Vega por la escritura de veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y nueve ante el Escribano y Notario que fué de esta ciudad D. Agustín Valerio y González, en cuanto no se excluyó de esa venta el usufructo de la misma finca, así como que ese derecho real perteneció á Doña Felipa, causante de sus representados y ha subsistido de derecho hasta el veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y seis en que falleció la usufructuaria Doña Felipa Valdés, recayendo en sus herederos, desde entonces, el derecho de reclamar lo que por conveniencia del usufructo correspondiera á su causante;

*Segunda:* Que se haga constar en los libros del Registro de la Propiedad en la forma legal correspondiente la existencia del usufructo y su extinción el veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y seis, en que ocurrió el fallecimiento de la usufructuaria Doña Felipa Valdés, ordenándose que en su consecuencia se modifique la inscripción de la escritura de venta de veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y nueve y las posteriores á la misma, cancelándose en cuanto de ellas aparezcan explícita ó implícitamente corresponder á Doña Fran-

cisca Valdés y Lazo de la Vega, á todos ó á cualquiera de sus herederos, hasta el día veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y seis, el usufructo de la referida casa, ó más derecho en ella, que la mera ó nuda propiedad de la misma, sin perjuicio de que se haga constar después con retroacción á la expresada fecha, la extinción del usufructo, si así lo solicitan los interesados;

*Tercero:* Que se condene á los expuestos herederos de Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega á que entreguen á sus representados los frutos ó alquileres que haya producido el inmueble desde el emplazamiento de los demandados hasta el fallecimiento de Doña Felipa Valdés, y les devuelvan los percibidos por su causante la expresada Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega y los que pudo la finca producir desde el día en que esta señora la adquirió hasta el de su fallecimiento; y

*Cuarto:* Que condene á los demandados al íntegro pago de las costas del juicio si se opusieren á esta reclamación;

*Resultando:* que dispuesto en providencia de nueve de Marzo de este año, que los demandados contestaran á la demanda, lo verificó el representante de Doña Emilia Valdés de Díaz, allanándose á ella desde luego, y el Procurador D. Juan Martí pidió que se declarara sin lugar, absolviéndose de la misma, á sus representados con todas las costas á cargo de los demandantes, alegando como hechos de la contestación,

*Primero:* que es cierto el primer hecho de la demanda; pero también lo es que con posterioridad al otorgamiento del testamento de D. Mauricio Irola, este hipotecó la casa Villegas número sesenta y cuatro, por escritura de treinta de Mayo de mil ochocientos sesenta y ocho, ante D. Francisco de Castro, en unión de otra casa, por pesos veinte y un mil cuatrocientos en oro, habiendo sido rematada dicha casa por la causante de sus representados en pesos siete mil y una fracción;

*Segundo:* Admitido el segundo hecho también como cierto, es decir que existía el derecho de acrecer entre las legatarias, pero era en el caso de haber habido á su vez términos hábiles para ello al encontrarse la pretendida herencia de Irola en otras condiciones, ó sea si se hubiese tratado de una herencia líquida;

*Tercero:* acepta el tercer hecho de la demanda;

*Cuarto:* que la casa de referencia fué legalmente rematada en el incidente á la testamentaria de D. Mauricio Irola promovido por el acreedor hipotecario de la misma, quien no llegó á cubrir, ni con mucho, su crédito;

*Quinto:* que el inmueble fué subastado sin condiciones ni



limitación alguna, por lo que no acepta el hecho correlativo de la demanda;

*Sexto:* admitido el sexto hecho de la demanda;

*Séptimo:* que no admite el séptimo hecho de la demanda, pues de lo que tenía conocimiento la señora compradora Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega era que en la testamentaria de Irola existían deudas que pagar, para lo que se procedía á la venta de bienes de la misma, ordenada por Juez competente;

*Octavo:* que en efecto, en la testamentaria de referencia consta que se debían pesos veinte y siete mil á Doña Concepción Garzón; pesos treinta y un mil doscientos, á D. Guillermo Delane; pesos tres mil ochocientos treinta y cinco, cincuenta y cinco centavos, á D. Santiago Gutiérrez de Célis; dos mil al mismo; pesos dos mil veinte y cuatro á Doña Dolores Vega; pesos mil ciento cincuenta al señor Conde de Barreto; pesos trescientos á D. Pascual Rodríguez y otros por liquidar;

*Noveno:* que el pleito en que se remató la casa Villegas número sesenta y cuatro se siguió con la legítima representación de la testamentaria, ó sea el curador de la heredera de Irola por quien se otorgó la escritura de venta;

*Décimo:* que en la testamentaria de Irola no existen bienes para cubrir á los acreedores pues sólo falta por rematar la casa Lealtad sesenta, que se encuentra embargada por un acreedor y la que ha sido tasada en pesos cuatro mil;

*Décimoprimer:* que la testamentaria de Irola se sigue por la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, no habiendo entrado el juicio en el período de división, ni adjudicándose nada á ninguna de las señoras legatarias Doña Clara, Doña Jacoba y Doña Felipa Valdés, de quienes traen causa los actuales actores; y

*Décimosegundo:* que no han sido declaradas nulas, ni en todo ni en parte, las actuaciones á virtud de las que remató la Sra. Valdés Lazo; y que, por el contrario, habiendo promovido demanda en este sentido Doña Felipa Valdés contra D. Guillermo Delane, rematador que fué de otra de las casas usufructuadas, Lealtad sesenta y dos, se separó de la demanda, la cual ni aún fué contestada, juicio iniciado en este mismo Juzgado, Escribanía de D. Antonio Alvarez Insua;

*Resultando:* que el Procurador D. Juan Valdés Castillo, al contestar á la demanda, opuso las excepciones de falta de acción y prescripción pidiendo que en definitiva se declare aquella sin lugar, condenándose á los demandantes al pago de las costas y al abono de los daños y perjuicios ocasionados por la

interposición de su demanda, fundándose para ello en los siguientes hechos:

*Primero:* Reconoce la certeza de los hechos tercero y sexto de la demanda;

*Segundo:* que Doña Felipa Valdés, usufructuaria que aparecía ser de la casa Villegas sesenta y cuatro, no reclamó en tiempo el derecho de usufructo de dicha casa, ni por virtud del remate de la misma llevado á efecto en veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y nueve, según se comprueba con el testimonio de escritura traído á estos autos por dicha señora y aceptado por la representación de los hoy actores;

*Tercero:* que la expresada casa Villegas número sesenta y cuatro fué adquirida por Doña Francisca Valdés y Lazo de la Vega, con buena fe y justo título á virtud de disposición judicial ordenando la subasta de dicha casa para el pago de deudas á consecuencia del juicio seguido por D. Guillermo Delane;

*Cuarto:* que rematado dicho inmueble por la expresada señora Valdés, y exhibido el precio del remate, como consta de dicha escritura, se le transmitieron todas las acciones reales y personales inherentes á dicha finca y, por tanto, el derecho de percibir, como tal dueña en absoluto dominio, los frutos de la misma;

*Quinto:* que el título de dominio que ostentaba la expuesta Doña Francisca Valdés Lazo, no le limitaba en modo alguno sus derechos de dueña;

*Sexto:* que su poderdante fué emplazada en estos autos en veinte y siete de Julio del año próximo pasado, y desde el veinte y uno del propio mes y año, consta que ya había fallecido la expresada Doña Felipa Valdés, siendo por tanto nulo el emplazamiento por haber cesado la personalidad de su Procurador, con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Séptimo:* que desde el veinte y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y nueve en que se remató la citada casa Villegas número sesenta y cuatro, hasta el veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y seis, en que falleció Doña Felipa Valdés sin tener aun noticias del planteamiento de esta demanda su poderdante, han transcurrido más de diez y siete años, en los que han venido disfrutando, tanto ella como condueña y su causante Doña Francisca Valdés, como rematadora, del goce y disfrute de dicha casa, como se reconoce en el hecho sexto de la demanda;

*Octavo:* que su poderdante se ha personado en estos autos tan sólo en cumplimiento al mandato judicial disponiendo que conteste á la demanda;

*Noveno:* que no existiendo derecho alguno de usufructo sobre dicha casa, no sólo por el remate efectuado en mil ochocientos setenta y nueve, sino también por el no uso, es incuestionable que los herederos no tienen derecho á los frutos que reclaman;

*Décimo:* que modificada la súplica del escrito de demanda es temeraria, no sólo la reclamación de frutos desde el emplazamiento de su poderdante, ocurrido con posterioridad al fallecimiento de la reclamante del usufructo Doña Flipa Valdés; sino también el de los percibidos por Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega, desde que esta señora adquirió el inmueble, hasta su fallecimiento, puesto que al rematar el inmueble, lo adquirió como dueña en plena propiedad;

*Décimoprimer:* que sean cuales fueren los derechos de que se consideren asistidos los demandantes, deben reclamarlos de la vendedora Doña Emilia Valdés, pues en todo caso, en cuanto á su cliente y su causante Doña Francisca Valdés, están presentes las acciones que pudieran corresponder á Doña Felipa Valdés, por el usufructo que reclama; y á sus herederos, hoy, por los frutos de dicho inmueble, según textualmente se comunica en la tercera resolución que solicita en la súplica de su escrito de demanda;

*Resultando:* que conferido traslado para réplica al Procurador D. Ramón Zubizarreta, lo contestó pidiendo que en definitiva se resolviera como ha solicitado en la demanda, con las costas á cargo de los demandados opuestos, y fijando concreta y definitivamente como hechos de debate:

*Primero:* que ratifica en todas sus partes y dá por reproducidos los hechos expuestos bajo los números primero al séptimo en el escrito de demanda;

*Segundo:* que niega la certeza de los señalados con los números segundo, tercero, cuarto, noveno, décimo y décimoprimer de la contestación de la Sra. Doña Manuela Beraza de Ros, admitiendo con las salvedades que exprese, los marcados con los números quinto, sexto, séptimo y octavo;

*Tercero:* que admite con las salvedades que también consigna la certeza de los puntos de hecho señalados con los números primero, segundo, tercero, quinto y sexto del escrito de contestación de los Sres. Venerio, debiendo hacer constar que ignora lo que haya de cierto en lo relatado bajo los números octavo y décimo, y niega los que llevan los números cuarto, séptimo y noveno, décimoprimer y décimosegundo;

*Cuarto:* que Doña Felipa Valdés, en unión primeramente con Doña Jacoba del propio apellido, entró en posesión del usu-



fructo de la casa calle de Villegas número sesenta y cuatro, desde que ocurrió el fallecimiento de D. Mauricio Irola en el año de mil ochocientos setenta y cinco y estuvo disfrutando de él conjuntamente con la referida Doña Jacoba, hasta el año de mil ochocientos setenta y ocho y después sola hasta el de mil ochocientos setenta y nueve, en que fué despojada de su derecho por consecuencia del remate de la Sra. Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega; habiendo también disfrutado hasta su fallecimiento del usufructo de la otra casa calle de la Lealtad número sesenta, que entró á poseer conjuntamente con la de Villegas número sesenta y cuatro y pagando las contribuciones y cargas de las tres fincas usufrutuadas;

*Quinto:* que la referida Doña Felipa Valdés, usufructuaria de la expresada casa calle de Villegas número sesenta y cuatro, no fué citada para el juicio promovido por D. Guillermo Delane, acumulado después á la testamentaria de Irola, habiendo sido despojada del usufructo de que se encontraba en posesión sin oír la ni vencerla en el correspondiente juicio;

*Sexto:* que en veinte y uno de Julio de mil ochocientos noventa y seis falleció intestada la promovente de este juicio Doña Felipa Valdés, recayendo su sucesión en sus legítimos hijos Doña Lutgarda y D. Ramón Herrera y Valdés, declarados herederos abintestato de la misma por el señor Juez de Primera Instancia del Distrito de Belén, en auto de catorce de Diciembre del propio año de mil ochocientos noventa y seis, adquiriendo en virtud de esa declaratoria, el derecho de seguir reclamando los frutos del usufructo debidos á su causante;

*Séptimo:* que D. Guillermo Delane, promovente del juicio ejecutivo en que se efectuó el remate de la casa de Villegas número sesenta y cuatro, y en que posteriormente se recibió también el de la casa calle de la Lealtad número sesenta y dos, sujeta del propio modo al usufructo de Doña Felipa Valdés; penetrado de la nulidad de ese juicio para perjudicar á la referida usufructuaria, transigió con ella extrajudicialmente el pleito promovido en este Juzgado del Cerro, por ante D. Antonio Alvarez Insua, sobre nulidad del remate de la referida casa número sesenta y dos de la calle de la Lealtad, indemnizándole de los daños y perjuicios que le habían inferido, razón por la cual la mencionada Doña Felipa se apartó de aquel pleito y ha estimado innecesario dirigir también esta demanda contra el ejecutante Delane, que de antemano, no le había significado su asentimiento á lo que en ella solicitaba;

*Resultando:* que conferido traslado para dúplica á los demandados, lo contestó el Procurador D. Juan Martí, solicitando

do que en definitiva se falle el pleito como tiene pedido en el escrito de contestación á la demanda, á cuyo fin reprodujo los fundamentos de hecho de la propia contestación, agregando que á Doña Felipa Valdés no se le hizo por nadie, ni dentro ni fuera de la testamentaria de D. Mauricio Irola, entrega de la casa legada para que la usufructuara; que en la testamentaria casi no se ha actuado más que para pagar deudas, que eran numerosas y existen por cubrir, y que dicha testamentaria no está terminada;

*Resultando:* que el Procurador D. Tomás J. Granados contestó en dúplica ratificándose en el allanamiento de su representada á la demanda, teniéndose por evacuado aquel trámite á perjuicio de Doña Manuela Beraza, por no haberlo hecho á su debido tiempo;

*Resultando:* que practicada prueba propuesta por demandantes y demandados, excepción hecha de Doña Emilia Valdés de Díaz, heredera instituida por el testador, la cual desde un principio se allanó á la demanda interpuesta, dictó sentencia el Juez de Primera Instancia del Cerro, declarando nula la venta de la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas en esta Ciudad con otros pronunciamientos contra la sucesión demandada de Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega; y que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana revocó ese fallo absolviendo á la sobredicha sucesión y condenando á Doña Emilia Valdés de Díaz, la heredera del testador, al pago de las rentas reclamadas en el pleito establecido, todo sin especial condenación de costas;

*Resultando:* que el Procurador Mayorga, á nombre de la sucesión demandante, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, citando como infringidos:

*Primero:* primera parte: la doctrina legal de que nadie puede ser privado de su derecho sin haber sido oído y vencido en juicio y la jurisprudencia concordante del Supremo, de diez y ocho de Marzo de mil ochocientos sesenta y dos, trece y veinte de Octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro, doce de Noviembre de mil ochocientos sesenta y seis, veinte y siete de Junio de mil ochocientos sesenta y siete. Segunda parte: el principio jurídico de que es nulo lo ejecutado contra lo dispuesto en la ley, y la jurisprudencia concordante del Supremo, de diez de Diciembre de mil ochocientos sesenta y tres;

*Segundo:* la doctrina derivada como supletoria de los artículos ciento treinta y dos y ciento treinta y tres de la Ley Hipotecaria de la Península, de ocho de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno y que constituye hoy el de los artículos

ciento veinte y nueve y ciento treinta y dos de la vigente en esta Isla;

*Tercero:* la doctrina legal derivada de la jurisprudencia del Supremo de España de dos de Octubre de mil ochocientos sesenta y seis, doce de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete; diez y ocho de Junio de mil ochocientos setenta, cinco de Mayo de mil ochocientos setenta y dos y catorce de Noviembre de mil ochocientos setenta y cuatro, conforme á la cual lo juzgado contra persona determinada no perjudica ni aprovecha á otra distinta;

*Cuarto:* la regla de derecho "*qui occasionem damni dat damnum dedirre videtur*," á la cual se ajusta la ley veinte y uno, título treinta y cuatro, Partida séptima; las leyes tercera y diez y nueve, título quince, partida séptima, y la jurisprudencia concordante; la sentencia de veinte y cuatro de Abril de mil ochocientos sesenta y tres y veinte y tres de Febrero de mil ochocientos sesenta y seis, y la regla de derecho "*scinti et permitenti non fit dolus*", que sirve de precedente á la ley veinte y cinco, título treinta y cuatro, partida séptima;

*Quinto:* la doctrina legal que sirvió de precedente al principio jurídico consignado en el artículo quinientos diez del Código Civil vigente;

*Sexto:* las leyes treinta y nueve y cuarenta, título veinte y nueve, partida tercera y la ley nueve, título veinte y tres, partida séptima;

*Séptimo:* la doctrina legal de que extinguido un derecho, cesan las acciones del que lo posea para ejercitarlo, por cuanto estimándose extinguido el derecho de usufructo, se hace responsable á la heredera de las rentas posteriores á la desposesión de la usufructuaria;

*Resultando:* que admitido el recurso por la Sala de lo Civil, fué elevado á este Supremo, en donde, después de personarse en tiempo y forma los recurrentes, y suscitada una cuestión previa, fué ésta desestimada, y después de personado también el representante legal de una de las no recurrentes, se señaló, previos los trámites del caso, para la vista del recurso, la una de la tarde del día diez y ocho del mes próximo pasado, acto que tuvo efecto, informando, por los recurrentes, su abogado director;

Visto, siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez,

*Considerando:* que toda la cuestión debatida en este pleito se reduce á si por no haberse citado á la legataria de usufructo Doña Felipa Valdés, para el juicio ejecutivo entablado por D. Guillermo Delane contra la heredera universal instituida por



D. Mauricio Irola, en testamento otorgado en mil ochocientos sesenta y cuatro, es nula la venta de la casa número sesenta y cuatro de la calle de Villegas en subasta pública judicial dirigida al cumplimiento de una obligación hipotecaria contraída por el propio testador algún tiempo después de otorgada dicha última voluntad en que consta el referido legado;

*Considerando:* que tratándose como se trata, de bienes hipotecados, sujetos á los preceptos de la antigua legislación, la demanda ejecutiva, planteada con anterioridad al período de partición y adjudicación de la herencia de Irola se dirigió solamente contra la heredera universal instituída, representada por su curador *ad bona y ad litem* con cargo discernido, y al no regir aun en esa época la ley Hipotecaria en Cuba ni tener siquiera anotado su derecho de usufructo en el registro correspondiente dicha legataria, no tenía ésta, por no exigirlo las leyes vigentes entonces, que ser citada para el mencionado ejecutivo, siendo bastante que lo fuera la persona que representaba los derechos y obligaciones del testador; y claro es que al rematarse por Doña Francisca Valdés Lazo de la Vega los bienes hipotecados, entregar el precio de los mismos, después de certificarse que sobre ellos no pesaban más cargas que la de la hipoteca perseguida y la de un censo de quinientos pesos; redactarse la escritura pública con todas las formalidades legales y darle posesión de la casa subastada, sin oposición, ni protesta alguna, entró la rematadora en el pleno goce y ejercicio de sus derechos dominicos, que quedaron del todo afianzados, no bien se implantó en esta Isla la Ley Hipotecaria, con la inscripción más tarde en el Registro de la Propiedad del inmueble subastado; por todo lo cual, dentro del derecho, no puede decirse que con tales actos legales se hayan dañado derechos de nadie;

*Considerando:* respecto á las infracciones alegadas, que estableciendo el caso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la casación es procedente cuando el fallo contiene violación, interpretación errónea ó aplicación indebida de leyes ó doctrina legal, aplicables al caso del pleito, es criterio jurídico admitido que, para que una infracción de doctrina pueda estimarse, es necesario que el recurrente no se limite á enunciar como tal un principio cualquiera, sino que cite los reiterados fallos de la jurisprudencia en casos idénticos y no diversos del recurso interpuesto, y que precise que dicha doctrina legal está admitida por la misma jurisprudencia;

*Considerando:* que no habiéndose llenado ese requisito en las doctrinas que se invocan en los números primero, primera

parte, segundo, tercero, quinto y octavo de los alegados, no es procedente estimar los mismos, ya por referirse á casos diversos la jurisprudencia mencionada, la cual ninguna relación tiene con la cuestión debatida, ya por no citarse doctrina alguna, ó, cuando se hace, no se precisa que esté admitida por la jurisprudencia; y menos procede tenerse en cuenta lo expuesto en la segunda parte del número primero, por contraerse lo en él citado á motivos para casación por quebrantamiento de forma, siendo de todo punto impertinente dicha cita para aplicarse á resoluciones de fondo; á lo que se agrega, respecto á la infracción del número tercero, que no habiéndose discutido en este pleito los efectos que un fallo dado en otro ha de producir contra determinada persona, sino la nulidad ó la validez de una venta judicial, es también impertinente citar la doctrina legal de que "lo juzgado contra persona determinada no perjudica ni aprovecha á otro";

*Considerando:* respecto al cuarto motivo, que además de invocarse dos reglas jurídicas y unas leyes que, en rigor, no son aplicables á una cuestión civil, como es la de que se trata, es cosa clara, por otra parte, que no habiéndose reclamado daño alguno en el pleito, ni reconociéndose en la sentencia, no ha podido ésta infringir leyes que no tienen relación alguna con el punto controvertido;

*Considerando:* respecto al sexto y último motivo, que no pueden infringirse por una sentencia leyes que no existen en el Código de las Partidas;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto á nombre de la sucesión de Doña Felipa Valdés, á la que condenamos en las costas.

Así, por esta sentencia, que se comunicará á la Audiencia de la Habana, publicará en el periódico oficial del Gobierno, é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se remitirán las necesarias copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

---

JOSÉ DE ALMAGRO, Á NOMBRE DE ESPERANZA DE ALMAGRO, CONTRA DIEGO NÚÑEZ.

Auto de 2 de Diciembre de 1899.

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto*

*por José Diego Núñez contra la sentencia de la Audiencia de la Habana. (No se expresa la fecha.)*

### JUICIO DE MENOR CUANTIA SOBRE REIVINDICACION DE DOS SOLARES.

Quando ninguna de las partes hubiere solicitado que se reciba el pleito á prueba, no ha podido denegarse diligencia alguna de prueba; y por lo tanto carece de fundamento el recurso.

*Resultando:* que el Ldo. José de Almagro, como apoderado de su hija la Srita. Esperanza de Almagro y Elizaga, estableció en el Juzgado de Primera Instancia de San Antonio de los Baños demanda de menor cuantía contra el Sr. Diego Núñez, deduciendo acción reivindicadora respecto á dos solares y acción personal para indemnización de perjuicios;

*Resultando:* que Núñez negó la demanda, se recibió el pleito á prueba, y, celebrada la comparecencia de las partes, se dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando á Núñez á que dejase libre y expedito el dominio de los dos solares á favor de la actora, á que abonase á ésta por indemnización de perjuicios cuarenta y dos pesos, cuarenta centavos en oro, y al pago de las costas;

*Resultando:* que de la referida sentencia apeló Núñez el cual se personó por sí mismo en la segunda instancia el dos de Junio del corriente año; que el cinco del mismo mes se proveyó por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana que cuando se recibieran los autos, se diese cuenta;

*Resultando:* que recibidos los autos, se proveyó en veinte y cinco del propio Junio, teniéndose por parte á Núñez y mandándose formar el apuntamiento;

*Resultando:* que en diez del siguiente mes el representante de la Srita. Almagro manifestó que las citadas providencias de cinco y veinte y tres de Junio no se habían podido notificar á Núñez, porque éste no se hallaba presente; y pidió se librase carta-orden al Juez de Primera Instancia para que hiciese saber á Núñez que debía concurrir cada tres días á la Secretaría de la Sala para notificarse de las providencias, apercibido de que si dejaba transcurrir diez días sin comparecer, se le tendría por desistido de la apelación; que notificado Núñez y no habiendo comparecido dentro del término señalado, se pidió por la Srita. Almagro se llevase á efecto el apercibimiento, pero la Sala por equidad concedió á Núñez cinco días más para que nombrara representante, habiéndosele notificado también



esa providencia; que en veinte y dos de Agosto se personó el Procurador Bernardo Cotoño á nombre de Núñez, y se le tuvo por parte en providencia de veinte y cuatro del propio mes, en la que además se mandó cumplir lo dispuesto en la de primero del mismo mes;

*Resultando:* que en escrito fecha veinte y ocho del repetido Agosto manifestó el Procurador Cotoño que se le había notificado la providencia del día veinte y cuatro, pero no la del primero de Agosto, ó séase la que dispuso que formado según lo estaba el apuntamiento, pasasen los autos al Magistrado Ponente; y que esa providencia, como la de veinte y tres de Junio, no se había notificado, y pidió que se le notificasen, á lo que en veinte y ocho de Agosto decretó la Sala que se instruyese en la Secretaría;

*Resultando:* que solicitado por la Srita. Almagro se pasasen los autos al Ponente, dispuso la Sala en treinta y uno de Agosto que el Secretario certificara si había transcurrido el término dentro del cual podía promoverse prueba en este juicio, y certificado por el Secretario que había transcurrido ese término, se mandó que la actuación pasase al Ponente, y en diez y ocho de Septiembre se mandó que se llevasen los autos á la vista con citación de las partes, señalándose día para aquella;

*Resultando:* que el Procurador de Núñez interpuso en veinte del dicho Septiembre incidente de previo pronunciamiento para que se declarase nulo lo actuado desde el día en que debió notificarse la providencia del veinte y tres de Junio, reponiéndose el procedimiento al estado que en aquella fecha tenía, á fin de que Núñez pudiera utilizar el derecho concedido en el artículo setecientos seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil; á lo cual se proveyó que no había lugar á admitir el incidente propuesto, por estar ya citadas las partes y señalado día para la vista, en cuyo estado no procedía promoción alguna;

*Resultando:* que contra esa resolución se interpuso por el representante de Núñez recurso de súplica, que se declaró sin lugar por los fundamentos del auto suplicado;

*Resultando:* que celebrada la vista, la Sala dictó sentencia confirmando la apelada;

*Resultando:* que contra la resolución de segunda instancia interpuso el Procurador de Núñez recurso de casación por quebrantamiento de forma, manifestando que este consistía en que ni á Núñez ni á su Procurador se habían notificado las providencias de veinte y tres de Junio y primero de Agosto, y que fundaba el recurso en el caso quinto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que

por no haber utilizado el derecho concedido en el artículo setecientos seis de la misma Ley, había Núñez venido indefenso;

*Resultando:* que el Ministerio Fiscal impugna la admisión del recurso, porque "el precepto del caso quinto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se invoca como fundamento del recurso, es incongruente con este; pues no puede invocar el recurrente ninguna denegación de diligencia de prueba, porque no ha existido dicho trámite en la segunda instancia, en la cual se alega el quebrantamiento";

*Considerando:* que transcurrido el término señalado en el artículo setecientos seis, sin que ninguna de las partes hubiese pedido el recibimiento á prueba, ni, por lo tanto, promovido en ese trámite, no ha podido denegarse diligencia alguna probatoria, que es la falta á que se refiere el caso quinto del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, en tal virtud, la disposición citada como fundamento del recurso no tiene congruencia con éste, que tiende á que se reponga el procedimiento á un estado anterior al de prueba, y así queda incumplido el inciso tercero del artículo quinto de la Orden número noventa y dos del Gobierno Militar de la Isla, puesto que no se expresa el precepto legal que autorice el recurso;

SE DECLARA MAL ADMITIDO el de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Sr. José Diego Núñez, sin especial condenación de costas; y comuníquese á la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con devolución de los autos, rollo y apuntamiento.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante mí, de que certifico como Secretario por delegación.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, P. D. Armando Riva.

---

JUAN POL Y LEAL CONTRA BONIFACIO VALDÉS ALVARIÑO COMO ADMINISTRADOR DEL INTESADO DE JUAN C. NOLAIN.

**Sentencia núm. 7 (7 de Diciembre de 1899).**

*Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto*

*por Juan Pol y Leal contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 12 de Septiembre de 1899.*

### JUICIO DE MAYOR CUANTIA EN COBRO DE PESOS.

El recibimiento á prueba, en los juicios de mayor cuantía, solo puede pedirse por medio de otrosi, en los escritos de réplica y dúplica; y aún cuando la negativa á admitirla en otro trámite, quebrantara la forma del juicio, que no la quebranta, no puede prosperar el recurso de casación, cuando no se reclamó en primera instancia contra esa supuesta falta.

En la ciudad de la Habana, á ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, pendiente ante este Supremo Tribunal, interpuesto por Esteban de la Tejera, Procurador en turno de Juan Pol y Leal, de oficio zapatero y vecino de esta ciudad en el juicio declarativo de mayor cuantía promovido por dicho Pol en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Pilar contra Bonifacio Valdés Alvariño, Procurador del Juzgado de Marianao y vecino de dicho pueblo, como administrador judicial del abintestato de Juan C. Nolaín en cobro de dos mil setecientos pesos en oro y continuado en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad;

*Resultando:* que en la sentencia dictada el doce de Septiembre del año actual por la Sala de lo Civil esta aceptó todos los resultandos de la sentencia del Juez de Primera Instancia del Distrito del Pilar, entre los cuales se hallan los siguientes:

*“Resultando:* que el Procurador D. José Ramón Rivas por lo principal de su escrito de fojas diez y nueve á nombre y en representación de D. Juan Pol y Leal estableció la correspondiente demanda declarativa de mayor cuantía contra el Administrador judicial del abintestato del súbdito americano Mr. Juan Carlos Nolaín en cobro de la cantidad de dos mil setecientos pesos en oro; la que descansó en los siguientes hechos:

*Que* por el año de mil ochocientos setenta y ocho D. Juan Pol conoció á D. Juan Carlos Nolaín con quien estrechó á poco relaciones de amistad íntima; y habiendo ocurrido algún tiempo después los sucesos de la Caja de Ahorros en donde tenía depositada toda su fortuna el expresado Nolaín, quedó este en situación difícilísima; por lo que se vió Pol en la necesidad de facilitarle en repetidos y considerables préstamos sin interés diversas cantidades de dinero unas veces, y algunas hasta zapatos, confiado en la sinceridad y honradez de Nolaín de que no dudó nunca, esperó le reintegrase su deuda según le prometía, tan pronto como recuperase su depósito del citado Banco,



llegando á deberle aquél con tal motivo más de tre mil pesos oro;

*Que* arreglado el asunto de la Caja de Ahorros en lo referente á Nolaín, lo requirió Pol para que, como le tenía ofrecido, le otorgase escritura de hipoteca de cuatro casitas en el Cerro que aquel establecimiento le dió en pago y Nolaín le entregó la escritura ó título de propiedad de ellas para ese fin, habiendo encargado ambos á D. Zacarías Brezmes, agenciase el otorgamiento de la escritura hipotecaria después de haber convenido en fijar el crédito en dos mil setecientos pesos;

*Que* con ocasión del otorgamiento de esta escritura hubo de cometerse una falsedad y ello dió lugar á la formación de una causa criminal, que terminó con la declaración, entre otras, de que D. Juan Pol había obrado sin malicia y no era reo de aquel delito sino por imprudencia, fallo en que coincidieron el Juez de Primera Instancia y la Sala de lo Criminal de la Exma. Audiencia, sin que por consecuencia, en vez de la pena de cadena temporal que en otro caso le había correspondido, se le aplicase otra que un simple arresto;

*Que* fueron base de la defensa de D. Juan Pol su absoluto desconocimiento de la falsedad cometida, por circunstancias que sería prolijo y no es del caso enumerar, y la verdad intrínseca del contrato contenida en dicha escritura, toda vez que era cierta la deuda de dos mil setecientos pesos en oro que trataba de asegurarse con la hipoteca y cierta la obligación y el ánimo de D. Juan Carlos Nolaín de constituir esa garantía;

*Que* sobre tales bases versó la prueba propuesta por Pol y ejecutada en la causa á su instancia;

*Que* el Juez de Primera Instancia del Distrito de la Catedral, que conoció de la causa, apreciando favorablemente dicha prueba, no sólo estimó á Pol en su virtud, reo únicamente de imprudencia temeraria y le condenó á la pena de arresto, sino que de una manera explícita y terminante declaró en el cuarto Considerando de esa sentencia dictada en veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, que aparecía de la causa, que D. Juan C. Nolaín le debía á D. Juan Pol la cantidad constante de la escritura y que en el ánimo de Pol no había entrado la idea de perjudicar á tercero;

*Que* la Exma. Audiencia por su fallo de treinta y uno de Enero de mil ochocientos noventa y uno de acuerdo con el Ministerio Fiscal, confirmó la sentencia del inferior á que se contrae el hecho anterior, aceptando para ello sin modificaciones, los fundamentos de derecho y por lo mismo el cuarto que dejó referido;

*Que* en diez de Septiembre de mil ochocientos noventa y cuatro intentó D. Juan Pol, sin efecto, el correspondiente acto de conciliación demandando al señor Cónsul de los Estados Unidos de Norte América D. Ramón O. Williams, como encargado con arreglo al tratado respectivo y á la vigente Ley de Extranjería de la custodia, conservación y administración de los bienes quedados al fallecimiento de D. Juan Carlos Nolaín, muerto en esta capital en tres de Abril de mil ochocientos setenta y siete, y por tanto en calidad el Sr. Williams de representante de la herencia yacente, para que le pagase la cantidad expresada de dos mil setecientos pesos en oro;

*Que* el señor Cónsul excusó su asistencia al acto como se observa en la certificación que tengo acompañada, y manifestó que devolvería á este Juzgado los bienes de Nolaín, como lo efectuó más tarde; teniéndose en virtud de tal excusa, por intentado el acto sin efecto;

*Que* posteriormente y deseoso su representado de excusar gastos al presente juicio, se acercó al administrador judicial del mismo y le reclamó el pago de los dos mil setecientos pesos, por lo que careciendo de fondos el Administrador y no creyéndose por lo demás autorizado para hacer por sí solo un pago de tal cuantía acudió al Juzgado en instancia que también suscribió Pol, exponiendo los antecedentes del asunto y pidiendo, puesto que no le es dable objetar cosa alguna al crédito que reclama D. Juan Pol, que con audiencia del Ministerio Fiscal y de acuerdo con lo preceptuado en los artículos mil veinte y nueve y mil treinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil se saquen á pública subasta las cuatro casitas que constituyen el caudal de este juicio para pagar á dicho acreedor;

*Que* el Juzgado por providencia de veinte y uno de Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco declaró sin lugar la pretensión del Administrador y pedida por este reposición después de haberse traído la copia certificada de fojas sesenta y tres vuelta á la ochenta y dos de los lugares de la causa en que constan los antecedentes que dejo expuestos, desestimó el recurso por auto de veinte y ocho de Diciembre último, fundado en que si bien el artículo mil treinta de la Ley Procesal facultaba al Administrador del abintestato para proponer la venta de bienes pertenecientes al mismo para el pago de deudas, lógico es suponer que esta tiene que justificarse por medio de documento público lo cual no sucede en este caso, y después de alegar las consideraciones de derecho referentes al caso, concluyó suplicando al Juzgado, se sirviera tenerle por parte á nombre de D. Juan Pol y Leal en virtud del poder obrante en

autos, por establecida la presente demanda, y disponer se sustanciara por los trámites del juicio declarativo de mayor cuantía, se confiera traslado de ella al Administrador judicial Don Antonio R. Quintana en representación del juicio abintestato de D. Juan C. Nolaín, á que pagase á D. Juan Pol y Leal la cantidad de dos mil setecientos pesos en oro, que era en deberle dicho Nolaín con más los intereses legales de la misma desde la interpelación judicial y al pago de las costas la que fué admitida por providencia de veinte y nueve de Abril del pasado año fojas cincuenta vuelta y mandada sustanciar con la referida representación del citado juicio abintestato confiriéndole al efecto traslado de aquella y que se le emplazara para que dentro de nueve días improrrogables compareciera en estos autos personándose en forma, todo lo que se llevó á efecto á fojas cincuenta y una vuelta en cuatro de Mayo del año último, y en cumplimiento de lo dispuesto en providencia de fojas veinte y seis vuelta fué desglosada del juicio de abintestato de Nolaín y unida á estos autos la certificación de varias declaraciones y de la sentencia dictada en la causa seguida contra Pol y otros por falsedad que ocupa los folios del veinte y nueve al cuarenta y nueve inclusive;

*Resultando:* que personado en estos autos fojas cincuenta y dos el Procurador D. José Urquijo á nombre de D. Bonifacio Valdés Alvarino en su carácter de Administrador judicial del abintestato de referencia fué tenido por parte por providencia de cuatro de Junio del año próximo pasado fojas sesenta vuelta y se le previno que dentro de veinte días contestara la demanda, cuya contestación verificó por lo principal de su escrito de fojas sesenta y dos consignando como hechos los siguientes;

*Que* niega el primer hecho de la demanda así como también el segundo en cuanto al particular de que D. Juan C. Nolaín se hubiera nunca prestado á otorgar la escritura hipotecaria por los dos mil setecientos pesos que se le reclamaban en este juicio;

*Que* el tercer hecho de la demanda no lo negaba ni importaba poco al objeto de este juicio;

*Que* el cuarto hecho de la demanda era incierto en cuanto por él se aseguraba la certeza de la deuda reclamada;

*Que* el sexto hecho de la demanda se refería á una ejecutoria y por tanto á lo que de ella aparezca hay que remitirse si bien niega fuera cierto que debiera D. Juan C. Nolaín á D. Juan Pol los dos mil setecientos pesos;

*Que* en cuanto al hecho séptimo de la demanda reproducía el que antecedia;



*Que* era cierto el hecho octavo de la demanda así como también el noveno remitiéndose á lo actuado en los principales de este intestado y á lo que aparecía de la certificación del acto de conciliación y que aparece á fojas cuatro y cinco de este juicio;

*Que* el hecho décimo era cierto, si bien el Administrador judicial manifestó en su escrito de fojas cuarenta y ocho del abintestato del mes de Julio del noventa y cinco, sin expresar el día que D. Juan Pol no le presentó documento justificativo de su crédito;

*Que* es cierto el hecho oncenno de la demanda por lo que existe el precedente en este asunto, de que por este Juzgado no se estimó á pesar del fallo dictado en la causa criminal que D. Juan C. Nolaín le debiera á D. Juan Pol y Leal los dos mil setecientos pesos;

*Que* D. Juan Pol no había presentado ningún documento que justifique ni las entregas particulares por concepto de préstamos, ni los pagos que hiciera por cuenta de D. Juan C. Nolaín ni la liquidación total ni en ninguna forma la conformidad de un supuesto deudor; y exponiendo las consideraciones de Derecho que estimó aplicables al caso, concluyó suplicando se sirviera el Juzgado tenerle por evacuado el trámite de contestación, por negada la demanda por falta de acción del demandante y en su día se fallara declarando sin lugar la demanda é imponiéndole las costas del juicio á D. Juan Pol y Leal por su temeridad y por el otrosí acompaña una copia simple del mismo disponiéndose por providencia fojas setenta y cuatro de tres de Julio del pasado año conferir traslado en réplica al actor por diez días con entrega de la copia simple presentada, cuyo término le fué prorrogado á cinco días más por el proveído de catoree del mismo mes por haberlo así solicitado por su escrito de la foja setenta y seis;

*Resultando:* que la representación del demandante por lo principal de su escrito de la setenta y ocho contestó el trámite de réplica consignando como hechos:

*Que* reproducía los once que consignó en la demanda y añadiendo:

*Que* cuanto sea pertinente de la certificación de lugares y especialmente que distintas personas entre ellas el Escribano D. Zacarías Brezmes, D. Juan González que oyera de labios de Nolaín, que era deudor de su representado en la cantidad de dos mil setecientos pesos oro y que había concertado con él, cuanto expresaba la escritura cuya falsedad se declaró;

*Que* por el Administrador judicial se expresa negar la demanda por desconocer si es ó no cierto el adeudo reclamado,

expuso los fundamentos de Derecho que estimó procedentes y concluyó suplicando: se le tuviera por presentada en tiempo la presente réplica; y por fijados como aparecen en forma definitiva los hechos de este debate: y que en su oportunidad se dictara sentencia en la forma que solicitaba en su demanda y por el otrosí acompañó el reintegro necesario para el dejado de usar en los autos á su instancia, confiriéndosele á la representación del abintestato antes mencionado; y por providencia de veinte y seis del próximo mes el trámite para dúplica, también por diez días, el que habiendo solicitado prórroga de dicho término le fué concedida por cinco días más en siete de Agosto último;

*Resultando:* que la representación del actor por su escrito de diez de Agosto último solicita que en su oportunidad se abra á prueba este juicio para probar los hechos manifestando que no lo interesó en su escrito de réplica por medio de otrosí por haberlo omitido el escribiente, todo lo que venía á subsanar en tiempo y forma, de cuya solicitud y por providencia de trece del corriente se mandó entregar la copia simple á la representación del demandado;

*Resultando:* que el Procurador D. José Urquijo á nombre del Administrador por lo principal de su escrito de fojas ciento diez evacuó el trámite de dúplica consignando como hechos los siguientes:

*Que* reproduce los del escrito de contestación;

*Que* niega todo lo adverso sostenido por la contraparte en su escrito de demanda y réplica y concluyó suplicando se sirviera el Juzgado tenerle por evacuado el trámite de dúplica y en definitiva fallara en la forma que solicitaba en su escrito de contestación ó sea declarando sin lugar la demanda con las costas á cargo del actor, y por el primer otrosí manifiesta que como el actor no ha pedido que se abra á prueba el presente pleito y como al demandante es á quien incumbe justificar su derecho no haciéndolo, se consideraban relevados de toda probanza y por el segundo otrosí acompañó la copia simple del mismo, el que se le tuvo por evacuado por providencia de fojas ciento diez y nueve mandándose entregar la copia de referencia al demandante;

*Resultando:* que el expresado Procurador Urquijo por lo principal de su escrito fojas ciento diez y seis, manifestó que toda vez que el actor no interesó del Juzgado se abriera el juicio á prueba en su oportunidad desde luego estimaba que incumbiéndole á él, la justificación de su derecho se encontraban relevados de toda probanza á tenor de lo dispuesto en el párra-

fo segundo del artículo quinientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que así lo manifestó oportunamente en el escrito de dúplica, y que por consiguiente no cabía en manera alguna que el Juzgado decretara favorablemente la improcedente solicitud de la parte actora, que infringe la disposición de la Ley Procesal que se contrae al recibimiento á prueba en esta clase de juicios, y traer los autos á la vista con citación de las partes para sentencia;

*Resultando:* que por auto de quince de Noviembre último, fojas ciento diez y nueve, se tuvo por evacuado el trámite de dúplica y se declaró no haber lugar á recibir el juicio á prueba;

*Resultando:* que hecho saber al actor, en persona, el auto anterior por haber cesado el Procurador que lo representaba con el fin de que constituyera nueva representación lo verificó á su nombre el Procurador D. José de Zayas Bazán por su escrito de fojas ciento veinte y cinco y pidiendo por el Primer otrosí se cumpla lo dispuesto en el artículo quinientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto manda se exprese por las partes si el pleito se falla sin necesidad de prueba ó recibiendo esta; por el segundo otrosí promovió la pobreza;

*Resultando:* que por providencia fecha dos del actual fojas treinta y tres se mandaron traer los autos á la vista con citación de las partes para dictar sentencia;

*Resultando:* que el Juez de Primera Instancia del Distrito del Pilar dictó sentencia en catorce de Julio de mil ochocientos noventa y ocho declarando sin lugar la demanda declarativa de mayor cuantía establecida por Juan Pol y Leal contra el Administrador del abintestato de Juan C. Nolaín y absolvió de ella al referido Administrador Bonifacio Valdés Alvarino condenando en las costas de las mismas al actor;

*Resultando:* que habiendo apelado el demandante de ese fallo se sustanció el recurso por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad y negado el trámite de instrucción del apuntamiento el apelante por medio del Procurador Esteban de la Tejera que le fué designado en turno evacuó la instrucción conferida y por otrosí de su escrito promovió incidente para reclamar la subsanación de la falta cometida en primera instancia según su manifestación consistente en no haber recibido á prueba el juicio á causa de que el Juez le denegó ese trámite tan sólo porque no lo solicitó al evacuar la réplica, lo que en su concepto constituye motivo de casación por quebrantamiento de forma; fundando su promoción en el artículo ocho-



cientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente;

*Resultando:* que la referida Sala de lo Civil declaró no haber lugar á admitir dicho incidente y celebrada la vista del recurso de apelación dictó sentencia en doce de Septiembre último confirmando la apelada con las costas de ambas instancias á cargo del actor;

*Resultando:* que contra esa sentencia interpuso el demandante por medio de su procurador, recurso de casación por quebrantamiento de forma fundándose en la falta de recibimiento á prueba de este pleito tanto en primera como en segunda instancia y en haber insistido ante el Juez de Primera Instancia para que se le admitiese y pedida á la Sala la subsanación de dicha falta mediante el incidente promovido en el otrosí de su escrito evacuando el trámite de instrucción del apuntamiento, respecto de cuyo incidente declaró el Tribunal sentenciador no haber lugar á admitirlo, y citando el recurrente como precepto legal que autoriza el recurso el número tercero del artículo mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada;

*Resultando:* que admitido dicho recurso por la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, se remitieron los autos á este Supremo Tribunal y previos los trámites correspondientes se celebró la vista en que informaron los abogados de ambas partes;

Visto, Siendo Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo,

*Considerando:* que según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo quinientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el recibimiento á prueba en los juicios declarativos de mayor cuantía se pedirá por las partes en los escritos de réplica y dúplica, por medio de otrosí, fuera de cuyo trámite no autoriza la Ley á las partes personadas á formular semejante pretensión;

*Considerando:* que tanto el Juez de Primera Instancia del Distrito del Pilar, como la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad, al negar al recurrente el recibimiento á prueba fuera de la única oportunidad en que podría solicitarlo con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, lejos de quebrantar la forma del procedimiento, se han ajustado fielmente á ella;

*Considerando:* que aunque esa denegación quebrantara la forma procesal, que no la quebranta, nunca podría convalecer el recurso interpuesto porque el recurrente no reclamó en Primera Instancia la subsanación de esa supuesta falta utilizando al efecto el recurso legal correspondiente;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por Juan Pol y Leal, contra la sentencia dictada en doce de Septiembre último por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, con las costas á cargo del recurrente; con devolución del apuntamiento y autos originales comuníquese la presente por medio de certificación á la Audiencia de la Habana, y publíquese en la *Gaceta* y en la Colección legislativa á cargo de la Secretaría de Justicia é Instrucción Pública, á cuyo efecto librense las oportunas copias.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

JUANA FRANCISCA GARCÍA BARBIN CONTRA JOSÉ M.<sup>a</sup> GARCÍA BARBIN.

Auto de 9 de Diciembre de 1899.

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por José M.<sup>a</sup> García Barbin contra la sentencia de la Audiencia de la Habana de 4 de Octubre de 1899.*

### ALIMENTOS PROVISIONALES.

No citándose en el escrito de interposición del recurso como fundamento párrafo alguno del artículo 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se cumple con el número 3 del artículo 5 de la Orden sobre casación y se hace inadmisibile el recurso.

*Resultando:* que en incidente promovido en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Cerro de esta Capital á consecuencia de las diligencias de depósito de la Srita. Juana Francisca María Josefa García Barbin ésta reclamó de su padre el Sr. José María García Barbin alimentos provisionales, y, sustanciado el incidente, la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana dictó sentencia en cuatro de Octubre último, condenando al demandado á pagar una pensión mensual adelantada de ochenticinco pesos oro á su mencionda hija y á que dentro de tercero día entregue á ésta la cama y ropas de su uso diario, con las costas á cargo del demandado;

*Resultando:* que contra esa sentencia interpuso el último recurso de casación por infracción de ley, alegando que se ha-

bía quebrantado el artículo ciento cuarentiseis del Código Civil;

*Resultando:* que el Fiscal de este Tribunal Supremo impugna la admisión del recurso, porque en el escrito de interposición al omitirse la cita de alguno de los números del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dejó de cumplir el tercero de los requisitos del artículo quinto de la Orden número noventidos del Gobernador Militar de la Isla, y por ello el recurso carece de la tercera de las circunstancias que para la admisión del mismo establece el artículo séptimo de dicha Ley de casación;

*Resultando:* que sustanciada la cuestión previa se celebró la vista el día nueve del corriente en la que informaron el representante del Ministerio Fiscal y los de las otras dos partes;

*Considerando:* que en el expresado escrito no se cita como fundamento párrafo alguno del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y así no se cumplió el tercer requisito de los señalados en el artículo quinto de la enunciada Orden número noventidos, requisito que en el escrito debe llenarse, como lo previene el párrafo tercero del artículo séptimo de la propia Orden;

SE DECLARA MAL ADMITIDO el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Sr. José M. García Barbin, sin especial condenación de costas; y comuníquese á la Sala de lo Civil de la expresada Audiencia, con devolución del apuntamiento.

Lo proveyeron los Magistrados del margen y firman ante mí, de que certifico como Secretario por delegación.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberger.—Ante mí, Armando Riva.

---

EL TUTOR DE LOS MENORES LEZAMA Y RODDA CONTRA EMILIA G. PIANY Y LA SOCIEDAD DE TAPIA EGUILLOR Y C.<sup>ta</sup>

**Auto de 11 de Diciembre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Emilia G. Piany contra el auto de la Audiencia de la Habana de 14 de Octubre de 1899.*

**INCIDENTE SOBRE DESEMBARGO DE LAS RENTAS  
DEL INGENIO "RESOLUCION".**

El auto ordenando un desembargo de rentas en un incidente promovido en un juicio ejecutivo, no tiene el carácter



de sentencia definitiva, por que ni pone término al juicio ni hace imposible su continuación.

*Resultando:* que la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, al resolver el incidente promovido por el tutor de los menores Lezama y Rodda sobre desembargo de rentas del ingenio Resolución, dentro del período de ejecución de sentencia de los ejecutivos continuados por Doña Emilia Gumersinda Piany de Gutiérrez contra la sociedad de Tapia Eguillior y Compañía en liquidación, confirmó, por auto de catorce de Octubre próximo pasado el dictado en cinco de Abril de este año por el Juez de Primera Instancia de Sagua la Grande, auto este último en que se ordenó por dicho Juez el desembargo de las rentas referidas;

*Resultando:* que contra esta resolución del auto apelado el Procurador Tejera en representación de la mencionada señora Piany de Gutiérrez, interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma y por infracción de ley y de doctrina legal, fundado el primero en los casos primero y séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el segundo en los casos primero, segundo y tercero del mil seiscientos noventa y uno de la propia Ley; y la Sala de lo Civil por auto de veinte y ocho del mismo mes de Octubre, declaró no haber lugar á admitir los recursos interpuestos contra dicho auto de catorce de Octubre por no ser este una sentencia definitiva, ni tener fuerza de tal, ni ser susceptible de tal recurso por no afectarse el curso del juicio, impidiendo que este llegue á su fin;

*Resultando:* que manifestado oportunamente por la representación de la Sra. Piany de Gutiérrez su intención de recurrir en queja, estableció en tiempo y forma este recurso en escrito de veinte de Noviembre próximo pasado, y, una vez cumplidos los trámites del caso, se señaló la una de la tarde del día siete del corriente para la vista del recurso, teniendo esta lugar, informando el abogado de la parte recurrente;

*Considerando:* que el recurso de casación sólo procede contra las sentencias definitivas ó contra las que tengan el concepto de tales por recaer en incidentes ó artículos que terminen el juicio completo;

*Considerando:* que tienen el concepto de definitivas, según el número primero del artículo mil seiscientos ochenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las que recayendo sobre un incidente ó artículo pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación; y el auto de catorce de Octubre, por el cual la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana confirmó

el dictado en cinco de Abril de este año por el Juez de Primera Instancia de Sagua la Grande, ordenándose por éste un desembargo de rentas en un incidente promovido á consecuencia de un juicio ejecutivo, si bien pone fin á la cuestión incidental de desembargo, no por ello termina el pleito principal, ni hace imposible su continuación, por cuyo motivo no tiene dicho auto el carácter de sentencia definitiva; pudiendo reproducirse en el juicio correspondiente;

*Considerando:* respecto al artículo mil seiscientos noventa y tres invocado también por el recurrente, que al confirmarse por la Sala de lo Civil el auto ya mencionado del Juez de Sagua, no resolvió con ello punto sustancial alguno no controvertido en el pleito, ni decidido en la sentencia, como tampoco proveyó en contradicción con lo ejecutoriado;

*Considerando:* que, según el artículo veinte y cinco de la Orden de casación número noventa y dos, al desestimarse el recurso de queja, se condenará siempre en costas al recurrente;

SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de queja interpuesto por la representación de la Sra. Piany de Gutiérrez, con las costas, y comuníquese esta resolución, para lo que proceda, á la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana.

Lo proveyeron y firman los señores Magistrados del margen ante mí de que certifico como Secretario por delegación.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, Armando Riva.

---

RAMÓN FEIJÓO Y NÚÑEZ CONTRA FRANCISCO JUARA Y ARRONDO.

**Sentencia núm. 7 (11 de Diciembre de 1899).**

*Recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por Ramón Feijóo y Núñez contra la sentencia dictada por la Audiencia de la Habana en 6 de Septiembre de 1899.*

**JUICIO DECLARATIVO DE MAYOR CUANTIA  
SOBRE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE CONTRATO  
DE ARRENDAMIENTO.**

Fundándose una sentencia en la apreciación de la prueba testifical, única practicada, no ha podido infringir los artículos 1,215 y 1,244 del Código, que se refieren á la procedencia de tal prueba para justificar las obligaciones.

Declarándose en una sentencia que no se ha justificado la existencia de un contrato, no se infringen los artículos 1,254, 1,258 y 1,278 del Código Civil, que se refieren á las condiciones que han de concurrir para el perfeccionamiento de un contrato.

No puede decirse que se ha infringido el artículo 1,248 del Código Civil y su concordante 658 de la Ley Procesal, si no se indican concreta y señaladamente las reglas de la sana crítica á que la Sala haya faltado en la apreciación de la prueba; pues la Sentencia que se cita no determina esas reglas.

No fundándose la sentencia en la inexistencia de documento, sino en la apreciación de prueba testifical, y no demostrándose que se haya verificado con error de derecho, no se ha infringido el artículo 1,248 en los términos que se citan.

No fundándose la prueba en presunciones, tampoco se infringe el artículo 1,249 como pretende el recurrente.

En la ciudad de la Habana, á once de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve en el recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal pendiente ante este Supremo Tribunal, interpuesto por el Procurador Luis P. Valdés, en representación de Ramón Feijóo y Núñez, comerciante y vecino de esta capital, en el juicio declarativo de mayor cuantía sobre otorgamiento de escritura relativa á un contrato de arrendamiento promovido por el Procurador Manuel López Vizoso, á nombre de aquel, en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito del Cerro contra Francisco Juara y Arrondo, propietario, domiciliado también en esta capital y continuado en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad;

*Resultando:* que en la sentencia dictada en seis de Septiembre último por la referida Sala de lo Civil, ésta aceptó todos los Resultandos contenidos en la sentencia del Juez de Primera Instancia del Distrito del Cerro, entre los cuales se hallan los siguientes:

*“Resultando:* “que por su escrito de diez y ocho de Junio del año próximo pasado D. Ramón Feijóo y Núñez estableció la presente demanda por acción personal contra D. Francisco Juara y Arrondo para que le otorgue escritura de arrendamiento de la casa calle de Luz número treinta y tres en el precio y condiciones explicados en los hechos de la demanda, que son los siguientes:

*Primero:* que en el mes de Enero del año próximo pasado tomó en alquiler al demandado la referida casa en precio de sesenta y seis pesos sesenta centavos, pagaderos mensualmente en esta forma, doce centenes y tres en plata amonedada, y así se los ha satisfecho;

*Segundo:* que con posterioridad, teniendo que hacer repa-



raciones en la casa por hallarse en mal estado, convinieron ambos que se hicieran dichas reparaciones, que ya en parte estaban hechas y aún se estaban haciendo, á condición de que en vez de ser el contrato por meses, sería por seis años y que en lugar de ser el alquiler sesenta y seis pesos sesenta centavos, serían sesenta y tres pesos sesenta centavos, ó sean doce centenes;

*Tercero:* que como consecuencia de los gastos de reparación que fueron comenzados en el mes de Abril, se obligó Juara á hacer el contrato de arrendamiento por seis años reduciéndolo á escritura pública y hoy se niega á cumplir la obligación contraída;

*Cuarto:* que convino Juara en no vender la casa en ese período de tiempo y de llevar á efecto la venta por cualquiera circunstancia, á que el comprador respetase el contrato, con cuyo fin se tomaría razón en el Registro de la Propiedad inscribiéndolo en debida forma;

*Quinto:* que al ver las mejoras que se han realizado en la casa se niega á cumplir el contrato;

*Sexto:* que buena prueba de esto es la respuesta dada en el acto de conciliación cuya certificación acompaño. En dicho acto contestó solamente el demandado que negaba la demanda según aparece de dicha certificación;

*Resultando:* que por su escrito de fojas treinta y nueve la representación del demandado contestó la demanda oponiendo la excepción perentoria de falta de acción y derecho y pidiendo que se declarase sin lugar con las costas á cargo del actor fundando su pretensión en los siguientes hechos:

*Primero:* que en primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis el actor tomó en arrendamiento la citada casa de su propiedad calle de Luz número treinta y tres, sin tiempo fijo y determinado, y por el precio mensual de sesenta y seis pesos sesenta centavos, pagaderos el día primero de cada mes vencido, en esta forma: sesenta y tres pesos sesenta centavos en oro, centenes, y tres pesos plata;

*Segundo:* que el inquilino D. Ramón Feijóo presentó como fiador principal pagador de los alquileres convenidos á D. Pedro Concha, vecino de la calzada de Galiano número treinta y tres;

*Tercero:* que es incierto el hecho primero de la demanda en cuanto en él se afirma que el inquilinato á que se refieren los hechos anteriores de esta contestación comenzó en el mes de Enero de mil ochocientos noventa y siete, pues fué en primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis;

*Cuarto:* que D. Ramón Feijóo desde que estuvo en pose-

sión del arrendamiento de la casa Luz número treinta y tres la dedicó al subarriendo de sus habitaciones reservándose él una de ellas para vivir;

*Quinto:* que á fines del mes de Mayo de dicho año de mil ochocientos noventa y siete, Feijóo tenía anunciado en alquiler la sala, comedor y un cuarto de dicha casa por medio de un cartel colocado en la puerta de la misma;

*Sexto:* que por consecuencia de la orden dictada por el señor Gobernador Civil de esta ciudad sobre el cierre de las casas de meretrices de la calle de la Obrapía, Doña Josefa Jiménez y Castro, ama de la que estaba instalada en el número ciento nueve de la expresada calle de la Obrapía, se vió en la necesidad de buscar casa para trasladarse con sus pupilas;

*Séptimo:* que pasando Doña Josefa Jiménez por la casa Luz número treinta y tres y observando el anuncio de inquilinato colocado en la puerta principal entró en ella para inquirir por el dueño de la misma, y como se le informó por una morena que lo era D. Ramón Feijóo y que en esos momentos se encontraba ausente, aquélla dejó recado á Feijóo para que fuera á verla á su casa;

*Octavo:* que Feijóo concurrió á la cita y el día treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y siete pactó el subarriendo de la referida casa Luz treinta y tres, por el precio mensual de ochenta y cinco pesos en oro, recibiendo además de mano de Doña Josefa Jiménez ochenta y cinco pesos en oro también como regalía y ochenta y cinco pesos en oro como fondo ó garantía;

*Noveno:* que la Jiménez por su propia conveniencia comenzó la limpieza de la casa Luz número treinta y tres por medio de lechadas y pinturas, construyó un baño para sus pupilas y un inodoro y para los desagües de éstos, un caño interior con salida á la cloaca, cuyas reparaciones pagó de su propio peculio;

*Décimo:* que Feijóo en la necesidad de dejar desocupada la referida casa para la Jiménez, alquiló el mismo día, treinta de Mayo, la casa Habana ciento cincuenta y nueve, muy cerca de la de Luz número treinta y tres, adonde se trasladaron algunos subarrendatarios de esta última casa y el mismo Feijóo, que ocupa desde entonces una habitación alta en la referida casa Habana ciento cincuenta y nueve;

*Undécimo:* que la casa número treinta y tres en la calle de Luz no necesitaba reparaciones de las llamadas por la Ley necesarias, puesto que precisamente en el mes de Enero de mil ochocientos noventa y seis se gastaron en ella por Juara cuatro-

cientos veinte y cuatro pesos en oro como se comprueba con los recibos acompañados con los números dos, tres y cuatro y licencia municipal que también acompaña con el número cinco;

*Décimosegundo:* que el día seis de Junio de mil ochocientos noventa y siete, terminadas las reparaciones que á la Jiménez le convino hacer en la casa calle de Luz número treinta y tres, se abrió al público como de meretrices con matrícula expedida á favor de Doña María Márquez Pereira;

*Décimotercero:* que es incierto el hecho segundo de la demanda, porque Feijóo no ha hecho obras en la citada casa ni nada pactó con Juara respecto de ellas, ni convino con el mismo la celebración de nuevo contrato de arrendamiento por años;

*Décimocuarto:* que es también incierto el hecho tercero de la demanda porque las reparaciones que se hicieron en la mencionada casa lo fueron por la Jiménez de su propio peculio y por su conveniencia, y no comenzaron en el mes de Abril como se afirma en ese hecho tercero de la demanda, sino en treinta de Mayo hasta el seis de Junio de mil ochocientos noventa y siete;

*Décimoquinto:* que son inciertos también los hechos cuarto y quinto de la demanda, porque Juara jamás se obligó á celebrar contrato alguno de arrendamiento con Feijóo sobre la casa Luz número treinta y tres, por término de seis años, ni convino no enajenarla;

*Décimosexto:* todos los hechos que se refieren á las reparaciones de la casa Luz número treinta y tres y al subarriendo de la misma para meretrices tuvieron lugar sin el consentimiento y sin conocimiento de Juara, y cuando las conoció por consecuencia de la citación y emplazamiento que se le hizo en veinte y ocho de Junio, se apresuró á levantar el acta de protesta que acompaña con el número seis otorgada ante el Notario D. Federico Mora y Valdés, el día primero de Julio de mil ochocientos noventa y siete;

*Décimoséptimo:* el día veinte y siete de Julio de mil ochocientos noventa y siete, notificado Juara por el Exmo. Ayuntamiento de esta ciudad de la imposición de una multa por haber ejecutado obras en la casa Luz número treinta y tres sin licencia; cuya multa pagó según se justificara con los documentos que acompaña con los números siete, ocho, nueve y diez, y este hecho constituye una presunción de la ignorancia en que se encontraba Juara de lo realizado por Feijóo sobre la casa Luz número treinta y tres, porque de lo contrario no habría



infringido las Ordenanzas Municipales cuyos requisitos llenó cuando realizó las obras á que se refieren los documentos número dos, tres, cuatro y cinco;

*Décimooctavo:* que rotas las relaciones de cordialidad entre Feijóo y Juara, por consecuencia de todos los hechos anteriormente relatados y por la interposición de esta injusta demanda, el segundo apoyado en el único contrato vigente entre él y Feijóo, y que se mencionan en los hechos primero y segundo de esta contestación ha establecido demanda de desahucio de la casa Luz número treinta y tres en el Juzgado Municipal del Distrito de la Catedral, fundándola en el vencimiento del término del contrato de arrendamiento verbal celebrado por meses con Feijóo;

*Décimonoveno:* que señalado el acto verbal para el día diez de Julio de mil ochocientos noventa y siete y no habiendo comparecido Feijóo, se le citó por segunda y última vez para el día trece de dicho mes, en cuya fecha compareció y recusó al señor Juez propietario D. Juan José Ariosa;

*Vigésimo:* que pasando el conocimiento del juicio al Juez Municipal suplente D. Miguel A. Noguerras se señaló el día diez y seis del referido mes de Julio para la comparecencia en el incidente de recusación del Juez propietario, en cuyo día Feijóo presentó una certificación facultativa expedida por el Dr. D. Antonio Rodríguez Ecay, y en la cual manifestaba este facultativo que desde la madrugada de ese día venía padeciendo Feijóo un cólico hepático, no siéndole posible salir de su habitación;

*Vigésimoprimer:* que á instancia de Juara se constituyó el Juzgado en la casa de Feijóo, Habana ciento cincuenta y nueve y no encontrándole en ella, á pesar de lo que expresaba la certificación facultativa, se celebró el acto verbal y se declaró sin lugar la recusación del señor Juez Municipal propietario del Distrito de la Catedral, condenando en costas al Sr. Feijóo y al pago de una multa de cien pesetas;

*Vigésimosegundo:* que Feijóo apeló de la sentencia y señalada la comparecencia en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Catedral, para el día seis de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, compareció el expresado Feijóo y recusó al señor Juez de Primera Instancia D. Guillermo Bernal, quien por auto del mismo día declaró no haber lugar á sustanciar la recusación propuesta y confirmó con las costas la sentencia apelada;

*Vigésimotercero:* que devuelto el conocimiento del asunto al Sr. Juez Ariosa, se señaló para la comparecencia del juicio

de desahucio el día once de Agosto, en cuyo acto volvió á recusar á dicho Juez;

*Vigésimocuarto:* que es temeraria la conducta del actor y por esta razón debe ser condenado al pago de las costas de este pleito;

*Resultando:* que con el escrito de contestación se acompañó con el número uno, una copia simple de una carta fechada en primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis, dirigida por D. Pedro Concha á D. Francisco Juara en la que le decía que puede entregar la llave de la casa calle de Luz número treinta y tres á D. Ramón Feijóo y Núñez, de quien se constituye fiador principal pagador en el inquilinato de dicha casa, mediante el alquiler mensual de doce centenes y tres pesos en plata á contar desde esta fecha pagaderos al vencimiento de cada mes, en el concepto de que si entregase la llave antes del día que cumple el mes, lo pagará por completo, tres recibos marcados con los números dos, tres y cuatro, fechados en veinte y uno y veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y cinco, y primero de Enero de mil ochocientos noventa y seis, suscritos por D. Carlos M. Iduate á favor de D. Francisco Juara y Arrondo, por tres partidas ascendentes á cuatrocientos veinte y cuatro pesos en oro, en que fueron ajustadas las obras de albañilería, carpintería y pintura, hechas en esos días en la casa de su propiedad, calle de Luz número treinta y tres, una licencia marcada con el número cinco, expedida en treinta de Diciembre de mil ochocientos noventa y cinco por la Alcaldía Municipal á favor de D. Pedro Iduate y Petit por varias obras en la casa Luz número treinta y tres, un acta notarial marcada con el número seis, otorgada ante el Notario Dr. D. Federico Mora y Valdés en primero de Julio de mil ochocientos noventa y siete, de la que aparece que el actor Don Francisco Juara y Arrondo lo requiere para que haga saber á Feijóo que no son ciertos los hechos de esta demanda, que nunca le participó al dicente, cuál era su obligación con arreglo al artículo quinientos cincuenta y nueve del Código Civil, la necesidad de obras y reparaciones en la casa Luz número treinta y tres; que si ha realizado obras ó mejoras en ella, ha sido sin su consentimiento y por tanto no tendrá jamás respecto de ellas otro derecho que los que les corresponden al usufructuario, según el artículo mil quinientos setenta y tres del citado Código y cuyos derechos no son otros que los que otorga el artículo cuatrocientos ochenta y tres del mismo Código, de poder retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes y sin derecho á indemnización alguna; cuya notifica-

ción no se pudo hacer á Feijóo por no tener su domicilio en la casa Luz número treinta y tres, ni en la de Ancha del Norte número ciento veinte y siete. Y cuatro hojas de papel de pagos de multa municipales marcados con los números siete, ocho, nueve y diez, por valor de cuatro pesos pagados por D. Francisco Juara y Arrondo en veinte y siete de Julio de mil ochocientos noventa y siete por infracción del artículo treinta y tres de las Ordenanzas Municipales;

*Resultando:* que conferido traslado en réplica, lo evacuó el actor á fojas cuarenta y nueve pidiendo que se declarase sin lugar la excepción perentoria de falta de acción alegada por el demandado y se resolviera en definitiva conforme á lo solicitado en el escrito de demanda, fundando dicha réplica en los siguientes hechos:

*Primero:* reproduce los de la demanda modificando el primero en sentido de que el contrato por meses de arrendamiento de la casa Luz treinta y tres dió principio en primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis y no en primero de Enero de mil ochocientos noventa y siete, como equivocadamente se consignó;

*Segundo:* que reconoce los hechos del primero al octavo de la contestación en cuanto se refieren al primitivo contrato de arrendamiento que ha sido novado, no siendo cierto que Feijóo haya percibido regalía por el subarriendo á Doña Josefa Jiménez;

*Tercero:* que las mejoras hechas en dicha casa, todas necesarias, las abonó Doña Josefa Jiménez, inquilina de la misma, quedando á beneficio de Feijóo por haber sido condición del subarrendamiento, con lo cual estuvo conforme el Sr. Juara;

*Cuarto:* niega los hechos noveno al décimosexto de la contestación;

*Quinto:* que es incierto el hecho décimo séptimo de la misma, pues Juara no sólo tuvo conocimiento de las obras realizadas en la casa Luz treinta y tres, sino que se obligó á sacar por su cuenta la licencia del Ayuntamiento y no lo hizo en su oportunidad;

*Sexto:* que niega el hecho décimo octavo de la contestación, pues el aumento de alquileres que adquirieron las casas sitas en los barrios designados últimamente á la prostitución, fué sin duda lo que determinó á Juara elevar á escritura pública el contrato de arrendamiento por seis años en las condiciones fijadas en la demanda á partir del primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis y establecer contra Feijóo la demanda de desahucio de la casa Luz treinta y tres por vencimiento



de un plazo que ya no regía para el arrendamiento de la misma;

*Séptimo:* que los hechos décimonoveno al vigésimotercero, de ser ciertos, lo que demuestran es la mala fe de Juara, pretendiendo por los trámites sencillos de desahucio el eludir el cumplimiento del contrato convenido con Feijóo; y

*Octavo:* que niega el último hecho de la contestación, por cuanto la temeridad existe, por parte del demandado;

*Resultando:* que conferido traslado en dúplica, lo evacuó el demandado pidiendo que, en definitiva, se falle el pleito como lo tiene solicitado en el escrito de contestación, aduciendo los siguientes hechos:

*Primero:* reproduce todos los del escrito de contestación, sin modificaciones de ningún género;

*Segundo:* que el juicio de desahucio á que se refieren los hechos diez y ocho al veinte y tres de la contestación fué declarado con lugar por el señor Juez Municipal de la Catedral, y la sentencia dictada ha sido confirmada por el de Primera Instancia del expresado Distrito, y por virtud de la cual se ha condenado á D. Ramón Feijóo y Núñez al desalojo de la casa Luz número treinta y tres;

*Tercero:* que niega todos los hechos de la demanda con excepción del primero, que es cierto, con la modificación de que el contrato de arrendamiento á que se refiere comenzó en primero de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis, y no en primero de Enero siguiente, como afirmaba el actor, y cuya modificación ha aceptado en el primero de la réplica; y

*Cuarto:* que niega todos los hechos de la réplica, en cuanto se refieren al nuevo contrato de arrendamiento de la casa número treinta y tres de la calle de Luz y reparaciones necesarias de la misma;

*Resultando:* que abierto el juicio á prueba por conformidad de las partes, fué declarada pertinente la propuesta por las mismas dentro del primer período, la cual se practicó dentro del segundo;

*Resultando:* que el actor propuso prueba testifical en cuya virtud declarar á fojas ciento tres y ciento seis los testigos D. Julián Viñas y Saint Just y D. José Brito Ravelo á tenor de las primeras cuatro preguntas del interrogatorio de fojas ciento uno, diciendo que no le comprendían las generales de la ley: que en primera decena de Mayo último de mil ochocientos noventa y siete hallándose los declarantes en el zaguán de la casa Luz treinta y tres, presenciaron una conversación entre D. Francisco Juara y D. Ramón Feijóo en la que este

expuso á aquel las obras ó reparaciones que era necesario hacer en dicha casa para poder alquilarla en mejores condiciones agregando el testigo Viña que el Sr. Juara asentía en ello: que como consecuencia de dicha conversaci3n, los expresados señores Juara y Feij3o convinieron en que 3ste realizara las reparaciones necesarias comprometi3ndose Juara á otorgarle contrato de arrendamiento por seis a3os y precio de sesenta y tres pesos sesenta centavos oro mensuales: que realizado dicho convenio de arrendamiento, dijo Feij3o á Juara que el contrato hab3a de extenderse en escritura p3blica, á lo que asintió Juara previniendo que hab3a de ser con fiador y que si D. Pedro Concha, que lo era en la actualidad, aceptaba serlo tambi3n en el contrato ó escritura, lo ver3a con gusto;

*Resultando:* que examinado seguidamente el testigo Viñas al tenor de las preguntas que le resultan en el interrogatorio de fojas ciento veinte y tres, dijo, que se encontraba en la referida casa en la primera decena de Mayo de mil ochocientos noventa y siete con objeto de alquilar una habitaci3n; que no es amigo íntimo de Feij3o y que 3ste le escribi3 una carta á los pocos d3as de sucedido lo relatado, con objeto de ver si recordaba lo que se hab3a hablado entre 3l y Juara y que ha venido á declarar á este juicio porque así se lo avis3 Feij3o en el caf3 de Ambos Mundos; que la hora y el d3a que se encontr3 en la casa Luz treinta y tres ser3a de once á doce y en la primera quincena del mes de Mayo; que el declarante lleg3 despu3s que Juara, y tanto 3ste como Feij3o y un se3or de barba blanca se hallaban en el zaguán, cuando lleg3 el declarante el 3ltimo conversaba con Feij3o sobre alquileres de cuartos, encontrándose todos de pie; que no recuerda que hubiese otras personas presentes, y que el declarante lleg3 el 3ltimo; que fij3 tanto la atenci3n en los detalles de la conversaci3n entre Juara y Feij3o porque en un círculo tan pequeño no tiene nada de particular que suceda; que no conoce más que de aquel d3a á Juara, cuyo nombre le oy3 decir á Feij3o, y que cuando 3ste le escribi3 la carta le habl3 de Juara; y por 3ltimo que no puede precisar la fecha en que hab3a de comenzar el contrato que celebraren Juara y Feij3o;

*Resultando:* que repreguntado Brito, al tenor de las mismas preguntas contest3: que se hallaba en la casa Luz treinta y tres en la primera decena del mes de Mayo, porque pasando por allá vi3 que se alquilaban cuartos, entr3 y vi3 á Feij3o; al poco rato entr3 Viñas y despu3s Juara; que no es amigo íntimo de Feij3o, quien le escribi3 una carta á su casa, cuyas se3aas le hab3a preguntado para que viniese á declarar á este jui-

cio; que se encontró en la casa Luz treinta y tres como al medio día sin poder precisar la fecha, en la primera quincena de Mayo; que Feijóo y el declarante llegaron antes que Juara; que el primero hablaba con el último, y de ahí vino el contrato, encontrándose todos de pie en el zaguán; que no había más personas que las indicadas y llegaron en el orden que queda explicado; que puso tanta atención á lo que hablaban Juara y Feijóo porque el declarante precisamente iba á tomar una habitación y esperó, como más importante para Feijóo; el que conoció en aquel momento á Juara porque del particular de que se trataba pudo enterarse de que era el dueño de la casa y por último que no puede precisar la fecha en que había de comenzar el contrato entre Juara y Feijóo;

*Resultando:* que como parte de prueba del actor declaró el testigo D. Pedro Concha á fojas ciento nueve, á tenor de la primera y la quinta preguntas del interrogatorio de fojas ciento uno, diciendo que no le comprenden las generales de la ley y que es cierto que á mediados del mes de Mayo de mil ochocientos noventa y siete recibió la visita de D. Francisco Juara y Arrondo, el que le preguntó si estaba dispuesto á garantizar como fiador á D. Ramón Feijóo en un contrato que tenía convenido con el mismo para arrendamiento de la casa Luz treinta y tres por el término de seis años y alquiler de sesenta y tres pesos, sesenta centavos en oro; y contestando á las preguntas que le convienen del interrogatorio de fojas ciento veinte y tres presentado por el demandado, dijo, que es cierto que el que declara fué fiador de la casa Luz número treinta y tres, que tenía en alquiler Feijóo por meses y precio mensual de sesenta y tres pesos, sesenta centavos en oro y tres pesos plata; que en el primer contrato salió fiador en carta por meses, y que posteriormente lo visitó Juara para que le sirviera de fiador en un contrato de arrendamiento y que contestó que tenía que ver al inquilino y que quedaron solamente por meses; que el Sr. Juara lo visitó al medio día; que después de haberlo demandado no es amigo de Feijóo y por lo mismo no ha sido fiador; que no recuerda en qué lugar de la fonda que posee el que declara habló con D. Francisco Juara ni si había otras personas presentes, ni quiénes eran éstas; que es cierto que Juara demandó al que declara en el Juzgado Municipal del distrito de Guadalupe para que le abonara como fiador de Feijóo el mes de alquiler de la casa Luz treinta y tres, vencido en primero de Octubre de mil ochocientos noventa y siete, cuyo mes de alquiler no había satisfecho Feijóo; que concurrió al citado juicio acompañado de Feijóo, quien habló en su nombre, y se allanó á la deman-



da, pagando la suma reclamada y pidiendo la devolución de la carta de fianza por haber terminado su obligación por el desahucio que se le estableció á Feijóo; y que el declarante no tiene relaciones de intereses con Feijóo y por tanto todos los servicios que le ha prestado siempre sirviéndole de fiador ha sido por pura amistad;

*Resultando:* que como más prueba del actor declararon á fojas ciento diez y nueve y ciento veinte vuelta respectivamente los testigos D. Félix García Méndez, á tenor de la primera y la sexta preguntas del interrogatorio de fojas ciento una, diciendo que no le comprendían las generales de la Ley; y que es cierto que hallándose los declarantes almorzando en la fonda calzada de Galiano número treinta y tres á mediados de Mayo, oyó preguntar á D. Pedro Concha si estaba dispuesto á garantizar como fiador á D. Ramón Feijóo en un contrato de arrendamiento de la casa Luz treinta y tres convenido por seis años y precio de sesenta y tres pesos, sesenta centavos oro mensuales, si bien el testigo Torres dice que no hablaron de pesos, sino de centenes, doce. Y repreguntado, al tenor de las preguntas que le conciernen en el interrogatorio del demandado contestó el testigo García que se fijó en la conversación sostenida entre Juara y D. Pedro Concha porque fué larga y le llamó la atención porque tiene una configuración algo extraña: que esto fué en el mes de Mayo sin poder precisar el día pero que pasaba de las seis de la tarde, mejor dicho no sabía la hora, que estaban junto á la carpeta en la sala y le contestó que estaba dispuesto á garantizar el contrato; que ha averiguado después por la conversación que tuvieron que el que hablaba con el Sr. Concha se llamaba D. Francisco Juara y que lo conocería si se le presentare, y supone que Feijóo supo esto y lo citó para declarar y que es cierto que no puede precisar alguna otra cosa de lo que hablaron Juara y Concha, á excepción de las palabras "contrato de arrendamiento de la casa Luz número treinta y tres por seis años y precio de sesenta y tres pesos sesenta centavos oro mensuales". Y el testigo Torres contestando á las mismas preguntas dijo: que se fijó en la conversación sostenida entre Juara y Concha porque estaba almorzando frente á la carpeta, que sería hace cinco ó seis meses: que no recuerda el día, que la hora más de las diez y media, que sucedía la conversación al lado de la carpeta en la Sala, que el Sr. Concha dijo á Juara que tenía que ver á Feijóo: que allí supo cómo se llamaba Juara, que lo conocía porque le vendía tabacos hace tiempo, que no sabe en la forma que se lo comunicaría pero que lo vió en el local en una mesa; y por último que es cierto

que no puede precisar alguna otra cosa de las que hablaron Juara y Concha á excepción de las palabras: "contrato de arrendamiento de la casa Luz número treinta y tres por seis años y precio de sesenta y tres pesos sesenta centavos oro mensuales;

*Resultando:* que el demandado promovió prueba testifical y documental, apareciendo de la primera que Doña Josefa Jiménez contestando á fojas ciento treinta y tres vuelta, al tenor de las preguntas que le conciernen en el interrogatorio de la ciento treinta y dos, dijo: que no le comprenden las generales de la ley y que es cierto que tuvo establecida una casa de prostitutas en la calle de Obrapia número ciento nueve hasta fines de Mayo del año último y hasta que por virtud de la orden del señor Gobernador Civil de esta ciudad tuvieron que cerrarse las casas de la mencionada calle: que también lo es que buscando casa el veinte y cinco de dicho mes para trasladar las prostitutas observó que la casa Luz treinta y tres tenía un papel á la puerta anunciando en alquiler la sala, comedor y un cuarto: que por consecuencia de dicho anuncio entró en ella para inquirir por el dueño de la misma contestándole una morena que lo era D. Ramón Feijóo que en esos momentos se encontraba fuera: que le dejó recado para que se viera con ella en Obrapia ciento nueve para tratar del alquiler de la casa, á cuya cita concurrió Feijóo el día siguiente, cerrando el convenio sobre subarrendamiento de la casa Luz treinta y tres el día treinta del mismo mes de Mayo por el precio de ochenta y cinco pesos en oro mensuales, recibiendo Feijóo una suma igual como fondo ó garantía, y ochenta y cinco pesos más por la concesión del subarriendo: que Feijóo le pidió unos días para desocupar dicha casa de los distintos subarrendatarios que tenía en ella, alquilando entonces Feijóo la de Habana número ciento cincuenta y nueve, á donde se trasladaron algunos de aquéllos: que la declarante se ocupó de las lechadas y pinturas de la casa Luz treinta y tres abriéndola al servicio público el día seis de Junio y pagando aquéllos de su peculio: que no viéndose garantida la declarante en el subarriendo de la casa, le manifestó á Feijóo, que quería ver al dueño, á lo que se negó siempre aquél, no dando nunca las señas de su domicilio, ni su nombre: que para el exclusivo beneficio de la casa de prostitutas que establecía en Luz treinta y tres, hizo un caño de desagüe á la cloaca, un baño para las pupilas, un inodoro y el arreglo de la cocina, todo lo que pagó ella de su propio peculio: que nunca dijo á Feijóo, ni convino con él, que esas obras habían de quedar á beneficio del mismo para que las cobrara al

dueño de la casa: que todo lo que se hacía en ella fué sin el consentimiento del dueño, con quien nunca habló la declarante, ni vió en la casa mientras se hacían las obras, ni solo ni acompañado de Feijóo, y que en dicha casa existía un sumidero para las aguas sucias y llovedizas, y que al hacer un caño de desagüe á la cloaca, lo hizo para su mayor comodidad y para evitarse la limpieza que habría sido frecuente por consecuencia del uso diario que iba á hacer del baño que se propuso construir para sus pupilas;

*Resultando:* como más prueba del demandado, que á fojas ciento treinta y cuatro vuelta declaró el testigo D. Carlos M. Iduate, al tenor de las preguntas que le conciernen de dicho interrogatorio de fojas ciento treinta y dos, diciendo, que conoce la casa Luz treinta y tres por haber realizado obras en ella en Enero de mil ochocientos noventa y seis las que la dejaron en perfecto estado de ser habitada: que cobró de D. Francisco Juara el valor de todas esas obras ascendentes á cuatrocientos veinte y cuatro pesos en oro otorgando los recibos que se acompañaron con la demanda con los números dos, tres y cuatro de lo que queda hecho mérito, cuyos recibos, puéstoles de manifiesto, los reconoció como suyos: que para realizar las obras á que se refieren esos recibos, solicitó del Exmo. Ayuntamiento la licencia que también se acompañó con la demanda con el número cinco de que también queda hecho mérito, la que puéstole de manifiesto, reconoció como legítima; y que las obras que realizó en dicha casa fueron coger todos los remiendos y desconchados, remendar los pisos, recorrer todas las puertas y engoznar algunas, poniendo nuevo el cielo raso de la sala y dar lechada al del comedor y zaguán, componer los cuartos del traspatio, dar dos manos de pintura á treinta y una puertas, dos persianas y catorce rejas, pintar al temple la fachada de la calle, componer el fogón, coger todas las goteras, poner los herrajes que faltasen y dar lechadas en general;

*Resultando:* que como más prueba del demandado declaró á fojas ciento treinta y cinco vuelta el testigo D. Felipe Sotolongo á tenor de las preguntas que le resultan en el repetido interrogatorio diciendo que en treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y siete alquiló á D. Ramón Feijóo la casa Habana número ciento cincuenta y nueve en siete centenes mensuales, la que tiene Feijóo dedicada á subarriendo de habitaciones; y que éste, al alquilarla, expresó que necesitaba la llave con urgencia, porque viviendo en Luz número treinta y tres, tenía que trasladar á la de Habana ciento cincuenta y nueve



los subarriendos de aquélla que había alquilado á unas prostitutas realizando un buen negocio;

*Resultando:* que como más prueba del demandado aparece de la diligencia de fojas ciento treinta y siete vuelta, que el Escribano auxiliar L. Ortega se constituyó en siete de Diciembre último en la casa Luz treinta y tres, morada de Doña Josefa Jiménez, la que exhibió once recibos expedidos en distintas fechas de los meses de Junio y Julio de mil ochocientos noventa y siete, á favor de diferentes personas por valor de trescientos setentisiete pesos cuarenta y tres centavos oro y plata por materiales y mano de obra, expresando que eran para la casa Luz número treinta y tres;

*Resultando:* que como más prueba del demandado, se ha traído á los autos fojas ciento cuarenta y cinco una certificación del Secretario del Juzgado Municipal del Distrito de la Catedral de la que en sustancia aparece que en seis de Junio del año próximo pasado D. Francisco Juara y Arrondo estableció demanda de desahucio á D. Ramón Feijóo y Núñez, para el desalojo de la casa número treinta y tres de la calle de Luz por haber cesado el arrendamiento: que en la comparecencia Feijóo recusó al Juez Ldo. Juan José Ariosa y Juliá pasando el conocimiento al Juez Municipal Suplente, el que con fecha diez y seis de Julio se constituyó en la morada de Feijóo para celebrar el acto de comparecencia, por haberse presentado una certificación de estar enfermo dicho demandado, y no encontrándolo en ella, se declaró sin lugar la recusación condenando á Feijóo en las costas y cien pesetas de multa: que Feijóo apeló de esta resolución y se elevaron los autos al Juzgado de Primera Instancia de dicho Distrito, cuyo Juez fué recusado también, y previos los trámites legales, declaró no haber lugar á sustanciar la recusación y confirmó el auto apelado imponiéndole las costas al demandado: que devueltos los autos al señor Juez recusado, Feijóo lo recusó de nuevo, cuyo recurso fué declarado sin lugar: que sustanciado el juicio de desahucio, se dictó sentencia declarando con lugar la demanda, de la cual apeló Feijóo y previos los trámites legales, el señor Juez de Primera Instancia de la Catedral, con fecha quince de Septiembre del año próximo pasado, confirmó la sentencia apelada con las costas á cargo del apelante: que devueltos los autos al Juzgado Municipal se presentó una instancia suerita por el actor D. Francisco Juara y por la inquilina de la calle de Luz treinta y tres, en la que la última expresa que ha entregado la llave de la casa al primero, dándose éste por recibido. Y en la misma certificación aparece copiada una diligencia en la que

D. Pedro Concha y Blanco, en el referido juicio, reconoció como cierta y como suya la firma de la carta original de fianza cuya copia se ha acompañado con el escrito de contestación de la presente demanda, con el número uno y obra á fojas veinte y cuatro de estos autos;

*Resultando:* que como más prueba del actor se ha traído á estos autos á fojas ciento cincuenta y tres vuelto una certificación del Secretario del Juzgado Municipal del Distrito de Guadalupe, de la que aparece que en trece de Julio del año próximo pasado D. Ramón Feijóo y Núñez demandó á D. Miguel A. Nogueras en cobro de diez pesos sesenta centavos y en doce de Agosto se le tuvo por desistido á su instancia de la celebración del juicio. Y también aparece que en veinte y siete de Octubre del mismo año D. Francisco Juara y Arrondo demandó á D. Pedro Concha como fiador, principal pagador, de D. Ramón Feijóo y Núñez por la suma de sesenta y tres pesos sesenta centavos en oro y tres pesos en plata importe de un mes de alquiler de la casa calle de Luz número treinta y tres, vencido el primero del referido mes'';

*Resultando:* que el Juez de Primera Instancia del Distrito del Cerro dictó sentencia declarando con lugar la demanda;

*Resultando:* que habiendo apelado el demandado de dicha resolución la Sala de lo Civil de la Audiencia de esta ciudad dictó sentencia en seis de Septiembre último, en la cual, aceptando, como se ha dicho, todos los resultandos de la sentencia del Juez de Primera Instancia del Distrito del Cerro y apreciando la prueba testifical presentada por el actor, conforme al artículo seiscientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que los Jueces y Tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, conforme á las reglas de la sana crítica, consideró que, de acuerdo con ellas, eran de declararse ineficaces las declaraciones de los testigos del demandante, quedando injustificada la existencia del contrato que sirve de único fundamento á la demanda, y, en su consecuencia, revocó la sentencia apelada en dos de Diciembre y declaró sin lugar la demanda, absolviendo de la misma á Francisco Juara y Arrondo sin especial condenación de costas;

*Resultando:* que contra esta sentencia interpuso el procurador Luis P. Valdés, como representante del actor, por escrito de diez y ocho de Septiembre del año actual recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal, autorizado por el número primero del artículo mil seiscientos ochenta y siete, número primero del mil seiscientos ochenta y nueve, números

primero y séptimo del mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento, estimando infringidos:

*Primero:* los artículos mil doscientos quince y mil doscientos cuarenta y cuatro en cuanto establecen que la prueba testifical es admisible como medio de comprobar las obligaciones cuando expresamente no prohíba la Ley su apreciación, y no existiendo un precepto terminante en el Código Civil que impida su admisión en este juicio, en el que, á mayor abundamiento, fué aceptado aquel medio probatorio, es ineludible á la Sala sentenciadora apreciar las declaraciones de los testigos que depusieron en el juicio, para determinar, según sus declaraciones, la existencia del contrato cuyo cumplimiento se reclama robusteciendo estos fundamentos legales la doctrina consignada en la sentencia del Supremo Tribunal Español, de diez y ocho de Enero de mil ochocientos setenta y dos y diez de Abril de mil ochocientos ochenta y dos, que también alegó como infringidas y que establecen que: "la prueba testifical tiene una importancia decisiva en el juicio que se forme acerca de la justicia que pueda asistir en las reclamaciones hechas por las partes; debiendo considerarse testigos mayores de toda excepción aquellos contra los que no se han justificado tachas"; doctrina esta última que encuentra eficaz apoyo en el artículo mil doscientos cuarenta y seis del Código Civil y mil doscientos cuarenta y siete, por los que, al establecerse la inhabilidad de ciertos testigos, se reconoce la eficacia de los no excepcionados;

*Segundo:* los artículos mil doscientos cincuenta y cuatro y mil doscientos cincuenta y ocho, por los cuales hay contrato perfecto desde que hay consentimiento, cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, según lo indica el artículo mil doscientos setenta y ocho, también infringido, todos del Código Civil; ó cuando en el fallo recurrido no se estima la existencia de una obligación, aun cuando se ha justificado en autos la prestación del consentimiento, la materia del contrato y la causa de la obligación contraída por el demandado;

*Tercero:* el artículo mil doscientos setenta y nueve del Código Civil, que establece que aun cuando la ley determine formas especiales para un contrato, los contratantes pueden compelerse recíprocamente á llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez, cuyo precepto autoriza virtualmente la comprobación de lo convenido por medios diversos de aquellos que naturalmente deban atestar la obligación y en tal sentido al no apreciar la Sala el medio eficaz que mi parte tiene para com-



probar la obligación del demandado y el derecho de aquélla para exigirle su formalización, infringe el artículo citado;

*Cuarto:* el artículo mil doscientos cuarenta y ocho del Código Civil y su concordante el seiscientos cincuenta y ocho de la Ley procesal, aplicados erróneamente por la sala al estimar "simples coincidencias de algunos testimonios la declaración directa de cinco testigos" que deponen sobre los mismos hechos y sus circunstancias; al crear y establecer un criterio libre para la estimación de las declaraciones y conceptuarlas meras coincidencias, cuando según la jurisprudencia y el artículo seiscientos cincuenta y ocho, debe basar la Sala la apreciación de la prueba testifical en las reglas de la sana crítica, que, según la sentencia del Supremo español de treinta y uno de Mayo de mil ochocientos setenta y tres, no son otra cosa que una función del entendimiento, que analiza y sintetiza los hechos sometidos al juicio del juzgador, conforme á las reglas inflexibles da la lógica;

*Resultando:* que admitido el recurso y abierta la sustanciación del mismo en este Supremo Tribunal, el recurrente, en el trámite oportuno, adicionó los motivos de la casación con los siguientes:

*Quinto:* se infringe el artículo mil doscientos cuarenta y ocho del Código Civil por el Tribunal sentenciador, al estimarlo aplicable al presente caso, en el que se ha demandado el otorgamiento de la escritura pública, convenida á tenor de lo preceptuado en los artículos mil doscientos setenta y nueve y mil doscientos ochenta del Código Civil, por cuanto entiende el Tribunal que por el hecho de pactarse el arrendamiento por seis años, obras de importancia habían de realizarse en el inmueble y el otorgamiento de una escritura pública del inquilinato en que habían de consignarse aquellas estipulaciones, ese pacto ó convenio, á su vez, debió consignarse en escritura pública ó en otro documento escrito, incurriendo, al propio tiempo, en error de derecho al estimar, por tales motivos, que el consentimiento solo puede prestarse por escrito, cuando la Ley no exige ese requisito y admite el artículo mil doscientos quince, como prueba de las obligaciones, la testifical, que, en el presente caso, no conviene en simples coincidencias, sino de una manera absoluta en todos los detalles del contrato celebrado entre el que representa y D. Francisco Juara;

*Sexto:* se infringe también el propio artículo mil doscientos cuarenta y ocho del Código Civil al estimar la Sala sentenciadora como elemento de inverosimilitud que las manifestaciones de los testigos, la circunstancia de haberse enterado al-

guno de ellos en una fonda de la existencia del contrato, sin tener en cuenta el Tribunal que el fiador principal pagador de la obligación es el dueño de una fonda, que venía siendo fiador del inquilinato con anterioridad á la novación pactada por las partes contratantes, y que motivó la demanda por mi parte promovida, y consignándose por dicha Sala la conformidad de los testigos en todos los elementos del contrato, tiene que aceptar ese medio probatorio, con arreglo al artículo mil doscientos cuarenta y ocho que invoca, que no excluye, sino que acepta, la prueba testifical como medio probatorio de los contratos;

*Séptimo:* se aplica indebidamente el artículo mil doscientos cuarenta y nueve, por cuanto en él se contiene una disposición general, que no declara derecho especial á favor de ningún contratante, sino bajo las condiciones que establecen los artículos siguientes, de los que sería aplicable en todo caso el mil doscientos cincuenta y tres por no tratarse de presunciones nacidas de la Ley no demostrándose en la sentencia, y mucho menos, en el cuarto Considerando, que el hecho de practicarse unas reparaciones en el mes de Noviembre de un año induzca la presunción racional de que ocho meses después no se necesitan otras diversas, olvidando el Tribunal sentenciador que por disposiciones gubernativas vigentes en la fecha en que se realizaron las segundas obras en la casa Luz número treinta y tres, no se podían practicar ciertas composiciones y obras de aseo é higiene, sino reparando las dependencias de la manera especial que prevenía la Alcaldía Municipal de la Ciudad, violando en último término el texto expreso del artículo mil quinientos setenta y tres del Código Civil, que concede al arrendatario el derecho á indemnizarse de las mejoras útiles y voluntarias que realiza en la finca arrendada;

*Resultando:* que el día primero de Diciembre corriente se celebró la vista con la sola asistencia del recurrente, que sostuvo los motivos del recurso;

Siendo Ponente el Magistrado Eudaldo Tamayo.

*Considerando:* que fundada la sentencia recurrida en la apreciación que ha hecho la Sala de la prueba testifical, única practicada, no ha podido infringir los artículos mil doscientos quince y mil doscientos cuarenta y cuatro del Código Civil que determinan la procedencia de tal prueba para justificar la existencia de las obligaciones, y por consiguiente carece de fundamento el primer motivo del recurso;

*Considerando:* que siendo facultad privativa de la Sala, apreciando la prueba practicada fijar los hechos probados; y declarándose en la sentencia que no se ha justificado la existen-

cia del contrato que se invoca como base de la demanda, no se han infringido los artículos mil doscientos cincuenta y cuatro, mil doscientos cincuenta y ocho y mil doscientos setenta y ocho del Código Civil, que determinan las condiciones que han de concurrir para el perfeccionamiento de un contrato y que se citan por el recurrente como segundo motivo de la casación;

*Considerando:* que no es de estimarse el tercer motivo fundado en la infracción del artículo mil doscientos setenta y nueve, porque dicho precepto legal presupone la existencia de un contrato; y estimando la Sala que no existe el en que se apoya el recurrente para dar por infringido ese artículo, no ha cometido la infracción alegada;

*Considerando:* que tampoco cabe estimar el cuarto motivo, porque el recurso de casación no puede fundarse en la infracción del artículo mil doscientos cuarenta y ocho del Código Civil y su concordante seiscientos cincuenta y ocho de la Ley procesal, si no se indican concreta y señaladamente las reglas de sana crítica á que la Sala haya faltado en la apreciación de la prueba testifical, lo que no ha hecho el recurrente; puesto que no puede entenderse en ese sentido la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de España, la cual no determina esas reglas;

*Considerando:* que no fundándose la sentencia en la inexistencia de documento, sino en la apreciación de la prueba testifical hecha, según el criterio de la Sala, y no demostrándose que se haya verificado con error de derecho, no ha infringido dicho Tribunal el artículo mil doscientos cuarenta y ocho del Código Civil en los conceptos citados en los motivos quinto y sexto del recurso;

*Considerando:* que no fundándose la sentencia en presunciones, sino que éstas se han hecho constar como elementos de juicio, refiriéndose á simple detalle de la cuestión en un Considerando contra el texto de los cuales no se dá recurso de casación, no se ha infringido por la Sala sentenciadora el artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil citado en el séptimo motivo de los alegados por el recurrente;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso de casación establecido por el Procurador Luis P. Valdés, como representante de Ramón Feijóo y Núñez, al que condenamos en las costas.

Así, por esta sentencia, que se comunicará á la Audiencia de la Habana, publicará en el periódico oficial del Gobierno é insertará oportunamente en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se remitirán las necesarias copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio Gonzá-



lez de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—Eudaldo Tamayo.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

JUAN W. SCHWIEP CONTRA RESOLUCIÓN DEL GOBERNADOR MILITAR QUE NOMBRÓ EL PERSONAL DE LAS AUDIENCIAS.

**Sentencia núm. 1 (13 de Diciembre de 1899).**

*Recurso de casación por infracción de Ley y de doctrina legal, promovido por Juan W. Schwiep contra el auto dictado por la Audiencia de la Habana en 18 de Septiembre de 1899.*

### RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Al no reclamar el Tribunal en el primer día hábil siguiente al de la presentación del escrito iniciando el procedimiento contencioso, el expediente administrativo de la autoridad correspondiente, ha infringido los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de lo contencioso; y al negarle curso al escrito, fundándose en no concurrir en la Orden del Gobierno Militar los requisitos del artículo 4.º de la Ley de lo contencioso, infringe los artículos 42, 46 y 50 de la misma.

En la ciudad de la Habana, á trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, en el recurso contencioso-administrativo por infracción de ley y doctrina legal promovido por el Procurador Pereira, en representación del Ldo. Juan W. Schwiep, vecino de Cienfuegos y abogado, contra la resolución del Gobernador Militar de la Isla que nombró el personal de las Audiencias, en cuanto se refiere al nombramiento de Teniente Fiscal de la Audiencia de Santa Clara, pendiente ante este Supremo Tribunal por virtud del recurso de casación establecido por el promovente contra el auto dictado en dieciocho de Septiembre del corriente año por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana;

*Resultando:* que en la resolución recurrida se contienen los siguientes resultandos:

*Resultando primero:* que en veinte y cinco de Agosto último D. Juan Venancio Schwiep presentó escrito á esta Sala promoviendo demanda contencioso-administrativa contra el Decreto del Gobernador Militar de la Isla de Cuba, fecha dos del citado mes de Agosto, relativo al nombramiento del personal de las Audiencias, en cuanto se refiere al nombramiento de Teniente Fiscal de la Audiencia de Santa Clara hecho á favor de D. Juan Gutiérrez Quirós, con perjuicio del compareciente,

propietario de dicho cargo, por oposición y pidió que, como paso previo á la sustanciación de la demanda, se reclamase de la Secretaría de Justicia é Instrucción Pública, el expediente relativo á la provisión de cargos judiciales, hechos por el Decreto interpelado y el expediente personal del recurrente;

*Resultando* segundo: que respecto de dicho escrito, al que no se acompañó documento alguno, proveyó la Sala en veinte y seis de Agosto próximo pasado que no expresándose por Don Juan Venancio Schwiep la resolución administrativa que cause estado contra la que establecía el recurso contencioso-administrativo, no había lugar á admitir el expresado recurso;

*Resultando* tercero: que en treinta del propio mes de Agosto se personó el Procurador Ambrosio L. Pereira en representación de D. Juan Venancio Schwiep y habiéndose tenido por parte presentó escrito en cuatro del corriente mes interponiendo recurso de súplica contra lo resuelto por la Sala en veinte y seis de Agosto último, fundándolo en las alegaciones siguientes: que en el escrito de demanda había manifestado su poderdante que el recurso lo establecía contra el Decreto del Gobierno Militar de esta Isla fecha dos de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve, publicado en la *Gaceta de la Habana* de tres del propio mes: que dicha resolución ha causado estado, toda vez que en virtud de ella ha tomado posesión el Sr. Gutiérrez Quirós del cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia de Santa Clara y ha sido privado de dicho destino el Ldo. Schwiep con manifiesta infracción de las leyes vigentes: que á su poderdante no se le ha comunicado el cese de su destino creyendo que dicho cese debe figurar ya en el expediente relativo á la provisión de los cargos de la carrera judicial, ya en el expediente personal, en el que consta que desempeñaba el referido cargo de Teniente Fiscal al dictarse el Decreto objeto del recurso contencioso: que la Sala al dictar el proveído suplicando ha invadido el terreno de la representación demandada correspondiéndole tan solo examinar si el escrito en que se interpone el recurso está revestido de las formalidades que preceptúan las disposiciones vigentes;

*Resultando* cuarto: que entregada la copia del mencionado escrito al señor Fiscal, y no habiendo éste representado nada sobre el particular, pasó la actuación al Magistrado Ponente;

*Resultando*: que por escrito de veinte y tres del mismo mes de Septiembre la representación mencionada del Ldo. Schwiep interpuso recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal contra el referido auto definitivo de diez y ocho de Septiembre (denegatorio de la admisión del recurso contencio-

so-administrativo) autorizado por el párrafo cuarto del Decreto del Cuartel General de la División de Cuba de veinte y nueve de Junio último, por los artículos ciento tres y ciento cuatro del Decreto del propio Gobierno Militar de veinte y seis de Junio de mil ochocientos noventa y nueve y por el artículo mil seiscientos noventa, número primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil; citando como infringidos:

*Primero:* el artículo primero de la Ley de lo Contencioso-administrativo de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, promulgada en Cuba por Decreto de veinte y tres de Noviembre del propio año;

*Segundo:* los artículos treinta y cuatro, treinta y cinco, número tercero, y treinta y seis de la citada Ley;

*Tercero:* la doctrina legal consignada en el artículo ochocientos treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de mil ochocientos setenta, fuente y origen de la Compilación Orgánica de las disposiciones de la Administración de Justicia de cinco de Enero de mil ochocientos noventa y uno;

*Cuarto:* la doctrina legal consignada en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de veinte y cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco y cuatro de Junio de mil ochocientos noventa, según las cuales no pueden rechazarse de plano las demandas, sino cuando la ley lo ordena expresamente;

*Resultando:* que por auto de veinte y siete de Septiembre próximo pasado dicha Sala de lo Civil admitió el recurso de casación interpuesto, emplazándose debidamente á las partes, y personada en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo la representación del recurrente, amplió ésta en el período de instrucción los motivos alegados como fundamentos del presente recurso, considerando infringidos los artículos cuarenta y dos, cuarenta y seis y cincuenta de la Ley de lo Contencioso-administrativo de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho; y habiéndose declarado sin lugar una petición de documentos, se señaló para la vista del recurso la audiencia del día cinco de Diciembre corriente á la una de la tarde, celebrándose aquella, informando el propio Ldo. Schwiep é impugnando el recurso el Ministerio Fiscal;

Visto, Siendo Ponente el Magistrado Rafael Cruz Pérez por indisposición del Sr. González Llorente,

*Considerando:* que á tenor del artículo treinta y seis de la Ley de lo Contencioso Administrativo de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, luego que se presente el escrito iniciándose el procedimiento contencioso-administrativo, el Tribunal en el primer día hábil siguiente, debe reclamar de



la Autoridad que corresponde el expediente administrativo, y siendo un hecho que la Sala no cumplió ese precepto expreso y terminante de la Ley, sino que rechazó la solicitud previa del demandante, ha cometido por ello la infracción que se le atribuye en el segundo motivo del recurso, en lo que se contrae á dicho artículo treinta y seis;

*Considerando:* que al negarle la Sala el curso á la solicitud del promovente, fundándose en no concurrir en la Orden del Gobierno Militar á que se contrae el recurrente los requisitos del artículo cuarto del Decreto Ley de lo Contencioso-administrativo, ha infringido los artículos cuarenta y dos, cuarenta y seis y cincuenta, por haber proveído de oficio sobre cuestiones que, según dichos preceptos, son materia de excepciones dilatorias que compete alegar á la parte ó partes demandadas, y que han de resolver en la oportunidad establecida en el artículo cincuenta; por todo lo cual y la razón aducida en el anterior Considerando, procede, según el concepto de dichos preceptos, la casación del auto de diez y ocho de Septiembre referido;

*Considerando:* que al proceder la casación por los motivos expuestos, que son fundamentales, es innecesario el examen de los otros alegados en el recurso;

*Fallamos:* que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación que por infracción de ley y de doctrina legal ha interpuesto la representación del Ldo. Schwiep contra el expresado auto de diez y ocho de Septiembre del corriente año, pronunciado por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, el cual casamos y anulamos, sin especial condenación de costas; comuníquese esta resolución, con la que á continuación se dicta, á la mencionada Sala para los efectos que procedan.

Así, por esta sentencia, que se publicará en la *Gaceta de la Habana* y en la Colección á cargo de la Secretaría de Justicia, á cuyo efecto se darán las necesarias copias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—Rafael Cruz Pérez.—José M. García Montes.—El Magistrado Eudaldo Tamayo votó en Sala.—Antonio González de Mendoza.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.

Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Rafael Cruz Pérez, celebrando audiencia pública el Tribunal Supremo constituido en Sala de Justicia, lo que certifico como Secretario por delegación.—Ha-

bana, trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve.—Armando Riva.

*Nota:* No se extiende en el presente libro la resolución recaída en el recurso objeto de la anterior sentencia de casación por haberse dictado en forma de providencia, constando así en su rollo respectivo, lo certifico.—Armando Riva.

Habana, catorce de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve.

Casado y anulado el auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana fecha diez y ocho de Septiembre, en el recurso contencioso-administrativo establecido por la representación del Ldo. Juan Venancio Schwiep, contra el Decreto del Gobernador Militar de la Isla de Cuba, fecha dos de Agosto, relativo al nombramiento del personal de las Audiencias, en cuanto se refiere al nombramiento de Teniente Fiscal de la Audiencia de Santa Clara, hecho á favor de D. Juan Gutiérrez Quirós con perjuicio del compareciente, propietario de dicho cargo por oposición; se ha por presentado el escrito iniciando dicha vía y reclámese por dicha Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana á la Secretaría de Justicia é Instrucción Pública el expediente relativo á la provisión de cargos judiciales hechos por el Decreto interpelado y al expediente personal del recurrente, dándose cumplimiento á lo demás que ordenan los artículos treinta y seis y siguientes de la Ley de lo Contencioso-administrativo de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho.

---

ROSA Y ALFREDO IZQUIERDO CONTRA JUANA LÓPEZ ARGANDOÑA.

**Auto de 16 de Diciembre de 1899.**

*Recurso de queja interpuesto por Juana López contra el auto dictado por la Audiencia de la Habana en 10 de Noviembre de 1899.*

### **INCIDENTE DE INSOLVENCIA.**

La sentencia que niega el recurso de queja, tiene el concepto de definitiva, por que imposibilita la prosecución del pleito y viene en realidad á terminarlo; sin que en todos los casos pueda reproducirse la pretensión de insolvencia, pues al que le fué negado el beneficio de pobreza por sentencia ejecu-

toria, para poder promover nuevo juicio solicitando dicha declaratoria, ha de justificar que las causas que motivan su insolvencia son posteriores á dicha sentencia, sin cuyo requisito no se dará curso á la demanda.

*Resultando:* que en los autos sobre pobreza de Juana López Argandoña, promovidos como incidente al juicio que le siguen Rosa y Alfredo Izquierdo sobre cancelación de hipoteca y cobro de cantidad, la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana dictó en apelación, con fecha treintuno de Octubre pasado, sentencia denegatoria del beneficio de defensa por pobre solicitado por la promovente López, quien estableció contra dicha sentencia recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, que la mencionada Sala denegó, en auto de diez de Noviembre último por estimarlo improcedente, en consideración á no ser definitiva la sentencia á los efectos del recurso de casación, pues no produce los de cosa juzgada y en cualquier estado del pleito puede la parte reproducir la pretensión, no dándose dicho recurso en aquellos juicios como el presente en que después de terminados pueda promoverse otro con el mismo objeto; á consecuencia de lo cual la parte recurrente, previos los trámites del caso, interpuso en forma contra el referido auto de Noviembre diez, recurso de queja, que se ha sustanciado ante este Supremo Tribunal, celebrándose la vista pública en el día de ayer, sin asistencia de las partes;

*Considerando:* que para fijar, con relación al número primero del artículo mil seiscientos ochentisiete de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el concepto correspondiente á la sentencia recaída en un incidente de defensa por pobre, debe distinguirse entre la que concede y la que niega dicho beneficio, porque si bien respecto de ambos casos se declara en el artículo treintitres de aquella Ley que el fallo no produce los efectos de cosa juzgada y que en cualquier estado del pleito podrá la parte á quien convenga promover nuevo incidente para la revisión y revocación, siempre que asegure á satisfacción del Juez el pago de las costas á que habrá de condenársele si no prospera su pretensión, también es cierto que en el segundo caso, para que pueda esta prosperar y hasta para que se dé curso á la nueva demanda, tendrá precisamente que fundarse en haber la parte venido á estado de pobreza por causas posteriores á la sentencia que con anterioridad negó tal beneficio, conforme á lo dispuesto en el artículo treinticuatro de la Ley citada; lo cual hace indudable que no es una sola é idéntica cuestión, sino en realidad dos diversas situaciones jurídicas, las que se debaten y deciden en los respectivos incidentes; por cuya razón no cabe



en buena lógica considerar, ni la jurisprudencia ha considerado nunca la resolución que niega el expresado beneficio comprendida en el número tercero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la mencionada Ley de Enjuiciamiento, sólo aplicable á los juicios que después de terminados permiten nueva contienda y decisión sobre el mismo asunto que constituye su materia;

*Considerando:* que, por su propia índole y según lo consignado en el fundamento que precede, la sentencia denegatoria de la defensa por pobre decide finalmente el incidente en que recae, y al imponer, á quien por la ley deba gozar dicho beneficio, la obligación, que no puede cumplir, de sufragar los gastos necesarios para seguir el pleito, imposibilita de hecho la prosecución del último y viene en realidad á terminarlo; por virtud de lo cual, dicha sentencia, con arreglo al número primero del artículo mil seiscientos ochenta y ocho de la repetida Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene el concepto de definitiva para el efecto del recurso de casación;

SE DECLARA CON LUGAR el recurso de queja interpuesto á nombre de Juana López Argandoña contra el auto denegatorio del de casación por infracción de ley y de doctrina legal que dictó en diez de Noviembre último la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, sin especial condenación de costas; comuníquese, con certificación, á la Sala recurrida, para que practique lo dispuesto en el artículo octavo de la Orden número noventa y dos del Gobernador Militar de la Isla.

Lo proveyeron y firman los Magistrados del margen, ante mí de que certifico como Secretario por delegación.—Antonio González de Mendoza.—Pedro González Llorente.—José M. García Montes.—Angel C. Betancourt.—Octavio Giberga.—Ante mí, Armando Riva.

---

ANTONIO CABRERA CONTRA EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE OCCIDENTE.

Resolución núm. 2 de 21 de Diciembre de 1899.

*Recurso gubernativo establecido por Antonio Cabrera contra el Registrador de la Propiedad de Occidente confirmando la*

*resolución del Presidente de la Audiencia de 13 de Noviembre de 1899.*

**NEGATIVA DE INSCRIPCION  
DE SENTENCIA DISPUESTA POR MANDAMIENTO  
JUDICIAL.**

Tratándose de defectos subsanables, para no llevar á cabo la inscripción de una sentencia dispuesta por mandamiento judicial, procede tomar anotación preventiva, consignando al pie de uno de los mandamientos los motivos de la suspensión.

VISTO el recurso gubernativo de Antonio Cabrera contra la negativa del Registrador de la propiedad á tomar anotación preventiva de la sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe sobre otorgamiento de varias escrituras;

*Resultando:* que esa negativa se fundó en haber observado el defecto de no describir los bienes objeto de la anotación faltando al requisito que se exige el artículo noveno de la Ley Hipotecaria y la regla primera del artículo cuarto de la Instrucción sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos á Registro, según expuso el Registrador en oficio dirigido al Juez devolviendo sin diligenciar los mandamientos y sin haber escrito en ellos anotación alguna;

*Resultando:* que habiendo interpuesto Antonio Cabrera recurso gubernativo ante el Presidente de la Audiencia de la Habana éste declaró:

*Primero:* que debía realizarse la anotación por el Registrador tomando al efecto los antecedentes necesarios de los asientos existentes en el Registro de la Propiedad;

*Segundo:* que el Registrador de la propiedad de Occidente debió poner al pie de los mandamientos nota expresiva de no considerar procedente la anotación de dicha sentencia devolviendo uno de los dos ejemplares y conservando el otro en su poder;

*Tercero:* El Registrador debía ajustarse en lo sucesivo á las prescripciones contenidas en la Ley Hipotecaria y su Reglamento respecto á las anotaciones mencionadas, y

*Cuarto:* Que no procede entregarle los expedientes para emitir los informes que se le pidan por la Presidencia sino que puede instruirse de ellos en la Secretaría de la Presidencia;

*Resultando:* que el Registrador apeló de esta resolución del Presidente fecha trece de Noviembre de mil ochocientos no-

venta y nueve y en instancia dirigida al Presidente del Tribunal Supremo le pide que revoque la anterior resolución en tres de sus preceptos y que en lugar de ellos declare bien hecha la calificación, sin necesidad de poner en los mandamientos nota alguna, sino que solo procede devolverlos al Juzgado con un oficio en que manifieste la razón de no cumplirlos, y por último que debe entregársele el expediente para emitir el informe cuando se interpongan recursos contra su calificación, citando al efecto en apoyo de estas pretensiones, á más de los artículos que invocó para fundar su negativa á cumplir el precepto judicial, los veinte, cuarenta y dos, setenta y cuatro y setenta y seis de la Ley Hipotecaria los ciento diez y ocho y ciento veinte y seis de su Reglamento y la doctrina contenida en las resoluciones del Registro de la propiedad fechas diez y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y siete, diez y nueve de Marzo y cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y nueve, seis de Junio de mil ochocientos ochenta, tres de Marzo de mil ochocientos ochenta y uno, diez y nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho así como la práctica establecida de entregar los expedientes á los Registradores, aun cuando no lo hubiera así dispuesto precepto alguno de la Ley ni de su reglamento;

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución del Presidente de la Audiencia excepto la afirmación del cuarto considerando relativa á que el Registrador debió buscar los datos sobre la descripción y linderos de la finca en la inscripción anterior que de la misma aparezca en el Registro, ya porque reconociendo que esto pudo hacerlo no le está impuesto como un deber y por otra parte y con motivo de la división del Registro de la propiedad de la Habana en tres secciones, es posible y aun probable que las fincas en cuestión correspondan á cualquiera de los otros dos Registros;

*Considerando:* que en todas las resoluciones citadas por el Registrador aparece que la nota negando ó suspendiendo la inscripción se estampó siempre en los mismos mandamientos, á lo cual no se opone el precepto, que puede cumplirse, de dirigir al Juez la comunicación cuando proceda ó sea en los casos de existir una providencia judicial;

*Considerando:* que siendo los defectos subsanables, como el que resulta de no haber determinado los linderos de la finca, procede extender anotación preventiva de suspensión de la sentencia conforme lo establecido para un caso idéntico en la reso-



lución de diez y nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y nueve, citada por el Registrador;

*Considerando:* que la práctica que el último refiere, sobre la entrega de los expedientes, no puede ser obligatoria cuando no se funda en precepto alguno de la Ley ni es indispensable para dar el informe de su competencia;

SE DECLARA SIN LUGAR el recurso establecido por el Registrador contra la mencionada resolución de trece de Noviembre último, que se confirma, y deberá insertarse á continuación como parte de la presente, menos en su primer particular que impuso al Registrador el deber de realizar desde luego la anotación de la sentencia, tomando los datos al efecto necesarios de los asientos existentes en su propio Registro, y en lugar de esto se le previene que tome anotación preventiva de suspensión expresando en ella los defectos subsanables advertidos en la sentencia, en la nota que debió poner y pondrá en los mandamientos, y en la comunicación que dirija al Juez sobre el particular;

Comuníquese lo resuelto, por medio de certificación y carta orden, al Presidente de la Audiencia de la Habana, y publíquese en la GACETA DE LA HABANA.—Antonio González de Mendoza.—Ante mí, Federico García Ramis.

Asimismo certifico que la resolución que por la precedente se confirma dice así:

En la Habana, á trece de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, visto este expediente formado á consecuencia del recurso gubernativo establecido por D. Antonio Cabrera y Ballester, por haberse negado la anotación preventiva de una sentencia:

*Primero. Resultando:* que el referido D. Antonio Cabrera y Ballester ocurrió á esta Presidencia por medio del correspondiente recurso fojas primera á tres, consignando que en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe y Escribanía de D. Santiago Ledo y García, había seguido juicio declarativo de mayor cuantía contra Doña Isabel Cabrera y Pérez, con el fin de obtener le otorgara una escritura de venta y cesión: que dicho juicio se encontraba en este Superior Tribunal á virtud de alzada establecida por el esposo de la precitada Cabrera y Pérez de Gómez, y que se le otorgara en ambos efectos: que en ese juicio se dictó sentencia en veinte y cuatro de Abril del año que cursa, la cual declaró con lugar la demanda de Cabrera Ballester y condenó á la demandada á que le otorgara escritura de venta de las casas calle de Luz número ocho y Cádiz número setenta y nueve, á la vez que cesión de

un crédito hipotecario ascendente á mil sesenta pesos que sufría la casa número quinientos cuarenta y nueve de la calzada de Jesús del Monte y otro de mil trescientos pesos, también hipotecario, que pesaba sobre las casas números catorce, diez y seis y diez y ocho de la calle del Pocito: que el juicio de que ya se ha hablado se siguió durante la primera instancia, en rebeldía de la demandada: que por medio de su representación como tal demandante, en uso del derecho que le otorgaba el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pidió que se expidiera mandamiento al Registrador de la Propiedad para la anotación preventiva de la sentencia, y así se dispuso, librándose mandamiento por duplicado, al que se acompañó una certificación en que se insertó la sentencia dictada y el documento privado, base de la demanda: que presentado en ocho de Junio de este año ese mandamiento por duplicado y certificación en el Registro de la Propiedad, el Registrador muy entrado el mes de Julio, dirigió un oficio al Juzgado, en el que le participó haber denegado la inscripción ó sease anotación, por no describirse las fincas en el mandamiento: que como interesado en que tuviese lugar la anotación del expuesto fallo, trató de satisfacer el deseo del Registrador, por ser esto más breve, que representar en la forma que al fin tuvo que hacerlo, pero que no pudo conseguir en este Tribunal Superior que se le expidiese certificado relativo á esa descripción de fincas, con vista de las escrituras existentes en los autos contra Cabrera y Pérez de Gómez, de que se trata, porque elevados habían sido estos autos, á virtud de apelación libre;

*Segundo. Resultando:* que Cabrera y Ballester funda su recurso en el ya citado artículo setecientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite que dictada la sentencia se anote en el Registro de la Propiedad: en el inciso primero del artículo ciento veinte y seis del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en cuanto preceptúa que si el documento presentado para la anotación no contiene la descripción de la finca objeto de dicha anotación, se tome de la inscripción anterior relativa á esa finca ó derecho de que se trate; en el ciento nueve ese propio Reglamento, conforme al que tratándose de defecto subsanable, el Juez ó Tribunal que hubiese dispuesto la anotación, debe acordar lo que proceda para que desaparezca el obstáculo que impide extender el correspondiente asiento: en que ha debido expedírsele la certificación que estando elevados á este Superior Tribunal los autos en que se dictó la sentencia que debía ser anotada en el Registro de la Propiedad, pidiera de ciertos datos constantes en los mismos,

para que cesaran los inconvenientes puestos por el Registrador á la anotación de la sentencia de que ha venido hablándose, por cuanto no se trataba de cumplir esa sentencia, sino sólo de anotarla en el Registro, cumpliendo el precepto de la Ley y alcanzando una garantía para lo que pudiera resolverse, como la obtiene el que establece una demanda, y logra que se ordene su anotación en el Registro de la Propiedad; y finalmente, en que no queriendo el Registrador anotar la sentencia, y el Tribunal Superior previno que expidiera la certificación ya mencionada, con la que se proporcionaría á dicho Registrador el antecedente exigido por él para hacer la anotación de tal fallo, era ilusorio el obtenido en el juicio declarativo de mayor cuantía á que se ha hecho referencia, y letra muerta el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

*Tercero. Resultando:* que fundado en cuanto queda expuesto, acude á esta Presidencia Cabrera y Ballester, solicitando que se pida informe á la Sala de lo Civil de la Audiencia, en lugar de exigirlo del Juez del distrito de Guadalupe, toda vez que han sido ya elevados á la misma los autos á que se ha aludido: que también se pida al Registrador; y que se declare que procede inscribir el mandamiento librado, en cuyo concepto así se ordenara á ese Registrador, que es el del Occidente de esta capital;

*Cuarto. Resultando:* que de fojas cuatro á su vuelta, y de la cinco á su reverso, aparecen los dos mandamientos librados al Registrador de la Propiedad por el Juez de primera instancia del Distrito de Guadalupe, para que con vista de los antecedentes insertos en la certificación que acompañaba á aquéllos, y eran la sentencia proferida en el pleito de Cabrera Ballester con la Cabrera y Pérez Gómez y documento base de la demanda, procediera á la anotación preventiva del derecho que concedía á dicho Cabrera Ballester el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tenor de lo dispuesto en el artículo noventa y siete de la Ley Hipotecaria; y que esos mandamientos fechados en veinte y nueve de Mayo del año que rige, previa su presentación el ocho de Junio siguiente, en el Registro de la Propiedad, para ser anotados en el Libro Diario, lo cual se efectuó, y presentados luego en la Oficina Liquidadora de Derechos Fiscales, fueron declarados exentos del pago tales derechos en veinte y siete de ese mes de Junio del año corriente;

*Quinto. Resultando:* que por la sentencia dictada en el pleito de Cabrera Ballester con la Cabrera y Pérez de Gómez, se declaró con lugar la demanda establecida por el primero, y



se condenó á la segunda con las costas del juicio, á su cargo, á que dentro de tercero día se otorgase á favor del demandante la escritura de compra-venta de las casas calle de Luz número ocho, en Arroyo Apolo, y Cádiz número setenta y nueve, y la escritura de cesión del crédito hipotecario de mil sesenta pesos existente á su favor en la casa calzada de Jesús del Monte número quinientos cuarenta y nueve, y otro crédito reconocido en las casas números catorce, diez y seis y diez y ocho de la calle del Pocito, importante mil trescientos pesos, dándose á dicha demandada por recibida de tres mil trescientos sesenta pesos en oro que le fueron entregados el día diez y ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y seis, como precio convenido de dichas transferencias; y apercibiéndola de que caso de no otorgar esas escrituras, lo haría el Juzgado á su costa;

*Sexto. Resultando:* que el precitado D. Antonio Cabrera Ballester presentó á esta Presidencia con su escrito fojas doce, los dos mandamientos y certificación á que se ha aludido, como precedente para la resolución del recurso que interponía, indicando á la vez que el Registrador á quien se presentaron esos antecedentes, estimó que no eran base para anotación en el Registro, si bien no consignó en esos mandamientos la oportuna nota relativa al particular, como era de realizarse, limitándose á hacer constar su negativa á la anotación en el oficio que dirigió al Juez de primera instancia de Guadalupe, cuyo oficio existía en poder de ese Juez y pidió el recurrente que se reclamase, como así lo dispuso esta Presidencia en catorce de Agosto del corriente año, fojas doce vuelta, á la vez que por ese auto dió por establecido el recurso gubernativo interpuesto por dicho Cabrera;

*Séptimo. Resultando:* que recibido el mencionado oficio, fojas catorce, se dictó el provisto de diez y nueve del ya referido mes de Agosto, fojas catorce vuelta, que teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo ciento veinte y uno del Reglamento de la Ley Hipotecaria, dispuso se oyera al Juez de primera instancia de Guadalupe y al Registrador de la Propiedad de Occidente; y que dicho Registrador en ese oficio que lleva la fecha de diez de Julio de este año, dirigido al expresado Juez, manifestó, aunque de un modo equivocado, pues que habló de anotación de demanda y no de sentencia que devolvía sin diligenciar el mandamiento librado, dice, para anotar la demanda establecida por D. Antonio Cabrera y Ballesteros en las casas Luz número ocho, Cádiz número setenta y nueve, créditos hipotecarios que sufrían las casas calzada de Jesús del Monte número quinientos cuarenta y nueve y Pocito catorce, diez y

seis y diez y ocho de la pertenencia de Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez, por observarse el defecto de no describirse en dicho mandamiento los bienes cuya anotación de demanda se interesaba, requisito exigido en el artículo noveno de la Ley Hipotecaria y regla primera del artículo cuarto de la Instrucción sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos á registro;

*Octavo. Resultando:* que por disposición de esta Presidencia comunicó el Secretario de la misma en diez y seis de Agosto último al Juez delegado para la inspección del Registro de la Propiedad de Occidente de esta capital, fojas diez y seis á su vuelta, haberse tenido por interpuesto el recurso gubernativo de D. Antonio Cabrera, contra el Registrador de la Propiedad, por negarse á llevar á cabo la anotación preventiva de la sentencia dictada en los autos seguidos por el propio Cabrera contra Doña Isabel Cabrera sobre el otorgamiento de escritura de venta y cesión; y que esta comunicación hecha para conocimiento del referido Juez delegado y del Registrador, lo fué también á los efectos del último párrafo del artículo sesenta y seis de la Ley Hipotecaria;

*Noveno. Resultando:* que la providencia de diez y ocho de Agosto del corriente año, fojas diez y siete, dictada por el Juez delegado, ordenó que se cumpliera lo dispuesto por esta Presidencia, en cuyo concepto se puso en conocimiento del Registrador de la Propiedad; y que éste, contestando, fojas diez y ocho, el oficio que le pasara el Delegado, manifestó ser imposible dar cumplimiento á lo prevenido en el último párrafo de dicho artículo sesenta y seis, por estar ya cancelado el asiento de presentación de los mandamientos en que se ordenaba la anotación porque transcurridos los treinta días que duraban los efectos de esos asientos, según el párrafo segundo del artículo diez y siete de la citada Ley, se efectuó la cancelación, cumpliendo el precepto del párrafo segundo del artículo doscientos setenta y cuatro del Reglamento para la ejecución de la referida Ley; y que ese oficio del Registrador se mandó elevar y se elevó en efecto á esta propia Presidencia, fojas diez y nueve y veinte;

*Décimo. Resultando:* que no obstante haber manifestado el Juez delegado á esta Presidencia, en su oficio fecha veinte y tres del citado mes de Agosto, fojas veinte y una, que no podía informar al tenor de lo prevenido en el artículo ciento veinte y uno del Reglamento de la Ley Hipotecaria, por encontrarse los autos de Cabrera Ballester contra Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez elevados á la Sala de lo Civil de la Audiencia de este Territorio, al fin evacuó ese informe en treinta y uno de

dicho mes de Agosto, fojas veintidos, manifestando lo que ya queda explicado, esto es, que en el juicio de Cabrera Ballester contra la Cabrera y Pérez de Gómez se había dictado sentencia condenando á ésta á que otorgara escritura de venta de dos casas y cesión de dos créditos hipotecarios, habiendo solicitado el actor que se librara mandamiento al Registrador de la Propiedad de Occidente, para la anotación preventiva de la sentencia, á cuyo efecto con ese mandamiento se acompañó certificación en que se insertó el documento base de la demanda, y el fallo de la misma, únicos particulares solicitados por el demandante Cabrera Ballester; y que al cabo se recibió en el Juzgado un oficio del propio Registrador, denegando la anotación preventiva, oficio elevado á esta Presidencia;

*Onceno. Resultando:* que el Registrador de la Propiedad de Occidente en su comunicación al Secretario de la Presidencia, fojas veinte y cuatro, fecha primero de Septiembre último, contestando la que éste le dirigiera en treintuno de Agosto de este año, cumpliendo órdenes de esta misma Presidencia, manifiesta que en veinte y uno de Agosto había remitido al Juez Delegado para la inspección del Registro, el oficio que transcribía, y el cual tuvo por objeto en primer término, poner en conocimiento de dicho Juez, dando respuesta á uno de éste, en que le comunicaba que la indicada Presidencia había tenido por interpuesto el recurso gubernativo de D. Antonio Cabrera, que se hacía imposible cumplir lo ordenado en el párrafo último del artículo sesenta y seis de la Ley Hipotecaria, en virtud de encontrarse ya cancelado el asiento de presentación de los mandamientos en que se ordenaba la anotación de la sentencia proferida á favor de Cabrera en su pleito con Doña Isabel Cabrera, toda la vez que transcurridos los treinta días que duraban los efectos de esos asientos, según el párrafo segundo del artículo diez y siete de la citada Ley, se había efectuado la cancelación, cumpliendo el precepto del doscientos setenta y cuatro del Reglamento para la ejecución de dicha Ley, y en segundo que para emitir el informe prevenido en el ciento veinte y uno del citado Reglamento, se hacía necesario que se le remitiese el expediente formado con el recurso gubernativo del tantas veces citado Cabrera;

*Doce. Resultando:* que á la comunicación del Registrador mencionada en el anterior Resultando, recayó el Decreto de veinte y ocho de Septiembre de este año, fojas veinte y cinco vuelta, que ordenó se librase recordatorio al Registrador de la Propiedad de Occidente para que á la mayor brevedad remitiese el informe de su cargo cuya prevención hubo necesidad



de reiterar en doce de Octubre próximo pasado, fojas veinte y seis, y que mediante esto se elevó á esta Presidencia dicho informe, que lleva la fecha de once del citado mes, se registra de fojas veinte y siete al reverso de la veinte y nueve, y en el cual se expresa que en ocho de Junio de este propio año presentó en el Registro D. Antonio Cabrera Ballester un mandamiento por duplicado expedido por el Juzgado de primera instancia de Guadalupe en veinte y nueve de Mayo anterior, librado en el juicio declarativo de mayor cuantía promovido por el citado Cabrera contra Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez sobre otorgamiento de varias escrituras, y que en ese mandamiento se disponía que se tomara anotación preventiva sobre las casas Luz número ocho en Arroyo Apolo y Cádiz setenta y nueve y sobre dos créditos hipotecarios, uno de mil sesenta pesos reconocido en la casa calzada de Jesús del Monte número quinientos cuarenta y nueve, y el otro de mil trescientos pesos sobre las casas números catorce, diez y seis y diez y ocho de la calle del Pocito, cuyos mandamientos fueron devueltos al que los presentó para que acudiese á la Oficina Liquidadora del impuesto, á los efectos de los artículos doscientos cuarenta y cinco y doscientos cuarenta y seis de la Ley Hipotecaria, habiendo sido de nuevo presentados al Registro en primero de Julio último, verificado lo cual y hecha la calificación del documento, fué suspendida la anotación en él ordenada, por observarse el defecto consignado en la comunicación que en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo ciento diez y ocho del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, y devolviendo dichos mandamientos, dirigió al Juez de Guadalupe en diez de ese mes de Julio, comunicación que copia el Registrador en su informe, y á la que se refiere el séptimo Resultando, no obstante lo que, á ella se hace aquí referencia, consignando sus términos, reducidos á expresar el Registrador que devolvía el mandamiento librado para anotar la demanda establecida por D. Antonio Cabrera y Ballester en las casas Luz número ocho, Cádiz número setenta y nueve, créditos hipotecarios que sufrían las casas Calzada de Jesús del Monte número quinientos cuarenta y nueve, y Pocito catorce, diez y seis y diez y ocho de la pertenencia de Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez, por observarse el defecto de no describirse en dicho mandamiento los bienes cuya anotación de demanda se interesaba, siendo éste el requisito exigido por el artículo noveno de la Ley Hipotecaria y regla primera del artículo cuarto de la Instrucción sobre la manera de redactar los documentos públicos sujetos á Registro;

*Décimotercero. Resultando:* que el Registrador en su infor-

me agrega por una parte, lo que ya había manifestado al Secretario de esta Presidencia en su oficio fojas veinte y cuatro y explica el undécimo Resultando; esto es, que habiendo transcurrido los treinta días que duran los efectos de los asientos de presentación, según el artículo diez y siete de la Ley, había procedido á su cancelación en la forma ordenada en el párrafo segundo del artículo ochenta y uno del Reglamento, en el oficio citó el doscientos setenta y cuatro; y por la otra pide á esta Presidencia que en mérito de lo que exponía y confirmaba la resolución de nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho respecto de la que ninguna otra indicación se hace, si bien es una de las que forman la Colección de las dictadas por la Dirección de los Registros, y se refiere á linderos, confirme en todas sus partes la calificación que él hiciera en diez de Julio último, y por consiguiente declare sin lugar el recurso establecido por D. Antonio Cabrera y Ballester;

*Primero. Considerando:* que el mandamiento que por duplicado se libró al Registrador de la Propiedad del Occidente de esta capital, tuvo por objeto la anotación preventiva de la sentencia que en rebeldía de Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez profirió el Juez de primera instancia del distrito de Guadalupe á favor de D. Antonio Cabrera y Ballester, y no la anotación de una demanda, como equivocadamente expresa dicho Registrador;

*Segundo. Considerando:* que al tenor del último párrafo del artículo setecientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "en todo caso en que haya obtenido la sentencia en rebeldía de su contrario, podrá pedir la anotación preventiva de su derecho en el Registro de la Propiedad"; de lo cual se deduce que esta solicitud puede formularse y ser otorgada no obstante la apelación que contra ese fallo esté en aptitud de establecer la parte contraria de la victoriosa;

*Tercero. Considerando:* que en una sentencia no es necesario hacer, y no se hace, la descripción de las fincas á que la misma se contrae, bastando sólo consignarlas haciendo constar, si son urbanas, su número y calle en que están situadas; y si son rústicas sus nombres, objeto á que están destinadas y lugar en que se encuentran situadas: que esta es la doctrina que se desprende del artículo noventa y siete del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, al tenor del que, toda anotación preventiva que no pueda hacerse sino por providencia judicial, se verificará en virtud de la presentación en el Registro de mandamiento del Juez ó Tribunal, en el que se insertará literalmente el particular de la providencia en que se

haya dictado, su fecha y el documento ó documentos que hayan motivado dicha anotación; y que esto lo corrobora el otro artículo ciento veinte y seis de dicho Reglamento, al consignar que las anotaciones preventivas contendrán según los casos, las circunstancias que el mismo expresa, pues con esto hace comprender que en armonía con el objeto de la anotación, había de estar la que se realice, lo cual comprueban los diversos casos que detalla dicho artículo, entre ellos, el sexto, que se refiere entre otras cosas, á sentencias, á ejecutorias;

*Cuarto. Considerando:* que suponiendo y aun aceptando que en todos los casos en que se trate de anotaciones de sentencias que se refieran á fincas, deba consignarse su descripción, ó por lo menos sus linderos y que esa propia descripción deba hacerse respecto de todo lo que se relacione con créditos que sea preciso ceder según la sentencia, puede asegurarse, vista la doctrina consignada en el citado artículo ciento veinte y seis del Reglamento aludido, que la descripción ó los linderos de la finca á que se contrae el fallo que ha de anotarse preventivamente, deben buscarse en la inscripción anterior que de la finca aparezca en el Registro de la Propiedad: que lo mismo es preciso practicar con respecto á los créditos que conforme á esa sentencia hayan de cederse; y que en esta forma ha podido y debido proceder el Registrador de Occidente, si en su concepto esa descripción era absolutamente indispensable;

*Quinto. Considerando:* que en este orden hubiera podido el Registrador dentro de los treinta días que debía durar y duraba el asiento de presentación en el Diario, llevar á cabo la anotación preventiva de la sentencia de que se trata, sin causar al recurrente Cabrera los perjuicios que pudiera ocasionarle que no se hiciese esa anotación en los momentos en que era posible verificarlo, pues que no tiene duda, vistos los términos del artículo diez y siete de la Ley Hipotecaria, que esa anotación preventiva si se hubiera realizado, habría impedido que se inscribiera ó anotara algún otro título de igual ó anterior fecha y libertado al Registrador de toda responsabilidad en lo futuro;

*Sexto. Considerando:* que la circunstancia de haber transcurrido ese término de treinta días y ser necesario cancelar como se canceló el asiento de presentación hecho en el Diario respecto de la sentencia que debía anotarse preventivamente, particular á que se contrae el Registrador de Occidente en su informe á esta Presidencia, no sería motivo que impidiese la anotación preventiva de esa sentencia, porque en caso tal, resuelto el recurso gubernativo de Cabrera Ballester á favor de



éste, todo se reduciría á presentar otra vez el mandamiento por duplicado que se libró antes y los antecedentes que con él se acompañaron, á fin de que tuviese lugar un nuevo asiento en el Diario, y en seguida la anotación preventiva de la sentencia de que viene hablándose;

*Séptimo. Considerando:* que el Registrador de la Propiedad del Occidente de esta capital tenía la obligación de poner nota firmada por él, expresiva de la anotación ordenada por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe, ó de la suspensión de la misma, al pie de uno de los ejemplares del mandamiento que se le librara al intento, por duplicado, y que debía devolver quedándose con el otro, en el que también estaba en el caso de poner la oportuna constancia; y que con esa obligación que impone á los Registradores la Ley Hipotecaria en sus artículos doscientos cuarenta y cuatro y doscientos cuarenta y nueve, y el Reglamento de la misma en los marcados con los números doscientos treinta y doscientos setenta y dos, no ha cumplido habiendo prescindido de ella hasta el extremo de devolver los dos ejemplares del mandamiento referido;

*Octavo. Considerando:* que ni la Ley Hipotecaria, ni su Reglamento contienen precepto alguno mediante el que deban facilitarse los expedientes gubernativos á los Registradores para que informe á esta Presidencia respecto de los motivos en que hubiesen descansado para negar alguna inscripción ó cancelación; y que para ese informe pueden si no les bastan los datos del Registro que les sirvieran para su negativa, tomar en la Secretaría de esta propia Presidencia, examinando en ella esos expedientes las noticias que necesiten;

Esta Presidencia acuerda declarar y declara:

*Primero.* Que procede y debe realizarse la anotación de la sentencia proferida por el Juez de Primera Instancia del Distrito de Guadalupe en el juicio declarativo de mayor cuantía promovido por D. Antonio Cabrera y Ballester contra Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez con el fin de que le otorgara escritura de venta de unas casas y de cesión de determinados créditos hipotecarios tomando al efecto los asientos existentes en el Registro de la Propiedad relativos á las escrituras de adquisición de esas casas y créditos por la predicha Doña Isabel Cabrera y Pérez de Gómez, los antecedentes que sean necesarios;

*Segundo.* Que el Registrador de la Propiedad de Occidente ha debido devolver uno de los ejemplares del mandamiento que por duplicado se le librara para la anotación de la sentencia aludida, poniendo á su pie la correspondiente nota expre-

siva de no considerar procedente la anotación de dicha sentencia, y dejar en su poder el otro ejemplar, también con la oportuna constancia á su pie, de los motivos que le impedían llevar á cabo esa anotación;

*Tercero.* Que en este concepto procede prevenir á dicho Registrador, como en efecto se le previene, que en lo sucesivo se ajuste á las prescripciones contenidas en la Ley Hipotecaria y su Reglamento, respecto de las notas que deben ponerse al pie de los ejemplares de los mandamientos que por duplicado se le libren para anotaciones ó cancelaciones de asientos en el Registro á su cargo; y

*Cuarto.* Que para emitir los informes que por esta misma Presidencia se le ordenen, no procede entregarle el expediente en que haya de informar, pues que si necesita algún dato de él, puede instruirse del mismo en la Secretaría de dicha Presidencia.

Así lo proveyó, mandó y firma el señor Presidente, de que certifico.—Federico Martínez de Quintana.—P. D., Ricardo Menéndez Benítez.

---

# ÍNDICE ALFABÉTICO

## MATERIA PENAL

Páginas.

Admisión del recurso.—Para sustanciar y resolver un recurso de casación por infracción de Ley, hay que partir necesariamente y exclusivamente de los hechos declarados probados, que deben ser aceptados por el recurrente.	
La pretendida subsanación ante el Tribunal de casación de los defectos de que adoleciere un recurso, no convalidan su admisión, pues éstos le hacían ya inadmisibles por el Tribunal sentenciador.	11
" " No puede estimarse el recurso por infracción de Ley cuando éste se funda en la infracción de un precepto relativo á la necesidad de la concurrencia de determinado requisito para que se pueda proceder.	25
" " Para que sea admisible un recurso de casación, no basta citar los preceptos generales contenidos en los Artículos 847, 848, 910 y 911 de la Ley Procesal, sino que es indispensable citar los números de dichos artículos ó del 912 en que está comprendido el caso de que se trata, con arreglo á lo que disponen los números terceros de los Artículos 5 y 7 de la Orden 92 sobre casación.	62
" " Hay congruencia en un recurso cuando la cuestión, en la forma que se plantea, se halla precisamente comprendida en el precepto legal que el recurrente invoca; prescindiendo de la apreciación que dicho recurrente haga de determinados hechos ó preceptos legales que deberán ser tratados en definitiva.	70
" " No expresándose en el escrito de interposición los conceptos en que fueron quebrantados los Artículos 562 y 565 del Código Penal, según lo disponen los Artículos 5 y 7 en sus números 4, de la Orden 92 sobre casación, debe declararse mal admitido el recurso.	73



- Admisión del recurso.**—Interpuesto un recurso después de transcurridos los cinco días que fija la Orden 92 sobre casación, para que pueda ser admitido, no existiendo congruencia entre el artículo que se invoca y la causa en que se funda, y no teniendo el carácter de definitiva la resolución contra la cual se interpone dicho recurso, debe declararse mal admitido por los tres motivos expresados. . . . . 74
- " " No expresándose en el escrito de interposición el precepto legal que autoriza el recurso, con arreglo al Artículo 5º de la Orden 92 sobre casación, cumple con lo dispuesto en el Artículo 7º de la misma el Tribunal sentenciador al declarar sin lugar el recurso. 79
- " " Cuando no se expresa en el escrito en que se interpone el recurso ninguna de las causas señaladas en el Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se falta á los preceptos de los números terceros de los Artículos 5 y 7 de la Orden 92 sobre casación, y debe declararse mal admitido el recurso; sin que sea potestativo de la Sala suplir las omisiones en que hayan incurrido las partes. . . . . 94
- " " Fundándose el recurso en no ser constitutivos de delito los hechos que se declaran probados, no puede citarse como infringido el número primero del Artículo 558 del Código Penal, puesto que en él sólo se establece la penalidad correspondiente, según la ascendencia de lo defraudado, lo cual no afecta á la existencia del delito, no habiendo congruencia entre el precepto legal que se invoca y la infracción que sirve de fundamento al recurso. . . . . 96
- Circunstancias atenuantes.**—Apreciada en un delito de homicidio la atenuante 4ª del Artículo 8º en relación con el número 1º del Artículo 9º, la pena que corresponde imponer es la de prisión correccional (6 meses y un día) que es el mínimo de la inferior en dos grados á la de reclusión temporal señalada al delito. . . . . 15
- " " Para que pueda estimarse la concurrencia de circunstancias atenuantes, es preciso que resulten probadas ó se deriven de hechos declarados probados. . . . . 33
- " " No cabe relacionar la circunstancia primera del Artículo 9º del Código Penal, por los números 12 y 13 del Artículo 8º, pues éstas no ofrecen variedad ni composición alguna, si no se refieren á un solo hecho sin requisitos necesarios para su apreciación; cuya circunstancia hace que sea inaceptable también el Artículo 85 de dicho Código.
- Debe estimarse la atenuante 8ª del Artículo 9º cuando en la realización del delito concurre un conjunto de circunstancias bastantes á producir en el ánimo del reo arrebató y obcecación. . . . . 89

- Defensa propia.**—La defensa propia como circunstancia eximente de responsabilidad criminal, está condicionada por la concurrencia de los tres requisitos de agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir la ó repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende; y no concurriendo todos esos requisitos, sólo puede estimarse como circunstancia atenuante conforme con el número 1º del Artículo 9º del Código Penal. . . . . 15
- ” ” El que agredido ilegítimamente, sin provocación suficiente por su parte, se vale de un cuchillo para repeler la agresión que se le hace con un machete, dándole muerte á su agresor, está exento de responsabilidad criminal por haber obrado en defensa de su persona. . . . . 50
- ” ” Debe estimarse la concurrencia de los tres requisitos que exige el Artículo 8º del Código Penal para exención de responsabilidad, cuando un sujeto penetra en la casa de otro alegando que una carne que había allí procedía de un puerco caído en una trampa por él preparada, tratando de llevársela á la fuerza; y al oponerse el dueño de la casa, saca el machete y se le va encima, á cuya actitud tomó éste una escopeta que tenía cargada y disparándole un tiro le causa la muerte. . . . . 54
- Escándalo público.**—El hecho de escandalizar públicamente, en los momentos en que se celebraba una manifestación política, es constitutivo de la falta prevista y penada con ese nombre. . . . . 58
- Falsedad en documento público.**—La supuesta intervención de una persona en una escritura de reconocimiento de hijo natural, constituye el delito de falsedad en documento público, previsto y penado en el número 2º del Artículo 310 del Código Penal y en el 311 del mismo, según fuere cometido por funcionario público ó por particulares; y es responsable de dicho delito por imprudencia el Notario que no conociendo á dos de los testigos que intervinieron en el acto, los acepta como tales por la simple presentación que le hace de ellos un amigo suyo. . . . . 1
- Hechos probados.**—Para sustanciar y resolver un recurso de casación por infracción de Ley, hay que partir necesaria y exclusivamente de los hechos declarados probados, que deben ser aceptados por el recurrente. . . . . 11
- ” ” Para que se entienda que una ley ha sido infringida, es preciso que la infracción se cometa al aplicarla á los hechos que se hubiesen declarado probados; pues la aceptación de los hechos probados es el elemento cardinal para la interposición de esta clase

- de recursos; y se infringe el Artículo 7º de la Orden 92 al admitir un recurso sin ese requisito. . . . . 31
- Hurto.**—No concurriendo en el hecho procesal ninguna de las circunstancias que señala el Artículo 520, ni las que enumera el 526; y no pudiendo calificarse de falsa la llave con que el procesado abrió la gaveta en que se encontraba el dinero, con arreglo á la definición que de ella da el Artículo 534 del Código Penal, debe calificarse el hecho de hurto por estar comprendido en el Artículo 535 del mismo. . . . . 99
- Injurias.**—Para calificar con acierto delitos de esta clase, no basta atender al sentido gramatical de palabras ó frases aisladas, sino que es preciso tener en cuenta el sentido de las mismas dentro del período en que se consignan, objeto que se propone el autor y estímulo y ocasión en que se producen.  
Son injuriosas las palabras que por su significación y tono general del escrito en que se consignan, ceden en descrédito, deshonor y menosprecio de la persona á quien van dirigidas. . . . . 36
- Medios de prueba.**—El informe pericial es uno de los medios de prueba que establece la Ley; y la Sala sentenciadora puede apreciarlo juntamente con los demás elementos probatorios que resulten del proceso, con arreglo á su conciencia, según el Artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; sin que contra esa apreciación de la prueba quepa recurso alguno. . . . . 33
- Precepto legal que autoriza el recurso.**—No se cumple con lo dispuesto en el Artículo 5º de la Orden 92, que exige la consignación en el escrito de interposición del texto legal que autoriza el recurso, cuando con notoria incongruencia se cita un número del Artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no es el que autoriza el recurso. . . . . 11
- ” ” Según tiene repetido el Tribunal Supremo, la cita del precepto legal que autoriza el recurso ha de guardar congruencia con las infracciones ó quebrantamientos alegados; no bastando para cumplir con este precepto con citar cualquiera de los casos señalados en la Ley, sino que precisamente ha de ser el número en que se comprenda la causa que autorice el recurso. . . . . 67
- Resoluciones susceptibles de recurso.**—El auto en que se niega la pretensión de que una sentencia sea notificada nuevamente, no es susceptible de casación, por no ser de los comprendidos en el Artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. . . . . 58
- Recurso por quebrantamiento de forma.**—Para que prospere el recurso de casación por quebrantamiento de forma, es pre-



## Páginas.

ciso expresar las causas que hayan impedido reclamar la subsanación de la falta cometida y que exista congruencia entre los fundamentos del recurso y las infracciones alegadas. . . . .	25
<b>Recurso por quebrantamiento de forma.</b> —Procede el recurso por quebrantamiento de forma en una sentencia criminal, cuando no se expresa en ella cuáles son los hechos que se declaran probados ó resulta manifiesta contradicción entre los mismos; pero no cuando la contradicción es entre éstos y los considerandos de la sentencia. . . . .	64
” ” Las conclusiones provisionales presentadas nuevamente, después de anuladas las anteriores, tienen el carácter de definitivas al no ser modificadas; y no pena un delito más grave la sentencia que de conformidad con ellas, impone la que en las mismas se solicita, y por lo tanto no se infringe el Artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. . . . .	104
<b>Recurso por infracción de Ley.</b> —No apareciendo de los hechos probados de la sentencia aquél en que se funda el recurso por infracción de Ley, debe desestimarse. . . . .	64
<b>Sobreseimientos.</b> —No apareciendo esclarecida la inexistencia de relación alguna entre el daño causado y la infracción cometida, no procede el sobreseimiento á que se refiere el número 2 del Artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sí la apertura del juicio. . . . .	21
” ” Fundado un auto de sobreseimiento en el número 1 del Artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no son de aplicarse preceptos legales que definen ó califican un delito para cuya existencia es condición necesaria que se haya realizado un hecho; y al citarse el artículo mencionado, implícitamente se declara que no ha habido indicios racionales de haberse perpetrado el que dió origen á la formación del proceso. . . . .	81
<b>Término para interponer la casación.</b> —Cuando se pide aclaración de una sentencia, el término para interponer casación debe contarse desde la notificación del auto en que se acceda ó niegue, pues es desde cuando los interesados están en aptitud para consentirlo ó recurrirla; por lo cual es de aplicarse al procedimiento criminal el Artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. . . . .	71

## MATERIA CIVIL

## Páginas.

<b>Bienes gananciales.</b> —Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges durante el matrimonio tienen el carácter de gananciales. . . . .	
--	--

ciales mientras no conste ó se pruebe lo contrario; sin que basten simples manifestaciones de que pertenecen al marido ó á la mujer. . . . .	109
<b>Cita de la causa ó concepto en que se funda el recurso y del artículo y número en que está comprendida.</b> —Son indispensables con arreglo al número 3 del artículo 5 de la O. 92 sobre casación, para que pueda ser admitido el recurso. . . . .	137
<b>Citación de las partes para comparecencia en juicio de menor cuantía.</b> —Equivale en este caso á la citación para sentencia. . . . .	152
<b>Competencia del Tribunal Supremo.</b> —No la tiene para conocer de un asunto en que las partes habían sido citadas y emplazadas con fecha 30 de Diciembre de 1898 para ante el Tribunal Supremo de España. . . . .	113
” ” No la tiene para conocer de actuaciones que no vengan á su conocimiento por los trámites que marca la Ley. . . . .	120
<b>Competencia.</b> —Cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente, á falta de sumisión expresa, el del lugar en que la obligación deba cumplirse; y á falta de éste, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, aunque se encuentre allí accidentalmente el demandado. . . . .	125
<b>Competencia del Tribunal de apelación.</b> —Abstiniéndose un juez de resolver sobre una exención perentoria propuesta, por haber estimado procedente la de incompetencia, la competencia de la Audiencia está circunscripta á lo que fué materia de la apelación. . . . .	152
<b>Comisionista.</b> —El contrato celebrado por éste con todas las formalidades de derecho, debe ser aceptado por el comitente con todas sus consecuencias, sin perjuicio de su acción para repetir contra el comisionista por las faltas ú omisiones en que hubiere incurrido. . . . .	161
<b>Condena de costas.</b> —No procede cuando sólo se usa la inhibitoria ó la declinatoria, aún cuando se omita manifestar que no se ha hecho uso del otro medio. . . . .	125
<b>Contrato.</b> —Declarándose en una sentencia que no se ha justificado la existencia de un contrato, no se han podido infringir los artículos del Código que se refieren á las condiciones que han de concurrir para su perfeccionamiento. . . . .	287
<b>Defectos subsanables.</b> —Para no llevar á cabo la inscripción de una sentencia dispuesta por mandamiento judicial, procede tomar anotación preventiva, consignando al pie de uno de los mandamientos los motivos de la suspensión. . . . .	313

## Páginas.

Diligencia de prueba.—Cuando ninguna de las partes ha solicitado que se reciba el pleito á prueba, no ha podido denegarse ninguna diligencia de esta clase. . . . .	272
Diligencias preparatorias del juicio ejecutivo.—No tienen el carácter de juicio, por lo cual está mal formada una competencia con motivo de éstas. . . . .	248
Establecimiento fabril ó mercantil.—Los juicios de desahucio de establecimientos de esta clase, corresponden al Juez de Primera Instancia, sin que sea necesario tener en cuenta el precio del arrendamiento. . . . .	193
Establecimiento mercantil.—Una barbería no tiene ese carácter, pues su verdadero concepto está determinado por el ejercicio de una industria personal, que constituye un arrendamiento de servicio. . . . .	244
Expediente administrativo.—Al no reclamarse de la autoridad correspondiente en el primer día hábil siguiente al de la presentación del escrito iniciando el procedimiento contencioso administrativo, se infringe la Ley de lo Contencioso. . . . .	307
Fecha de la última notificación.—Es requisito indispensable con arreglo al número 1.º del artículo 5.º para que pueda ser admitido el recurso. . . . .	157
Finca poseída en precario.—En este caso no es necesario para que sea oída la apelación interpuesta en juicio de desahucio que se consigne la renta. . . . .	185
Fundamentos de la sentencia.—Fundándose una sentencia en la prueba testifical, única practicada, no ha podido infringir los artículos 1215 y 1244 del Código Civil. . . . .	287
Hipoteca tácita.—La preferencia que concede el artículo 220 de la Ley Hipotecaria al asegurador, no constituye una hipoteca tácita, que no reconoce la Ley, sino un derecho de preferencia que se convierte en hipoteca legal, en virtud del cual puede exigirse al dueño del inmueble la constitución de dicha hipoteca. . . . .	203
Insolvencia.—La pretensión de insolvencia no puede reproducirse en todos los casos, pues para promover nuevo juicio es necesario justificar que los casos en que se funda son posteriores á dicha insolvencia; por eso tiene carácter de definitiva la sentencia que niega dicha insolvencia. . . . .	311
Juez competente.—A falta de sumisión expresa ó tácita, es juez competente cuando se ejercitan acciones mixtas el del lugar en que se hallen las cosas ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante. . . . .	196
Legataria.—La cita de ésta para un juicio ejecutivo, tratándose de	



bienes hipotecarios sujetos á los preceptos de la antigua legislación hipotecaria, no es necesaria, bastando con que se haya citado á la heredera. . . . .	258
<b>Modos de acabarse el mandato.</b> —El incumplimiento de sus obligaciones por parte del mandatario, no puede reputarse como uno de los medios de acabarse el mandato. . . . .	161
"    "    El mandato aceptado no puede ser tácitamente renunciado. . . . .	161
<b>Negación de diligencia de prueba.</b> —Para que pueda estimarse motivo de casación, la negativa de una diligencia de prueba, es preciso que sea admisible y que dicha negativa produzca indefensión. . . . .	219
<b>Notificación de sentencia á partes que no hubiesen sido emplazadas con anterioridad al 11 de Abril de 1899.</b> —Esta notificación surte los mismos efectos que la hecha por primera vez de la sentencia, por lo cual debe atemperarse para la interposición del recurso á los preceptos de la O. 92, sobre casación. . . . .	191
<b>Notificaciones.</b> —Las hechas á los procuradores surten el mismo efecto que las hechas á las partes, salvo los casos en que la Ley dispone se haga personalmente; y las hechas á los sustitutos de los procuradores, la misma que si se hubiesen hecho á los sustituidos. . . . .	253
<b>Objeto de la prueba.</b> —La que se proponga debe limitarse á los hechos fijados definitivamente en los escritos de réplica y dúplica, ó en los de demanda y contestación cuando se trate de juicios de menor cuantía. . . . .	219
<b>Persona jurídica.</b> —Tiene ese carácter una colectividad de herederos y puede inscribirse en el Registro á su nombre un inmueble. . . . .	183
<b>Presentación de la escritura de mandato.</b> —Para interponer el recurso de casación á nombre de otro es indispensable la presentación de la escritura de mandato con arreglo al artículo 19 de la Ley de casación. . . . .	119
<b>Recibimiento á prueba.</b> —En los juicios de mayor cuantía sólo puede pedirse por medio de otrosí en los escritos de réplica y dúplica, y la negativa á admitirla en otro trámite no constituye quebrantamiento de forma si no se reclamó contra ella en primera instancia. . . . .	275
<b>Recurso de casación por infracción de Ley.</b> —No se da este recurso en los juicios de menor cuantía. . . . .	123
"    "    No puede servir de fundamento para la interposición de este recurso la alegación de hechos que no se han estimado por el Tribunal sentenciador. . . . .	139
"    "    Al citarse los números 1, 4 y 7 después de haber	

## Páginas.

	citado el artículo 1690, aún cuando no se haya hecho mención de dicho artículo, bien se comprende que dichos números se refieren al mismo y esa omisión no es motivo para la impugnación. . . . .	179
<b>Recurso de casación.</b>	<b>No se da sino contra resoluciones que tengan el carácter de definitivas. . . . .</b>	<b>129</b>
" "	Véase la página . . . . .	129
" "	No se da contra la resolución que declara desierta la apelación en un incidente. . . . .	133
" "	Véase la página . . . . .	133
" "	Véase la página . . . . .	129
<b>Recurso por infracción de Ley.</b>	<b>No pueden ser objeto de recurso por infracción de Ley las referentes al procedimiento; y tratándose de las formalidades que deben observarse en la venta de ciertos frutos y bienes está comprendido el caso en este precepto. . . . .</b>	<b>214</b>
" "	No contrayéndose ninguno de los artículos de la Ley citados por el recurrente, á los motivos en que ha de fundarse el recurso de casación; y no citándose tampoco ninguna de las causas de las señaladas en el artículo 1690 de la Ley Procesal, se hace inadmisibile el recurso. . . . .	241
" "	Véase la página 237. . . . .	284
<b>Recurso por infracción de doctrina.</b>	<b>Para fundar un recurso de esta clase no basta citar un principio cualquiera, sino que es preciso que se citen los reiterados fallos de la jurisprudencia en casos idénticos, y que se justifique que dicha doctrina legal, está admitida por la Jurisprudencia. . . . .</b>	<b>258</b>
<b>Recurso por quebrantamiento de forma.</b>	<b>Para que sea admisible ha de expresarse en lo que consistió el quebrantamiento y la reclamación que se ha hecho para la subsanación de la falta cometida, indicando caso de imposibilidad para hacerlo, la causa y sus motivos. . . . .</b>	<b>159</b>
" "	Véase la página . . . . .	181
" "	Para interponer este recurso no basta citar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que al mismo se refieren, sino que es preciso citar también el número ó números del 1691 como precepto legal que lo autorice. . . . .	256
<b>Rescisión de contrato.</b>	<b>Sólo de la opción que faculta el artículo 1124 del Código Civil no puede derivarse su resolución, ni es aplicable el artículo 1133 á toda clase de obligaciones por referirse sólo á las alternativas. . . . .</b>	<b>227</b>

<b>Rescisión de contrato de arrendamiento.</b> —Fundándose en un caso fortuito no se infringen los artículos 1559 y 1100 del Código al no tenerlos en cuenta para fijar la fecha de la rescisión. . . . .	227
<b>Sentencia definitiva.</b> —No tiene ese carácter el auto ordenando el desembargo de rentas en un incidente de un juicio ejecutivo. . . . .	285
"    "    La que niega el recurso de queja tiene el concepto de definitiva porque imposibilita la prosecución del pleito y viene en realidad á terminarlo. . . . .	311
"    "    No tiene ese carácter la que declara subsistente un embargo preventivo. . . . .	123
"    "    No tienen ese carácter las dictadas en expedientes de jurisdicción voluntaria. . . . .	129
"    "    El auto por el cual una Audiencia manda cumplir dentro de un incidente de embargo de bienes un exhorto de otro Juzgado, no tiene el carácter de resolución definitiva. . . . .	177
<b>Sumisión en materia de competencia.</b> —Para que sea eficaz ha de hacerse renunciando el fuero de su domicilio y designarse con toda claridad el juez á quien se someten. . . . .	196
<b>Término judicial.</b> —Estando en suspenso el término para poder ejercitar cierta parte un derecho, no es posible proveer antes de que se agote dicho término por el simple criterio de otra de las partes. . . . .	116



# ERRATAS

Págs.	Línea.	Dice	Debe decir.
4	29	impuso	interpuso
8	30	Paula Acosta	Paula Rodríguez Acosta
13	23 y 24	artículo 848 y 1° del 849	artículo 847 y los números 1° del 848 y 1° del 849
14	13	tratarlo	tramitarlo
28	10	de	á
38	38	para esas	para que esas
50	9	y no procede	, no procede
57	34	panales	penales
61	6	García y Alvarez	García y Suárez
69	25	reforma	forma
72	39	reunir	recurrir
83	10	cusador	acusador
102	15	intimación	intimidación
107	13	cuando se pone	cuando se pene
110	36	9	19
112	19	1903	1893
112	35	serin	serian
132	34	interponerse	interponerla
135	12	veinte de Julio	veinte y cuatro de Julio
136	38	como se dá	como no se dá
136	38	casación	casación contra la decisión final del in- cidente de recusación
145	19	veinte y ocho C. dejaron	veinte y ocho C y dejaron
154	29	demandada	demandada
155	5	demandada	demandada
155	22	intervención	intervención de los Abogados de am- bas partes, dictándose sentencia el día 16 de aquel mes y año; por lo cual con revocación
163	37	identidad	entidad
164	21	la demanda Escalante	la demanda de Escalante
166	35	ver á	verla
167	5	el acto	al acto
185	7	sentencia	sentencias
188	14	con la verdadera	con la vendedora
189	10	limitarse	limitarse á lo pedido en la demanda y exigido por la naturaleza del juicio
196	16	declaratorio	aclaratorio
199	29	excepción de la misma	excepción la misma
202	39	deducida	deducida dentro del siguiente día há- bil al de la notificación
218	23	lo afirman	los firman
224	9	durante el día	hasta el día
225	16	debajaba	dejaba
226	9	interior	inferior
230	2	al actor	el actor
230	5	el demandante	al demandante
235	10	nulidad	inutilidad
241	11	Mora	mora
245	15	estauída	estatuida
252	22	declaratoria	declinatoria
263	30	Felipa, causante	Felipa Valdés causante
269	39	Supremo, de	Supremo de 16 de Octubre de 1858 y
73	12	Diego Núñez	José Diego Núñez
275	36	7 de Diciembre de 1899	8 de Diciembre de 1899
2	1	tre	tres
21	38	juicio completo	juicio por completo;
308	32	proveído suplicando	proveído suplicado
317	37	ciento nueve	ciento diez y nueve de

## OTRAS ERRATAS.

22	43 y 44	La segunda es antes que la primera.
194	1, 2 y 3	Estas líneas, por el orden en que están, corresponden á las tres últimas de la página.









Sp.Cub  
36  
J96

49861

Cuba. Tribunal supremo  
Jurisprudencia, v.1

Sp.Cub  
36  
J96

49861

Cuba. Tribunal supremo  
Jurisprudencia, v.1

DATE	ISSUED TO.

